

**JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL**

EXPEDIENTE: SUP-JRC-317/2016

**ACTORES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Y OTRA**

**AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
DE CHIHUAHUA**

**TERCERO INTERESADO: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL**

**MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO
GALVÁN RIVERA**

**SECRETARIO: ALEJANDRO
OLVERA ACEVEDO**

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave de expediente **SUP-JRC-317/2016**, promovido por el **Partido Revolucionario Institucional** y la **Coalición integrada por ese instituto político y los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo**, en contra del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, a fin de controvertir la sentencia de treinta de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de inconformidad identificado con la clave de expediente **JIN-230/2016**, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en su escrito común de demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del procedimiento electoral local. El primero de diciembre de dos mil quince inició el procedimiento electoral local ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis (2015-2016), en el Estado de Chihuahua, para la elección de Gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos de esa entidad federativa.

2. Jornada electoral. El cinco de junio de dos mil dieciséis se llevó a cabo la jornada electoral, para elegir, entre otros, al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

3. Sesiones de cómputo municipal. A partir del ocho de junio de dos mil dieciséis, las sesenta y siete Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, llevaron a cabo los cómputos municipales de la elección de Gobernador.

4. Sesión de cómputo estatal, declaración de validez y entrega de constancia. El diez de junio de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua llevó a cabo la sesión de cómputo estatal de la elección de Gobernador, en la que se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados por partido político		
Partido político o candidato independiente	Votación recibida	
	Número	Letra
 Partido Acción Nacional	517,018	Quinientos diecisiete mil dieciocho
 Partido Revolucionario Institucional	343,705	Trescientos cuarenta y tres mil setecientos cinco
 Partido de la Revolución Democrática	29,086	Veintinueve mil ochenta y seis
 Partido Verde Ecologista de México	17,792	Diecisiete mil setecientos noventa y dos
 Partido del Trabajo	13,621	Trece mil seiscientos veintiuno
 Movimiento Ciudadano	35,376	Treinta y cinco mil trescientos setenta y seis
 Nueva Alianza	25,397	Veinticinco mil trescientos noventa y siete
 MORENA	30,976	Treinta mil novecientos setenta y seis
 CHA CHO INDEPENDIENTE	242,756	Doscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis
Candidatos no registrados	4,136	Cuatro mil ciento treinta y seis
Votos nulos	43,027	Cuarenta y tres mil veintisiete

SUP-JRC-317/2016

Resultados por candidato		
Candidato	Votación recibida	
	Número	Letra
 Javier Corral Jurado	517,018	Quinientos diecisiete mil dieciocho
 Enrique Serrano Escobar	400,515	Cuatrocientos mil quinientos quince
 Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río	29,086	Veintinueve mil ochenta y seis
 Cruz Pérez Cuellar	35,376	Treinta y cinco mil trescientos setenta y seis
 Francisco Javier Félix Muñoz	30,976	Treinta mil novecientos setenta y seis
 José Luis Barraza González	242,756	Doscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis
Candidatos no registrados	4,136	Cuatro mil ciento treinta y seis
Votos nulos	43,027	Cuarenta y tres mil veintisiete
Total	1,302,890	Un millón trescientos dos mil ochocientos noventa

Cabe destacar que en la citada sesión se declaró la validez de la elección y se llevó a cabo la entrega de la constancia de mayoría correspondiente a la elección de Gobernador del Estado de Chihuahua, a favor de Javier Corral Jurado, candidato postulado por el Partido Acción Nacional.

5. Juicio local de inconformidad. Disconformes con los resultados, la declaración de validez de la elección y la entrega

de constancia de mayoría, mencionados en el apartado cuatro (4) que antecede, el quince de junio de dos mil dieciséis, el **Partido Revolucionario Institucional** y la **Coalición integrada por ese instituto político y los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo**, promovieron juicio local de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el cual, en su momento, quedó radicado con la clave de expediente **JIN-230/2016**, del índice del Tribunal Estatal Electoral de esa entidad federativa.

6. Sentencia impugnada. El treinta de julio de dos mil dieciséis, el aludido Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia en el juicio de inconformidad precisado en el apartado cinco (5) que antecede, cuyos considerandos y puntos resolutiveos son al tenor siguiente:

[...]

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este *Tribunal* es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad promovido en contra de la elección de Gobernador del estado de Chihuahua, los cómputos municipales en los que se recontaron paquetes electorales de dicha elección, los resultados obtenidos y en consecuencia la entrega de la constancia de mayoría y validez otorgada al candidato del *PAN*.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, de la *Constitución Federal*; 36, párrafos segundo, tercero y cuarto y 37, párrafos primero y cuarto, de la *Constitución Local*; 3; 293, numeral 1; 294, 295, numerales 1, inciso a); 2, 3, incisos a) y b); 302, 303, inciso c); 305, numeral 3; 330, inciso b); 375; 376 y 379, de la *Ley*.

Incompetencia invocada por el tercero interesado

En su escrito de tercero interesado, el *PAN* esgrime que este *Tribunal* no tiene competencia para resolver el juicio de inconformidad planteado por los Actores, pues según refiere, la distribución en la competencia de los órganos electorales *IEE - INE* rebasa las atribuciones del *Tribunal*, por lo que solicita el envío de la controversia a la *Sala Superior*. Lo anterior lo sustenta en el hecho de que en la especie fue la autoridad federal la encargada de elaborar, custodiar y entregar el material al *IEE*.

Conforme a las manifestaciones realizadas, este *Tribunal* considera que no le asiste la razón al *PAN*.

Lo anterior es así, pues como se señaló, el medio de impugnación se endereza en contra de los resultados de la elección de Gobernador del estado, y por cuestiones de cuantía, impresión, distribución y resguardo de documentación electoral, cuya competencia es inherente a los órganos electorales estatales.

Como se demostrará en apartados subsecuentes, el *IEE* y su Consejo, de acuerdo al sistema competencial planteado en la *Constitución Federal*, son los encargados de la vigilancia y organización de los procesos electorales locales así como del diseño, impresión, custodia y entrega de la documentación electoral, mientras que la incidencia de la autoridad federal únicamente versa en cuanto a la aprobación de los lineamientos que para tales actividades se deben observar.

Cabe precisar que aun y cuando la incidencia del *INE* es de suma importancia en este nuevo esquema competencial, no debe dejarse de lado que son los tribunales estatales los que deben resolver lo relacionado con las elecciones locales; esto sin que exista impedimento de que el ente federal asuma tareas atribuidas a los estados, pues de lo contrario estaría en peligro la soberanía estatal y la forma de gobierno federal.

Así las cosas, se corrobora la competencia y jurisdicción de este *Tribunal* en el asunto sometido a consideración.

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Previo a entrar al estudio de los requisitos de procedencia del medio de impugnación en análisis, se estima pertinente analizar, en primer término, las causales de improcedencia

invocadas por el *PAN* como tercero interesado en el presente asunto.

1. Improcedencias planteadas

1.1. Extemporaneidad

El *PAN* solicita se declare la improcedencia del presente juicio, pues a su consideración los *Actores* impugnaron diversos actos que fueron consentidos expresamente, esto, al no presentar medio de impugnación alguno para controvertirlos. Dichos actos consisten en los acuerdos en donde se determinó el número de boletas a imprimir para la elección de mérito, así como su plan de impresión, distribución, resguardo y recepción por parte de los presidentes de casilla; por tanto, señala que el derecho a combatirlos precluyó.

Respecto a la causal de improcedencia en análisis, este *Tribunal* estima que **no le asiste la razón al tercero interesado** por las razones que se expondrán a continuación.

Efectivamente, en el expediente en que se actúa no existe constancia alguna que acredite la presentación de un medio de impugnación mediante el cual los *Actores* hayan combatido los acuerdos de referencia; sin embargo, es necesario precisar que conforme al sistema de nulidades en materia electoral, aun y cuando los acuerdos que especifican la cuantía y plan de impresión y distribución de las boletas no hayan sido controvertidos por los *Actores*, esto no es óbice para que sus efectos sean combatidos al momento de actualizar un posible perjuicio a su esfera jurídica, más aún cuando existe la posibilidad de que éstos pudieran configurar alguna afectación directa a los principios rectores del proceso electoral, principalmente los de certeza y legalidad que deben verificarse en el desarrollo de toda elección democrática. Además, conforme a la controversia planteada por los *Actores*, la omisión de la aprobación de dichos acuerdos se encuentra en contraposición con la causal de improcedencia aducida por el tercero interesado.

En esa tesitura, este *Tribunal* colige que, contrario a lo dicho por el *PAN*, las manifestaciones vertidas por los *Actores* respecto a la posible vulneración de los principios rectores del proceso electoral originada por los acuerdos que tuvieron que ver con la impresión, resguardo, traslado y distribución de las

SUP-JRC-317/2016

boletas electorales, conllevan a un tema que debe ser analizado al momento de estudiar el fondo del presente asunto.

1.2. Inexistencia del supuesto normativo en el que se basa la impugnación

Según el *PAN*, resulta inviable la pretensión de los *Actores* relativa a la nulidad de la elección basada en la causal abstracta, ya que el criterio en el que esta se sustentó ya no está vigente.

Así, el tercero interesado refiere que al pretender los *Actores* sustentar su impugnación en la causal referida, resulta evidente la improcedencia del juicio planteado, pues parte de un supuesto normativo inexistente.

Este *Tribunal* considera que **no le asiste la razón al tercero interesado** debido a que los *Actores* fundaron su pretensión en el artículo 385, numeral 2, de la *Ley*, mismo que establece la posibilidad de anular una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales el día de la jornada electoral y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección.

Es de precisar que el término “violaciones sustanciales” se actualiza cuando se afectan normas o principios jurídicos trascendentales en el proceso electoral o en su resultado;¹ como lo serían, aquellos que están previstos en la *Constitución Federal*, tratados internacionales o leyes secundarias.

1 Tesis relevante número XXXVIII, de rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN; visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 47 y 48.

En otras palabras, una violación sustancial se verifica cuando se conculcan principios o reglas básicas para el proceso democrático, como lo son los principios rectores de la función electoral de legalidad, certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad.

En ese orden de ideas, este *Tribunal* estima que los *Actores* fundaron su pretensión en la actualización de supuestas “violaciones sustanciales” que pudieron haber afectado los principios constitucionales y rectores de todo proceso electoral; por tanto, el análisis de los agravios dirigidos a solicitar la nulidad de la elección, será realizado en el momento de estudiar el fondo de la presente resolución.

Por otra parte, el tercero interesado señala que los Actores pretenden combatir los cómputos municipales en los que se recontaron los paquetes de la elección, y dichos recuentos no pueden ser impugnados por esta vía, ya que de las hipótesis que para la procedencia del juicio de inconformidad establece el artículo 375 de la Ley, no se desprende supuesto alguno que encuadre la posibilidad de controvertir los cómputos municipales en los que se recontaron paquetes de una elección.

Al respecto, este *Tribunal* considera que **no le asiste la razón al PAN**, ya que de una interpretación extensiva del contenido del artículo 375, numeral 1, inciso c), de la *Ley*, se desprende que si los partidos políticos y candidatos independientes están facultados para impugnar los cómputos de las elecciones de Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos en donde participaron, por mayoría de razón lo están también para controvertir los recuentos de los paquetes electorales que en su caso se hayan llevado a cabo en tales elecciones.

1.3. Falta de expresión de agravios

Finalmente, el *PAN* aduce como causal de improcedencia que los *Actores* no expresaron agravios, y que en consecuencia el juicio de inconformidad debe ser desechado de plano al no reunir el requisito previsto por el artículo 308, párrafo 1, inciso f), de la *Ley*; esto en atención a que:

- a) No se especificó si se combatían casillas que había ganado o perdido, lo que resulta de importancia pues no es posible conceder los mismos efectos a supuestas anomalías según se trate de casillas ganadas o perdidas, ya que en el primer caso, no existe interés jurídico para reclamar un resultado favorable.
- b) Al impugnar lo relativo a los paquetes entregados fuera del plazo, no precisó la diferencia entre la votación obtenida por el primero y segundo lugar, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basó sus argumentos; esto es importante ya que resulta imposible que todas las casillas se hayan clausurado a las diecinueve treinta horas, limitándose a reproducir agravios en cada casilla, cambiando solo su número, sin examinar las razones de hecho o de derecho que le causan perjuicio; y

SUP-JRC-317/2016

- c) No especificó con claridad de que modo los actos que reclama afectan su interés jurídico; por tanto no existe manifestación alguna que válidamente pueda reputarse como agravio.

En lo tocante a la manifestación señalada en el inciso **a)**, efectivamente este *Tribunal* advierte que los *Actores* mediante su escrito de demanda impugnaron casillas en las cuales obtuvieron el triunfo; sin embargo, dicha circunstancia deviene insuficiente para considerar que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la votación recibida.

Por el contrario, a juicio se acredita el interés jurídico de los *Actores* dado que son titulares de un derecho oponible al del tercero interesado así como al de su candidato, a quien el Consejo le otorgó la constancia de mayoría y validez en la elección de Gobernador del estado de Chihuahua.

Robustece lo anterior, el hecho de que las disposiciones de la Ley, son de orden público y de observancia general en el Estado;² por tanto, si los *Actores* estiman que se ha vulnerado el principio de legalidad en el proceso electoral, al tener el carácter de partido político o coalición, tiene interés jurídico para impugnar.

² Artículo 1, numeral 1 de la Ley.

De lo antepuesto deriva el derecho de impugnar los resultados de la votación recibida en diversas casillas, sin importar si en éstas ganó o perdió; máxime si como consecuencia de su posible anulación se actualiza una causal de nulidad de elección, como lo pudiera ser la contenida el artículo 384, numeral 1, inciso a) de la Ley,³ y con ello se revoca la constancia de mayoría y validez respectiva. Lo anterior guarda sustento en tesis relevante cuyo rubro es: **INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE FAVORECIÓ LA VOTACIÓN RECIBIDA.**⁴

³ Son causas de nulidad de una elección de síndicos, ayuntamiento, diputados de mayoría relativa o Gobernador, las siguientes: a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según corresponda.

⁴ Tesis XXIX/99 Visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 50.

Por otro lado, respecto a las alegaciones vertidas por el tercero interesado contenidas en los incisos **b)** y **c)** anteriores, es de señalarse que efectivamente, la Ley establece como

requisito de los medios de impugnación, que se señalen los agravios que cause el acto o resolución impugnado,⁵ cuestión que en el presente asunto así sucede y por lo cual deben ser analizados en sentencia definitiva

5 Artículo 308, numeral 1, inciso f) de la Ley.

En ese sentido, se estima que en las manifestaciones vertidas por los Actores como motivo de disenso, sí se expresó la causa de pedir,⁶ elemento indispensable para que se configure el agravio; por tanto, no se acredita la causa de improcedencia aducida por el tercero interesado, y en consecuencia, los agravios en comento serán analizados en el momento en que se estudie el fondo de la controversia planteada.

6 Jurisprudencia 3/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.

2. Procedencia del juicio de inconformidad

2.1. Cumplimiento a requisitos generales

Desestimadas las causales de improcedencia vertidas por el *PAN*, este *Tribunal* considera que el medio de impugnación en estudio cumple con todos los requisitos procesales previstos en la *Ley*, pues se presentó acorde a la **forma** establecida en el artículo 308; con la **oportunidad** prevista en el artículo 307, numeral 2; por quien cuenta con la **personalidad y legitimación** referida en el diverso 376, numeral 1, inciso a); y no existen causales de improcedencia que impidan a este *Tribunal* pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.

2.2. Cumplimiento a requisitos especiales

En ese mismo tenor, este *Tribunal* advierte que se cumple con los requisitos previstos en el artículo 377, numeral 1, de la *Ley*, pues los *Actores* señalan: a) la elección que se impugna y la manifestación expresa de si se objeta el cómputo, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva; b) el acta de cómputo que se impugna; c) las casillas cuya votación se solicita que se anule; y d) el error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo.

IV. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

1. Síntesis de agravios

SUP-JRC-317/2016

En esencia, los *Actores* se inconforman con la elección de Gobernador celebrada el cinco de junio pasado, los cómputos municipales en los que se recontaron paquetes electorales de esa elección, los resultados finales obtenidos, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez otorgada a Javier Corral Jurado, otrora candidato del *PAN*.

En ese sentido, se hacen valer en el juicio bajo estudio las siguientes causales de nulidad:

1.1. Causales específicas

Refieren los *Actores*, se acreditan las causales previstas en el artículo 383, numeral 1, incisos b), e), f) y m), de la *Ley*, esto es:

- 1.1.1. La entrega, sin causa justificada, de paquetes electorales a las *Asambleas*, fuera de los plazos señalados por la norma.
- 1.1.2. La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley;
- 1.1.3. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que benefició a uno de los candidatos, siendo determinante para el resultado de la votación; y
- 1.1.4. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

1.2. Causal genérica

Por otro lado, según lo señalan los *Actores*, el *Consejo* transgredió los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, pues fue omiso en:

- Acordar el número de boletas a imprimir.
- Aprobar el plan de impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales.
- Supervisar la impresión de las boletas, su traslado y resguardo.
- Hacer constar la formal recepción del número de boletas electorales por cada presidente de casilla, omitiendo consignar el número exacto y preciso de folios.

Lo anterior, porque arguye que no existe plena certeza en cuanto a la legalidad de la emisión de las boletas electorales que fueron utilizadas en la jornada electoral, así como la cantidad de boletas que fueron entregadas a cada casilla, lo que produce una incertidumbre generalizada en cuanto al número de boletas que fueron utilizadas por el electorado, además de que se hace imposible el cotejo con los resultados electorales.

Además, refieren que el hecho de que la impresión y distribución de las boletas electorales haya sido realizada por el *INE*, vulnera la distribución de competencias decretada por los artículos 41 y 116 de la *Constitución Federal*.

Por otro lado, aduce que en las *Asambleas* no se efectuó el recuento en términos de los artículos 184 y 185 de la *Ley*, haciéndose solo un muestreo arbitrario, sin que el *Consejo* sepa cuantos paquetes se recontaron, ni tenga las actas individuales por casilla de los recuentos, ya que además no les fueron entregadas inmediatamente a los partidos luego del acto de recuento.

Refiere que en las *Asambleas* no se levantaron *actas individuales*, de tal manera que no existen, o no les fueron entregadas al final del recuento; entregándose varios días después, en medio magnético, solo un archivo de resultados por casilla.

Continúa señalando que la ausencia de las formalidades legales aconteció en todas las casillas recontadas, las cuales superan el veinte por ciento del total de las mismas, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, como la legalidad, al no acatar las disposiciones expresas en la *Ley*; el de máxima publicidad al justificar su actuación bajo el hecho de que los partidos no se lo pidieron; y el de certeza, al no existir confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la voluntad popular.

En ese sentido, a consideración de los *Actores*, los agravios expuestos producen una incertidumbre en cuanto al número de boletas impresas, las recibidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los cómputos municipales, los cuales arrojan cifras disidentes entre sí, refiriendo que la numeraria obtenida de las *actas finales* a través del Programa

SUP-JRC-317/2016

de Resultados Preliminares Electorales de 3,321 casillas constatadas, reflejaba los siguientes datos:

- Boletas recibidas 1,394,301
- Votos registrados 835,553
- Boletas sobrantes 1,565,807
- Diferencia entre recibidas y sobrantes de 171,506 boletas

2. Planteamiento de la controversia

En razón de lo hasta aquí expuesto, la controversia planteada radica en dilucidar si procede declarar la nulidad de la elección de Gobernador del estado de Chihuahua, por acreditarse las causales específicas de nulidad invocadas en el numeral 1.1; o bien, si se acredita la causal genérica por presuntas violaciones a los principios constitucionales en virtud de las omisiones referidas en el numeral 1.2.

3. Argumentos vertidos por los Actores durante la instrucción

Durante el desarrollo de la instrucción en el presente procedimiento, los actores allegaron a este *Tribunal* una serie de manifestaciones que a su consideración pudieran incidir en la determinación del expediente en estudio, por lo que a continuación se hará referencia a las mismas y la posibilidad de integrarlas al análisis planteado desde el escrito inicial.

3.1. El ocho de julio el *PR*I presentó escrito mediante el cual pretendió presentar pruebas supervenientes que ha su dicho demostrarían la existencia de las violaciones constitucionales expuestas en el escrito inicial.

Lo anterior es así, ya que a su consideración, con las resoluciones emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas con las claves SRE-PSC-79/2016 y SRE-PSC-89/2016, y con el análisis de diversos promocionales emitidos por Javier Corral Jurado y el *PAN* durante el proceso electoral, se acredita la existencia de irregularidades graves y sistemáticas, refiere que se suscitaron *una serie de acontecimientos concatenados entre sí, inducidos y direccionados a crear un concepto erróneo y completamente falso contra el Partido Revolucionario Institucional, el entonces candidato a Gobernador Enrique Serrano Escobar así como el Gobernador Cesar Duarte Jáquez, bajo la apariencia de una*

crítica vigorosa, que en la mayoría de las ocasiones los Tribunales electorales lo aceptaron como legal [...].

En ese tenor, de estudio del escrito presentado por la representación del *PRI*, se advirtió que los hechos que pretendía acreditar no tienen relación con los agravios expuestos en el escrito inicial del expediente en que actúa, por lo cual no es posible atender su solicitud.

Esto es así, pues de la comparación de los hechos, causales y agravios vertidos en el escrito inicial con los del libelo que se analiza, no se advierte nexo causal, pues en el primero se hace referencia a supuestas omisiones adjudicables al *IEE* o al *Consejo*, así como casuales específicas de nulidad en casilla, mientras que en el segundo se hace referencia a hechos derivados de promocionales de precampaña o campaña que, estima, generan una afectación a la validez de la elección.

En tal virtud, la *Sala Superior* ha establecido mediante jurisprudencia 18/2008, de rubro **AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR**, que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surjan nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones, o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado.

Así, atentos a al criterio señalado, al no existir vinculación entre los hechos controvertidos a través del escrito de juicio de inconformidad y los aducidos en el escrito de fecha ocho de julio, no es posible atender a los argumentos planteados por el promovente en la presente impugnación.

3.2 El once de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a los *Actores* realizando diversas manifestaciones relacionadas con las documentales públicas remitidas por el *Consejo* en su calidad de autoridad responsable, en las cuales hace referencia a la fecha de envío de las boletas electorales a las *Asambleas*, el número de boletas y el medio de traslado, así como las actas de recepción de boletas de las *Asambleas*.

SUP-JRC-317/2016

Dichas manifestaciones pretenden exhibir inconsistencias en el levantamiento de las actas circunstanciadas que, a su dicho, ventilan la falta de certeza en el ejercicio de la función electoral desplegada por el *IEE* y en la cuantía en el número de boletas electorales.

Ante lo anterior y al formar parte dicha manifestación de la controversia inicial, este *Tribunal* atenderá y resolverá lo conducente a las manifestaciones vertidas a fin de determinar la existencia de las inconsistencias, y en su caso, la gravedad de las mismas.

3.3. El veintidós de julio de dos mil dieciséis, los *Actores* presentaron escrito mediante el cual pretenden allegar a este *Tribunal* de hechos que a su consideración clarifican la constante y errática actuación del *IEE*, poniendo como referencia el método de determinación del porcentaje de participación ciudadana, el cual consideran incorrecto.

En ese sentido, debe señalarse que al no guardar relación con el presente asunto, según los motivos de agravio planteados, es improcedente el estudio de dichos argumentos, por no ser parte de la controversia.

V. ESTUDIO DE FONDO

1. Metodología de estudio

Delineada la controversia a resolver, lo procedente es dilucidar la manera en que este *Tribunal* atenderá los motivos de agravio expuestos por los *Actores*.

En esa tesitura, por cuestión de método, se propone en primer lugar llevar a cabo el análisis de los motivos de disenso relacionados con las causales específicas de nulidad, para posteriormente, atender a las violaciones u omisiones a los principios constitucionales advertidas por los *Actores*.

Lo anterior, sin que se traduzca en alguna afectación jurídica en perjuicio de las partes, dado que no es la forma cómo los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino la posible omisión de estudio en que se pueda incurrir.⁷

7 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen 1, Jurisprudencia, página 125.

2. Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados

Resulta pertinente aclarar que dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este *Tribunal* tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo *lo útil no debe ser viciado por lo inútil*.

En ese sentido, el principio en mención debe entenderse en el sentido de que sólo se decretará la nulidad de votación recibida en casilla cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas, y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación.

Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso antes o después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.⁸

8 Sentencia identificada con la clave 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la *Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1*, páginas 488 a 490, cuyo rubro y texto son los siguientes:

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los incisos f), g), h), i), k) y m), del artículo 383 de la *Ley*; en tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), c), d), e), j) y l), del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción de que las respectivas

SUP-JRC-317/2016

causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos a), b), c), d), e), j) y l), del artículo 383, de la *Ley*, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.⁹

9 "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares)".

3. Análisis de las causales de nulidad

3.1. Causales específicas de nulidad

Dicho lo anterior, lo procedente es entrar al análisis de cada una de las causales de nulidad específicas invocadas por los *Actores*, por lo cual a continuación se muestra un esquema en el que se identifica cada casilla impugnada y la causal invocada:

[Se inserta tabla]

En atención al esquema planteado, se advierte que se impugnaron:

- Dos mil doscientas ochenta y cinco casillas invocando la causal prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso b), de la *Ley*, al considerarse que la entrega del paquete electoral a las *Asambleas* se realizó fuera de los plazos de ley, sin que mediara causa justificada.
- Tres mil doscientas ochenta y nueve casillas a través de la causal prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso e), de la *Ley*, al sustentar que la votación de la casilla fue recibida por personas diversas a las facultadas por la norma.
- Dos mil trescientas dieciocho casillas aduciendo la configuración de la causal prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso f), de la *Ley*, al considerar que existe error y dolo en la computación de los votos, el cual benefició a uno de los candidatos.

Visto lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de cada una de las causales específicas.

3.1.1 Entregar a las Asambleas, sin causa justificada, el paquete electoral que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos de ley.

Inicialmente, para el estudio de la presente causal de nulidad en casilla, prevista en el inciso b), del numeral 1, del artículo 383, de la *Ley*, es necesario advertir el marco legal que engloba el sistema electoral y de nulidades en relación a el traslado del paquete electoral desde la casilla hasta las *Asambleas*, para luego entrar al estudio particularizado de cada uno de los supuestos que se muestren conforme al estudio planteado.

3.1.1.1 Marco normativo de la entrega del paquete electoral a las Asambleas

Tenemos que los artículos 168 y 169 de la *Ley*, disponen que al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que desearan hacerlo.

Por su parte, el artículo 174, numeral 1, de la *Ley*, establece que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, y acompañados de los funcionarios y representantes de los partidos políticos que deseen hacerlo, harán llegar a las *Asambleas* los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

- a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del municipio;
- b) Hasta doce horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la cabecera del municipio; y,
- c) Hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas ubicadas en zonas rurales.

De acuerdo con lo establecido en el inciso d) del artículo en cita, se dispone que el *Consejo* podrá determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.

SUP-JRC-317/2016

Así también, las *Asambleas* podrán adoptar previo al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.¹⁰

10 Artículo 174, numeral 2, de la *Ley*.

Además, las *Asambleas* tienen la obligación de hacer constar en acta circunstanciada, la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos de ley.¹¹

11 Artículo 174, numeral 4, de la *Ley*.

Asimismo, de la *Ley* se desprende que existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados a las *Asambleas* fuera de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.¹²

12 Artículo 174, numeral 3.

Para tal efecto, es necesario que se describa y compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo de “caso fortuito” o “fuerza mayor”.

Ahora bien, para el procesalista Rafael Rojina Villegas, el caso fortuito es el acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.¹³

13 ROJINA Villegas, Rafael. *Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones*. Tomo III. México. Porrúa. Vigésima Primera Edición. p.383

En ese mismo tenor lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS**,¹⁴ la cual indica que independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos que

normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo.

14 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, página 81

En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, son: a) que el *Consejo* acuerde la ampliación para aquellas casillas en donde se considere necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte previamente a la celebración de la jornada electoral; y, b) que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, que medie “caso fortuito o fuerza mayor”.

Para tal efecto, la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento siguiente:¹⁵

15Artículo 175 de la *Ley*.

- a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;
- b) El Presidente o funcionario autorizado de las *Asambleas* extenderá el recibo respectivo, señalando la hora en que éstos fueron entregados;
- c) El Consejero Presidente de las *Asambleas*, previa autorización de los consejeros electorales, dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocándolas en un lugar dentro del local de las *Asambleas* que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el momento en que se practique el cómputo, y
- d) El Consejero Presidente de las *Asambleas*, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas del acceso al lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones.

De la interpretación sistemática y funcional de los incisos antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su integración como para su traslado y entrega a las *Asambleas*, en el entendido de que dichos actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único

SUP-JRC-317/2016

medio material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley.

En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a las *Asambleas*, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí: uno temporal y otro material.

El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales de la casilla a las *Asambleas*.¹⁶

16 Artículo 174, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley.

Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del cómputo municipal correspondiente.

Por su parte, el criterio material tiene como finalidad que el contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo municipal de la elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en el traslado de los paquetes electorales a las *Asambleas* se observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los mismos.

En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa justificada, este *Tribunal* debe analizar si, de las constancias

que obran en autos se desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgrede el principio constitucional de certeza.

Además, para tal fin, este órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta el contenido de la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es: **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.**¹⁷

17 Visible en las páginas 488 a 490 de la Compilación 1997 – 2012. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Jurisprudencia, volumen 1.

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 383, numeral 1, inciso b), de la *Ley*, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

- a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los plazos establecidos en la ley; y
- b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

Para que se actualice el primero de los supuestos normativos, basta analizar las pruebas aportadas por los *Actores* y las demás que obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el paquete electoral en las *Asambleas*. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega de la documentación electoral es extemporánea.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la jornada electoral, o un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando todas aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

De lo antepuesto se infiere, que la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se acrediten los elementos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado, que el paquete

SUP-JRC-317/2016

electoral permaneció inviolado, ya que al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza, lo que se entiende como la determinancia.

Ello, obedece a que si bien el precepto legal que comprende la causal de nulidad, no refiere gramaticalmente la necesidad de la presentación de los elementos de determinancia, ello no excluye la necesidad de que el mismo se encuentre comprendido para poder declarar la nulidad de la votación recibida en casilla.

No estimarlo así, sería tanto como considerar que la actualización del primer elemento explícito contenido en el artículo 383, inciso b), de la *Ley*, traería como consecuencia ineludible la nulidad de la votación recibida en casilla, aún y cuando no se hubiera vulnerado la certeza e integridad del paquete, en perjuicio del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y, sobre todo, en perjuicio del sufragio popular depositado en las urnas.

Lo anterior, pues debe destacarse que la voluntad manifestada en el voto debe ser protegida, con la finalidad de que los ciudadanos tengan certeza de que el resultado de la elección coincida con su decisión.

La regla general es considerar que, la votación emitida se realizó con apego a las formalidades previamente descritas, aún y cuando se encuentren algunas irregularidades; sin embargo, la nulidad solo se justifica si tales circunstancias son relevantes, esto es, si resulten determinantes para el resultado de la votación.

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se acredite la entrega extemporánea del paquete electoral, sin causa justificada, salvo que se demuestre que no se afectó la integridad de la documentación incluida en el paquete electoral y, por tanto, los resultados contenidos son fidedignos y confiables (elemento determinante).

3.1.1.2 Elementos mínimos para el estudio de la causal

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión de los Actores es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: **a)** listas de ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla publicadas el veintisiete de mayo -comúnmente llamadas encarte-; **b)** actas de la jornada electoral; **c)** *Constancias de clausura*; **d)** actas circunstanciadas de recepción de paquetes electorales por las *Asambleas* o centros de acopios correspondientes; **e)** *Recibos* o centros de acopios correspondientes; **f)** hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis; **g)** acuerdos de las *Asambleas* respectivas en relación a la mecánica para el auxilio en la recolección de los paquetes electorales; y **h)** documento que señala el tipo de casilla y su localidad.

A las documentales anteriores, por tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concederá valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 318, numeral 1, inciso a), y 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la *Ley*; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en numeral 1 del citado artículo 323.

Además, para estar en condiciones de estudiar la aludida causal de nulidad, resulta indispensable que en la demanda se precisen los requisitos mínimos siguientes:

- a)** Identificar la casilla impugnada, esto es, si se encuentra dentro de la cabecera municipal, fuera de la misma o si es rural;
- b)** Precisar de forma individual la fecha y hora que se clausuró la casilla y remitió el paquete, y
- c)** Mencionar la fecha y hora que fue entregado el paquete electoral a las *Asambleas*.

De esa manera, el órgano jurisdiccional puede contar con los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, si se actualiza la causa de nulidad invocada.

Así, los *Actores* debieron señalar el tipo de casilla que, desde su perspectiva, se entregó fuera de los plazos, además de identificar la fecha y hora de clausura de cada una de las casillas.

SUP-JRC-317/2016

Esto, porque el impugnante tiene el deber de exponer las razones específicas y concretas, individualizando e identificando la casilla y exponiendo los tiempo que controvierte, lo anterior son considerados como elementos (lugar y tiempo) necesarios para acreditar el hecho o la causal invocada.

Lo anterior, guarda sustento con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, identificada con la clave 7/2000, cuyo rubro es: **ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Sonora y similares).**

3.1.1.3 Análisis de la causal en relación con las casillas impugnadas

Dicho lo anterior, el presente análisis se centrará en dos mil doscientas ochenta y cinco paquetes electorales que a consideración de los *Actores*, fueron entregados fuera de los plazos previstos en la *Ley*, sin causa justificada.

En relación con lo anterior, y como se refirió en el apartado del marco normativo, para que se actualice la causal de nulidad invocada por los *Actores*, se deben cumplir plenamente tres elementos: **a)** entregar el paquete electoral fuera del plazo establecido en la ley; **b)** que esto sea sin causa justificada; y c) que presente muestra de alteración.

Por lo que respecta al inciso a), para que se actualice este elemento, los *Actores* cuentan con la carga procesal de demostrar su dicho, para lo cual, deben precisar al menos tres circunstancias:

- Respecto de cada casilla impugnada, la hora en la cual se clausuró y la hora en que fue recibido el paquete electoral en las *Asambleas*.
- La fuente probatoria que les permita respaldar las afirmaciones de los datos referidos en el párrafo anterior.
- Los hechos reales, por lo cuales consideran que fue extemporánea la entrega de los paquetes electorales controvertidos, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan al juzgador determinar de manera racional que el tiempo transcurrido entre la clausura de la casilla y la entrega del paquete electoral fue excesivo, tomando en consideración, entre otras cuestiones, la distancia que existe entre el lugar en que se ubicó la casilla

y el lugar en que se encuentra localizado las *Asambleas*, las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar.

Dicho lo anterior, lo procedente es analizar si acorde a lo que afirman los *Actores*, se actualizó la entrega de paquetes de manera extemporánea, sin causa justificada en las dos mil doscientas ochenta y cinco casillas, y si éstas muestran signos de alteración, es decir, si la entrega extemporánea sin causa justificada, es determinante.

En principio, resulta preciso señalar que los *Actores* manifiestan en su agravio inicial que los paquetes electorales de las casillas impugnadas se entregaron de forma extemporánea.

Sin embargo, resulta también que son omisos en aportar medio de prueba alguno para acreditar su dicho, pues únicamente se limitan a señalar en forma genérica que los paquetes electorales se entregaron en forma extemporánea, sin especificar circunstancias de tiempo, modo o lugar.

Por tanto, atendiendo al principio de la prueba que refiere que lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra, no resulta lógico tener por cierto que en todas y cada una de las casillas impugnadas por esta causal la clausura haya ocurrido a las diecinueve horas con treinta minutos, tal como señalan los *Actores*, y que por tal motivo, se desprenda la extemporaneidad automática en la entrega de los paquetes.

Es decir, los *Actores* expresan que se actualiza la causal de nulidad, porque en su apreciación la entrega de los paquetes electorales a las *Asambleas* no se realizó de manera inmediata, y para ello reproduce en todas las casillas, tiempos idénticos de la supuesta entrega extemporánea de paquetes.

En este sentido, resulta que los *Actores* basan su impugnación en los resultados preliminares publicados por el *IEE* en su sitio de internet oficial, ubicado en la dirección http://104.130.249.184/publicacion/rep_dip.html. En tal sitio, se difundió la bitácora de recepción de paquetes, señalando hora de acopio, de lo cual según los actores, se desprende la hora de clausura de las casillas y la hora de entrega de paquete.

Al respecto, no resulta jurídicamente viable concluir que a partir de los datos señalados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se pueda obtener la hora de entrega

SUP-JRC-317/2016

del paquete por parte de los presidentes de mesa directiva de casilla a las *Asambleas* y con ello se actualice la causal de nulidad que invocan, pues para tal efecto era necesario que los *Actores* ofrecieran las pruebas idóneas, ya que se limitan a señalar únicamente la dirección de la ubicación de la casilla sin aportar elementos de prueba adicionales, como podría ser acreditar la distancia que existe entre la ubicación de las casillas y las *Asambleas* o las características propias de las zonas en que éstas se instalaron.

Por otro lado dicha dirección electrónica aportada por los actores no es la prueba idónea para establecer la hora de la clausura de las casillas y la hora de entrega de paquete, toda vez que la prueba idónea para tal efecto y que de hecho este *Tribunal* toma de referencia es la atinente a la constancia de clausura y el recibo de entrega, ya que estas son las documentales que le otorgan tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 318 de la *Ley*.

Así entonces, los *Actores* no solo pretenden que este *Tribunal* los releve de su carga de probar qué distancia existió entre la ubicación de las casillas y las *Asambleas*, sino también de la obligación de circunstanciar las condiciones de lugar, es decir, detallar las características propias de las zonas en que se instalaron.

Por tanto, para este *Tribunal* no basta la sola afirmación de los *Actores* en el sentido de que los paquetes electorales de dos mil doscientas ochenta y cinco casillas, se entregaron de manera extemporánea sin causa justificada, pues era necesario que los actores demostraran esas aseveraciones con otro tipo de elementos de prueba que evidenciaran que se actualizó una irregularidad.

En efecto, los impugnantes tenían la carga procesal de señalar no solo las circunstancias de tiempo para considerar que con ello se actualizó la causal de nulidad; sino además debieron precisar elementos de lugar, como podrían ser las distancias existentes entre la ubicación de la casillas y la sede de las *Asambleas*, a fin de reflejar que cuando menos en aquellas casillas con cierta proximidad, no se cumplió con el principio de inmediatez exigido en la *Ley*. Cuestión que el particular no cumplieron los actores.

Al respecto, se precisa que la expresión “inmediatamente”, a que se refiere el artículo 174, párrafo 1, de la Ley, debe entenderse en el sentido de que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes, solamente transcurra el tiempo necesario para el traslado del lugar en que estuvo instalada la casilla al domicilio de la Asamblea, atendiendo a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar.

No obstante lo anterior, este *Tribunal* analizará la causal invocada pese a lo genérico del agravio, ello, con el fin de garantizar que el ejercicio democrático realizado el cinco de junio del presente año se llevó a cabo conforme a los principios rectores que regulan la materia.

3.1.1.4 Estudio supletorio de la causal de nulidad

Como se dijo en líneas previas, los *Actores* no identifican la localización de las casillas (dentro de la cabecera municipal, fuera de ésta o rural) ni ofrecen los por los medios de prueba idóneos para relacionar dicha circunstancia, así como tampoco señalan de forma precisa la hora del cierre de las casillas y de la remisión de los paquetes electorales, incumpliendo con la carga procesal de expresar con claridad el agravio que le genera el acto controvertido.

Sin embargo, este *Tribunal* sostiene que dada la relevancia del presente juicio, se debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también, en su caso, su ausencia total y precisar el acto que realmente cause afectación.

Esto es así porque los derechos humanos contemplados en los artículos 2 y 17 de la *Constitución Federal*, tienen como presupuestos esenciales, entre otros, garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y que dicha impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial. Ello, dado que el alcance de la suplencia obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a compensar o superar las desventajas procesales.

De ahí que el estudio que realice este órgano jurisdiccional sobre los planteamientos formulados por el promovente, sean analizados conforme a las referidas garantías constitucionales.

SUP-JRC-317/2016

Ahora bien, como se ha referido, los *Actores* no aportaron medios de prueba para acreditar los supuestos referidos en su escrito de impugnación, por lo que este *Tribunal* se vio en la necesidad de llevar a cabo una serie de requerimientos, a fin de estar en aptitud de analizar la causal que nos ocupa.

En ese sentido, resulta que ante la imposibilidad de contar con las actas originales, obran en el expediente copias al carbón que allegaron el *PRI* y el *PAN*, mismas que serán consideradas al momento de resolver la litis en este juicio, y que pueden ser cotejadas entre sí, a fin de verificar su autenticidad.

Lo anterior es así, pues si bien es cierto que se trata de las copias de la *constancia de clausura* de cada casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos, también lo es que como parte de los mecanismos tendentes a garantizar la inviolabilidad de los datos, las copias son documentos en los cuales queda asentada la información de la misma forma que en los documentos originales, pues debe tomarse en cuenta que no son reproducciones hechas con posterioridad, sino que su elaboración es simultánea, teniendo que incluso reflejan las particularidades de ésta, como podrían ser sesgos, tachaduras o enmendaduras u otros signos que denoten o revelen algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un sistema fácil y práctico. En consecuencia, dichas actas generan eficacia probatoria plena, de conformidad con el artículo 323, de la *Ley*.¹⁸

¹⁸ Sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave ST-JRC-136/2015.

Por otro lado, este *Tribunal* requirió también al *INE* a efecto de que informara cuestiones relativas a la localización de las casillas en el estado.

Al respecto, mediante la contestación realizada, se advirtió que el criterio utilizado por el *INE* para catalogar los tipos de casilla se divide en: urbanas y no urbanas. Sin embargo, dicha clasificación no aparece en la legislación local; por lo que al no obrar en autos y no ser de conocimiento público la localización de las casillas, este *Tribunal* realizara el estudio de las mismas como si se encontraran dentro de la cabecera distrital, con un periodo de entrega o traslado de como máximo doce horas.

3.1.1.5 Paquetes electorales entregados en tiempo

Dicho lo anterior y a partir de la información consignada en la documentación electoral que obra en autos, es posible determinar que en el caso que nos ocupa, no se actualiza la causal de nulidad bajo estudio en mil trecientas sesenta y cinco casillas, ya que se corroboró que la entrega de los paquete se realizó en tiempo, validando el aspecto temporal.

Tal afirmación se demuestra con lo asentado en el siguiente listado:

[Se inserta tabla]

De las mil trecientas sesenta y cinco casillas mencionadas, ciento dos tuvieron que ser corroboradas con dos o más copias al carbón de las *constancias de clausura*, mismas que al no guardar diferencias entre sí, generan plena convicción sobre los datos contenidos en las mismas. Dichas casillas son las siguientes:

[Se inserta tabla]

Asimismo, en doscientas treinta y tres no se contó con las constancias de clausura para llevar acabo la adminiculación, esto a pesar de haberse requerido a los partidos políticos.¹⁹ Por tanto, este *Tribunal* tomó como base las copias únicas, ya que en ellas quedan asentados los datos de la misma manera que en la original. Dichas casillas fueron:

19 Artículo 322, numeral 2, de la *Ley*

[Se inserta tabla]

3.1.1.6 Paquetes electorales entregados a centros de acopio

Por otro lado, diez de los paquetes fueron remitidos en menos de doce horas a los centros de acopio previamente regulados en el acuerdo del número **INE/CG1012/2015**, por el que en ejercicio de la facultad de atracción se emitieron los lineamientos para el establecimiento y operación de mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales al término de la jornada electoral, para los Procesos Electorales Locales 2015-2016, así como los extraordinarios

SUP-JRC-317/2016

que resulten de los mismos y, en su caso, de las diversas formas de participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales. Dichas casillas son las que se muestran a continuación:

[Se inserta tabla]

3.1.1.7 Paquetes electorales que exceden el plazo de doce horas pero no muestran alteraciones

Asimismo, de las *constancias de clausura*, se desprende que en cuarenta y cinco casillas impugnadas, entre la hora de clausura y la hora de entrega, transcurren más de doce horas en que el funcionario correspondiente entrega los paquetes a las *Asambleas*, sin que muestren alteración alguna, las cuales son las siguientes:

[Se inserta tabla]

De las casillas analizadas, dos se corroboraron con dos o más copias al carbón de las *constancias de clausura*, las cuales son las 482 B y 816 B, mismas que al no estar controvertidas entre sí, generan plena convicción sobre los datos contenidos en las mismas.

Asimismo, en de la casilla 722 C1, no se cuenta con las *constancias de clausura* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, únicamente se cuenta con una copia al carbón de las mismas, por lo que al no haberlas aportado el actor conforme a lo establecido en el artículo 322, numeral 2, de la *Ley*, que establece que el que afirma está obligado a probar, por lo que este *Tribunal* tomo de base la copia ya que en ella quedan asentados, los datos de la misma manera que en la original.

Del contenido de la información que reportan los anteriores elementos de prueba, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, y de la sana crítica,²⁰ este *Tribunal* advierte que existe un error de asentamiento en el llenado de la hora de la “constancia y remisión del paquete electoral” y/o en el “recibo de entrega del paquete a la asamblea municipal”, que es propio de quienes actuaron como funcionarios de casilla. Sin embargo aún y cuando no existiera ese error humano, al no

contener los paquetes electorales muestras de alteración, no se acredita el elemento de afectación a la integridad y certeza del paquete, ni mucho menos el carácter determinante para decretar la nulidad de la votación de las casillas impugnadas.

20 Artículo 278, numeral 1 de la Ley.

3.1.1.8 Paquetes electorales sin cálculo de tiempo transcurrido, sin alteraciones.

Por otro lado, se desprende que en ochocientas veintisiete casillas impugnadas identificadas en el cuadro que a continuación se analiza, se verificó que de la documentación electoral aportada es imposible para esta autoridad calcular los tiempos de traslado del paquete electoral de la casilla para a *Asamblea* correspondiente, toda vez que no se cuenta con la hora de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales y/o la hora en que la *Asamblea* los recibió, sin embargo, se desprende que no existen alteraciones en los paquetes, lo anterior como se detalla en el siguiente cuadro:

[Se inserta tabla]

De lo anterior, se desprende que no se obtuvieron las documentales idóneas para tener la certeza sobre el tiempo transcurrido de la hora en que se clausuraron las casillas electorales y la de recepción del paquete.

De las casillas anteriores, dos se corroboraron con dos o más copias al carbón de las *constancias de clausura* las cuales son las 508 E1 y 2057 C2; constancias de clausura que al no estar controvertidas entre sí, generan plena convicción sobre los datos contenidos en las mismas.

Asimismo, en las casillas 799 B, 1470 C1 y 2797 B, no se cuenta con las constancias de clausura para llevar acabo la adminiculación pertinente, esto, a pesar de haber requerido a los partidos políticos. Por tanto, atendiendo al principio de la carga de la prueba establecido en el artículo 322, numeral 2, de la *Ley*, este *Tribunal* tomó como base las copias al carbón que obran en el expediente, ya que en ellas quedan asentados los datos de la misma manera que en los documentos originales.

De este modo, en atención al principio de determinancia referido en líneas previas, pues la recurrente debió probar que

SUP-JRC-317/2016

era viable la anulación ofreciendo las pruebas que respaldaran su dicho, máxime que fueron requeridas por este órgano resolutor, sin obtener respuesta favorable.

Ahora bien, de los *Recibos* de las casillas en estudio, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno, se desprende que fueron recibidas sin mostrar alteraciones, esto es, que se encontraban las firmas de quienes realizaron el escrutinio y cómputo en la mesa directiva de casilla, lo que genera certeza que no se violentó su contenido.

De lo anterior, se desprende que no se obtuvieron las documentales idóneas para tener la certeza sobre la hora en que se clausuraron las casillas electorales, cuál de los funcionarios de casilla hizo el traslado del paquete electoral, si algunos de los representantes de los partidos políticos acreditados acompañaron el traslado de los paquetes o cuál fue la hora de recepción del paquete.

Así, considerando que este órgano jurisdiccional realizó acciones tendentes a obtener dichos documentos, no existen elementos suficientes para tener por acreditadas las aseveraciones del recurrente, pues aunque señala que los paquetes electorales llegaron fuera de los plazos permitidos por la ley, lo cierto es que no se demuestra que ello hubiera ocurrido, y mucho menos que haya sido determinante para el resultado de la votación, toda vez que no obran en autos pruebas que acrediten que los paquetes electorales de las casillas que se analizan presenten muestras de alteración.

A lo anterior, sirve de sustento lo establecido en la jurisprudencia número 7/2000, emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es el siguiente: **ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA. Y SIMILARES)**. Así mismo, los paquetes electorales de dichas casillas, no presentaron alteración, tal como se demuestra en los *Recibos*, lo que genera certeza de que no se violentó su contenido.

De este modo, los *Actores* no acreditan la posible manipulación del paquete y de las actas a favor del partido político ganador; así como tampoco se prueba que existió dolo o error en la computación de los votos, o irregularidades graves que pusieran en duda la certeza y legalidad de la votación

recibida en las casillas, que fueran determinantes para el resultado de la votación.

Ello es así, porque con los documentos que obran en autos, los *Actores* no logran acreditar, por ejemplo, que las actas de *escrutinio* y *cómputo* agregadas a los paquetes electorales no coincidieran con las copias autorizadas remitidas por los funcionarios de casilla; que existiera error en el cómputo de los votos recibidos en cada casilla; o que dichas actas hubiesen sido alteradas en favor del partido ganado.

En efecto, aun suponiendo sin conceder que hubiera ocurrido la entrega extemporánea de los paquetes electorales, los *Actores* tenían la carga procesal de precisar en qué modo o de qué manera los paquetes electorales pudieron haber sufrido alguna alteración con la consecuencia inmediata de constatar de manera evidente que la votación recibida en las casillas fue alterada.

Tampoco pasa por alto, que la representación del partido político, a partir de la computación de votos, cierre y clausura de casilla, así como en la posterior recepción y entrega formal de los paquetes electorales, estuvo siempre en la posibilidad de poder verificar la posible vulneración a la integridad de los paquetes electorales, sea a través de los datos asentados en las actas levantadas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o bien durante la entrega material y formal de los paquetes electorales, sin que alegue que se le haya impedido esa posibilidad.

Por tanto, no se acreditó que existieran irregularidades graves que pusieran en duda la certeza y legalidad de la votación recibida en las casillas, por lo que no se acredita la actualización de algún elemento determinante para el resultado de la elección.

De ahí que no existen elementos que permitan a este *Tribunal* tener por ciertos los señalamientos hechos por el recurrente en cuanto a tales casillas, pues además los *Actores* no presentan pruebas que generen indicio alguno sobre una posible determinancia ante la falta de certeza de los resultados obtenidos, pues como ya se ha señalado, no basta con que un paquete sea presentado fuera de los plazos, sino que además deberá de acreditarse que el principio de certeza se haya visto violentado.

SUP-JRC-317/2016

3.1.1.9 Supuestos específicos

En relación con cinco casillas, identificadas como 1596 B, 1733 C2, 2167 B, 3128 B y 2177 C1, se observa que se encuentran los datos relativos a la fecha y hora de clausura de la casilla, así como también la entrega del paquete a las *Asambleas*, sin embargo, no es posible determinar el tiempo que transcurre entre un momento y otro, como se muestra a continuación:

[Se inserta tabla]

Conforme al del contenido, se advierten errores de asentamiento en el llenado de la hora de la *Constancia de clausura* y/o en el *Recibo*, dato cuya autoría corresponde a quienes actuaron como funcionarios de casilla, toda vez que de la cronología detallada no sería posible que primero se entregara el paquete ante las *Asambleas* y posteriormente se clausurara la casilla. Por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, y la sana crítica,²¹ este *Tribunal* advierte que existe un error de asentamiento en el llenado de las actas.

21 Artículo 278, numeral 1 de la Ley.

Sin embargo, aun y cuando exista ese error humano, al no contener los paquetes electorales muestras de alteración, no se acredita el elemento de afectación a la integridad y certeza del paquete, ni mucho menos el carácter determinante para decretar la nulidad de la votación de las casillas impugnadas.

3.1.1.10 Paquetes con muestras de alteración

Por otro lado, en treinta y cuatro las casillas impugnadas se desprende que sí mostraban alteración los paquetes, tal como se analiza en el siguiente cuadro:

[Se inserta tabla]

De las casillas anteriores, tres se corroboraron con dos o más copias al carbón de las constancias de clausura, las cuales son las siguientes: 505 B, 795 C1 y 842 B; *constancias de clausura* que al no estar controvertidas entre sí, generan plena

convicción sobre los datos contenidos en las mismas, en lo tocante a las casillas impugnadas identificadas como 1318 C1, 1811 B, 1955 B, 1956 B, 1957 B, 716 C1, 884 C2 y 1296 C2 se advierte que no se cuenta con datos propios de la *constancia de clausura*, así mismo del *Recibo* se desprende que sí mostraban alteración los paquetes.

Cabe hacer mención que en de la casilla 957 B, no se cuenta con las *Constancias de Clausura* para llevar acabo la adminiculación de mérito, pues a pesar de haberse requerido a los partidos políticos, únicamente se cuenta con una copia al carbón de la misma, por lo que atendiendo al principio de la carga de la prueba establecido en el artículo 322, numeral 2, de la *Ley*, este *Tribunal* tomó como base las copias ya que en ellas quedan asentados los datos de la misma manera que en el documento original.

Por otro lado, en lo que respecta a las casillas 881 C2, 957 B, 1273 B, 1192 B y 630 B, fueron entregados en un lapso menor a doce horas a la clausura de la casilla, así mismo, del recibo de entrega se desprende que muestran alteración.

De lo anterior, podría presumirse que al mostrarse alteración en el paquete, se afecta de manera inmediata el principio de certeza, sin embargo, esa presunción desaparece al existir coincidencia en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla y las actas del *PREP*, en el rubro 5, que dice “sume las cantidades de los apartados 3 (personas que votaron) y 4 (indicar el número de representantes de los partidos políticos y/o candidatos independientes que votaron sin estar en la lista nominal de electores)” y el rubro 6, que dice “total de boletas de la elección de diputados sacadas en las urnas” y el total de la votación emitida.

Por otro lado, en las casillas 481 B y 571 B, no se tiene la documentación electoral referente al acta del Programa de Resultados Electorales Preliminares, por que la parte actora tenía que precisar en qué modo o de qué manera los paquetes electorales pudieron haber sufrido alguna alteración con la consecuencia inmediata de constatar de manera evidente que la votación recibida en las casillas fue alterada.

Es decir, los *Actores* estuvieron en la posibilidad de externar en la sede administrativa, una posible falta de custodia durante el traslado de los paquetes, o bien, alguna irregularidad

SUP-JRC-317/2016

durante la entrega física y material de éstos, en virtud de las muestras de alteración en detrimento del resultado contenido en las actas levantadas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, hecho que no aconteció, por lo que es claro que la mera entrega de los paquetes no trascendió en el resultado de la votación.

Tampoco pasa por alto que los *Actores*, a partir de la computación de votos, durante el cierre y clausura de casilla, así como en la posterior recepción y entrega formal de los paquetes electorales, siempre estuvieron en la posibilidad de poder verificar la potencial vulneración a la integridad de los paquetes electorales, sea a través de los datos asentados propiamente en las actas levantadas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o bien durante la entrega material y formal de los paquetes electorales, sin que al respecto alegue que se les impidió esa posibilidad.

Incluso, al estar presentes durante el desarrollo del cómputo, tuvieron la oportunidad de evidenciar la necesidad de abrir la totalidad de los paquetes electorales en sede administrativa, por encontrarse en el supuesto de contener muestras de alteración, hecho que tampoco ocurrió.

Por tanto, no existen elementos que permitan a este *Tribunal* tener por ciertos los señalamientos por parte del recurrente en cuanto a estas casillas, pues además los *Actores* no presentan prueba alguna que genere indicio sobre la determinancia ante la falta de certeza de los resultados obtenidos, pues como ya se ha señalado, no basta con que un paquete sea presentado fuera de los plazos, sino que además deberá de acreditarse que el principio de certeza se haya visto violentado.

Además, la documentación electoral en cuestión estuvo en todo momento bajo el resguardo de las autoridades administrativas electorales correspondientes.

En consecuencia, al no existir elementos suficientes que acrediten plenamente que los paquetes electorales de las casillas en cuestión se entregaron fuera del plazo de ley; que tal extemporaneidad haya ocurrido sin causa justificada y; que los paquetes hayan sido alterados de modo tal que se haya visto afectado el principio de certeza; este *Tribunal* considera infundado el agravio hecho valer por los *Actores*.

3.1.2 Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley.

Los *Actores*, en su escrito de inconformidad, hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso e), de la *Ley*, respecto de un total de tres mil doscientas ochenta y nueve casillas.

Manifiestan que en las casillas impugnadas fungieron como funcionarios personas que no se encontraban en la lista nominal de la sección, por lo que se violenta el artículo 85, numeral 1, de la *Ley*, al no ser estas personas nombradas por el órgano electoral competente ni capacitadas por éste y, por tanto no existe certeza de que su actuación se haya apegado a los principios rectores del proceso electoral.

Por su parte, el *PAN* como tercero interesado hace referencia a los hechos indicando que el permitir que personas que no tomaron el curso de capacitación correspondiente, sean funcionarios de las mesas directivas de casilla, es una excepción autorizada expresamente por la propia legislación electoral para efecto de privilegiar el derecho a ser votado de los ciudadanos mexicanos. Así, para el tercero interesado todas las sustituciones fueron realizadas de conformidad con la legislación y con el claro objeto de que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a voto.

Ahora bien, previo al estudio de la causal de nulidad invocada, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la petición de los *Actores*.

3.1.2.1 Marco normativo

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, a quienes el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el sufragio sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar su respectivo escrutinio y cómputo.

En cuanto a su integración, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales,²² quienes deberán ser

SUP-JRC-317/2016

ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.²³

²² Artículo 85, numeral 1 de la *Ley*.

²³ Artículo 86, numeral 1 incisos a) y b), de la *Ley*.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros de dicho órgano electoral, la *Ley* contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como propósito suplir las ausencias de los ciudadanos designados, así como dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla.

Así pues, ante la posibilidad de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con su obligación de acudir y desempeñarse como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local estableció el procedimiento a seguir para sustituir a dichos funcionarios.²⁴

²⁴ Artículo 151 de la *Ley*.

En esa tesitura, toda sustitución debe recaer en electores que se encuentren presentes en la casilla para emitir su voto, y que en ningún caso podrá recaer en representantes de partidos políticos, candidatos independientes u observadores electorales.²⁵

²⁵ Artículo 151, numeral 3, de la *Ley*.

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas para ello. El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante de **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.**²⁶

²⁶ Tesis XIX/97, visible en la Revista justicia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, Año 1997, página 67.

De lo dicho hasta el momento se colige que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el principio de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la

Ley, mismo que se vulnera cuando la mesa directiva de casilla es integrada por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; específicamente cuando éstos pertenecen a una sección diversa a la de la casilla en donde intervienen.

En tal virtud, este *Tribunal* considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla conforme a las actas de la jornada electoral y/o de escrutinio y cómputo, con los asentados en el listado nominal de las secciones correspondientes a las casillas impugnadas.

Así, para este *Tribunal* la controversia a resolver en la presente causal consiste en determinar si en las casillas impugnadas, fungieron durante el día de la jornada electoral, funcionarios de casilla que no están inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a cada mesa receptora de la votación; actualizando con ello el primer elemento de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista por el artículo 383, numeral 1, inciso e), de la *Ley*, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor de la votación.

3.1.2.2 Material probatorio

Obran en el expediente los documentos siguientes: **a)** originales de actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo; **b)** originales de la lista nominal de electores con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección, **c)** el último encarte difundido por la autoridad responsable, y **d)** lista nominal de electores en medio digital remitida por el *INE*. Pruebas que al tener el carácter de públicas, y al no existir prueba en contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno.²⁷

27 Artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la *Ley*.

3.1.2.3 Procedimiento de estudio de la causal de nulidad

En este sentido, para que este *Tribunal* procediera al estudio de la citada causal de nulidad, resultó indispensable que en la demanda se precisaran los requisitos mínimos siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) precisar el

SUP-JRC-317/2016

cargo del funcionario que se cuestiona, y c) mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación. Con lo cual, se considera que este órgano jurisdiccional cuenta con los elementos mínimos necesarios para verificar en las actas, encarte y lista nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y así, poder estar en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.

La metodología utilizada para verificar lo alegado en vía de agravio por los *Actores* fue la siguiente:

En primer término se procedió a la revisión y posterior captura de la información señalada por los *Actores*, consistente en número y tipo de casilla, nombre de la persona que según el dicho de los promovente fungió como funcionario de mesa directiva casilla y cargo que ocupó el día de la jornada electoral.

Posteriormente, se verificó de forma directa en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como el encarte, si la persona señalada por los *Actores* había fungido como funcionario de las mesa directiva de casilla y, en su caso, se realizó la anotación negativa o afirmativa.

Una vez terminada la etapa anterior, e identificadas las personas señaladas por la parte actora que sí fungieron como funcionarias de mesa directiva en cada una de las casillas impugnadas, se realizó su búsqueda en el listado nominal para verificar si pertenecían o no a la sección electoral en que actuaron.

Como se describe en líneas anteriores, en primer lugar el nombre que se tomó en cuenta para la búsqueda en el listado nominal fue el aportado por la parte actora, no obstante lo anterior, hay que señalar que en muchas de las casillas impugnadas los *Actores* no señalaron el nombre, o bien lo hicieron de forma errónea o incompleta. Para el logro de lo anterior, se utilizaron diversas variables tales como búsqueda por los apellidos, nombre, nombre y apellido, apellidos invertidos y nombre con cambios en algunas de sus letras.

Ahora bien, por razones de método, se procede a agrupar las casillas, según la similitud que estas presentan entre sí con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada.

3.1.2.4 Casillas impugnadas que cuentan con omisiones

[Se inserta tabla]

En las casillas listadas, se advirtió que los *Actores* no hacen mención de nombres de los ciudadanos que supuestamente fungieron como funcionarios de manera indebida; al respecto, cabe precisar que para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de estudiar la presente causal de nulidad de votación, resulta indispensable que en la demanda además de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, se precise el nombre completo de la persona que indebidamente integró la casilla, o bien, algún elemento que permita su identificación, porque solo de esa manera el órgano impartidor de justicia estará en aptitud de tener los elementos mínimos necesarios para contrastarlos con los datos de las actas y listado nominal correspondiente, y en consecuencia, poderse pronunciar respecto a la actualización de la causal de nulidad invocada. Lo anterior guarda congruencia con la jurisprudencia de rubro: **NULIDAD DE VOTACION RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MINIMOS PARA SU ESTUDIO.**

Ahora bien, en relación a aquellas secciones en que los *Actores* manifiestan que el nombre de los funcionarios es ilegible, dicho señalamiento fue corroborado por este *Tribunal* al realizar un análisis de las *actas finales* y demás documentación atinente a las casillas de mérito; tal circunstancia en todo caso únicamente acredita que el nombre asentado en el acta correspondiente no es legible, o bien, que hubo un error en su llenado.

Al respecto, este *Tribunal* considera que los *Actores* debieron argumentar y aportar mayores elementos de prueba para acreditar la indebida integración, sobretodo porque con antelación a los comicios estuvieron en posibilidad de acceder al listado nominal respectivo.

Así también, se debe puntualizar que el impugnante pudo contar con representantes en dichas mesas directivas el día de

SUP-JRC-317/2016

la jornada electoral, al igual que tuvo acceso al acta de jornada, en la que se debe asentar el nombre de los funcionarios que integraron las mesas receptoras de la votación; así como al *acta final*, e inclusive, a la *Constancia de clausura*, documentos en los que también existe un apartado para precisar el nombre de quienes integraron las mesas directivas de casilla.

Ahora bien, es importante destacar que en todos los actos de autoridad se parte de la presunción de validez, como es la designación de funcionarios de las mesas directivas de casilla, principio que también rige en su integración, instalación, funcionamiento y cierre, respecto a la labor que llevan a cabo los ciudadanos que participan el día de la jornada electoral. Por lo tanto, es obligación del inconforme demostrar las deficiencias ocurridas en la integración de éstas por medio de la narración de los hechos, la exposición de conceptos de agravio, y el ofrecimiento y aportación de las pruebas pertinentes; siendo que, la presentación de actas con datos no claros, no generan prueba plena respecto a su indebida integración.

En ese sentido, es de destacar que este *Tribunal* no está obligado a indagar los nombres de los funcionarios que integraron la mesa receptora y compararlos con la lista nominal atinente; por el contrario, como ya se dijo con anterioridad, la parte actora debió exponer los hechos y conceptos de agravio respecto de su inconformidad, es decir, debió mencionar el nombre del funcionario o funcionarios que a su parecer integraron de manera incorrecta la mesa directiva de casilla o, en su caso, presentar mayores elementos de prueba para acreditar que no existe certeza respecto de quién o quiénes la integraron, para que este *Tribunal* estuviera en posibilidad de ponderar tal irregularidad y determinar lo que en Derecho correspondiera, lo que en la especie no ocurrió. Lo anterior guarda congruencia con la jurisprudencia de rubro: **NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO.**²⁸

²⁸ Jurisprudencia 26/2016, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, y cuya publicación a la fecha está pendiente.

3.1.2.5 Casillas impugnadas en las que se constató que los funcionarios señalados por los Actores no participaron

La nulidad de la votación recibida en las casillas y secciones solicitadas por los *Actores*, que se identifican a continuación, debe desestimarse, porque contrario a lo que argumentan, de las personas que aduce integraron indebidamente cada una de las casillas en comento, cuatrocientas doce no formaron parte de ellas el día de la jornada electoral, como se muestra enseguida:

[Se inserta tabla]

En ese sentido, este Tribunal no encuentra irregularidad alguna que justifique la anulación de la votación recibida en las casillas de mérito, sino por el contrario estima que se trató de un error por parte de los *Actores* en la formulación del agravio, al referirse equivocadamente a ciudadanos que no participaron como funcionarios de las casillas en comento; circunstancia que es acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia de rubro: **NULIDAD DE VOTACION RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MINIMOS PARA SU ESTUDIO.**²⁹

29 Jurisprudencia 26/2016, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuya publicación a la fecha esta pendiente.

3.1.2.6 Casillas impugnadas en las que se constató que los funcionarios señalados por los Actores sí participaron y sí se encuentran en el listado nominal de la sección

[Se inserta tabla]

Finalmente, bajo la panorámica expuesta, y del análisis detallado del cuadro que antecede este *Tribunal* advierte que en términos generales los nombres de los ciudadanos que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de casilla, coinciden plenamente con los que aparecen en el listado nominal de la sección correspondiente a éstas.

En ese sentido se colige que dichos ciudadanos fueron previamente designados por el órgano electoral competente, o bien recibieron la invitación el día de la jornada electoral para

fungir como integrantes de la mesa receptora debido a la ausencia de los inicialmente designados. En este segundo supuesto, del contraste de los nombres contenidos en las actas de la jornada electoral *y/o actas finales y/o constancias de clausura y/o recibos*, con el listado nominal correspondiente, este *Tribunal* concluye que las posibles sustituciones efectivamente se hicieron con electores pertenecientes a la sección de la casilla; por lo que es evidente que en el caso concreto no se afectó la certeza de la votación recibida en tales mesas receptoras ya que en todo caso la sustitución de los funcionarios se hizo en los términos que señala la *Ley*.

De ahí que la integración de la mesa directiva de casilla en análisis, fue apegada a Derecho, conforme a los artículos 84, 85, y 86, fracción I, incisos a) y b) de la *Ley*.

3.1.2.7 Casillas impugnadas en las que se constató que los funcionarios señalados por los Actores sí participaron y no se encuentran en el listado nominal de la sección

[Se inserta tabla]

Del análisis detallado del cuadro que antecede este *Tribunal* advierte que los ciudadanos que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, conforme a los datos arrojados de las *actas finales* y de las actas de jornada, **no** coinciden con los que aparecen en el listado nominal de la sección correspondiente a éstas; por tanto, se estima que las sustituciones de funcionarios no se llevaron a cabo conforme al procedimiento previsto en el *Ley*, afectando el principio de certeza en la recepción de la votación en dichas mesas receptoras.

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por la autoridad competente, o bien, que las sustituciones no se hayan ajustado al procedimiento que prevé el artículo 151 de la *Ley*, específicamente respecto a que no estaban registrados en el

listado nominal de la sección correspondiente; vulnerando en consecuencia el requisito que establece el artículo 86, inciso a), de la *Ley*. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro: **RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y Similares).**³⁰

30 Tesis de Jurisprudencia 13/2002 visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 62 y 63.

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso e), de la *Ley*, este *Tribunal* estima **parcialmente** fundados los agravios que hizo valer la parte actora respecto a las casillas descritas en el cuadro que antecede, y en consecuencia, lo procedente es invalidar los sufragios recibidos en éstas.

3.1.3 Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que benefició a uno de los candidatos, siendo determinante para el resultado de la votación

Los Actores aducen la existencia de error aritmético respecto de dos mil trescientas dieciocho casillas instaladas, de ahí que soliciten la nulidad de votación recibida; ello, por actualizarse la causal prevista en el artículo 383, inciso f), de la *Ley*.

Así, previo al análisis de fondo de la causal, y por ser de importancia para la resolución del presente juicio, el *Tribunal* considera pertinente el estudio de cuestiones previas relacionadas con el escrutinio y cómputo de la votación recibida por las mesas directivas de casillas, así como por las *Asambleas*.

3.1.3.1 Marco normativo

En primer término, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan el número de electores que votó en la casilla, el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla, así como el número de boletas sobrantes de cada elección.³¹

SUP-JRC-317/2016

31 Artículo 161 de la *Ley*.

Al respecto, la legislación electoral señala el procedimiento para el escrutinio y cómputo por parte de las mesas directivas de casillas, estableciendo el orden en que se llevará a cabo, las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.³²

32 Artículos 162, 163 y 164 de la *Ley*.

Así, concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla.³³

33 Artículos 192 y 193 de la *Ley*.

Por su parte, el artículo 383, inciso f), de la *Ley* establece que la votación recibida en casilla será nula cuando haya mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos, fórmula de candidatos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación de la elección.

En consecuencia, se puede deducir que la correcta computación de los votos tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

De lo anterior, se advierte que la causal de nulidad de votación recibida en casilla se actualiza con la concurrencia de los siguientes elementos:

- La existencia de error o dolo en la computación de los votos.
- Que ese dolo o error sean determinante para el resultado de la votación.

De tal suerte que para la actualización se requiere que los hechos establecidos para su integración ocurran necesariamente cuando se desprendan del *acta final* (original) o, en su caso, el *acta individual* (recuento). Además, es necesario que sean atribuibles a personas directa e inmediatamente relacionadas con los actos electorales de que se trate, es decir, que el error o dolo se realice en el momento en que se haga el cómputo de los votos por alguno de los

integrantes de la mesa directiva de casilla, o bien, por quienes realicen el nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa.

Por otra parte, se entiende por **error** como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe. Por su parte, por **dolo** se entiende a una conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira, mismo que es objeto de prueba.

En efecto, el dolo no se puede presumir, sino que tiene que acreditarse plenamente, ya que por el contrario, existe la presunción de que la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla es de buena fe.

En este sentido, en los casos en que los *Actores*, de manera imprecisa, señalen que existió error o dolo en el cómputo de los votos sin aportar medios probatorios tendientes a acreditar que se haya actualizado el dolo, el estudio que se lleva a cabo se hace únicamente en razón de un posible error en el escrutinio y cómputo.

Así, para el análisis de los elementos de la causal de nulidad por error, se deben comparar los siguientes rubros fundamentales:

- Total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal de electores.
- Boletas extraídas de las urnas.
- Resultado de la votación (votación total emitida).

Tales rubros resultan fundamentales en virtud de que están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que, en condiciones normales, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de boletas depositadas y extraídas de la urna, mismas que deben verse reflejadas en el resultado de la votación, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de los votos.

Asimismo, existen rubros auxiliares como las boletas recibidas ante la mesa directiva de casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, los cuales no constituyen un elemento esencial para invocar la nulidad de la casilla, ya que si bien se pudiera considerar una irregularidad al evidenciar un error en el cómputo de las boletas o en el llenado de las actas, la misma

SUP-JRC-317/2016

no se traduce necesariamente en votos indebidamente computados y, en consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del sufragio.

Es decir, los rubros auxiliares sólo constituyen elementos complementarios para verificar la votación emitida, puesto que las boletas únicamente son susceptibles de ser votos cuando se entregan al elector y éste las deposita en la urna, de manera que mientras no se demuestre tal hecho, las diferencias derivadas de esos rubros no constituyen errores en el cómputo, y como consecuencia, al no afectar la voluntad ciudadana, no se actualiza la causal de nulidad.³⁴

34 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-414/2015 y acumulados, de fecha doce de agosto de dos mil quince.

De este modo, los rubros fundamentales evidencian lo sucedido en la jornada electoral, ya que lo asentado en el *acta final* firmada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, así como por los representantes de los partidos políticos presentes en la misma, refleja que las boletas entregadas a las personas inscritas en el listado nominal fueron las que se extrajeron de la urna, mismas que están reflejadas en el escrutinio de los votos a favor de partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes, candidatos no registrados o votos nulos (resultado de la votación).

Por lo expuesto, sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**³⁵

35 Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 a 24.

Ahora bien, para que proceda la nulidad de la votación recibida en casilla se requiere que en alguno de los tres rubros fundamentales exista irregularidades o discrepancias que permitan advertir que no hay congruencia en los datos asentados en el *acta final*. Además, es necesario que tal error sea determinante para el resultado final de la elección en dicha casilla.

Lo anterior es así, en razón de que los rubros mencionados deben consignar valores idénticos; consecuentemente, las diferencias que en su caso reporten las cifras consignadas para cada uno de esos rubros, presuntamente implican la existencia de error en el cómputo de los votos.

En lo que respecta a la determinancia en la causal, no es suficiente la existencia de un error en el cómputo de los votos para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga.

Para tal efecto, la determinancia se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cualitativo y el cuantitativo.

El criterio cualitativo versa cuando en las *actas finales* se adviertan inconsistencias evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

En lo relativo al criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando la probable irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Lo anterior, acorde con el criterio sustentado por la *Sala Superior* en la jurisprudencia **ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y similares)**.³⁶

36 Jurisprudencia 10/2001. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 5, año 2002, páginas 14 y 15.

Por su parte, el recuento de votos de una elección es la actividad que podrán practicar, a petición de parte interesada, las autoridades electorales en el ámbito de su competencia, con la finalidad de establecer con toda certeza quién es el

SUP-JRC-317/2016

candidato, partido o coalición que triunfó en la elección correspondiente.³⁷

37 Artículo 179 de la Ley.

Así, las asambleas municipales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla (recuento), levantando el acta correspondiente, en los siguientes casos:

- a) Si no obrase acta en poder del Consejero Presidente de la asamblea municipal, por haberse omitido su remisión por separado en sobre adherido en el exterior del paquete electoral.
- b) Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla.
- c) Si existan errores evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse o aclararse por otros medios.
- d) Cuando todos los votos válidos hayan sido depositados a favor de una misma candidatura.
- e) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre el candidato del partido político o en su caso del candidato independiente solicitante del nuevo escrutinio y cómputo y el primer lugar de la votación.

De este procedimiento, se advierte que no se ocupa de asentar los datos del número de electores que votaron, por lo que no utilizan los listados nominales, toda vez que el propósito de esa diligencia es verificar el número de votos válidos y nulos que efectivamente se recibieron en las casillas.

Al respecto, se presume que los errores contenidos en las *actas finales* ya fueron materia de corrección por la sede administrativa, por lo que no podrían invocarse como causal de nulidad ante este *Tribunal*.

Esto es así, en virtud de que en las casillas en que se hizo recuento por las asambleas municipales ya existe una *acta individual* de la elección, documento en que el grupo de trabajo conformado al efecto asentó los resultados obtenidos a partir del nuevo escrutinio y cómputo de votos realizado después de la apertura de los paquetes electorales correspondientes.

Sin embargo, se debe entrar al análisis de la casilla cuando se alegue que en el recuento no se subsanaron los errores o inconsistencias en el *acta individual*, por lo que es necesario que se contraste con el *acta final*, así como del acta de jornada electoral, pues sólo de esa manera se podrá verificar si persiste algún error en el nuevo cómputo de votos.

Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: **a) actas finales; b) actas individuales**, comúnmente llamadas recuento; **c) actas de la jornada electoral; d) listados nominales; e) hojas de incidentes** que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis; y **f) actas de las sesiones de cómputo municipal** realizadas por las asambleas municipales respectivas.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno;³⁸ además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en numeral 1 del artículo 323 de la *Ley*.

³⁸ Artículos 318, numeral 1, inciso a), y 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la *Ley*.

Así, las documentales públicas, expedidas por funcionarios facultados para ello dentro del ámbito de su competencia, cuentan con valor probatorio pleno únicamente respecto a su existencia, misma que al momento de llevarse a cabo contenía la información señalada por las partes; más no respecto a la certeza de lo que en ellas se asentó, pues ésta dependerá de la concatenación que se verifique con el resto de las pruebas que obran en el expediente.³⁹

³⁹ Artículos 318, numeral 2, de la *Ley*.

Cabe precisar que las copias al carbón que allegaron el *PRI* y el *PAN*, con la finalidad de tener mayores elementos para resolver y ante la imposibilidad de contar con las actas originales, dado que no se encontraban en poder de las autoridades administrativas electorales, serán consideradas al

SUP-JRC-317/2016

momento de resolver la litis en este juicio, mismas que pueden ser cotejadas entre sí, a fin de verificar su autenticidad.

Pues si bien es cierto, se trata de las copias de las *actas finales* entregadas a los representantes de los partidos políticos, así como la correspondiente para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, también se trata de mecanismos tendentes a garantizar la inviolabilidad de los datos contenidos en el acta original, copias en las cuales quedan asentados, de la misma forma que en la original.

Lo anterior, toda vez que debe tomarse en cuenta que no son reproducciones hechas con posterioridad, sino que su elaboración es simultánea a la original, e incluso reflejan las particularidades de ésta, como podrían ser sesgos, tachaduras o enmendaduras y otros signos que denoten o revelen algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un sistema fácil y práctico.

En consecuencia, dichas actas generan eficacia probatoria plena, de conformidad con el artículo 323 de la *Ley*.⁴⁰

40 Sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave ST-JRC-136/2015.

3.1.3.2 Análisis de la causal invocada

Ahora bien, lo procedente es analizar si acorde a lo que afirman los Actores, se actualizó que en el cómputo de los votos de las dos mil trescientas dieciocho casillas impugnadas haya mediado dolo o error en el cómputo, es decir, si en la computación de las *actas finales*, o en su caso *actas individuales*, benefició a uno de los candidatos, siendo determinante para el resultado de la votación.

Sin embargo, resulta que son omisos en aportar medio de prueba alguno para acreditar su dicho, pues únicamente se limitan a basar sus agravios en los resultados preliminares publicados por el *IEE* en su sitio de internet oficial, ubicado en la dirección http://104.130.249.184/publicacion/rep_dip.html, así como en resultados arrojados de un archivo electrónico que, según mencionan, fue el único medio al cual tuvieron acceso después de la sesión de cómputo.

Así, de los datos arrojados por las dos fuentes antes señaladas, se desprende que únicamente describen un supuesto escrutinio de los votos computados de las casillas impugnadas, sin especificar la presunta irregularidad entre los

rubros fundamentales, mismos que son necesarios para actualizar la causal en estudio.

Además, atendiendo al principio de la prueba en el cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra, no resulta lógico tener por cierto que en las casillas impugnadas por esta causal exista una irregularidad evidente por el hecho de que no coincidan los rubros auxiliares obtenidos de documentales que no cuentan con valor probatorio pleno, por ser meramente informativas e indiciarias.

No obstante lo anterior, este *Tribunal* analizará la causal invocada pese a lo genérico del agravio; ello, con el fin de garantizar que el ejercicio democrático realizado el cinco de junio pasado se llevó a cabo conforme a los principios rectores que regulan la materia.

3.1.3.3 Casillas que fueron objeto de recuento en sede administrativa

A dicho de los Actores, existe el error en las casillas que a continuación se enlistan (doscientas cincuenta y dos), aún y cuando fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo por parte de las Asambleas, aduciendo que no se subsanaron los errores en el recuento de los votos.

[Se inserta tabla]

Para tal efecto, como se precisó en el marco normativo, en las *actas individuales* no resulta procedente el análisis de la causal de nulidad. Ello es así, ya que al contar con una nueva acta de escrutinio y cómputo en donde se asentaron los datos que corresponden a la realidad de la votación y no al mero dato formal y representativo contrario a ella, se estima que queda destruida la presunción de que gozaba el acta de escrutinio y cómputo original.⁴¹

41 Jurisprudencia 14/2005. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, páginas 135 y 136.

De tal suerte que de lo esgrimido en el escrito de impugnación adminiculado con las nuevas actas de escrutinio y cómputo, no se desprende que los errores o inconsistencias

SUP-JRC-317/2016

subsistan una vez realizado el recuento por parte de las *Asambleas*.

De acuerdo con lo anterior, los agravios del actor son **inoperantes**, toda vez que se impugnan errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en mesas directivas de casilla, los cuales fueron corregidos con motivo del recuento realizado por parte de las *Asambleas*.

3.1.3.3 Análisis de casillas en donde no hay error en el cómputo de votos.

Ahora bien, este *Tribunal* procede a analizar si se desprende alguna diferencia numérica respecto de las cantidades precisadas en los rubros fundamentales (*ciudadanos que votaron, boletas extraídas de la urna y resultado de la votación*).

Por ello, a continuación se presentan un total de ochocientas treinta y siete casillas en las que se desprende que no existe discrepancia entre sus rubros fundamentales:

[Se inserta tabla]

Así, de la revisión del cuadro que antecede, se puede advertir que existe coincidencia plena entre los rubros fundamentales, por lo que no puede estimarse que exista un error que justifique la causal de nulidad.

En otro orden de ideas, en las casillas 596 E2, 1852 B, 2026 B y 2065 C2 no se cuenta con las *actas finales* para llevar a cabo la administración, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de las mismas, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ellas al no existir contradicción en los documentos ni ser controvertidos por las partes.

En consecuencia, este *Tribunal* estima **infundados** los agravios de las casillas citadas.

3.1.3.4 Análisis de casillas en donde se detectó un error que pudo ser subsanado

Ahora bien, para el estudio de los planteamientos que realizan los *Actores*, este *Tribunal* tomará en cuenta todas

aquellas discrepancias que surjan de la confrontación de los datos y que puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en el *acta final*, o bien, subsanados con algún otro documento que obre en el expediente.

A efecto de ilustrar la posible existencia de los errores invocados y la manera en la que será dable subsanar los rubros fundamentales, se insertarán las tablas en las que se señalarán específicamente la manera en que se enmendarán las inconsistencias.

[Se inserta tabla]

Como se advierte del cuadro anterior, en las trescientas veinticuatro casillas señaladas, existe una inconsistencia entre alguno de los rubros fundamentales en relación con los otros dos.

Así, del análisis de las *actas finales*, es posible desprender que los rubros concurrentes coinciden con *la diferencia entre boletas recibidas y boletas sobrantes*, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla, por advertir únicamente un error al asentar u omitir el llenado de un dato en el acta respectiva, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar.

En otro orden de ideas, en la casilla 1779 C1 no se cuenta con el *acta final* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de la misma, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ella al no existir contradicción en el documento ni ser controvertidos por las partes.

[Se inserta tabla]

Por su parte, en las casillas 135 B, 167 C1, 278 C1, 363 B, 440 B, 540 B, 571 B, 611 E1C1, 628 B, 654 B, 686 B, 779 B, 805 C8, 895 E2C6, 927 B, 946 B, 1104 C1, 1542 C1, 1795 B, 1824 B, 1858 C1, 1929 C1 y 2093 B, el rubro de *ciudadanos que votaron no se asentó dato alguno o resulta distinto de las*

SUP-JRC-317/2016

boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación, los cuáles son idénticos.

No obstante, de las personas que votaron conforme al listado nominal que obra en el expediente, y al coincidir con los otros rubros, no se actualiza la causal de nulidad de las casillas en estudio, por haberse subsanado el error.

[Se inserta tabla]

De lo anterior, se observa que en las casillas 202 C1, 220 B, 275 C1, 343 B, 462 B, 492 C1, 496 B, 508 E2, 649 C1, 880 C2, 1347 B, 1353 E1, 1510 C3, 1523 B, 1649 B, 1727 B, 1936 C2 y 2109 B, tienen una inconsistencia en el resultado de la votación en relación con ciudadanos que votaron y boletas extraídas de la urna, los cuales coinciden.

Sin embargo, no puede actualizarse la irregularidad invocada por el actor, en virtud de que se omitió asentar la cantidad de la votación o se llevó a cabo de manera errónea la suma de la cantidad de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes.

En consecuencia, al realizar correctamente la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla, se desprende que coincide con los rubros *ciudadanos que votaron y boletas extraídas de la urna*, mismos que en un principio concuerdan, por lo que no pone en duda el principio de certeza de los resultados citados.

3.1.3.5 Análisis de casillas con errores no determinantes

Ahora bien, en cuanto a las casillas señaladas en este apartado, se obtiene que no se pudo subsanar el error con algún rubro auxiliar; no obstante, los mismos no resulta determinante para actualizar la causal de nulidad invocada por el actor.

[Se inserta tabla]

Como se advierte del cuadro anterior, en las cuatrocientas noventa y tres casillas señaladas, los datos asentados en por lo menos uno de los tres rubros, son distintos.

Por lo tanto, la diferencia de las cantidades de *ciudadanos que votaron, boletas extraídas de la urna y resultado de la votación* resulta menor a la diferencia entre los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primer y segundo lugar de la votación en cada caso, de manera que no es determinante para las votaciones recibidas en las casillas en estudio.

[Se inserta tabla]

Así, de las cuarenta y cinco casillas descritas, no puede estimarse la existencia de un error. Ello, toda vez que si bien hay una omisión en alguno de los rubros fundamentales, la diferencia de los datos asentados es menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, por lo que no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad de las casillas, es decir, no se actualiza la determinancia cuantitativa descrita en el marco normativa.

A mayor abundamiento, en lo relativo al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado un rubro en el *acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

Ello, acorde a lo señalado en la jurisprudencia 8/97, de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**⁴²

⁴² Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 1a 24.

[Se inserta tabla]

SUP-JRC-317/2016

Por lo que hace a las casillas 22 C1, 161 C1, 322 B, 353 B, 428 B, 541 E1C2, 610 C2, 661 C3, 669 C1, 754 C1, 782 B, 854 B, 862 B, 894 C1, 1090 B, 1339 B, 1511 B, 1556 C1, 1576 B, 1934 C1, 2010 C1 y 2061 B, en las cuales se observa que existe un error en los *ciudadanos que votaron*, de manera que, al comparar con el listado nominal, se desprende el número de personas que emitieron el sufragio en la casilla.

Así, al comparar el rubro subsanado con las *boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación* arrojan una diferencia menor a la del primer y segundo lugar. De ahí que no se actualiza la causal de nulidad invocada, conservando la validez de la votación recibida.

[Se inserta tabla]

Lo mismo sucede respecto de las cuarenta y tres casillas descritas, en las que existe un error u omisión en el *resultado de la votación*, por lo que al realizar de manera correcta la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, y compararlo con los *ciudadanos que votaron* y las *boletas extraídas de la urna*, arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar. De ahí que no se pone en duda el principio de certeza de los resultados citados.

Asimismo, en lo relativo al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado el rubro de *resultado de la votación* en el *acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

Ello, acorde a lo señalado en la jurisprudencia 8/97, de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**⁴³

⁴³ Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 a 24.

[Se inserta tabla]

Por lo que hace a las noventa y dos casillas suscritas, puede advertirse que existe un error al no asentar el total de *ciudadanos que votaron y las boletas extraídas de la urna*. Sin embargo, para subsanar a los ciudadanos que votaron se utilizó el listado nominal, mismo que al confrontar con el *resultado de la votación* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar, por lo que no se acredita la determinancia en la causal de nulidad; de manera tal que no existe duda y por tanto, no vulnera el principio de certeza de la votación.

Asimismo, en lo relativo al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado los rubros de *ciudadanos que votaron y boletas extraídas de la urna en el acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

Ello, acorde a lo señalado en la jurisprudencia 8/97, de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**⁴⁴

⁴⁴ Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 a 24.

[Se inserta tabla]

Por su parte, en las casillas 59 E1C3, 532 C1, 875 B, 1097 B, 1358 C1, 1485 B, 1732 C2, 1772 C7, 1832 C1 y 1902 B, no se asentó en las actas de escrutinio y cómputo los totales de las *boletas extraídas de la urna*, así como el *resultado de la votación*. No obstante, para subsanar al *resultado de la votación* se realizó de la suma de los votos, mismo que al confrontarla con los *ciudadanos que votaron* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar, por lo que tales discrepancias no

SUP-JRC-317/2016

trascienden por no ser determinantes y no pueden ser motivo para declarar la nulidad de la votación de dichas casillas.

Asimismo, las casillas 408 B y 1769 C1, se omitió señalar los *ciudadanos que votaron* y el *resultado de la votación*; por lo que se procedió a su subsanar al *resultado de la votación* realizando la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, mismo que al confrontarla con los *ciudadanos que votaron* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar. De ahí que no se pone en duda el principio de certeza de los resultados citados.

En lo relativo al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado los rubros fundamentales en el *acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

Ello, acorde a lo señalado en la jurisprudencia 8/97, de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**⁴⁵

⁴⁵ Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 a 24.

[Se inserta tabla]

Tratándose de las casillas 553 C1, 554 C1, 740 C1, 863 B, 1021 C1, 1279 C2, 1367 B, 1379 C1, 1461 B, 1754 C2, 1829 C1, 1886 C1 y 2034 B, en las que el actor alude la existencia de errores, se puede apreciar que en alguno de los rubros fundamentales cuenta con una inconsistencia significativa. No obstante, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en vez de asentar la cantidad correcta del rubro, se reflejó la de las boletas recibidas, por lo que no debe estimarse dicho dato que representa a otro rubro auxiliar.

En consecuencia, al comparar los rubros fundamentales restantes arrojan una diferencia que es menor a la de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primer y segundo lugar de la votación en cada caso, de manera que el error no resulta determinante y, en consecuencia, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio.

En otro orden de ideas, en la casilla 1829 C1 no se cuenta con el *acta final* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de la misma, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ella al no existir contradicción en el documento ni ser controvertidos por las partes.

[Se inserta tabla]

Ahora bien, derivado del análisis de las casillas 56 C1, 92 B, 297 B, 520 B, 563 E1, 849 E2C1, 932 B, 1457 B, 1508 C1, 1549 C1, 1582 B, 1830 C1, 1862 B, 1904 B, 1916 C12, 1945 E1C2, 1978 B y 2138 B, se advierte que no se asentó dato o resulta distinto en los rubros de ciudadanos que votaron y *resultado de la votación*. No obstante, para subsanar a el *resultado de la votación* se realizó de manera correcta la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, mientras que para corregir a los *ciudadanos que votaron* se utilizó el listado nominal.

En efecto, al comparar los datos subsanados resulta evidente que la diferencia entre ellos es menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, por lo que el error no resulta determinante para acreditar la causal en estudio.

En otro orden de ideas, en las casillas 563 E1 y 1830 C1 no se cuenta con las *actas finales* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de las mismas, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ellas al no existir contradicción en los documentos ni ser controvertidos por las partes.

SUP-JRC-317/2016

[Se inserta tabla]

Como se advierte del cuadro anterior, en las casillas 146 C1, 297 C4, 321 C1, 331 B, 348 B, 368 C2, 369 C2, 369 C3, 399 B, 586 C1, 882 E1C1, 884 C3, 895 E2C3, 944 C2, 1001 B, 1184 B, 1499 B, 1531 B, 1578 C3, 1653 B, 1700 C1, 1722 B, 1817 B, 1879 C2, 1916 C8, 1932 B y 1973 B, no se asentó la cantidad de los tres rubros fundamentales. Sin embargo, para subsanar el *resultado de la votación* se realizó de manera correcta la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, mientras que para corregir a los *ciudadanos que votaron* se utilizó el listado nominal.

Así, al comparar los datos subsanados resulta evidente que la diferencia entre ellos es menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla.

Por su parte, en relación al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado el rubro de *boletas extraídas de la urna en el acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

Ello, acorde a lo señalado en la jurisprudencia 8/97, de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.**⁴⁶

⁴⁶ Jurisprudencia 8/97. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, páginas 22 a 24.

En otro orden de ideas, en la casilla 895 E2C3 no se cuenta con el *acta final* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de la misma, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ella al no existir contradicción en el documento ni ser controvertidos por las partes.

[Se inserta tabla]

De la casilla 13 B, si bien se advierte una diferencia en los *ciudadanos que votaron*, es evidente que no votaron cuatrocientos tres personas; ello, debido a que al cotejar con la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (doscientos cincuenta y seis), la cifra es significativamente distante de la señalada en el rubro discrepante. Así, al adminicular los dos rubros coincidentes, la disparidad entre ellos (cero) resulta menor a la diferencia de los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar (cuarenta y nueve), por lo que el error no resulta determinante para el resultado de la votación y, por tanto, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio.

En la casilla 25 B se advierte que existe un error en los *ciudadanos que votaron*, esto al ser evidente que no votaron tres ciudadanos, debido a que son idénticos las *boletas extraídas de la urna con el resultado de la votación* (trescientos noventa y cuatro), además de ser semejante a la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (cuatrocientos). En ese sentido, resulta menor la diferencia entre los rubros coincidentes (cero) a la diferencia de los votos obtenidos por el primer y segundo lugar (ciento sesenta y uno).

De la casilla 59 E1 se aprecia que en el rubro de *boletas extraídas de la urna* cuenta con una discrepancia significativa. No obstante, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en vez de asentar la cantidad correcta del rubro, se reflejó la de las boletas recibidas (seiscientos ochenta y uno), por lo que no debe estimarse tal dato. Además, existe la omisión del *resultado de la votación*, mismo que se subsanó al realizar la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla (trescientos setenta y nueve). En consecuencia, al comparar los *ciudadanos que votaron* (trescientos ochenta y tres) y al realizar la sumatoria del *resultado de la votación* (trescientos setenta y nueve) arroja una diferencia (cuatro) que es menor a la de los votos obtenidos por el primer y segundo lugar (cincuenta y seis), por lo que no pone en duda el principio de creteza de los resultandos citados; esto, por no ser determinantes.

SUP-JRC-317/2016

De la casilla 59 E1C5 se advierte que existe un error en el *resultado de la votación* (trescientos dos), ya que al realizar la sumatoria de votos arroja trescientos sesenta y dos. Además, existe una omisión por parte de los funcionarios al asentar los *ciudadanos que votaron*, misma que se subsanó al realizar una revisión del listado nominal, el cual arrojó un total de trescientos cincuenta y nueve personas que emitieron su sufragio en dicha casilla. En consecuencia, al comparar los *ciudadanos que votaron* (trescientos sesenta y dos) y el *resultado de la votación* (trescientos cincuenta y nueve), arroja una diferencia (tres) que es menor a la de los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar (cincuenta y nueve); por lo que el error no resulta determinante para la votación y, por tanto, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio.

De la casilla 91 B se advierte que en el rubro de *ciudadanos que votaron* se asentó la cantidad de boletas recibidas (ciento treinta y nueve), por lo que al revisar el listado nominal se desprende que votaron setenta y ocho personas, dato que al adminicularlo con el *resultado de la votación* (setenta y ocho) arroja un diferencia de cero. Tal cantidad resulta menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar de votación en la casilla (dieciocho), de manera que no actualiza el segundo elemento de la causal en estudio.

De la casilla 188 B, si bien se observa en las *boletas extraídas de la urna* se asentó cero, los *ciudadanos que votaron* y el *resultado de la votación* coinciden (doscientos noventa y tres); por lo que es evidente que fueron extraídas de la urna una cantidad de votos mayor a cero. Así, al no existir diferencia entre los rubros coincidentes y contar con una disparidad entre el primer y segundo lugar de sesenta y uno, no se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor.

De la casilla 324 B se desprende que extrajeron trece boletas de la urna, dato que resulta evidentemente erróneo; asimismo, se observa que no se asentó cantidad en el rubro de *ciudadanos que votaron*, por lo que se realizó la revisión del listado nominal, el cual nos arroja que votaron ciento noventa personas. En esa tesitura, al cotejar con el *resultado de la votación* (ciento ochenta y cinco) resulta una desigualdad (cinco) menor a la de los votos obtenidos por los candidatos

que ocupan el primer y segundo lugar (ocho), por lo que el error no resulta determinante para la votación en la casilla.

De la casilla 342 B se aprecia que en el rubro de *ciudadanos que votaron* se asentó la cantidad de las boletas recibidas (quinientas treinta y tres). Tal inconsistencia fue corregida con el recuento del listado nominal que obra en el expediente (doscientos treinta y nueve). Asimismo, se omitió indicar la cantidad del resultado de la votación, mismo que se subsanó con la sumatoria de los votos, la cual fue de doscientos cuarenta y cinco. En consecuencia, al comparar los dos rubros fundamentales subsanados con las *boletas extraídas de la urna* (doscientos cuarenta y cinco) arroja una diferencia de cinco y, por tanto, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio, al ser menor que la diferencia entre el primer y segundo lugar (setenta y cuatro).

De la casilla 368 B, en el rubro de *ciudadanos que votaron* se advierte una cantidad significativamente mayor a la de los otros dos rubros fundamentales debido a una sumatoria mal realizada (ochenta y dos más cero es igual a seiscientos siete). A continuación, se realizó la revisión del listado nominal, el cual nos arroja que votaron ochenta y dos personas, rubro que al adminicular con los dos rubros restantes, nos arroja una diferencia de siete, siendo menor a la de los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar, por lo que el error no resulta determinante para el resultado de la votación.

En la casilla 373 C2 se aprecia que en el rubro de *boletas extraídas de la urna* se asentó la cantidad de las boletas sobrantes (seiscientos treinta y ocho), por lo que no debe estimarse tal dato. Así, al comparar los *ciudadanos que votaron* (noventa y cuatro) con el *resultado de la votación* (ochenta y nueve), se desprende que la diferencia (cinco) es menor a la del primer y segundo lugar (cincuenta).

En la casilla 375 B se desprende que en los *ciudadanos que votaron* se asentó la cantidad de las boletas recibidas en las casillas, misma que fue corregida con el listado nominal (setenta y tres). Asimismo, se observa que se omitió identificar el *resultado de la votación*, mismo que fue subsanado al realizar la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio por

SUP-JRC-317/2016

parte de los funcionarios de casilla (setenta y tres). En consecuencia, al no existir diferencia entre los rubros fundamentales y contar con una disparidad entre el primer y segundo lugar de veintidós, no se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor.

De la casilla 500 B se aprecia que en los rubros de *ciudadanos que votaron* y *boletas extraídas de la urna* cuentan con una discrepancia significativa. No obstante, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en vez de asentar la cantidad correcta del rubro, se reflejó la de las boletas recibidas (cuatrocientas diez), por lo que no deben estimarse los datos. Así, de la revisión del listado nominal se observa que votaron doscientos treinta y siete ciudadanos, misma que al adminicular con el *resultado de la votación* (doscientos cuarenta y ocho) y el rubro auxiliar de la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (doscientos treinta y ocho), arroja una diferencia de once. Por tanto, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar (noventa), de manera que el error no resulta determinante para la votación de la casilla.

De la casilla 513 B se advierte una omisión en los *ciudadanos que votaron* y el *resultado de la votación*, tales inconsistencias fueron subsanadas con el recuento del listado nominal que obra en el expediente (doscientos setenta y cuatro) y la sumatoria de los votos (doscientos setenta y uno). En consecuencia, al comparar los rubros fundamentales subsanados con las *boletas extraídas de la urna* (doscientos setenta y uno), arroja una diferencia de tres y, por tanto, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio, al ser menor que la diferencia entre el primer y segundo lugar (ochenta y cinco).

De la casilla 514 B se desprende que en los rubros de *ciudadanos que votaron* y *boletas extraídas de la urna* cuentan con una inconsistencia significativa. Sin embargo, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en vez de asentar la cantidad correcta del rubro, se reflejó la de las boletas recibidas (quinientas ochenta y dos), por lo que no debe estimarse los datos. En ese sentido, al revisar el listado nominal se observa que votaron doscientos noventa y un ciudadanos, misma que al compararla con el *resultado de la votación* (doscientos noventa y dos) y el rubro auxiliar de la diferencia

entre boletas recibidas y sobrantes (doscientos noventa y dos), arroja una diferencia de uno, resultando menor a la diferencia entre los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar (ochenta y siete).

De la casilla 539 C3, si bien se advierte un error en las *boletas extraídas de la urna*, es evidente que no sacaron seiscientos siete boletas, debido a que resulta mayor la cantidad que las boletas recibidas por la casilla (seiscientos seis), por lo que no debe de tomarse en cuenta el dato. Así, al comparar la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes (doscientos treinta y seis), *ciudadanos que votaron* (doscientos treinta y siete) y *el resultado de la votación* (doscientos treinta y seis), obtenemos un total de uno, el cual es significativamente distante a la diferencia de los votos obtenidos por los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar (sesenta y dos).

En la casilla 604 C1 se advierte que los rubros *ciudadanos que votaron* y *boletas extraídas de la urna* se encuentran sin dato. Sin embargo, del acta final de escrutinio y cómputo se desprende que la operación aritmética del primer rubro no se realizó, la cual, una vez elaborada la sumatoria, arroja una cantidad (trescientos veintiocho) que coincide con el *resultado de la votación* (trescientos veintiocho) así como con la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (trescientos veintiocho). Lo anterior denota que no existe discrepancia entre los rubros, por lo que no se actualiza la causal de nulidad en estudio.

De la casilla 852 E1C5 se advierte que en el rubro de *ciudadanos que votaron* fueron omisos en realizar la suma correspondiente; sin embargo, al realizar la misma, la cantidad coincide con el *resultado de la votación* así como a la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (doscientos setenta y siete), por lo que al no contar con diferencias entre los rubros, no se actualiza la causal de nulidad por error y dolo en la casilla.

En la casilla 875 C1 es evidente que del rubro *ciudadanos que votaron* existe un error al asentar una cantidad (cinco) significativamente menor a las *boletas extraídas de la urna* y al *resultado de la votación* (trescientos trece ambos); por lo que, al analizar únicamente los rubros coincidentes, se estima que no puede actualizarse la causal de nulidad en estudio, en virtud de

SUP-JRC-317/2016

que no existe una diferencia numérica, frente a la diferencia entre primer y segundo lugar (ochenta y nueve).

De la casilla 882 C1 se advierte que existe un error en los *ciudadanos que votaron* (setecientos treinta y cinco), esto, al ser evidente una cantidad significativamente mayor al *resultado de la votación* y al total de *boletas extraídas de la urna* (doscientos setenta y nueve ambas), y relativamente menor a las boletas recibidas en la casilla (setecientos cincuenta y siete). Así, al analizar únicamente los rubros coincidentes y no contar con diferencia alguna, no puede actualizarse la causal de nulidad por error y dolo en la casilla, ello, toda vez que no se acredita el segundo elemento.

En la casilla 968 B es evidente que del rubro *ciudadanos que votaron* se desprende un error pues se asentaron las boletas recibidas en la casilla (setecientos ocho), por lo que no debe tomarse en cuenta tal dato. Asimismo, al no indicar el *resultado de la votación*, se procedió a realizar la sumatoria de los votos, la cual arrojó una cantidad de trescientos cincuenta. Por tanto, al comparar dicha cantidad con las *boletas extraídas de la urna* y la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes de la casilla, resultan idénticas, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida, por advertir únicamente un error al asentar u omitir un dato, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar.

En la casilla 1001 C3 es evidente que del rubro *ciudadanos que votaron* existe un error al asentar una cantidad (cinco) significativamente menor a las *boletas extraídas de la urna* y al resultado de la votación (trescientos cuarenta y uno ambos); por lo que, al analizar únicamente los rubros coincidentes, se estima que no puede actualizarse la causal de nulidad en estudio, en virtud de que no existe una diferencia numérica frente a la diferencia entre primer y segundo lugar (veinte).

De la casilla 1020 B se desprende que en el rubro *ciudadanos que votaron* asentaron las boletas recibidas en la casilla (quinientas cuarenta y cinco), por lo que no debe tomarse en cuenta tal dato. Asimismo, al no indicar el *resultado de la votación*, se procedió a realizar la sumatoria de los votos, la cual arrojó una cantidad de doscientos treinta y nueve. Por tanto, al comparar dicha cantidad con las *boletas extraídas de*

la urna y la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes de la casilla, resultan idénticas, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida, por advertir únicamente un error al asentar u omitir un dato, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar.

De la casilla 1532 B se desprende que no fueron capturados los rubros *ciudadanos que votaron* y *boletas extraídas de la urna*; sin embargo, el listado nominal arroja la cantidad de sesenta y cinco, la cual es coincidente con la sumatoria de los votos (sesenta y cinco), y estos a su vez concuerdan con la diferencia que se obtiene entre las boletas recibidas en casilla y boletas sobrantes; por lo cual no se puede actualizar la causal de nulidad por error y dolo en la casilla.

De la casilla 1534 B se advierte un error en la captura del total de *boletas extraídas de la urna* (cuatrocientos trece) ya que la cifra es superior al número de boletas recibidas en casilla (trescientos once); por lo cual, al comparar las cifras de los *ciudadanos que votaron* (ciento nueve) y resultado de la votación (ciento ocho), obtenemos una diferencia (uno) menor a la existente entre el primer y segundo lugar (diecisiete), por lo cual no es determinante para acreditar la causal en estudio.

En la casilla 1560 C1 es evidente que existe un error en el rubro *boletas extraídas de la urna* (ochocientas setenta y cinco), ello es así, toda vez que es una cantidad que supera al número de boletas recibidas en la casilla (seiscientas noventa y cuatro). Así, al cotejar los rubros de *ciudadanos que votaron* (doscientos cuarenta) y *resultado de la votación* (doscientos cincuenta y uno), se obtiene una diferencia de once, y esta cantidad, al ser menor que la diferencia entre primer y segundo lugar (dieciséis), no resulta determinante para la causal de error y dolo en la casilla.

De la casilla 1746 S1 se desprende que el rubro *ciudadanos que votaron* (cinco) cuenta con un error evidente, esto en virtud de que la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes en la casilla es de setecientos sesenta. Es por lo anterior que únicamente se tomaron en cuenta los rubros de *boletas sacadas de la urna* (setecientas cincuenta y nueve) y *resultado de la votación* (setecientos cincuenta y ocho), mismos que arrojan una diferencia de uno, siendo menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar (ciento sesenta y nueve), por lo

SUP-JRC-317/2016

que no se actualiza el segundo elemento de la causal en estudio.

De la casilla 1826 C3 se percibe que existe un error evidente en los *ciudadanos que votaron* (siete). Así, para corregir tal inconsistencia se recontó el listado nominal que obra en el expediente, el cual desprende que doscientas cincuenta y tres personas votaron en esa casilla, cantidad que al compararla con el *resultado de la votación* (doscientos cincuenta y ocho), arroja una diferencia de cinco, por lo que no resulta determinante al ser menor que la diferencia entre el primer y segundo lugar (ocho). En la casilla 1916 C9 se advierte que se omitió asentar los datos correspondientes a las *boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación*. Así, para subsanar el último rubro se procedió a recontar los votos que se encuentran en el acta de escrutinio y cómputo, arrojando un total de doscientos veinte. Además, existe un error en los *ciudadanos que votaron*, por lo que se utilizó el listado nominal para subsanar el rubro, del cual se desprende que doscientas catorce personas votaron en la casilla.

En consecuencia, al comparar los rubros subsanados se arroja una diferencia de seis, siendo menor a la existente entre el primer y segundo lugar (diez). Por lo tanto, los errores existentes en la casilla en mención, no resultan determinantes.

En la casilla 1945 E1C3 se advierte que se asentó erróneamente la cantidad de boletas recibidas en el rubro de *ciudadanos que votaron* (seiscientos setenta). Además, se omitió asentar la cantidad correspondiente al *resultado de la votación*, mismo que se subsanó realizando la sumatoria de los votos (doscientos nueve). Por tanto, al comparar dicha cantidad con las *boletas extraídas de la urna* y la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes de la casilla, resultan idénticas, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida, por advertir únicamente un error al asentar u omitir un dato, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar.

En la casilla 1948 B es evidente que existe un error en el rubro *ciudadanos que votaron* (cuatrocientos noventa), ello es así, toda vez que es una cantidad que supera al número de boletas recibidas en la casilla (cuatrocientas setenta). Así, del acta de escrutinio y cómputo se desprende que la suma se realizó incorrectamente (doscientos ocho mas cero igual a

cuatrocientos noventa), por lo que se advierte que es el primer dato el correcto; mismo que al compararlo con las *boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación*, arroja una diferencia de uno, siendo menor a la existente entre el primer y segundo lugar (veintinueve); de manera que no resulta determinante las inconsistencias suscitadas.

De la casilla 1986 B se desprende que se asentó erróneamente la cantidad de boletas recibidas en el rubro de *boletas extraídas de la urna* (cuatrocientas cuarenta y tres). Además, se omitió asentar la cantidad correspondiente al *resultado de la votación*, mismo que se subsanó realizando la sumatoria de los votos (ciento sesenta y tres). Es por lo anterior que considerando los rubros *ciudadanos que votaron* (ciento sesenta y uno) y *resultado de la votación* (ciento sesenta y tres), se obtiene una diferencia de dos, la cual resulta menor a la diferencia entre primer y segundo lugar (cuatro), de manera que no se actualiza la causal en estudio.

De la casilla 2082 C1 se observa que en los *ciudadanos que votaron* se asentó cero, mismo que no debe tomarse en cuenta, en virtud de que es evidente que si existió votación. Además, se omitió indicar la cantidad del *resultado de la votación*, mismo que se subsanó al realizar la sumatoria de los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo (ciento sesenta y cinco). Así, al confrontar la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes (ciento setenta), con las *boletas extraídas de la urna* (ciento setenta) y el *resultado de la votación* (ciento sesenta y cinco), resulta una discrepancia de cinco, la cual es menor a la existente entre el primer y segundo lugar (veintiséis), por lo que no se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor.

En la casilla 2083 B se desprende que en las se asentó la cantidad de las boletas recibidas en las casillas, misma que fue corregida con el listado nominal (setenta y tres). Asimismo, se observa que se omitió identificar el *resultado de la votación*, mismo que fue subsanado al realizar la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla (setenta y tres). En consecuencia, al no existir diferencia entre los rubros fundamentales y contar con una disparidad entre el primer y segundo lugar de veintidós, no se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor.

SUP-JRC-317/2016

En la casilla 2129 B se advierte que se asentó erróneamente la cantidad de boletas recibidas en el rubro de *ciudadanos que votaron* (cuatrocientos ochenta y tres). Además, se omitió asentar la cantidad correspondiente al *resultado de la votación*, mismo que se subsanó realizando la sumatoria de los votos (doscientos). Por tanto, al comparar dicha cantidad con las *boletas extraídas de la urna* y la diferencia entre las boletas recibidas y sobrantes de la casilla, resultan idénticas, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida, por advertir únicamente un error al asentar u omitir un dato, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar.

3.1.3.6 Análisis de casillas con errores determinantes

Ahora bien, de la revisión de la documentación electoral que obra en el expediente, se advierten diferencias entre los rubros fundamentales de las casillas que se presentan a continuación.

[Se inserta tabla]

Así, al analizar los rubros fundamentales se desprende la existencia de errores en el cómputo de los votos, resultando graves al grado de ser determinantes en el resultado de la votación de las casillas respectivas.

Ello, en virtud de que se advierten irregularidades evidentes en los datos asentados u omitidos (en blanco), mismos que no se pudieron inferir de las cantidades anotadas en las demás actas o subsanados con algún otro documento que obra en el expediente.

Además, dichos errores resultan determinantes toda vez que resultan ser iguales o mayores a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos, coalición o candidato independiente que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, tal y como se observa en la tabla.

En otro orden de ideas, en la casilla 1749 C2 no se cuenta con el *acta final* para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos políticos, contando únicamente con una copia al carbón de la misma, por lo que este *Tribunal* tomó por ciertos los datos asentados en ella al no existir

contradicción en el documento ni ser controvertidos por las partes.

Por lo expuesto con anterioridad, los agravios del actor son **parcialmente fundados**, pues en un total de sesenta y cinco casillas, resulta procedente declarar su nulidad, siendo estas: 59 C1, 192 C4, 204 B, 241 C1, 355 B, 356 B, 369 B, 383 B, 564 C2, 585 B, 668 B, 871 B, 882 E2, 999 B, 1092 C1, 1105 B, 1197 B, 1281 C1, 1296 C4, 1298 B, 1308 C1, 1346 C1, 1360 B, 1461 C1, 1490 B, 1496 B, 1501 B, 1513 B, 1576 C1, 1587 B, 1635 B, 1675 C1, 1749 C1, 1749 C2, 1779 B, 1825 C1, 1832 B, 1838 C1, 1860 C1, 1861 B, 1866 B, 1877 B, 1898 B, 1916 C2, 1916 C6, 1916 C10, 1933 C1, 1945 E1C5, 1945 E1C6, 1955 B, 1970 B, 1991 B, 2000 C1, 2030 B, 2040 B, 2054 C2, 2055 C3, 2056 C2, 2057 B, 2060 C1, 2075 B, 2089 C1, 2104 C1, 2135 OC1 y 2137 B.

3.2 Causal genérica.

En el presente apartado, se realizará el estudio de las supuestas violaciones a los principios constitucionales aducidas por los *Actores* durante la preparación de la elección y en la etapa de resultados, así como las presuntas irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables suscitadas durante la jornada electoral, en específico en el cómputo realizado en casilla (artículo 385, numeral 1, inciso m), de la *Ley*).

3.2.1. Motivos de nulidad expuestos por los Actores

De lo vertido por los *Actores* en el medio de impugnación, se obtienen los siguientes motivos de agravio que, a su consideración, deben generar la nulidad de la elección al cargo de Gobernador del estado de Chihuahua, por actualizarse la casual prevista en el artículo 385 de la *Ley*.

El *Consejo* no acordó el número de boletas a imprimir, ni el plan de impresión, distribución y resguardo de las mismas, así como la supervisión de la propia impresión de las boletas, su traslado y resguardo. Asimismo, fue omiso en constar la formal recepción del número de boletas electorales por cada presidente de casilla, consignando el número exacto y preciso de folios. Dichas omisiones, se traducen en violaciones a los principios rectores de la materia electoral, según el actor: legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad.

SUP-JRC-317/2016

Lo anterior, porque según señala, no existe plena certeza en cuanto a la legalidad de la emisión de las boletas electorales que fueron utilizadas en la jornada electoral, así como la cantidad de boletas que fueron entregadas a cada casilla, lo que produce una generalizada incertidumbre en cuanto al número de boletas que fueron utilizadas por el electorado, además de que se hace imposible el cotejo con los resultados electorales.

Además, arguye que el hecho de que la impresión y distribución de las boletas electorales haya sido realizada por *INE*, vulnera la distribución de competencias decretada por los artículos 41 y 116 de la *Constitución Federal*.

Así también, señala que en las *Asambleas* no se efectuó el recuento en términos de los artículos 184 y 185 de la *Ley*, haciéndose solo un muestreo arbitrario, sin que el *Consejo* sepa cuantos paquetes se recontaron, ni tenga las actas individuales por casilla de los recuentos, ya que además no les fueron entregadas inmediatamente a los partidos luego del acto de recuento.

Refiere que en las *Asambleas* no se levantaron actas de escrutinio y cómputo, de tal manera que no existen, o no les fueron entregadas al final del recuento; entregándose varios días después, en medio magnético, solo un archivo de resultados por casilla.

Continúa mencionado que la ausencia de las formalidades legales aconteció en todas las casillas recontadas, las cuales superan el veinte por ciento del total de las casillas, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, como la legalidad, al no acatar las disposiciones expresas de la *Ley*; el de máxima publicidad al justificar su actuación bajo el hecho de que los partidos no se lo pidieron; y el de certeza, al no existir confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la voluntad popular.

En ese sentido, a consideración de los *Actores*, los agravios expuestos producen incertidumbre en cuanto al número de boletas impresas, las recibidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los cómputos municipales, los cuales arrojan cifras disidentes entre sí, refiriendo que la numeraria obtenida de las *actas finales* a través del Programa

de Resultados Electorales Preliminares de tres mil trecientas veintiún casillas constatadas, reflejaban:

- Un millón trescientas noventa y cuatro mil trescientas un boletas recibidas.
- Ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres votos registrados
- Un millón quinientos sesenta y cinco mil ochocientos siete boletas sobrantes

De lo anterior, según los *Actores*, se acredita una diferencia entre recibidas y sobrantes de ciento setenta y un mil quinientas seis boletas.

3.2.2 Consideraciones previas en cuanto a la causal genérica de nulidad

La *Constitución Federal* en su artículo 41, fracción VI, dispone que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, deberá existir un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y, a su vez, solventara la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.

En ese mismo sentido, refiere que en las leyes locales se establecerá un sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes las cuales deberán acreditarse de manera objetiva y material.

Atendiendo al mandato constitucional, el artículo 385, numerales 1 y 2, de la *Ley*, establece que el *Tribunal* podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada, violaciones sustanciales en la jornada electoral y se demuestre, mediante plena acreditación, que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables al promovente.

En ese sentido, el dispositivo normativo señalado presenta diversas hipótesis en su construcción: **a)** que existan violaciones sustanciales; **b)** que sean generalizadas; **c)** que acontezcan en la jornada electoral; **d)** plenamente acreditadas; **e)** que sean determinantes para el resultado de la elección; y **f)** salvo que las irregularidades sean imputables al promovente.

Al respecto, las **violaciones sustanciales** son aquellas que afectan los principios constitucionales que rigen la elección

SUP-JRC-317/2016

de los poderes públicos en un estado. Dicho de otra manera, son las acciones que violentan, entre otros:

- La emisión del voto universal, libre, secreto y directo;
- La celebración de las elecciones organizadas por organismos públicos y autónomos;
- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como rectores del proceso electoral;
- El establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;
- El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; y
- Que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas prevalezca el principio de equidad.

Debe señalarse que el artículo 116 de la *Constitución Federal*, dispone que en relación con las facultades y obligaciones de las entidades federativas, el ejercicio de la función electoral a cargo de los organismos públicos locales electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a los referidos principios, en los siguientes términos:

A la **legalidad**, como la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Por su parte, el de **imparcialidad** consiste en que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de la materia eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

En otro aspecto, la **objetividad** obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados de tal forma que eviten situaciones conflictivas sobre los actos del proceso electoral, ya sean previos a la jornada electoral, durante su desarrollo o en las etapas posteriores a la misma.

A su vez, el postulado de **certeza** consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los

participantes en el proceso electoral conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a que se encuentra sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales.

En relación con lo anterior, al de **independencia** se debe entender como la garantía y atributos de que disponen a las autoridades electorales que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

Por último, el de **máxima publicidad**, el cual implica que todos los actos y la información en poder de la autoridad electoral son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias.

Ahora bien, por lo que respecta a que las violaciones sean **generalizadas**, se ha entendido que estas no deben de tratarse de irregularidades aisladas, sino que tengan una repercusión de mayor amplitud en el ámbito que abarca la elección respectiva. Esto es, que no se constriña a un evento focalizado, sino que realmente incidan en un espacio y tiempo dentro de la jornada electoral o su preparación.

La naturaleza de la disposición radica esencialmente en que las violaciones generen una merma importante en los elementos sustanciales de la elección, que produzcan la aseveración de que no se cumplieron con los señalados elementos y, por tanto, exista un vicio que genere la nulidad.

En relación a que acontezcan dentro de la **jornada electoral**, pudiera entenderse que la norma se constriña a esa sola etapa del proceso; sin embargo, la Sala Superior ha determinado que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

Esto es, los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo previo a la celebración de la elección, así como los que se realizan ese día, y que originen efectos en contra de los principios fundamentales de la materia electoral, son susceptibles de ventilarse por esta causal, pues se ha

SUP-JRC-317/2016

establecido que el proceso electoral está compuesto de diversas etapas, concatenadas entre sí, todas ellas destinadas a lograr una finalidad: garantizar o asegurar el ejercicio del voto en sus vertientes pasiva y activa.

En cuanto a la plenitud en la **acreditación**, se ha dicho que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante el allegar un caudal probatorio suficiente e idóneo para crear una convicción sustentable.

Por lo que hace a la determinancia, la *Sala Superior*⁴⁷ ha postulado que para establecer si se actualiza tal carácter se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han transgredido uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió. Esto es, la determinancia reviste dos aspectos trascendentales y vinculados entre sí, que proveen al juzgador de parámetros para dilucidar la afectación generada: el cualitativo y el cuantitativo.

47 Jurisprudencia 39/2002, de rubro NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO, en Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, p. 469

Lo cualitativo de una violación determinante, radica en la valoración de los rasgos o características propias de la irregularidad, de lo cual deriva la medida de la gravedad de dicha conducta, siempre atendiendo a la conculcación de elementos sustanciales, como son los principios rectores de la materia electoral o a las directrices democráticas del estado.

Por otro lado, el aspecto cuantitativo no radica en una valoración subjetiva, sino que encuentra una medida cierta y calculable entre las irregularidades suscitadas y las violaciones sustanciales, y si estas irregularidades definieron el resultado de la votación o de la elección.

Dicho lo anterior, se puede concluir que lo que se busca con la previsión de esta causal en el sistema de nulidades

electorales, es salvaguardar los mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, bajo el irrestricto respeto a los principios postulados por la *Constitución Federal* y el sistema legal que de ella emana, pues son valores inmutables que garantizan la existencia de una sociedad, producto de la experiencia histórica de nuestra nación, por lo que no podemos entenderlas solo como mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que revisten normas impero-atributivas del derecho positivo.

Así, debe considerarse que la celebración de las elecciones, a través de los órganos electorales autónomos delineados para tal función, y los mecanismos de participación plasmados en el sistema legal, contribuyen a la configuración de la representación política y salvaguardan el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos, presumiendo la validez de las actuaciones institucionales; sin embargo, en aras de solventar cualquier irregularidad que pudiera suscitarse, el constituyente estableció una serie de supuestos de gravedad máxima para aquellos eventos en que no se alcanza el mínimo de condiciones que el interés público exige, y que por ello, devienen inválidos luego de que la sanción máxima los nulifica, siempre en forma excepcional.

Analizado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de cada uno de los motivos de agravio relacionados por los *Actores* que, a su consideración, sustentan la nulidad de la elección por esta causal, atendiendo al marco normativo que resguarda cada actividad, los hechos acreditados, las pruebas allegadas por las partes y por este *Tribunal*, así como las conclusiones pertinentes, para en su momento, y de ser el caso, determinar la procedencia o no de la nulidad invocada.

Cabe precisar que, toda vez que los impugnantes, de forma general, se quejan de la vulneración que realizó el *IEE* a los principios rectores en la materia, este *Tribunal* para mayor análisis y desentrañamiento de los supuestos hechos valer por los inconformes, realizará el análisis por separado de cada una de las omisiones que supuestamente cometió el *IEE* y por las cuales se originó la causal abstracta.

Para ello, se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes del presente juicio, así como las documentales

SUP-JRC-317/2016

públicas que fueron aportadas por el *IEE*, las Asambleas y el *INE*.

Así, de conformidad con el artículo 323 de la Ley, la valoración de cada una de las pruebas y documentales que obran en el expediente, será atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, previéndose que las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio, salvo prueba a contrario; asimismo, que las documentales privadas e instrumental de actuaciones solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, los demás elementos que obran en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen la convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

3.2.3 Marco competencial y acreditación de hechos

Luego de la reforma a la *Constitución Federal* en materia electoral,⁴⁸ el panorama competencial entre los organismos electorales de la federación sufrió modificaciones trascendentales, las cuales incidieron en la forma en la que se habían desarrollado los procesos electorales en la última década.

48 Decreto de reforma por el cual se adicionan, modifican y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis.

En ese sentido, el Poder Constituyente optó por crear un esquema de colaboración entre los entes electorales del país - federales y estatales - que privilegiara la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, sustentándose bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Para tal efecto, se dispuso en el artículo 41, base V, de la *Constitución Federal*, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del *INE* y de los organismos públicos locales.

En ese tenor, se postuló que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales quienes ejercerán, entre otras funciones, lo relativo a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos, declaraciones de validez y

el otorgamiento de constancias; y cómputos de la elección del titular del poder Ejecutivo.

Por otro lado, en el apartado B de ese mismo dispositivo, se estableció que el *INE* tendría injerencia dentro de los procesos electorales locales en relación a la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; y las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Además, el legislador previó que el *INE* en caso de considerarlo pertinente, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de su Consejo General, podría asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales o, en su caso, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Acorde con el marco de esta distribución competencial, en el artículo 116, fracción IV, de la *Constitución Federal*, se estableció que en las constituciones y leyes de los estados, en materia electoral, se debe garantizar que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que en el ejercicio de la función electoral que realicen los entes electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

En esa tesitura, dentro del ordenamiento estatal chihuahuense, el artículo

36 de la *Constitución Local*, determina que la organización, dirección y vigilancia de las elecciones estará a cargo de un organismo público denominado *IEE*, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

SUP-JRC-317/2016

Sobre esa base, el legislador local postuló en el artículo 48 de la Ley, que los fines del *IEE*, entre otros, corresponderían a contribuir al desarrollo de la vida democrática del estado; preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos nacional y local; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones ordinarias y extraordinarias para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como miembros de los ayuntamientos y síndicos; y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Al respecto, el artículo 52 de la Ley, dispone que para el cumplimiento de sus fines, el *Consejo* será el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, reiterando la salvaguarda de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, señalados en el artículo 116 de la *Constitución Federal*.

A su vez, y para conjugar con las disposiciones contenidas en la *Constitución Federal*, en el artículo 64 de la Ley, se enumeraron las atribuciones con las que el *Consejo* garantizaría el cumplimiento de su naturaleza, siendo algunas de ellas: el aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el *INE*; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral en los procesos electorales estatales; imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el *INE* y proporcionarlos a los demás organismos electorales conforme al plan de impresión y distribución de documentación electoral; aprobar el proyecto del número de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales a instalar en cada municipio; y efectuar el cómputo estatal de la elección de Gobernador; y expedir la constancia de mayoría al candidato que haya obtenido la mayoría de votos y declarar la validez de su elección.

De conformidad con el artículo 65, numeral 1, incisos a), k) y p) de la Ley, el Consejero Presidente del *IEE* estará a cargo de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General del *INE* y los del *Consejo*; vigilar la entrega a las asambleas municipales de la documentación aprobada, útiles y demás

elementos necesarios para el desempeño de sus funciones; y celebrar con el *INE* convenio para que aquél asuma la organización de procesos electorales locales, así como los convenios de colaboración en materia electoral y cuanto acto jurídico sea necesario para que se ejerzan las facultades de asunción y atracción, así como cualquier otro tipo de convenio necesario para el cumplimiento de los fines del *IEE*.

Por su parte, el artículo 77 de la Ley, prevé a las asambleas municipales como órganos auxiliares del *IEE* y del Consejo, las cuales son las encargadas de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en los municipios y efectuar los cómputos municipales de las elecciones, los distritales que correspondan y, en su caso, los recuentos totales o parciales.

Siguiendo con la cadena competencial, los artículos 84 y 88 de la Ley, refieren como otra autoridad electoral a las mesas directivas de casilla, las cuales las define como los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas ubicadas en las secciones electorales en que se divide el estado de Chihuahua; estableciéndose que el presidente de la mesa directiva de casilla será el encargado de recibir de las asambleas municipales, con firma de constancia, la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la entrega del expediente electoral a la misma autoridad.

Por su parte, el arábigo 89 de la Ley, atribuye al secretario de la mesa directiva de casilla la facultad de contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación, y en su momento inutilizar las boletas sobrantes y resguardarlas en sobre especial para ello, además de anotar en su exterior el número de boletas que contiene.

Además, conforme al artículo 90 de la Ley, los escrutadores de la mesa directiva de casilla estarán facultados para contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas

SUP-JRC-317/2016

asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho.

En atención a lo anterior, se advierte que la base normativa en materia electoral contempla una clara distribución competencial entre el órgano local y el nacional, especificando las atribuciones de cada autoridad y la posibilidad de atracción por parte del *INE* en relación a las cuestiones que para aquel, sea necesario unificar criterios.

De lo señalado, deviene la necesidad de acreditar el ejercicio de las facultades otorgadas por cada norma a cada órgano, a efecto de dar claridad a las competencias adjudicadas dentro del Proceso Electoral 2015-2016 en el estado de Chihuahua; en específico, en lo que toca a la cuantía, impresión, distribución, resguardo y todo aquello relacionado con las boletas electorales para la elección de Gobernador.

En ese sentido, el once de noviembre de dos mil quince, el *INE* aprobó el acuerdo *INE/CG950/2015*,⁴⁹ en relación con el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la *Constitución Federal*, mediante el cual emitió los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales y para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero.

⁴⁹ Visible a foja 523 del cuadernillo auxiliar 192 del presente asunto.

En dicho acuerdo se estableció que, para el cálculo de boletas electorales a producir debía atenderse a los siguientes elementos: a) la lista nominal; b) los representantes de partidos políticos y candidatos independientes; c) las casillas aprobadas y, en su caso; d) la cantidad de boletas aprobadas para las casillas especiales.

En ese sentido, se determinó que en los procesos electorales locales no concurrentes con el federal, debería contarse con el siguiente número de boletas:

- Una por cada elector registrado en el listado nominal de casilla básica, contigua y extraordinaria.
- Setecientos cincuenta por cada casilla especial.
- Dos por cada partido político en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.

- Dos por candidatura independiente aprobada en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.

Robustece lo anterior, el hecho de que el *INE* en el acuerdo *INE/CG113/2015*,⁵⁰ determinó que para garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito, los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales recibirían setecientos cincuenta boletas para elecciones locales, además de las boletas necesarias para que los representantes de los partidos políticos, así como lo candidatos independientes pudieran ejercer su voto.

50 Visible a foja 449 del cuadernillo auxiliar 192 del presente asunto.

En esa tesitura, y adheridos al marco competencial, el dos de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo aprobó el diverso *IEE/CE113/2016*, en apego al acuerdo *INE/CG950/2016*, decretando que la producción de la documentación y material electoral que se utilizaría en el proceso electoral en curso se llevaría a cabo por parte de Talleres Gráficos de México.

Por otro lado, bajo el tema central, es decir, la cuantía, impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, resulta imprescindible atender a lo establecido en el Capítulo Sexto de la *Ley*, titulado *De la Documentación Electoral y el Material Electoral*, específicamente, el artículo 142, el cual señala que dicho capítulo únicamente será aplicable cuando se lleven a cabo elecciones locales no concurrentes con las elecciones federales y, en su caso, la función de la integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación le haya sido delegada al *IEE* por la autoridad competente.

Las normas previstas en el capítulo mencionado prevén, en lo que interesa, lo siguiente:

- La aprobación del modelo de boleta electoral que se utilizará para cada elección.
- El contenido de las boletas para la elección de Gobernador del estado.
- La obligación de que las boletas estén adheridas a un talón con folio, el cual deberá ser progresivo.
- La obligación de que las boletas estén en poder de las asambleas municipales a más tardar veinte días antes de la elección.

SUP-JRC-317/2016

- El procedimiento y medidas que deberán adoptar las asambleas municipales para el conteo, sellado y enfajillado de las boletas.
- La obligación de entregar a los presidentes de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al de la elección y contra el recibo detallado correspondiente, entre otros, las boletas para cada elección.

En consonancia con lo anterior, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del *INE* aprobó el acuerdo *INE/CG122/2016*,⁵¹ mediante el cual ejerció su facultad de atracción para establecer los criterios para conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos locales al término de la jornada electoral de los procesos electorales locales 2015-2016.

51 Visible a foja 749 del cuadernillo auxiliar 192 del presente asunto.

De esto, se advierte que el Consejo General del *INE* no delegó las funciones señaladas en el arábigo 142 de la Ley al *IEE*, por lo cual es inaplicable dicha disposición en el presente asunto y, por tanto, lo correcto es atender a los acuerdos aprobados por el *INE*.

En ese sentido, los criterios referidos disponían que:

1. En cuanto al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales
 - a. Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas para los procesos electorales locales 2015-2016 que realizaron los órganos locales debieron sujetarse a los siguientes criterios:
 - i. El día de la recepción o a más tardar el día siguiente debió procederse a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de casillas especiales, así como las de los representantes de los partidos políticos, y en su caso candidatos independientes, consignando el número de los folios correspondientes en el formato para el agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla, así como en las etiquetas blancas en

- donde se señalarán los folios asignados a la casilla, que serán colocadas en los sobres en que se entregarán las boletas electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, por tipo de elección.
- ii. Este ejercicio debió realizarse ante los representantes de los partidos políticos y en su caso, de los candidatos independientes, a fin de permitir una asignación precisa de las boletas correspondientes a cada casilla. Para efectos de lo anterior, era necesario contabilizar la totalidad de los partidos políticos con representación ante el órgano local, aun cuando no hayan registrado candidatos para la elección en cuestión.
- b. Al término del conteo y sellado del total de boletas, debieron agruparse de manera consecutiva, por tipo de elección, conforme los siguientes criterios:
 - i. Total de electores de cada casilla inscritos en el listado nominal y las casillas especiales.
 - ii. Dos boletas adicionales, por cada partido político con registro nacional o estatal, y en su caso, candidatos independientes para que sus representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla pudieran ejercer su derecho de voto.
 - iii. Las boletas necesarias para que votaran aquellos ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso.
 - c. Los funcionarios facultados serían los responsables de llevar el control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas respecto de cada tipo de elección que se distribuirían a cada mesa directiva de casilla, a través del formato denominado agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla.
 - d. En el caso que se hubieran encontrado boletas dañadas, con errores de impresión o desprendidas del talón foliado, de tal suerte que resultare necesario prescindir de su utilización, la integración del total de boletas por casilla se realizaría recorriendo los números de folio, lo que se anotaría en el formato de agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla.

SUP-JRC-317/2016

- e. Una vez realizado el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, los funcionarios autorizados del órgano competente debieron proceder a inutilizar las boletas sobrantes, mediante dos líneas diagonales.
 - f. El presidente del órgano competente levantaría un acta circunstanciada en la que se especificara la fecha, hora de inicio y término, lugar, asistentes, tipo o tipos de elección, folios de las boletas que correspondieran a cada casilla, folios de las boletas sobrantes e inutilizadas, y en su caso, incidentes o faltantes de boletas.
2. En relación a la integración y distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla
- a. El funcionario designado para llevar el control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas también debía verificar que se contara con toda la documentación y materiales electorales con base en el recibo que se entregaría al presidente de la mesa directiva de casilla.
 - b. Los consejeros presidentes de los órganos locales entregarían por medio de los CAE, a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección, la documentación y materiales electorales.
 - c. De la entrega de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla, los CAE recabarían el recibo correspondiente con la firma del presidente, la fecha y hora de la entrega.
 - d. Los recibos, serían entregados al consejo distrital del *INE* correspondiente, mismo que informarían al órgano competente del ente electoral local sobre el avance y conclusión de la entrega de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla.
 - e. Respecto a la integración de las boletas que serían entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla, se introducirían en los sobres destinados para ello, mismos que se identificarían previamente con una etiqueta blanca señalando los folios de las boletas que contenían y el tipo de elección.

Ahora bien, el veintidós de marzo del presente año, se firmó el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el *IEE* y el *INE*,⁵² dentro del cual, en el Anexo Técnico

número Uno⁵³, se precisaron las actividades, plazos y mecanismos para la colaboración acordada, a fin de llevar a cabo el Proceso Electoral 2015-2016 en Chihuahua.

52 Visible a foja 125 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.

53 Visible a foja 33 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.

De las precisiones realizadas, se estableció, en lo que interesa al caso:

- Que en materia de documentación electoral a emplearse en las casillas, el *IEE* se atendería a los lineamientos establecidos por el Consejo General del *INE* (acuerdo *INE/CG950/2015*).
- Que las tareas de integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios serían responsabilidad del *INE*, dando el *IEE* seguimiento a dichas labores a través de las asambleas municipales.
- Que a más tardar el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis el *INE*, por medio de la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua, entregaría los ejemplares de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, en la que estarían incluidos todos los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del estado de Chihuahua que hubiesen obtenido su credencial para votar.

En ese orden de ideas, tomando en cuenta el marco de competencias ejercidas por cada autoridad en el presente proceso electoral, atendiendo a los ordenamientos federales y estatales, así como los acuerdos aprobados por cada órgano electoral, se obtiene que:

- El *INE* fue el encargado de la aprobación del padrón electoral y el listado nominal de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; emitió los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales; ejerció su facultad de atracción para establecer los criterios para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en la sede local.
- El *IEE* estuvo a cargo de ordenar la impresión de los documentos y producción de los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emitió el *INE*;

SUP-JRC-317/2016

realizar el conteo, sellado y enfajillado de boletas por medio de las asambleas municipales; y recibir la votación a través de las mesas directivas de casilla y llevar a cabo el escrutinio y cómputo de la elección.

3.2.4 Examen de los motivos de agravios

Advertido el marco competencial y las facultades atribuidas a cada órgano electoral, lo procedente es dilucidar, a través del ejercicio de las obligaciones contraídas y acreditadas por cada órgano electoral, si los motivos de agravio señalados por los *Actores* son ciertos; esto, a efecto de determinar si le asiste la razón, o bien, si hubo cumplimiento por parte de la autoridad administrativa a los ordenamientos aplicables al desarrollo de las boletas electorales desde el mandamiento de su impresión hasta ser utilizadas en la elección de Gobernador.

Así las cosas, el estudio se realizará por separado, avocándose en cada caso a los siguientes temas de controversia señalados por el actor:

3.2.4.1 La impresión y distribución de las boletas electorales realizada por el *INE*

3.2.4.2 Omisión a la aprobación del número de boletas a imprimir

3.2.4.3 Omisión en la corroboración del número boletas electorales recibidas por cada presidente de mesa directiva de casilla

3.2.4.4 Omisión en la aprobación del plan de impresión y distribución así como la supervisión de la impresión de las boletas, su traslado y resguardo

3.2.4.5 Recuentos en sede municipal y la ausencia de formalidades legales

3.2.4.6 Diferencia entre boletas recibidas y sobrantes asentadas en *actas finales*

Por cuestiones de método, y a efecto de clarificar los hechos motivos de agravio así como las posibles soluciones a la controversia planteada, se supone pertinente estudiar los puntos **3.2.4.2** y **3.2.4.3** de manera conjunta. Esto, debido que ambos temas se encuentran concatenados entre sí, pues en ambos se pretende poner en evidencia una incertidumbre en cuanto a la cuantía de boletas impresas y utilizadas el día de la jornada electoral.

3.2.4.1 La impresión y distribución de las boletas electorales realizada por el INE

Según lo señalan los Actores, fue el *INE* quien llevó a cabo la impresión de las boletas, pues fue también quien se encargó de todo el plan de impresión y distribución, lo que conculca la competencia marcada por los artículos 41 y 116 de la *Constitución Federal* y los principios rectores de la materia.

Refieren que *al parecer lo que sucedió es que delegó - el IEE - arbitrariamente todas esas facultades al Instituto Nacional Electoral.*

Continúa señalando que la *Ley* es clara en cuanto al acatamiento de los lineamientos de la impresión de la documentación que apruebe el *INE*, pero conforme al criterio de los *Actores*, no debió delegarse la facultad pues corresponde al *Consejo* dicha tarea.

A consideración de este Tribunal, el agravio vertido por el actor es

infundado.

Como fue señalado en apartado correspondiente, el once de noviembre de dos mil quince, el *INE* aprobó el acuerdo INE/CG950/2015, en relación con el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la *Constitución Federal*, mediante el cual emitió los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales y para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero.

Por su parte, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del *INE* aprobó el acuerdo INE/CG122/2016, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para establecer los criterios para conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos locales al término de la jornada electoral de los procesos electorales locales 2015- 2016.

Dicho ejercicio de facultades, a diferencia de como lo consideran los Actores, solo se realizó en cuanto a los criterios que para la impresión y distribución de la documentación

SUP-JRC-317/2016

electoral debían acatarse, mas no como asunción material de dichas tareas.

Es decir, la distribución competencial entre ambos entes se encuentra delineada, pues como ya se refirió en apartado previo, el *INE* fue el encargado de emitir los criterios para dichas actividades, en términos del artículo 64, numeral 1, inciso g), de la *Ley*, mientras que el *Consejo* fue el ejecutor de las tareas en la etapa de la preparación de la elección, sin que se encuentre acreditada una “delegación” de funciones al ente nacional o en su caso un convenio con los mismos efectos.

Robustece lo anterior, el hecho de que el dos de mayo de dos mil dieciséis, en apego al acuerdo INE/CG950/2016, el *Consejo* aprobara el diverso IEE/CE113/2016, mediante el cual se decretaría que la producción de la documentación y material electoral que se utilizaría en el proceso electoral en curso se llevaría a cabo por parte de Talleres Gráficos de México.

Además, además conforme a los autos del expediente, se encuentra acreditado que la distribución del material y documentación electoral se realizó en los términos estipulados por el acuerdo INE/CG122/2016, sujetándose entonces el *IEE* a los referidos mandamientos.

En ese orden de ideas, lo **infundado** del agravio, radica en que los entes electorales respetaron el sistema competencial y los principios rectores de la materia comicial avocándose cada uno a su atribuciones legales.

3.2.4.2 Omisión de aprobar el número de boletas a imprimir y 3.2.4.3 omisión en la corroboración del número de boletas electorales recibidas por cada presidente de mesa directiva de casilla

Conforme a lo señalado por los *Actores*, el *Consejo* omitió aprobar el número de boletas a imprimir en el Proceso Electoral 2015-2016.

Además, esgrimen que no existe certeza en cuanto a la legalidad en la emisión de las boletas electorales que fueron utilizadas el día de la jornada electoral, así como tampoco en la cantidad que se entregó a cada casilla, sustentándose en la suposición de que no hay constancia que acredite la cuantía de boletas entregadas a los integrantes de las mesas directivas de casilla, pues refieren que no existe documento que acredite su

agrupamiento en razón del número de electores por casilla, ni el número de boletas y folios que fueron recibidas por los integrantes de las mesas directivas.

Así, a su consideración, las supuestas omisiones atribuidas al *Consejo* violentan los principios rectores de la materia electoral.

A partir de lo anterior, este *Tribunal* estima que los motivos de agravio citados devienen **infundados**.

Inicialmente, es preciso referir que de conformidad con el marco normativo previsto líneas arriba, no se desprende la obligación del Consejo de emitir un acuerdo por virtud del cual se apruebe el número de boletas que serán utilizadas en los procesos electorales que vigile y organice, sino que la obligación intrínseca es la de atender a los lineamientos, formatos y criterios aprobados por el Consejo General del *INE*.

Es decir, conforme al marco competencial y en referencia a las atribuciones del citado órgano, no se advierte facultad o exigencia al Consejo para que apruebe el número de boletas a imprimir, pues la *Ley* únicamente refiere al apego que la institución deberá tener en cuanto a los lineamientos que se emitan; esto es, no existe una omisión como tal al no existir una obligación expresa. De ahí lo infundado de este agravio.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el *Consejo* como máximo órgano de dirección del *IEE* y de conformidad con el artículo 52 de la *Ley*, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por que los principios rectores en la materia electoral referidos en líneas anteriores, guíen todas las actividades del *IEE*.

Acorde con ello, como hecho notorio para este *Tribunal*, el *Consejo* mediante el acuerdo *IEE/CE02/2016*,⁵⁴ creó y conformó las comisiones de Consejeras y Consejeros necesarias para el desempeño y cumplimiento de las atribuciones del máximo órgano de dirección del *IEE*, siendo una de estas la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Organización Electoral y Educación Cívica.

54 Consultable en la página web: www.ieechihuahua.org.mx

En el mismo sentido, es de señalarse que el *IEE* no solamente está integrado por su Consejo y consejeros, si no

SUP-JRC-317/2016

que para llevar a cabo las atribuciones y obligaciones establecidas legalmente, cuenta con diversas direcciones y coordinaciones. Una de esas coordinaciones, es precisamente la de organización electoral, quien de acuerdo al artículo 74, inciso b) de la Ley, tiene como función, la de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral, conforme a los lineamientos que para tal efecto expida el *INE*.

En este orden de ideas, si bien es cierto no existe una obligación expresa para que el *Consejo* emitiera un acuerdo por el cual se determinara el número de boletas a imprimir para el proceso electoral, en aras de privilegiar los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, el *IEE* mediante su Comisión o Coordinación de Organización, debió proveer lo necesario para la determinación del número de boletas impresas y utilizadas el pasado cinco de junio. Lo que en el caso concreto si aconteció, pues como hecho notorio para este *Tribunal*, el *Consejo* en su Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el dos de mayo, dictó el acuerdo IEE/CE113/2016, por el que se aprobó la producción de la documentación y el material electoral que se utilizó.

En dicho acuerdo, el *IEE* dispuso que la impresión de la documentación electoral se llevara a cabo por Talleres Gráficos de México, autorizando al Consejero Presidente para que realizará las gestiones necesarias para la impresión de las boletas electorales; asimismo, conforme a la legislación local, se señalaron los datos que debió contener cada una de las boletas por tipo de elección, quedando aprobados los diseños respectivos.

Sirve de sustento la Jurisprudencia 16/2010, dictada por la Sala Superior de rubro: **FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.**

Por otro lado, en cuanto al hecho de que no hay constancia que acredite la cuantía de boletas entregadas a los integrantes de las mesas directivas de casilla, ni el número de boletas y folios que fueron recibidas por sus integrantes, se tiene que, en apego a los criterios establecidos por el Consejo General del *INE* en el acuerdo identificado con la clave

INE/CG122/2016, el Consejo llevó a cabo las siguientes actividades:

1. En cuanto al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en las *Asambleas*:

- Las *Asambleas* llevaron a cabo el conteo, sellado y enfajillado de las boletas de la elección de Gobernador en los lugares destinados para tal efecto, a través de las personas facultadas para ello y con representación de los partidos políticos.
- Al término de dicha tarea se agruparon las boletas de acuerdo a la foliatura para cada elección y casilla de acuerdo a la lista otorgada por la Coordinación de Organización Electoral del *IEE*, en relación con el formato de agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla. El cual forma parte integral de la presente resolución y de la instrumental de actuaciones.⁵⁵

⁵⁵ Visible a foja 727 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto

- Luego, se procedió a introducir a los paquetes electorales el número de boletas agrupadas por el total de los ciudadanos que podrían votar en cada casilla.
- De las diligencias, se estableció el día y hora de inicio de los trabajos, así como los mismos datos de su culminación.
- Obra en autos constancia mediante la cual se informa a este *Tribunal* que derivado de la cancelación del registro de la planilla independiente al ayuntamiento del municipio de Chihuahua, encabezada por Javier Mesta Delgado, la Asamblea Municipal de Chihuahua inutilizó y resguardó en la bóveda electoral 2,410 boletas impresas que correspondían a los representantes de dicha candidatura en casilla.⁵⁶

⁵⁶ Visible a foja 5966 del Tomo 8 del presente asunto.

- Existe constancia que en la Asamblea Municipal de Guerrero se retiró una boleta con folio 017473 por presentar una ruptura, dicha boleta correspondía a la casilla 1215 C1 por lo que se tuvieron que recorrer los folios.⁵⁷

⁵⁷ Visible a foja 5996 del Tomo 8 del presente asunto.

- En ese mismo sentido, en la Asamblea Municipal de Satevó, al haberse dañado boletas electorales, fue necesario reasignar folios generando corrimiento de los mismos.

Dicho lo anterior, es necesario visualizar el agrupamiento realizado a fin de acreditar, a nivel municipal, el número de boletas que conforme a los rubros establecidos por los

SUP-JRC-317/2016

acuerdos INE/CG950/2016 e INE/CG122/2016 deberían obrar por paquete electoral; es decir, la cuantía de boletas para la elección de Gobernador en razón del número de electores en listado nominal, representantes de partidos políticos y candidatos independientes, los correspondientes a las casillas especiales, los electores que hubieran obtenido sentencia favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o validación en sede administrativa y la foliatura correspondiente, que integran cada paquete electoral por cada casilla instalada se encuentra sustentado en este instrumento, salvo prueba en contrario.

En ese orden de ideas, en la tabla que se presenta a continuación, se desglosa el agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla, congregando las mismas por sede municipal, en el entendido que el desglose por casilla, forma parte de la instrumental del presente juicio.

[Se inserta tabla]

El número total de boletas se obtiene de la integración de los siguientes rubros, los cuales se encuentran previstos en el acuerdo INE/CG950/2016:

[Se inserta tabla]

Al total señalado, es decir 2,780,561, es necesario restar las boletas inutilizadas por la cancelación del registro de la planilla independiente al ayuntamiento del municipio de Chihuahua, encabezada por Javier Mesta Delgado, esto es: 2,410 boletas impresas que correspondían a los representantes de dicha candidatura en casilla, lo que al realizar la operación da un total de 2,778,151, el cual concuerda con el número de boletas agrupadas para la elección de Gobernador del estado de Chihuahua.

2. En relación a los criterios para la integración y distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla:

- Conforme al oficio INE/JLE/792/2016 el Vocal Ejecutivo del *INE* en Chihuahua, hizo del conocimiento de este *Tribunal* que los acuses de recibo de la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla fueron entregados al *IEE* de conformidad con el acuerdo INE/CG122/2016.
- Al respecto, mediante oficio IEE/P/486/2016 *el IEE informó a este Tribunal que: los 469 recibos correspondientes a los distritos electorales 17 y 15, fueron previamente remitidos a ese Tribunal por parte del Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Chihuahua, con motivo del cumplimiento al requerimiento efectuado a dicho órgano municipal, en consecuencia, se remiten 4,490 recibos de documentación y materiales entregados al Presidente de Mesa Directiva de Casilla, de las casillas siguientes.*⁵⁸

58 Visible a foja 5721 del Tomo 7 del presente asunto.

Así, de la revisión de la documentación presentada, se tiene que cuatro mil seiscientos treinta recibos son los que obran en autos del presente juicio, contando ya con los cuatrocientos cincuenta y cinco que constan en los expedientes JIN-224/2016 y JIN-227/2016 del índice de este *Tribunal*, a diferencia de los cuatro mil novecientos cincuenta y nueve referidos por la autoridad; además, del estudio de los mismos se advierte que en muchos casos los recibos no cuentan con la totalidad de los datos del número de boletas para la elección de Gobernador o los folios de los mismos.⁵⁹

59 Recibos obrantes en los expedientes auxiliares 197 al 205 del presente asunto.

Al respecto, es preciso señalar que la ausencia de recibos de documentación y materiales entregados a los presidentes de mesa directiva de casilla o el error o falta de asentamiento de datos en su llenado, en ningún caso genera una incertidumbre que pudiera general una violación sustancial, pues tal cuestión puede ser contrastada para efectos de validez con el agrupamiento de las boletas en razón de los electores en casilla.

Es decir, se encuentra acreditada en autos la existencia de un documento aprobado por la autoridad competente mediante el cual se corroboraba la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Dicho instrumento, está respaldado en los números

SUP-JRC-317/2016

establecidos en el agrupamiento en razón de los electores por casilla.

Esto es, la información que integra en cada uno de los recibos de documentación, derivaba del agrupamiento, pues conforme a los métodos utilizados por las *Asambleas* para el conteo, sellado y enfajillado, luego de introducir el número de boletas correspondientes a la elección de Gobernador en cada paquete electoral, y este a su vez en la bóveda o bodega electoral, no permite inferir que para su entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla sea necesaria la apertura del paquete a fin de computar de nueva cuenta el número de boletas para la elección de Gobernador, plasmarlo en el recibo y cerrar el paquete de nueva cuenta.

En ese sentido, es válido tomar como base para cuantificar el número de boletas entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla para la elección de Gobernador del estado, el asentado en el agrupamiento de boletas en razón de los electores por casilla, pues como se señaló, este dato también se asienta en el recibo de documentación a los funcionarios electorales.

Es preciso señalar que la ausencia de documentación o los errores en el llenado no implican la falta de información y certeza, pues aun y cuando los *Actores* no cumplieron con la carga probatoria, al afirmar la inexistencia de la documentación que acreditara el número de las boletas y folios entregados a los funcionarios de casilla, de autos se desprende la presencia de documentales y datos que lo confirman, esto es, el agrupamiento de boletas realizado en cada una de las *Asambleas* y los mismos recibos.

Robustece todo lo anterior, el hecho de que existe constancia en la instrumental de actuaciones,⁶⁰ de la presencia de la representación de los partidos políticos en las tareas de la sesión conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales, así como el levantamiento del agrupamiento que se hizo de las mismas en cada una de las *Asambleas*. Esto es, conforme al informe pormenorizado de la sesión señalada, se tiene que los partidos políticos formaron parte de dichas tareas, hasta el punto de ser en muchos casos ellos quienes sellaran de nueva cuenta las bóvedas electorales en compañía de los funcionarios electorales.

60 Visible a fojas 77 a la 185 del cuadernillo auxiliar 208 del presente asunto.

Conforme a lo expuesto se estiman **infundados** los agravios planteados, pues en primer lugar no existe obligación del *Consejo* en cuanto a la aprobación del número de boletas sino únicamente al acatamiento a los lineamientos del *INE*; por otro lado, se tiene por acreditado el número de boletas que obraban en cada paquete electoral conforme al agrupamiento en razón del número de electores por casilla, ya que los actos concatenados desde la impresión de las boletas hasta su arribo a las mesas directivas de casilla se encuentra sustentados a través de documentales públicas a las que se le concede pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 318, numeral 1, inciso a), y 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley.

Sin ser óbice a la anterior determinación y a fin de cumplir con el principio de exhaustividad y privilegiar la certeza del Proceso Electoral 2015-2016, así como el principio de autenticidad del voto, este *Tribunal* considera oportuno agotar todos los medios a su alcance a efecto de no dejar duda sobre las actuaciones institucionales y el ejercicio democrático de las elecciones.

Esto es así, pues existen manifestaciones realizadas por el *PRI*,⁶¹ en las que señala que existen inconsistencias que pudieran vulnerar el principio de certeza y la validez en las documentales públicas presentadas por la autoridad responsable. Es decir, el *PRI* señala que en las actas circunstanciadas de envío de boletas a las *Asambleas*, existen datos que permite dilucidar un aumento en el número de boletas, o bien, que advierten una incertidumbre en cuanto al manejo de éstas.

61 Visible a foja 5451 del Tomo 7 del presente asunto.

Así las cosas, para abordar el planteamiento propuesto, es necesario referir inicialmente que, como ya fue estudiado, por medio del acuerdo *INE/CG950/2015*, se delinearon las especificaciones en razón de la cuantía de las boletas electorales, al establecer el Consejo General del *INE*, que para la impresión de las mismas se debía tomar en cuenta que por cada una de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias se requería de una boleta por cada elector registrado en el listado nominal y setecientos cincuenta boletas en cada casilla especial; además, debía contarse en cada tipo de casilla con

SUP-JRC-317/2016

dos boletas por cada representante de partido político y dos por cada representante de candidato independiente.

En ese sentido, obra en la instrumental de actuaciones oficio de clave IEE/P/40/16,⁶² signado por el Consejero Presidente del *IEE*, mediante el cual solicita al Coordinador de Organización Electoral de ese órgano que, en atención a los acuerdos IEE/CE113/2016 e INE/CG950/2016, llevara a cabo el desglose del total de boletas necesarias para la elección a celebrarse el cinco de junio.

62 Visible a foja 16 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.

Del desglose realizado, se desprende que el número total de boletas que se consideraron para imprimir, en atención a los criterios generados por el *INE*, fue de dos millones setecientas ochenta mil quinientas sesenta y un boletas electorales, repartidas entre los sesenta y siete municipios del estado, cuyos folios van del 00000001 al 02780561.

Aunado a lo anterior, obra en copia certificada el desglose por rubro del número de boletas a imprimir⁶³ en relación con lo dispuesto en el acuerdo INE/CG950/2015. En ese entendido, se establecieron las siguientes cantidades:

63 Visible a foja 20 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.

En ese orden de ideas, el número de boletas generado por la Coordinación de Organización Electoral del *IEE* concuerda con la cuantía estipulada en el contrato de prestación de servicios celebrado con Talleres Gráficos de México⁶⁴ para la impresión de la documentación electoral, asentándose en el segundo convenio modificatorio a dicho contrato,⁶⁵ en específico, en el anexo técnico GGC/GAST/215/16/V5,⁶⁶ que la cantidad de boletas a imprimir para la elección de Gobernador sería de dos millones setecientas ochenta mil quinientas sesenta y uno.

64 Visible a foja 108 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.

65 Visible a foja 5841 del Tomo 7 del presente asunto.

66 Visible a foja 5843 del Tomo 7 del presente asunto.

Ahora bien, conforme al recibo con número de remisión 20161872, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, emitido por Talleres Gráficos de México,⁶⁷ se puede corroborar que la cantidad de boletas impresas por esta institución corresponde a dos millones setecientas ochenta mil quinientas sesenta y una para la elección de Gobernador.

67 Visible a foja 5835 del Tomo 7 del presente asunto.

Al respecto, se encuentra acreditado que en tres momentos diferentes es coincidente el número de boletas que decidieron imprimirse para la elección respectiva.

[Se inserta tabla]

Luego de la entrega recepción de las boletas electorales entre Talleres Gráficos de México y el *IEE*, se tiene acreditado que éstas fueron trasladadas a la bodega que el *IEE* designó para tal efecto.⁶⁸

68 Visible a fojas 159 a la 166 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto

Posterior a ser recibidas, las boletas fueron enviadas a cada una de las *Asambleas* a fin de que se resguardaran para su posterior conteo, sellado y enfajillado.⁶⁹

69 Visible a fojas 4446 a la 4508 del Tomo 6 del presente asunto.

En este punto del transcurso de las boletas, se considera necesario realizar un estudio en cuanto al número de boletas recibidas por el *IEE*, las trasladadas a su bodega y luego enviadas a las *Asambleas* para su posterior agrupamiento e inserción en los paquetes electorales.

Las acciones emprendidas se encuentran acreditadas y guardan sustento en las actas circunstanciadas que obran en autos,⁷⁰ de las cuales se observa la siguiente numeraria y en algunos casos, inconsistencias referidas por el *PRI*, que más adelante se dilucidaran:

70 Visible a fojas 4307 a la 4444 del Tomo 6 del presente asunto

[Se inserta tabla]

Conforme a los datos mostrados en la Tabla 2 obtenemos los siguientes inconsistencias:

- 1) De las actas circunstanciadas de envío a las *Asambleas*
 - a) Se aprecia que existen diversas actas circunstanciadas en las que aparentemente se envían en dos ocasiones las boletas electorales para la elección de Gobernador a las asambleas de Balleza, Guachochi, Madera, Ojinaga y

SUP-JRC-317/2016

Satevó, de las cuales se individualizará su estudio a continuación:

- i) **Balleza.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4470, se hace constar el envío a la *Asamblea Municipal de Balleza de tres cajas con cuatro mil boletas de gobernador y una caja con mil trescientas treinta y una*. Por otro lado, en el acta circunstanciada de fecha veintisiete de mayo signada por Jesús Edmundo Chávez Flores, visible a foja 4495, se hace constar el envío de *cuatro cajas con boletas gobernador del folio 001 al folio 13,331*, de lo que se advierte un error evidente en el llenado de alguna de las actas.
- ii) **Guachochi.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4470, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Guachochi *de ocho cajas con cuatro mil boletas de gobernador y una caja con tres mil ciento cincuenta y dos*. Por otro lado, en el acta circunstanciada de fecha veintisiete de mayo signada por Jesús Edmundo Chávez Flores, visible a foja 4496, se hace constar el envío de *nueve cajas con boletas gobernador del folio 001 al folio 35,922*, de lo que se advierte un error evidente en el llenado del acta de alguna de las actas.

Cabe hacer mención que existe también una diferencia entre ambas constancias pues en una el número de boletas enviadas es de 35,152, mientras que en otra acta es de 35,922, de lo que se advierte un error evidente en el llenado de alguna de las actas.
- iii) **Madera.** En el acta de fecha veintisiete de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4451, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Madera de *cinco cajas con cuatro mil boletas gobernador y una caja con tres mil quinientas cincuenta boletas gobernador*. Por otro lado, en el acta circunstanciada de fecha veintinueve de mayo signada por el mismo funcionario, visible a foja 4467, se hace constar el envío de *cinco cajas con cuatro mil boletas gobernador y una caja con tres mil quinientas cincuenta*, de lo que se advierte un error evidente en el llenado de alguna de las actas.
- iv) **Ojinaga.** En el acta de fecha veintisiete de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4453,

se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Ojinaga de *cinco cajas con cuatro mil boletas de gobernador y uno con dos mil novecientos ochenta boletas de gobernador*. Por otro lado, en el acta circunstanciada de fecha veintinueve de mayo signada por el mismo funcionario, visible a foja 4468, se hace constar el envío de *cinco cajas con cuatro mil boletas gobernador y una caja con dos mil doscientas diez*, de lo que se advierte un error evidente en el llenado de alguna de las actas.

Cabe hacer mención que existe también una diferencia entre ambas constancias pues en una el número de boletas enviadas es de 22,980, mientras que en otra acta es de 22,210.

- v) **Satevó.** En el acta de fecha veintisiete de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4448, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Satevó de *una caja con cuatro mil boletas de gobernador y una caja con trescientas cuarenta y ocho boletas de gobernador*. Por otro lado, en el acta circunstanciada de fecha veintinueve de mayo signada por el mismo funcionario, visible a foja 4466, se hace constar el envío de *una caja con un total de cuatro mil trescientas cuarenta y ocho boletas de gobernador*, de lo que se advierte un error evidente en el llenado de alguna de las actas.
- b) Se advierte que en los municipios de Batopilas, Chínipas, La Cruz, Maguarichi, Riva Palacio y Urique, los cuales se encuentran marcados con el símbolo (*), existen inconsistencias en la captura del número de boletas a enviar.
 - i) **Batopilas.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4470, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Batopilas de *dos cajas con un total de cuatro mil setecientos noventa y nueve boletas de gobernador*. Lo asentado guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 8,799 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 4,799, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.
 - ii) **Chínipas.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4470,

SUP-JRC-317/2016

se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Chínipas de *dos cajas con un total de seis mil cuatrocientos cuarenta y seis boletas de gobernador.*

Lo asentado guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 5,446 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 6,446, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.

- iii) **La Cruz.** En el acta de fecha veintisiete de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4448, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de La Cruz de *cuatro cajas con cuatro mil boletas de gobernador y una caja con tres mil novecientos treinta y tres boletas de gobernador.*

Lo anterior guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 3,470 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 19,333, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.

- iv) **Maguarichi.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por Jesús Edmundo Chávez Flores, visible a foja 4508, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Maguarichi de *dos cajas con un total de cinco mil quinientos catorce boletas gobernador.*

Lo anterior guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 1,514 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 5,514, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.

- v) **Riva Palacio.** En el acta de fecha veintisiete de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4450, se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Riva Palacio de *una caja con cuatro mil boletas de gobernador y una caja con tres mil setecientas boletas de gobernador.*

Lo anterior guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 1,514 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 5,514, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.

- vi) **Urique.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por José Luis Gómez Salas, visible a foja 4471,

se hace constar el envío a la Asamblea Municipal de Urique de *dos caja con un total de seis mil ochocientos cincuenta y un boletas de gobernador.*

Lo anterior guarda diferencia con el número determinado para la impresión en Talleres Gráficos del Estado, pues de 13,851 boletas ordenadas, se asentaron para envío a asamblea 6,851, de lo que se aprecia un error evidente en el llenado del acta.

- c) Se observa que existe falta de certeza en la recepción de las boletas de Gobernador de los municipios de Chihuahua y Juárez, pues únicamente se refiere a número de caja y no se individualiza el número de boletas o los folios correspondientes.
 - i) **Chihuahua.** En el acta de fecha veintiséis de mayo, signada por Jesús Edmundo Chávez Flores, visible a foja 4491, se hace constar el envío de *ciento setenta y tres cajas con boletas de gobernador para el municipio de Chihuahua.*
 - ii) **Juárez.** En el acta de fecha veintiséis de mayo, signada por Jesús Edmundo Chávez Flores, visible a foja 4491, se hace constar el envío de *doscientas setenta y tres cajas con boletas de gobernador para el municipio de Juárez.*
- 2) De las actas de recepción de boletas de las Asambleas
 - a) Se advierte que en las Asambleas Municipales de Allende, Carichí, Coyame del Sotol, Cusihuiachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, López, Morelos y Ocampo, existen inconsistencias en la recepción del número de boletas de Gobernador, pues las mismas no se individualizan de las recibidas para otra elección.
 - i) **Allende.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y la Secretaria de la Asamblea Municipal de Allende, visible a foja 4312, se hace constar la recepción de 15,200 boletas, refiriendo que en dos cajas se encuentran las boletas de Gobernador y en dos cajas más las boletas para diputados.
 - ii) **Carichí** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y la Secretaria de la Asamblea Municipal de Carichí, visible a foja 4,330, se hace constar la recepción de 14,836 boletas, refiriendo

SUP-JRC-317/2016

que se reciben cuatro cajas que a los costados llevan etiquetas de boletas de Gobernador y diputados.

- iii) **Coyame del Sotol.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y el Secretario de la Asamblea Municipal de Coyame del Sotol, visible a foja 4341, se hace constar la recepción de 4,460 boletas, sin hacer referencia a la elección que corresponden.
 - iv) **Cusihuriachi.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y el Secretario de la Asamblea Municipal de Cusihuriachi, visible a foja 4346, se hace constar la recepción de 10,888 boletas, refiriendo que en cuatro cajas se encuentran las boletas de Gobernador y diputados.
 - v) **Guazapares.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y la Secretario de la Asamblea Municipal de Guazapares, visible a foja 4341, se hace constar la recepción de 4,460 boletas, sin hacer referencia a la elección que corresponden.
 - vi) **López.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y el Secretario de la Asamblea Municipal de López, visible a foja 4387, se hace constar la recepción de 7,288 boletas, sin hacer referencia a la elección que corresponden.
 - vii) **Morelos.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y el Secretario de la Asamblea Municipal de Morelos, visible a foja 4401, se hace constar la recepción de 11,102 boletas, refiriendo que en dos cajas se encuentran las boletas de Gobernador y en dos cajas más las boletas para diputados.
 - viii) **Ocampo.** En el acta de fecha veintinueve de mayo, signada por el Consejero Presidente y el Secretario de la Asamblea Municipal de Ocampo, visible a foja 4411, se hace constar la recepción de 12,330 boletas, refiriendo que en dos cajas se encuentran las boletas de Gobernador y en dos cajas más las boletas para diputados.
- b) En lo tocante a la **Chihuahua**, entre el número de boletas ordenadas por el *IEE* y las recibidas por la asamblea municipal, se advierte una diferencia de 39 boletas. Lo

anterior es así, pues se imprimieron 683,984 y se recibieron en la asamblea 684,023.

Al respecto, este *Tribunal* advierte errores de las autoridades administrativas electorales en el asentamiento de las actas descritas, sin embargo, éstos no son errores sustanciales que afecten la certeza en el proceso electoral, sino yerros humanos que por falta de cuidado o atención generan una incertidumbre.

Debe precisarse que, por lo que hace al numeral 2, inciso a), de la revisión, en el que se señalan inconsistencias en la recepción del número de boletas de Gobernador en las *Asambleas* de Allende, Carichí, Coyame del Sotol, Cusihuiachi, Guazapares, López, Morelos y Ocampo, estos errores son subsanables bajo las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica, pues aun y cuando no existiere una individualización del arribo de las boletas por tipo de elección a las *Asambleas*, se puede advertir ésta comparando las actas de envío con las de recepción, tal y como a continuación se plasma:

[Se inserta tabla]

Visto el desglose que precede y en atención a las actas analizadas, es visible la posibilidad de corregir la falta de individualización de las boletas recibidas en las *Asambleas*, pues se demuestra que a cada municipio se enviaron, tanto boletas para la elección de Gobernador como de diputados, las cuales fueron recibidas por las *Asambleas* como un conjunto. De ahí, que al dividir las boletas recibidas para cada elección se obtiene el número exacto de boletas para la elección de Gobernador.

En atención a lo anterior, toda vez que queda subsanado y plenamente identificado el número de boletas de la elección de Gobernador recibidas por las *Asambleas*, lo procedente es determinar si las inconsistencias presentadas en las actas de envío a las *Asambleas* (numeral 1 de la revisión) pueden ser subsanadas, o en su caso, generan dudas en cuanto al número de boletas utilizadas en la elección.

SUP-JRC-317/2016

En ese sentido, en la siguiente tabla se compulsará el total de boletas de la elección de Gobernador en relación a los siguientes rubros:

- a) La ordenadas a imprimir a Talleres Gráficos de México;
- b) La enviadas desde la bodega del *IEE* a las *Asambleas*;
- c) Las recibidas por las *Asambleas*; y
- d) Las correspondientes al agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla.

La compulsación permitirá observar si la cuantía de boletas por municipio sufrió modificaciones reales, o bien, solamente se trataron de equivocaciones en el llenado de las actas circunstanciadas.

[Se inserta tabla]

Del cotejo realizado en la Tabla 2, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

- En el número de boletas enviadas a las Asambleas de **Balleza, Guachochi, Madera, Ojinaga y Satevó** (numeral 1, inciso a) de la revisión), de las cuales se advirtió que se enviaron en dos ocasiones, existe un error en el llenado del acta circunstanciada el cual es subsanado con el contejo los rubros 1, 3 y 4 pues existe identidad en esos montos.
- En el número de boletas enviadas a las Asambleas de **Batopilas, Chínipas, La Cruz, Maguarichi, Riva Palacio y Urique** (numeral 1, inciso b) de la revisión) los cuales se encuentran marcados con el símbolo (*), existe un error de captura en la cuantía, la cual es subsanada con el cotejo con los rubros 1, 3, y 4 pues existe identidad en los montos.
- En relación al municipio de **Juárez** (numeral 1, inciso c), apartado ii) de la revisión), se tiene que aun y con la falta de pormenorización del contenido de las doscientas treinta y siete cajas enviadas a la asamblea municipal, esta omisión es subsanada con el cotejo los rubros 1, 3, y 4, pues existe identidad en los montos.
- En relación al municipio de **Chihuahua** (numerales 1, inciso c), apartado i) y 2, inciso b)), se aprecia discrepancia entre los rubros 1, 2, 3 y 4.

- El rubro 1 especifica que la cantidad de boletas a imprimir fue de 683,984.
- El rubro 2 refiere que se enviaron a las Asamblea Municipal de Chihuahua ciento veintitrés cajas con boletas de la elección de Gobernador.
- El rubro 3 señala que se recibieron en dicha asamblea la cantidad de 684,023 boletas.
- En tanto, el rubro 4 establece que se agruparon para la elección de Gobernador la cantidad de 681,574 boletas. De este rubro, como anteriormente se señaló, se informó a este *Tribunal* que derivado de la cancelación del registro de la planilla independiente al ayuntamiento del municipio de Chihuahua, encabezada por Javier Mesta Delgado, la Asamblea Municipal de Chihuahua inutilizó y resguardó en la bóveda electoral dos mil cuatrocientas diez boletas impresas que correspondían a los representantes de dicha candidatura en casilla.

En ese sentido, al sumar las boletas asentadas en el agrupamiento con las inutilizadas por la cancelación de la candidatura, se obtiene la cantidad seiscientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro, misma que concuerda con el rubro 1. Así, luego de la aclaración, al coincidir los rubros 1 y 4, se subsana la inconsistencia advertida.

En atención a lo anterior, al haber subsanado los errores cometidos por las autoridades electorales locales y al encontrar claridad en el número de boletas con que se contó en cada una de las etapas revisadas, sin que exista una diferencia que no guardara sustento, es posible advertir que el número de boletas no fue modificado o alterado, lo que genera la certeza de dicha actividad, aun y cuando constaran inconsistencias o errores imputables a las *Asambleas* o al *IEE*.

A continuación, se muestra la Tabla 4, en la cual, luego de subsanar las inconsistencias, se observa la igualdad en la cuantía de boletas impresas, enviadas a las *Asambleas*, recibidas por éstas y las agrupadas por número de electores, con lo que se reitera la certeza en el proceso electoral, aun y cuando no existiera una aprobación por el *Consejo*.

[Se inserta tabla]

SUP-JRC-317/2016

En atención a todo lo anterior, se vuelve a confirma lo **infundado** de los agravios por la falta de obligación del Consejo, en sentido expreso, de aprobar el número de boletas a imprimir, pues la *Ley* y el cúmulo de ordenamientos que inciden en las tareas comiciales no exigen dicha acción. Además la existencia de elementos de corroboración del número de boletas entregadas a los funcionarios de las mesas directivas de casilla es clara y no existen diferencias sustanciales o no acreditadas.

Aunado a esto, como ya quedó plasmado, existe certeza en cuanto al número de boletas impresas, envidadas a las *Asambleas* y recibidas por ellas, contadas, selladas, agrupadas y obrantes en los paquetes electorales, lo que genera la certeza que los *Actores* pretenden desvirtuar.

3.2.4.4 Omisión en la aprobación del plan de impresión y distribución así como la supervisión de la impresión de las boletas, su traslado y resguardo

A consideración de este *Tribunal*, el presente agravio deviene infundado.

Conforme al acuerdo IEE/CE113/2016, señalado en líneas anteriores, el Consejo aprobó la impresión de la documentación que se utilizó en el proceso electoral, la cual, como se he referido, fue a cargo de Talleres Gráficos de México.

Para ello, el *Consejo* acató las directrices marcadas por la autoridad nacional en el acuerdo INE/CG950/2015, ajustándolas al contexto del sistema electoral del estado de Chihuahua. En dicho acuerdo, conforme a los lineamientos aprobados, se establecieron los criterios aplicables para la adjudicación y supervisión de la producción de los documentos electorales; así como, su almacenamiento, custodia y destrucción.

En ese sentido, se previó para la adjudicación de la producción, las características técnicas y generales que debía reunir el fabricante; y para la supervisión de la producción, el siguiente procedimiento:

1. Elaboración de un programa de producción de los documentos electorales, que incluya tiempos y cantidades a producir de cada uno de ellos.
2. Entregar al fabricante los archivos electrónicos con los diseños de los documentos, así como especificaciones técnicas impresas.
3. Establecer con el proveedor las reuniones de trabajo necesarias, para aclarar dudas sobre especificaciones técnicas y compromisos de fechas de producción y entrega de documentos.
4. Solicitud al fabricante de calendario detallado de producción de boletas electorales.
5. En caso de ser necesario, contratar el personal eventual con conocimientos en artes gráficas, que supervise la producción de la documentación electoral.
6. Solicitar al proveedor las pruebas de color de cada documento electoral para su revisión y, en su caso, aprobación.
7. Realizar los trabajos de supervisión y control de calidad durante la producción de la documentación electoral.
8. Realizar con el proveedor reuniones periódicas (al menos, una a la semana) para revisar los avances en la producción, posibles retrasos con respecto a la programación y alternativas de solución ante eventualidades.

Asimismo, los lineamientos en cita establecieron que dentro de las instalaciones del fabricante se deben llevar a cabo tres tipos de revisiones:

1. Verificación de materias primas (papel seguridad, papel autocopiante, papel bond, cartulina bristol, etc.).
2. Supervisión de las etapas de producción (preprensa, impresión, corte, alzado, encuadernado y empaque).
3. Muestreos aleatorios al producto terminado.

En relación con lo anterior, para el almacenamiento y custodia de la documentación electoral se estableció en los multicitados lineamientos, la instalación o creación de una bodega electoral en los órganos del *IEE*, para la salvaguarda de las boletas; asimismo, se dispusieron directrices relativas al acondicionamiento y el equipamiento de la bodegas electorales.

Además, para la distribución de los documentos, se dispuso el diseño de una estrategia de distribución de documentación electoral, la cual debería ser hecha

SUP-JRC-317/2016

considerando factores de tiempo, distancia y recursos humanos y materiales, previéndose que los vehículos en los que se distribuyera, fueran custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, principalmente.

Por último, para la custodia de las boletas electorales, se estableció que la misma debía realizarse desde la producción de la documentación electoral, hasta la conclusión del proceso electoral, para lo cual se requirió implementar una estrategia, en coordinación con instituciones de seguridad pública en los ámbitos federal, local y/o municipal, con la celebración de convenios en los que se definieran las etapas, periodos de inicio y conclusión, requerimientos, responsables, vías de comunicación, directorios del personal responsable por ambas partes, rutas de distribución de la documentación, las consignas de la custodia y demás elementos que fueran pertinentes.

Al respecto, de acuerdo a la información que proporcionaron tanto el *IEE*, las *Asambleas* y Talleres Gráficos de México, a los requerimientos realizados por este *Tribunal*, se desprenden los siguientes hechos:

- Que la producción de los documentos electorales fue llevada a cabo por Talleres Gráficos de México, cuyo domicilio está ubicado en la Avenida Canal del Norte, número 80, Colonia Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Lo cual, se corrobora con el contrato de prestación de servicios celebrado entre el *IEE* y Talleres Gráficos de México.
- Que la supervisión de la impresión de la documentación electoral, se realizó en conjunto por personal de Talleres Gráficos de México y el *IEE*, siendo los responsables de los trabajos Saúl Octavio Rico Galindo, encargado del Despacho de la Coordinación de Organización Electoral y Jaime Enríquez Hernández Mondragón, Gerente General Comercial y Apoderado de Talleres Gráficos de México. Lo cual, se corrobora con el contrato de prestación de servicios celebrado.
- Mediante informe de Talleres Gráficos de México se hizo del conocimiento de este *Tribunal* que durante la producción de la documentación electoral se entrelazaron los procesos subsecuentes de corte, desglose, engomado, revisión y empaque hasta su entrega, de acuerdo a las medidas de seguridad implementadas de manera adicional a la

impresión del material electoral del estado de Chihuahua, a saber:

- Estricta revisión del personal que ingresó y salió de Talleres Gráficos de México.
- Sin excepción alguna se revisó con espejos la parte inferior, los interiores, cajuelas y en su caso cajas secas de los vehículos que ingresaron y salieron de Talleres Gráficos de México.
- Se registró la entrada y salida de las personas que ingresaron como visita o proveedores.
- Se limitó el acceso al personal de Talleres Gráficos de México, ingresando sólo el personal que laboró en el área productiva.
- Las salidas del personal solo se permitieron mediante autorización por escrito y con firma de los siguientes niveles jerárquicos: Gerente General, Gerente, Gerente Técnico, Subgerente y Jefatura de Taller.
- Quedó prohibido el ingreso a la planta de producción con mochilas, maletas, bolsos, portafolios y todo tipo de objetos donde pueda ocultarse algún documento.
- Quedó prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que facilitaran la copia o reproducción de algún documento de seguridad o con información confidencial.
- Se cancelaron las visitas a la Planta de Producción y solo se realizaron con previa autorización de Dirección General, Gerencia General de Producción o de la Gerencia Técnica.
- Se monitoreó el proceso de impresión mediante sistema de circuito cerrado y televisión las veinticuatro horas del día de los siete días de la semana.
- Se distribuyó el personal de seguridad en puntos estratégicos con la intención de supervisar el servicio de seguridad instalado.

Asimismo, se hizo saber a este *Tribunal* que una vez impreso todo el material, éste fue revisado y cargado al vehículo contratado por el *IEE*, y una vez cargado todo el material, las puertas del transporte fueron cerradas y se colocaron sellos de garantía para proveer su inviolabilidad. Manifestando que la vigilancia del vehículo de transporte fue llevado a cabo por la Policía Federal.

SUP-JRC-317/2016

Dicho vehículo contratado para el traslado, de acuerdo al “INFORME DE TRASLADO DE BOLETAS ELECTORALES PARA LA ELECCION DE GOBERNADOR PROVENIENTES DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO A LA BODEGA UBICADA EN C. 34 #6607 COL. TABALAOPA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y DE SU POSTERIOR TRASLADO A LAS 67 ASAMBLEAS MUNICIPALES ELECTORALES DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA”, signado por el Consejero Presidente del *IEE*, tuvo las siguientes características y tiempos de llegada:

[Se inserta tabla]

Ahora bien, en dicho informe se hace referencia también a los vehículos que fueron utilizados para el traslado de las boletas desde la bodega mencionada hacia cada una de las Asambleas:

[Se inserta tabla]

Asimismo, refiere que la seguridad del traslado estuvo a cargo de Policía Federal, a través de la Secretaria Ejecutiva del *INE*, a petición del Consejero Presidente del *IEE*, consistiendo en la guarda y custodia de las boletas electorales en el traslado desde la sede de Talleres Gráficos de México en la Ciudad de México, hasta la ciudad de Chihuahua.

Así también, refieren que el resguardo de las boletas electorales a las *Asambleas*, con la excepción de Chihuahua y Juárez que fueron resguardadas por Policía Federal, se hizo a través de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de sus divisiones de Policía Estatal Única e Investigación.

Estos dichos se corroboran con las actas circunstanciadas de envío de boletas electorales a las *Asambleas*.

Ahora bien, en cada una de las actas de recepción de boletas electorales levantadas por los titulares de las *Asambleas*, se hace constar que posterior a su recepción, las mismas fueron resguardadas en la bodega o bóveda adecuada

para tal efecto, ante la presencia de funcionarios electorales y, en su caso, la representación de representantes de partido, sellando la misma hasta en tanto se iniciara con el conteo, sellado y enfajillado de las boletas.

Por todo lo anterior, este *Tribunal* estima que no le asiste la razón a los Actores al considerar que el Consejo no aprobó un plan de impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, toda vez que el *Consejo* mediante el acuerdo IEE/CE113/2016, estableció qué empresa llevaría a cabo la impresión de las boletas electorales para los distintos tipos de elección; asimismo, señaló que bajo las directrices del *INE*, se llevarían a cabo los trabajos correspondientes a las impresión, supervisión y traslado de la documentación electoral.

Lo cual resulta correcto, pues en términos de lo establecido en el artículo 64, numeral 1, incisos a) y g) el *IEE*, para la impresión, supervisión, resguardo y distribución del material electoral, debió seguir los lineamientos que el *INE* expidió para tal efecto, lo que, de acuerdo a líneas pasadas, así aconteció.

Ahora bien, resulta oportuno señalar que en dichos lineamientos se establecieron los criterios aplicables para la adjudicación y supervisión de la producción de los documentos electorales; así como, su almacenamiento, custodia y distribución. Los cuales, fueron acatados por el *IEE*, las *Asambleas* y Talleres Gráficos de México, pues del análisis realizado anteriormente, se corrobora que:

1. Talleres Gráficos de México cumplió con las características generales y particulares para realizar los trabajos de impresión del material electoral.
2. En dichos trabajos de producción y supervisión, se practicaron amplias revisiones y medidas de seguridad, a fin de supervisar la debida elaboración de las boletas electorales.
3. El traslado del material electoral, se efectuó conforme a los lineamientos establecidos por el *INE*, pues se identificó y selló correctamente el vehículo que transportó la documentación electoral, el cual fue custodiado por parte de la policía federal en el traslado las boletas electorales, desde las oficinas de Talleres Gráficos de México, hasta las *Asambleas*; y

4. En la recepción y resguardo de las boletas electorales existieron actas de entrega y recepción, en las cuales se señaló la documentación recibida; asimismo, con las especificaciones previstas para ello, se instaló una bodega electoral en las *Asambleas*, la cual estuvo vigilada por personal de la propia autoridad responsable y policía municipal.

Previéndose con ello un plan de impresión, supervisión, distribución y custodia, de las boletas electorales correspondientes a la elección de Gobernador del estado de Chihuahua, así como la actuación y supervisión del mismo por parte de las autoridades electorales. De ahí lo **infundado** del agravio.

3.2.4.5 Recuentos en sede municipal y la ausencia de formalidades legales

A manera de sinopsis se reproducen los motivos de agravio que hacen valer los *Actores*:

- De los resultados de las *actas finales*, visibles en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se advertían diferencias aritméticas en un gran número de casillas.
- Dadas las inconsistencias advertidas, debieron haberse recontado las casillas en términos de los artículos 184 y 185 de la *Ley* y no solo realizar un muestreo arbitrario.
- A la fecha de presentación del medio de impugnación, el *Consejo* no tenía registro de cuantos paquetes electorales se recontaron.
- No se tienen o no existen las *actas individuales* de los recuentos, aunado al hecho de que no les fueron facilitadas inmediatamente después del cierre del paquete electoral recontado, sino que hasta varios días después se les entregó un medio magnético con un archivo denominado “resultados por casilla”, el cual no tenía autenticación y no contaba con el rubro de boletas sobrantes.

Bajo esa línea, refieren los *Actores* que dichas inconsistencias acontecieron en todas las casillas recontadas, las cuales superan el veinte por ciento del total de las casillas, violando flagrantemente los principios rectores del proceso electoral, fundamentalmente:

- La legalidad al no acatar las disposiciones expresas de la *Ley*
- La máxima publicidad, pues no puede justificar su actuación bajo el principio de que no se lo pidieron los partidos políticos
- La certeza pues no existe confianza en que los resultados sean los que expresan la voluntad popular.

A consideración del *Tribunal*, los agravios referidos son **inoperantes**.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez. En ese sentido, cuando el quejoso considere que dicho acto infringe normas o principios que le causan un perjuicio debe hacer valer sus agravios ante el juzgador competente.

Al respecto, señala que cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no aduce ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, pues las manifestaciones que realice el recurrente deben estar dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, y de no ser así deberán calificarse de inoperantes.⁷¹

71 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Pág. 2080.

En consonancia con lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer los razonamientos por los que estiman ilegal o antijurídico un acto. Esto es, los argumentos que se viertan deben explicar el por qué o cómo el acto se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable. Así, un agravio que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento.

En tal virtud, de las manifestaciones vertidas por los *Actores* no es posible obtener razonamientos suficientes para

SUP-JRC-317/2016

invalidar o considerar contrarios a derechos los actos realizados por las *Asambleas*, de ahí lo inoperante del agravio.

Además, los *Actores* tenían la carga procesal de señalar no solo las circunstancias acontecidas de manera genérica, sino aportar elementos de convicción que apoyen sus razonamientos, como: a) el número de casillas en las que no se hubiera accedido al recuento; b) la negativa a entregar las *actas individuales* o, en su caso, prueba fehaciente de su inexistencia; c) los argumentos por lo que a su consideración no se atendió a lo estipulado por la Ley en materia de nuevos escrutinios y cómputos; y d) los pormenores o consideraciones que adviertan la realización del supuesto “muestreo”, para con ello considerar que pudiera actualizarse la causal de nulidad.

Cabe señalar que en cuanto a los resultados consignados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el propio artículo 184, numeral 9), de la Ley, establece que cuando se observe que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto porcentual de la votación total, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló a alguno de éstos, el *Consejo* o las *Asambleas* deberán realizar el recuento total.

En ese sentido, en la ley no se plantea al Programa de Resultados Electorales Preliminares como opción para la apertura de los paquetes a razón de un recuento parcial mediante *actas individuales*, sino como un medio por el cual, previo al inicio del cómputo, los partidos pueden solicitar un recuento total.

Es más, se establece en el artículo 176, numeral 1, que el Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las actas finales, lo que robustece la determinación de este *Tribunal*.

Por último, es preciso referir que, como se señaló en apartados anteriores, el total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal de electores, las boletas extraídas de las urnas y el resultado de la votación son los rubros fundamentales para establecer que existen errores aritméticos

determinantes, en virtud de que están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que, en condiciones normales, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de boletas depositadas y extraídas de la urna, mismas que deben verse reflejadas en el resultado de la votación, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de los votos.

Asimismo, existen rubros auxiliares como las boletas recibidas ante la mesa directiva de casilla o sobrantes que fueron inutilizadas, los cuales no constituyen un elemento esencial para invocar la nulidad de la casilla, ya que si bien se pudiera considerar una irregularidad al evidenciar un error en el cómputo de las boletas o en el llenado de las actas, la misma no se traduce necesariamente en votos indebidamente computados y, en consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del sufragio.

Es decir, los rubros auxiliares sólo constituyen elementos complementarios para verificar la votación emitida, puesto que las boletas únicamente son susceptibles de ser votos cuando se entregan al elector y éste las deposita en la urna, de manera que mientras no se demuestre tal hecho, las diferencias derivadas de esos rubros no constituyen errores en el cómputo, y como consecuencia, al no afectar la voluntad ciudadana, no se actualiza la causal de nulidad.

En ese tenor, este *Tribunal* no visualiza en las manifestaciones vertidas la posibilidad de configurar un agravio válido y suficiente para arribar a una conclusión diferente.

Abunda a lo anterior, la referencia que hacen los *Actores* al señalar que:

Precisamente este obrar fue generalizado, pues como aconteció en todas

*las casillas recontadas que superan el 20% del total de las casillas, violó flagrantemente los principios rectores del proceso electoral; pues deficientemente omite concatenar su razonamiento con el número de casillas recontadas a efecto de que el *Tribunal* pueda realizar un análisis al respecto.*

Al igual muestra de la inoperancia del agravio son las manifestación realizada en el sentido de que se vulnera la

SUP-JRC-317/2016

legalidad al no acatar las disposiciones expresas por la *Ley*, la máxima publicidad al justificar las *Asambleas* su actuación bajo el principio de que no se lo pidieron los partidos políticos y la certeza al no existir confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la voluntad popular, pues aquellas no muestran un vínculo directo y razonado con los motivos expuestos.

3.2.4.6 Diferencia entre boletas recibidas y sobrantes asentadas en actas finales

Como se señaló al inicio del presente apartado, a consideración los Actores, todos los agravios expuestos producen incertidumbre en cuanto al número de boletas impresas, las recibidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los cómputos municipales, refiriendo que la numeraria obtenida de las *actas finales* a través del Programa de Resultados Preliminares Electorales de tres mil trecientas veintiún casillas constatadas, reflejaban:

- Un millón trecientas noventa y cuatro mil trecientas un boletas recibidas.
- Ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres votos registrados
- Un millón quinientos sesenta y cinco mil ochocientos siete boletas sobrantes

Números que según los Actores acreditan una diferencia entre recibidas y sobrantes de ciento setenta y un mil quinientas seis boletas.

Para ejemplificar lo anterior, en el medio de impugnación se plasma el siguiente cuadro comparativo:

[Se inserta tabla]

Es de precisarse que ante la falta de identificación de las casillas de las cuales supuestamente se obtuvieron los totales contemplados en la tabla inmediata anterior, a criterio de este *Tribunal*, las mismas corresponderían a las casillas analizadas en el apartado 3.1.3 de la presente sentencia, es decir, la causal de error y dolo.

Sin embargo, es necesario señalar que el total de casillas que invocan los *Actores* -tres mil trecientas veintiuno-, no corresponden al número de casillas impugnadas mediante la causal de error y dolo, pues en aquel se impugnan dos mil trecientas dieciocho casillas, es decir existe una diferencia de mil tres casillas.

Al respecto, conforme a los argumentos vertidos por los *Actores*, *las actas finales* con supuestas inconsistencias se sustentan en un número mayor de casillas que las que se impugnan por la causal referida, lo cual desvirtúa la posibilidad de este *Tribunal* de realizar un estudio al respecto, pues no se desprende o se aportaron los medios necesarios para cotejar los datos que sustentan las fórmulas utilizadas por los *Actores* para arribar a un total de ciento setenta y un mil quinientas seis boletas que generan la diferencia.

Es decir, las manifestaciones vertidas por los *Actores* no pueden ser analizados, pues como ya se señaló anteriormente, los quejosos no pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin medio probatorio o elementos que permitan al órgano jurisdiccional arribar a una resolución, ya que a ellos corresponde la carga de exponer los razonamientos y pruebas para desvirtuar un acto o acreditar una afirmación.

En ese tenor, los argumentos que se viertan a través de un medio de impugnación deben explicar el por qué o cómo el acto se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, así como la señalización de las bases por las cuales llega a una conclusión.

Así, el agravio que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento.

Amén de los anterior, de las manifestaciones vertidas por los *Actores* no es posible obtener razonamientos o elementos de comprobación suficientes para estudiar lo que a su consideración, es un perjuicio para los principios rectores de la materia electoral por la supuesta existencia de una diferencia entre el total de votos de casillas no identificadas contra el total de boletas sobrantes de casillas a las cuales no se hace referencia.

SUP-JRC-317/2016

Además, tal y como se ha estudiado a lo largo de la presente sentencia se tiene que:

- El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las *actas finales* y no un medio idóneo por el cual se puedan acreditar los datos asentados en el acta si esta no ha sido computada por la asamblea municipal correspondiente.
- No se acreditan diferencias entre el número de boletas ordenadas a imprimir y el total de boletas que se remitieron a las casillas para la elección de Gobernador del estado de Chihuahua.
- En cuanto a los cómputos municipales, los *Actores* no aportaron elementos suficientes para tener por confirmados errores en el cómputo de las actas o violaciones a la *Ley* en materia de recuentos.

En ese sentido, este *Tribunal* considera **inoperantes** los argumentos vertidos por los *Actores* en virtud de las consideraciones expuestas anteriormente.

3.2.5 Conclusión

Del estudio realizado en cada uno de los apartados de agravio, no se advierte la conculcación a los principios constitucionales rectores de la materia electoral, pues no existen violaciones sustanciales generalizadas ni determinantes (cualitativa o cuantitativamente) acreditadas que pudieran generar la nulidad de la elección de Gobernador del estado de Chihuahua, por lo que es procedente confirmar la misma.

VI. RECOMPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN

Al resultar parcialmente fundados los agravios formulados por los actores por cuanto hace a las causales previstas en el artículo 383, numeral 1, incisos e) y f), de la *Ley*, este *Tribunal* declara la nulidad de votación recibida en las ciento siete casillas siguientes: 59 C1, 192 C4, 204 B, 241 C1, 355 B, 356 B, 369 B, 383 B, 536 C1, 540 C1, 564 C2, 573 C1, 585 B, 605 C1, 650 B, 668 B, 704 C1, 724 B, 813 B, 850 B, 852 E1C5, 859 B, 871 B, 876 C2, 878 C1, 881 C1, 882 E2, 883 B, 883 E1C2, 884 C3, 993 C1, 999 B, 1092 C1, 1105 B, 1197 B, 1281 C1,

SUP-JRC-317/2016

1296 C4, 1298 B, 1308 C1, 1346 C1, 1360 B, 1461 C1, 1490 B, 1496 B, 1501 B, 1513 B, 1576 C1, 1587 B, 1588 B, 1635 B, 1675 C1, 1749 C1, 1749 C2, 1756 C1, 1779 B, 1825 C1, 1832 B, 1838 C1, 1860 C1, 1861 B, 1866 B, 1877 B, 1894 B, 1898 B, 1909 B, 1916 C10, 1916 C2, 1916 C6, 1925 C1, 1933 C1, 1945 E1C5, 1945 E1C6, 1955 B, 1970 B, 1991 B, 2000 C1, 2030 B, 2040 B, 2054 C2, 2055 C3, 2056 C2, 2057 B, 2057 C1, 2060 C1, 2066 B, 2075 B, 2089 C1, 2090 B, 2104 C1, 2135 C1, 2137 B, 2483 C1, 2830 C2, 2885 B, 2902 C1, 2904 B, 2932 B, 2933 B, 2970 B, 2973 B, 3002 B, 3152 B, 3165 B, 3166 B, 3173 B, 3198 B y 3199 B.


En ese tenor, tomando en consideración que el número de casillas cuya votación ha sido anulada, la cual representa el 2.07% del total de las instaladas en el Estado, no ha lugar a declarar la nulidad de la elección de gobernador, en términos de lo previsto en el artículo 384, numeral 1, inciso a), de la Ley.

En consecuencia, se procede a efectuar la suma de la votación que ha sido anulada, extrayendo las cantidades de las certificaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del IEE, mediante las cuales arrojan los datos de las actas de escrutinio y cómputo capturadas en el Sistema de Registro de Actas para el cómputo estatal de la elección de Gobernador.

CASILLA																						Cand No Reg.	Votos Nulos	
59 C1	157	115	16	49	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0
192 C4	147	142	45	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	5
204 B	126	109	28	2	3	3	4	9	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	23	1	7
241 C1	83	69	23	6	15	33	8	27	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	51	0	10
355 B	31	52	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	8
356 B	74	59	4	5	2	3	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7
369 B	80	24	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
383 B	76	52	3	1	3	5	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	8
536 C1	134	40	3	3	1	7	4	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	47	0	7
540 C1	139	55	1	3	1	5	6	6	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	39	5	0
564 C2	156	31	5	1	1	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1	2
573 C1	100	39	1	0	1	3	0	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39	1	6
585 B	118	48	3	2	4	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	13
605 C1	167	53	3	0	3	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	6
650 B	137	41	4	0	11	0	5	7	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	61	0	6
668 B	87	34	0	1	4	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	5
704 C1	148	28	1	0	0	4	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	65	0	4
724 B	111	38	4	1	2	2	5	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	43	0	11
813 B	213	105	2	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	5
850 B	136	65	3	1	1	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	4
852 E1C5	132	41	0	0	1	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	6
859 B	190	72	0	4	2	5	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	8
871 B	171	75	0	3	5	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	12
876 C2	126	51	0	6	1	3	4	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	50	1	2
878 C1	136	55	6	3	9	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	6
881 C1	103	55	0	0	5	5	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	8
882 E2	74	44	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	8
883 B	158	58	3	4	5	3	4	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	81	0	12
883 E1C2	143	76	4	6	3	2	4	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	56	0	8
884 C3	124	38	2	1	6	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	5
993 C1	67	41	15	0	2	3	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	1	5
999 B	81	43	11	1	3	2	11	9	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	84	0	8

efectos legales; ello, de conformidad con el artículo 379, numeral 1, inciso b), de la Ley.

Por lo tanto, la votación que se anulará a los partidos políticos, coalición, candidatura independiente, candidatos no registrados y votos nulos, queda de la siguiente manera:

Votos anulados por candidatos			
Candidatos	Votación anulada		
		Número	Letra
Javier Corral Jurado		8,941	Ocho mil novecientos cuarenta y uno
Enrique Serrano Escobar		7,495	Siete mil cuatrocientos noventa y cinco
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río		423	Cuatrocientos veintitrés
Cruz Pérez Cuellar		732	Setecientos treinta y dos
Francisco Javier Félix Muñoz		765	Setecientos sesenta y cinco
José Luis Barraza González		4,907	Cuatro mil novecientos siete
Candidatos no registrados		74	Setenta y cuatro
Votos Nulos		920	Novecientos veinte

De acuerdo a las citadas cantidades de votación anulada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382, numeral 1, de la Ley, este Tribunal procede a modificar los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de gobernador, para quedar en los términos siguientes:

Recomposición				
Candidato		Computo Anterior	Votación Anulada	Recomposición
Javier Corral Jurado		517,018	8,941	508,077
Enrique Serrano Escobar		400,515	7,495	393,020
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río		29,086	423	28,663
Cruz Pérez Cuellar		35,376	732	34,644
Francisco Javier Félix Muñoz		30,976	765	30,211
José Luis Barraza González		242,756	4,907	237,849

SUP-JRC-317/2016

Candidatos no registrados	4,136	74	4,062
Votos Nulos	43,027	920	42,107

En consecuencia, ante la recomposición del cómputo estatal correspondiente a la elección de Gobernador del estado, se debe dar vista, con copia certificada de esta sentencia al *Consejo* para todos los efectos legales procedentes.

Ahora bien, tomando en consideración que la anulación de la votación recibida en las casillas indicadas y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo estatal, no traen como consecuencia un cambio en la elección de Gobernador del estado lo procedente es **confirmar** el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez al candidato postulado por el *PAN*.

VII. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se **declara la nulidad de la votación** recibida en las ciento siete casillas descritas en el apartado VI de la presente resolución.

SEGUNDO. Se **modifican** los resultados consignados en el acta de cómputo estatal para quedar como se establece en el apartado VI de la presente resolución.

TERCERO. Se **confirma** el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de Gobernador a favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional.

TERCERO. Remítase al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, copia certificada de la presente sentencia, a efecto de que dicha autoridad esté enterada de la modificación efectuada a los resultados del acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador del estado de Chihuahua, para los efectos legales a que haya lugar.

[...]

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, los ahora demandantes promovieron juicio de revisión constitucional electoral en contra del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, a fin de controvertir

la sentencia mencionada en el apartado seis (6) del resultando que antecede.

III. Recepción de expediente. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio identificado con la clave **PSG/523/2016**, mediante el cual, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua rindió el respectivo informe circunstanciado y remitió el escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, presentado por los enjuiciantes, así como la documentación relacionada con el medio de impugnación.

IV. Turno a Ponencia. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente por ministerio de ley de esta Sala Superior acordó integrar el expediente identificado con la clave **SUP-JRC-317/2016**, con motivo del juicio de revisión constitucional electoral precisado en el resultando segundo (II) que antecede; asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Recepción y radicación. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la recepción del expediente del juicio al rubro indicado, así como su radicación, en la Ponencia a su cargo.

VI. Comparecencia de tercero interesado. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral, al rubro identificado, compareció el **Partido Acción Nacional**, por conducto de sus representantes, propietario y suplente, ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con el carácter tercero interesado.

VII. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado Flavio Galván Rivera, al considerar satisfechos los requisitos de procedibilidad, admitió la demanda de juicio de revisión constitucional electoral al rubro identificado.

VIII. Cierre de instrucción. Al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el Magistrado Instructor, en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el juicio al rubro identificado, con fundamento en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso d) y 199, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 86, párrafo 1, y 87, párrafo 1,

inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, al resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave **JIN-230/2016**, que entre otras cuestiones, modificó los resultados del acta de cómputo estatal y confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez correspondiente a la elección de Gobernador de esa entidad federativa, a favor de Javier Corral Jurado, candidato postulado por el Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. Conceptos de agravio. De la lectura integral del escrito de demanda, se constata que los actores expresan los siguientes conceptos de agravio:

[...]

CONCEPTOS DE AGRAVIOS:

PRIMERO.- APRECIACION INCORRECTA DE LA CAUSA DE PEDIR.

La sentencia que se combate viola lo previsto en los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 37 de la Constitución Local, 293 y 332 de la Ley Electoral del Estado, pues estando sujeto el Tribunal a los principios de legalidad y certeza, no abordó el estudio correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance y del cual se allegó, para resolver la verdadera controversia que se le estaba planteando.

Cuando la responsable entra al análisis de una de las causales de improcedencia invocada por el Partido Acción Nacional en su calidad de tercero interesado, señalando se

SUP-JRC-317/2016

había omitido por el actor Partido Revolucionario Institucional, impugnar los acuerdos donde el Instituto estatal Electoral había determinado el número de boletas y el plan de traslado, resguardo y distribución de las mismas, el Tribunal señaló que conforme a la controversia planteada se alegaba **la omisión de la aprobación de dichos acuerdos** y por tanto se encuentra en contraposición con la causal de improcedencia aducida por el tercero **interesado**.

Pero antes de que concluyera desechar la causal de improcedencia invocada, visible al final de la foja 6 y principio de la 7, se encuentra esta afirmación de la autoridad:

(Transcripción)

En este párrafo la responsable reconoce la necesidad de verificar si de la actuación del órgano electoral se desprende la violación de los principios de certeza y legalidad que deben garantizarse en toda elección democrática y esto se trae a colación debido a que la responsable pese a reconocer que debe verificar estos principios, al analizar los agravios invocados en nuestra demanda de inconformidad, lo hizo de manera aislada, restrictiva e incongruente, lejos de que mediante un estudio integral de la causa de pedir y de las constancias y demás material probatorio del que se allegó, analizara a la luz de los principios constitucionales que invocamos en los agravios si aquéllos se habían verificado, se limitó a darnos una respuesta parcial y superficial, que se traduce en indebida motivación y en violación al principio de exhaustividad.

Resulta aplicable la siguiente tesis:

Jurisprudencia 43/2002

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe).

En concordancia con la tesis de jurisprudencia antes citada, se destaca la siguiente tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que a nuestro juicio detalla en qué se materializa el principio de exhaustividad que todo Tribunal debe de cumplir en sus fallos, señala de manera muy atinada que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la

asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, de ahí que se habrá de demostrar que el estudio de los agravios fue parcial, no se analizaron debidamente las pruebas bajo el marco normativo aplicable, buscando si los principios rectores del proceso se habían cumplido y desde luego que se hicieron valoraciones genéricas de las pruebas, concluyendo que eran correctas tales o cuales actas sin motivar adecuadamente dicha conclusión y por otra parte se ocultaron elementos de prueba, omisiones graves y generalizadas que ni siquiera son mencionadas en el fallo, pese a que son ostensibles.

La tesis que se invoca como referencia de lo dicho anteriormente, se transcribe a continuación:

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. (Se transcribe).

Bajo esta línea argumentativa, pareciera que la responsable tiene la intención de ser exhaustiva en su estudio, pues también cuando aborda en el punto 1.3 de las consideraciones relativas a las **causales** de improcedencia invocadas por el Partido Acción Nacional donde dicho órgano político señaló lo siguiente según se reseña en el fallo que se impugna:

(Transcripción)

A lo anterior la responsable argumenta en el fallo lo siguiente, donde reconoce la necesidad de valorar la causa de pedir que sustente los agravios esgrimidos:

(Transcripción)

Al pie de página la responsable cita la tesis de Jurisprudencia 3/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5., sin embargo al hacer la síntesis de agravios se empieza a advertir que lo hace de manera aislada, denotando que el estudio de la sentencia se hará de manera restrictiva solo analizando los temas que puntualizan sin advertir que del informe circunstanciado expedido por el Instituto Estatal

SUP-JRC-317/2016

Electoral y documentos que acompañó y demás caudal probatorio del que se allegó se coligen violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores del proceso electoral.

Nuestra causa de pedir es la violación a la distribución de competencias constitucionales conferidas al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua por el artículo 41 de la Carta Magna, que se traduce en un sistema electoral complejo, con dos marcos normativos aplicables, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que por obvias razones en muchas ocasiones colisionan y es precisamente cuando sucede esto, debidamente comprobado donde se puede generar la prueba de la violaciones a los principios constituciones de certeza, legalidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, que es precisamente de lo que nos quejamos, de haberse violado flagrantemente en cuestiones primordiales del proceso electoral, para ello explicamos el tema de la impresión, distribución y resguardo de boletas electorales y pusimos en evidencia la violación a las normas previstas en la Ley Electoral del Estado en asuntos tan importantes como el enfajillado de boletas, la conformación y entrega de paquetes electorales, caso de recuento en las Asambleas Municipales y para ello señalamos que se advertía este “desorden” electoral frente al cúmulo de inconsistencias aritméticas en las actas de casilla, sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla y entrega de paquetes, siendo evidente que la invasión de facultades y la negligencia mostrada por el órgano electoral en la impresión de boletas, se refleja en todas las demás actividades electorales, trastocando los principio constitucionales que invocamos en la demanda, inclusive el recién introducido de máxima publicidad, resultando evidente que la impresión de boletas en “Talleres Gráficos de México” y su traslado a Chihuahua se hizo bajo el principio de máxima opacidad, no existe constancia alguna del órgano electoral donde haya dado seguimiento a dicha actividad. ¿por qué?, realmente es por la intromisión del Instituto Nacional Electoral prácticamente en todas las actividades del órgano local, de ahí que quien materialmente estaba realizando la impresión era el Instituto Nacional Electoral, aunque se pretenda justificar el órgano local, con contratos y convenios, pero ello converge en lo dicho en nuestra causa de pedir, no se respetó la distribución de competencias prevista en el artículo 41 Constitucional.

La siguiente tesis aunque referida a una controversia constitucional, pone de manifiesto que basta con expresar la causa de pedir para que se analice un punto de constitucionalidad, como el que planteamos que tiene su origen

en la invasión de facultades del Instituto Nacional Electoral en materias y actividades propias del órgano local y fuera de los casos que la Ley le permite, evadiendo el Tribunal su responsabilidad de resolver sobre estos temas, que en su nivel pudieron dilucidarse declarando la aplicación de la Ley Electoral local, y resolviendo en consecuencia con apego a la misma, y no en base de convenios, acuerdos y lineamientos inconstitucionales:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. (Se transcribe).

Nos permitimos transcribir lo agravios expresados en el juicio de inconformidad, no con el propósito de repetirlos en esta Alta Instancia, sino en evidenciar que la reseña de los agravios hecha por la responsable es restrictiva y por ello cuando abordó su estudio lo hizo también restringido, sin profundizar en el tema de invasión de facultades, no obstante que el caudal probatorio que tenía a su disposición le indicaba que lo sucedido en el proceso electoral era más grave de lo que pudimos advertir en escasos 5 días que se tienen para la interposición del juicio de inconformidad, pero si se leen nuestros agravios en sentido amplio, se advierte que invocamos como causa de origen la invasión de competencias y la violación del artículo 41 Constitucional, que trascendieron a la violación sistemática y grave de los principios rectores del proceso electoral, y expusimos los casos concretos que teníamos a nuestra disposición tendientes a demostrar que en la preparación de la jornada y durante la misma, esa invasión de facultades, descuido y desorden por falta de certeza, se tradujo en igual número generalizado de inconsistencias, es decir las inconsistencias no son la base del agravio, sino la invasión de facultades y falta de certeza, las inconsistencias e irregularidades son el síntoma, no la enfermedad, de tal manera que insistimos que nuestra causa de pedir se restringió y no se apreció en sus verdaderos alcances:

(Transcripción)

El Tribunal responsable hizo la siguiente reseña que en principio no tenía por qué transcribir nuestros agravios y la reseña aunque restringida y con perspectiva de nulidad de casilla, no tendría porque se violatoria de nuestros derechos, sin embargo, este planteamiento se tradujo en indebido y omisión de estudio pleno de nuestros agravios, al hacerlo de manera aislada, pues la autoridad parte de la invocación de causales de nulidad de casilla en lo individual, y el asunto se

SUP-JRC-317/2016

planteó de manera inversa, invasión de facultades, violaciones graves y sistemáticas que se reflejaron en un principio en la impresión de boletas, pero que trascendieron a toda la cadena de custodia de las mismas y se reflejaron además en las múltiples inconsistencias que se presentaron en la jornada y después de ella, en cambio la responsable pretende acotar la invasión de competencias solo al tema de las boletas electorales como se advierte a continuación:

(Transcripción)

Aunque ya se ha sostenido que la responsable entra al estudio de las causales de nulidad por casilla a partir del análisis que hace de una glosa de la individualización de casilla, en el numeral 3 del apartado V. ESTUDIO DE FONDO, de las fojas 18 a la 99 y concluye lo siguiente:

(Transcripción)

Es evidente que con la consideración anterior el juzgador no está valorando que cuando se individualizaron las casillas con sus errores aritméticos, se señaló previamente lo siguiente en nuestros agravios:

(Transcripción)

Después de la anterior manifestación se individualizaron las casillas a las que tuvimos acceso hasta ese momento según las actas con las que disponíamos; luego en cada una de las casillas se insertó el siguiente argumento:

(Transcripción)

Al señalar que hubo múltiples sustituciones en los funcionarios de casilla especificamos que aunque no generaban la nulidad en su caso por no estar fuera de sección, no estuvieron debidamente capacitados y por ende existieron múltiples irregularidades, pero además se debe advertir que el órgano electoral consistente en la mesa directiva de casilla actúa desde que recibe el paquete electoral de la Asamblea Municipal a través de su Presidente antes de la jornada electoral, hasta que éste lo entrega de nueva cuenta a la Asamblea Municipal después de su clausura, y habrá de demostrarse que del caudal probatorio existe constancia que prueba la intervención de personas ajenas a la mesa directiva de casilla en este proceso ciudadano.

Antes de individualizar las casillas cuyo paquete fue entregado extemporáneamente, señalamos lo siguiente, lo cual se traduce a que el planteamiento no era solamente la nulidad de las casillas respectivas, sino las irregularidades sistemáticas y generalizadas que se habían presentado:

(Transcripción)

A fojas 110 y 111 la responsable señala en sus consideraciones lo siguiente, dando a entender que hubo deficiencia en la expresión de agravios, sin embargo, lo que realmente sucede es que está apreciando la causa de pedir de manera incorrecta y desde luego que cuando dijo que iba suplir su deficiencia, en ese supuesto evento no lo hizo, pero además al advertir las violaciones constitucionales por colisión de normas y competencias, no se percata u omite su estudio, resultando que no es cierto lo declarado en el fallo y que se inserta a continuación:

(Transcripción)

SEGUNDO.- VIOLACIONES PROCESALES QUE TRASCENDIERON AL FALLO.

Al desechar el incidente mediante el cual se objetaron las actas circunstanciadas de entrega de boletas a las Asambleas Municipales se violaron los artículos 16 y 17 Constitucionales, en relación con el artículo 332, 387, 388 y 389 numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral del Estado y 310 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación a la materia, de acuerdo al artículo 305, numeral 4) de aquél ordenamiento.

Con fecha 6 de julio del año en curso, se presentó incidente de objeción de diversa documentación presentada por el órgano local electoral en su informe circunstanciado, en el cual señalábamos una serie de irregularidades formales en el levantamiento de las actas levantadas por las Asambleas Municipales y el propio Instituto Estatal Electoral, que ponían en duda la certeza de los datos asentados en las mismas, pues desde nuestra demanda advertimos al Tribunal de la actuación opaca y falta de legalidad y certeza en el levantamiento de las actas en los cómputos, que fue una constante en la actuación del Instituto estatal Electoral, al no ceñirse a las reglas previstas en la Ley Electoral del Estado para las diversas actuaciones que tenía que desplegar y que finalmente analizando las actas de la jornada que se adjuntaban en dicho informe se advertía la persistencia de una inconsistencia numérica en materia de violetas recibidas en casilla:

(Transcripción)

A lo anterior el Magistrado Instructor acordó el 11 de julio del año en curso lo siguiente, desechando el incidente propuesto y las pruebas aportadas tendientes a objetar las documentales exhibidas por el Instituto Estatal Electoral en su informe circunstanciado:

(Transcripción)

SUP-JRC-317/2016

Con la actuación anterior, el tribunal Responsable nos dejó en estado de indefensión al no poder ofrecer pruebas en relación a las objeciones planteadas, destacando que en su actuación se evidencia lo que hemos dicho en relación a la incorrecta apreciación de la causa de pedir, pues pareciera que se quiso acotar el tema de la incertidumbre e ilegalidad a las impresión de las boletas electorales, cuando fuimos muy claros en señalar que toda la cadena de custodia estaba violentada de manera sistemática, y estas actas exhibidas al informa circunstanciado así lo evidenciaban.

Existen indicios de desconfianza de la veracidad de las constancias y certificaciones de los actos de traslado, entrega y distribución de boletas que fueron reseñados en el escrito incidental, debidamente correlacionados con las disposiciones legales violentadas, precisamente la incertidumbre generada con la producción y distribución de las boletas electorales sin vigilancia del órgano electoral da origen a nuestra objeción, ya que ello sigue trascendiendo a todas las etapas del proceso, se siguieron cometiendo irregularidades, de tal manera que atendiendo a los documentos que fueron exhibidos, tratando de demostrar por la autoridad responsable que su actuar fue ajustado a la Ley, exhibe diversas actas y constancias, que de suyo no se conocían, pues precisamente nos hemos dolido de la falta del plan de distribución que debieron acordar en el Consejo Estatal y de la falta de entrega de actas, de tal manera que es hasta momento, donde conforme al artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación a la materia, de acuerdo al artículo 305, numeral 4) de la Ley Electoral del Estado se realiza la objeción de dichas pruebas, pues la objeción no se encuentra regulada de manera especial en la ley de la materia:

(Transcripción)

Tomando en cuenta que el Magistrado Instructor basó el desechamiento en lo siguiente:

(Transcripción)

Aunque de suyo en las pruebas desechadas, consideramos que nos ubicamos en la hipótesis de excepción prevista al artículo 323, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado, estimamos también conforme al artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se debió admitir el incidente, a fin de que no se nos vulnere el derecho de prueba, pues se trata de una flagrante violación intra procesal, reclamable en contra de la sentencia definitiva, pues como le hemos vendido sosteniendo, los órganos electorales no han entregado al documentación que ahora dicen existía para documentar los procesos de producción, traslados

y distribución de boletas electorales, por ello es el momento correcto de ofrecer las pruebas que acreditarán la falta de comunicación de dichos actos, conforme a lo que la Ley Electoral de Chihuahua prevé para dar certeza jurídica a los mismos, así como la constatación de que en los resultados electorales obtenidos de las actas que se adjuntaron al informe circunstanciado, se refleja la incertidumbre con el actuar caótico del órgano electoral, recordemos que en la demanda se precisó que nuestros análisis aritméticos y por casilla se hacían de manera limitada sobre un número parcial de actas, que son con las que contábamos en ese momento, debiéndose advertir la dificultad probatoria y de análisis que enfrentamos, pues solo tenemos 5 días para integrar la demanda y en cambio la autoridad responsable con toda la infraestructura tiene mayor oportunidad para integrar el informe circunstanciados, y sin embargo a lo largo del proceso jurisdiccional, se le tuvo que requerir en varias ocasiones por innumerables retrasos y faltantes en la entrega de la documentación que se le requirió por el Magistrado Instructor.

Nótese por ejemplo, que ese Tribunal desechó el juicio de inconformidad promovido en contra de la elección de ayuntamiento de Juárez, bajo el argumento de extemporaneidad, debido a que supuestamente el cómputo había concluido el 10 de junio y el juicio se presentó el día 16, en esa demanda también nos dolimos de la falta de entrega de actas de cómputo, lo que finalmente se corroboró

Como referencia se cita la sentencia dictada por la Sala regional en el expediente SG-JRC-76/2016, que aunque referida a la elección de ayuntamiento de Juárez, la prueba de que no nos entregaban las actas de recuento son las mismas que se utilizaron en el presente juicio, por lo que es incongruente que con estos antecedentes el tribunal me indique que debí señalar las casillas que fueron recontadas, si de ello no tenía conocimientos, hasta que del material probatorio allegado al proceso lo obtuve físicamente:

(Transcripción)

El Instituto Estatal Electoral trató de demostrar que entregó el número de boletas correcto a cada Asamblea Municipal, y que éstas a su vez hizo lo propio a cada casilla, pero hemos demostrado que en esa secuencia ideal que señalan, no se apegaron a los procedimientos electorales, ni a los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad, al contrario fue un desastre procesal, que ahora intentan reconstruir, y en este ejercicio viene nuestra réplica probatoria, por ello tiene el carácter de superviniente, ya que se exhiben

SUP-JRC-317/2016

documentos que nos debieron haber entregado, o documentos que debieron ser precedidos de una convocatoria debidamente notificada, luego entonces si la objeción se basa en esos defectos, las pruebas sí son pertinentes contrario a lo señalado por el Magistrado Instructor.

Es evidente que su acuerdo nos dejó en estado de indefensión, y por ello puede reclamarse en esta vía de juicio de revisión constitucional en contra de la sentencia definitiva para el caso de que dichas violaciones trasciendan al fallo, como aconteció en el caso, pues en la sentencia al estudiar la casual genérica de nulidad, la responsable concede valor probatorio a las referidas actas sin valorarlas con profundidad en relación a las formalidades legales violentadas y a su contenido integral, resultando aplicable la siguiente tesis:

Jurisprudencia 1/2004

ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO. (Se transcribe).

La siguiente tesis aunque referida a la materia laboral, pone en evidencia, **que si la ley permite la objeción de pruebas, es correcto y pertinente permitir y proveer el desahogo de pruebas para comprobar las objeciones planteadas**, de lo contrario como ya se ha dicho, se nos deja en estado de indefensión (APLICACIÓN POR ANALOGÍA):

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL, SUS REQUISITOS CUANDO TIENDE A JUSTIFICAR LA OBJECIÓN A UNA DOCUMENTAL. (Se transcribe).

La tesis que invocamos en materia laboral es aplicable por analogía conforme a la siguiente tesis:

ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (Se transcribe).

La objeción formulada contiene consideraciones jurídicas importantes para la valoración de las actas de entrega de boletas y a pesar de que el Magistrado Instructor en el acuerdo donde desechó el incidente nos tuvo haciendo las manifestaciones pertinentes, no las tomó en cuenta, no obstante que es su deber valorar las pruebas que obran en el expediente y sin embargo de las actas de entrega de boletas solo hay una mención genérica ausente de motivación en el apartado “3.2.4.4 Omisión en la aprobación del plan de impresión y distribución así como la supervisión de la impresión de las boletas, su traslado y resguardo”, la responsable solo atina a señalar lo siguiente en la foja 433 del fallo:

(Transcripción)

Como se advierte claramente la mención genérica de que las actas de entrega de boletas en Asamblea Municipal son correctas no es suficiente para motivar el fallo, de tal manera que se demuestra que el desechamiento de la objeción se tradujo en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia.

Es importante destacar que en el análisis que se hace en la sentencia dictada en el JUICIO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE: JIN-213/2016 ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL TERCERO INTERESADO: PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO RESPONSABLE: ASAMBLEA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA MAGISTRADO: CÉSAR LORENZO WONG MERAZ SECRETARIA: MARTA ALEJANDRA TREVIÑO LEYVA y MARIA DEL CARMEN URÍAS PALMA, consultable en la página oficial del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en la dirección de internet: http://techihuahua.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/SENTENCIA-JIN-213_2016.pdf Se valora el acta circunstanciada de resguardo de paquetes y aunque el caso es distinto, lo que queremos destacar que en un asunto de menor trascendencia que el de la elección de Gobernador el estudio de las actas circunstanciadas es profundo y serio, a tal grado que los lleva a concluir que no se cumplió el principio de certeza y anular la elección, los cito:

(Transcripción)

El mismo Magistrado ponente entra al análisis del acta circunstanciada de computo municipal en la elección de ayuntamiento de Ignacio Zaragoza y concluye que no puede tener valor y que viola el principio de certeza porque no está circunstanciada de manera pormenorizada, es el mismo Magistrado que no atendió a nuestras objeciones, esa misma acta de Ignacio Zaragoza es la que contiene lo relativo al cómputo municipal de la elección de Gobernador y desde luego

tiene las mismas deficiencias, pero eso sucedió en todos los actos importantes y trascendentes, y de las actas de entrega de boletas que nos ocupan adolecen de la falta de veracidad por no estar debidamente circunstanciadas, lo cual hicimos notar en nuestro escrito incidental, pero más allá de este tópico incidental, ¿Qué no es grave que no exista acta circunstanciada del proceso de impresión de las boletas?, ¿Qué no es grave que no exista acta circunstanciada del traslado de las boletas de Talleres Gráficos de México al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua?, resulta que en el fallo que se impugna les pareció suficiente sustentar lo siguiente: **“4. En la recepción y resguardo de las boletas electorales existieron actas de entrega y recepción, en las cuales se señaló la documentación recibida; asimismo, con las especificaciones previstas para ello, se instaló una bodega electoral en las Asambleas. la cual estuvo vigilada por personal de la propia autoridad responsable y policía municipal.”**

Es indudable que la declaración vertida por la responsable al analizar las pruebas documentales consistentes en las actas de entrega de boletas a las Asambleas Municipales es carente de motivación y por tanto viola los artículos 16 y 17 Constitucionales, en relación con el artículo 332, numeral, inciso d) de la Ley Electoral del Estado que prevé que en toda sentencia se deben examinar y valorar todas las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas y, en su caso, las ordenadas por la autoridad resolutora, como resultado de las declaraciones y diligencias y por tanto es evidente que no valoró nuestras objeciones, tendientes a evidenciar la falta de valor probatorio por la falta de circunstanciación y de ello resulta que se trata de una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, pues aunque en la foja 15 se señaló lo siguiente, **la realidad es que nuestras objeciones 02 fueron tomadas en cuenta, pese a que había determinado hacerlo, por lo que en este punto el fallo es incongruente internamente:**

(Transcripción)

TERCERO.- ENTREGA DE PAQUETES EN FORMA EXTEMPORANEA.

La sentencia que se combate viola lo previsto en los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 37 de la Constitución Local, 293 y 332 de la Ley Electoral del Estado, pues estando sujeto el Tribunal a los principios de legalidad y certeza, no abordó el estudio correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue

omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance y del cual se allegó, para resolver la verdadera controversia que se le estaba planteando, además de aplicar incorrectamente los artículos 51, numeral 1), 174, numeral 1), 185, 383, numeral 1, incisos b) y e), incisos b) y e), 384 numeral 1, inciso a), 385 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Al entrar al estudio de los agravios relativos a la entrega de paquetes extemporáneamente, en el punto “3.1.1 Entregar a las Asambleas, sin causa justificada, el paquete electoral que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos de ley.”, del fallo, visible a foja 100, la responsable analiza la irregularidad invocada a manera de nulidad de casilla, sustentada en la siguiente hipótesis legal:

(Transcripción)

Lo anterior lo relaciona correctamente con lo previsto en el artículo 174 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua que señala:

(Transcripción)

La autoridad responsable hace una serie de razonamientos previo a entrar al estudio de la irregularidad invocada, pero dentro del marco normativo anterior, prácticamente para acotar la irregularidad determinante a que el paquete muestre alteraciones y la votación haya sufrido alguna diferencia.

Es de destacarse que aunque la responsable no lo advirtió, el artículo 174 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a diferencia de otros ordenamientos electorales, incluyendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, exige que el Presidente de Casilla entregue el paquete personalmente, conclusión a la que se llega, cuando el legislador incluyó la palabra “acompañados” en la siguiente expresión legislativa: “... los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad y acompañados por los funcionarios y representantes que deseen hacerlo, ...”, acompañado, es un adjetivo que indica que algo o alguien va junto con algo o alguien, por ejemplo carne acompañada de papas, o el Juez acompañado de su Secretario de Acuerdos, en fin, es claro y terminante que debe ser el Presidente de Casilla el que entregue el paquete sin perjuicio de que vaya con alguien, ya sean funcionarios de casilla o representantes de partido, pero no existe disposición alguna que lo releve de esa obligación y se le confiera a alguna otra persona.

SUP-JRC-317/2016

Se destaca que las atribuciones conferidas en las leyes electorales a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, al ser éstos una autoridad electoral son normas jurídicas fundamentales que no pueden tener variación 90 días antes de que inicie el proceso electoral, según lo previene el artículo 105 de la Constitución Federal, tal y como lo señala la siguiente tesis de jurisprudencia que dice que no se puede variar por ninguna norma sin importar su jerarquía:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES”, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Se transcribe).

Lo cual en la especie no aconteció, pues las violaciones constitucionales en materia de ejercicio de facultades por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fueron tan graves que para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/2016, de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan una serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de atracción, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales. que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre, violando los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 173 y 174 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

(Transcripción)

Lo que sucedió es que al modificar legal y materialmente el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron

actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral.

Señalamos en el agravio respectivo que la responsable no aprecia correctamente la causa de pedir y que aborda el estudio de las irregularidades de entrega extemporánea de paquete como si el planteamiento fuese la anulación de casillas únicamente, sin advertir, que se le señaló que la actuación ilegal del órgano electoral se había traducido en múltiples irregularidades antes, durante y después de la jornada electoral, y que la entrega extemporánea había sido generalizada.

Es importante señalar que la determinancia no siempre se mide en número de votos, pues esa Sala Superior se ha pronunciado en que la magnitud de la violación puede ser cuantitativa o cualitativa, de tal manera que una irregularidad puede no ser determinante en un análisis individual de casilla, pero su implicación sistemática y generalizada puede constatar la violación al principio de certeza, máxime si se adminicula con otras irregularidades generalizadas y sistemáticas.

Es así como la responsable olvida que estamos sosteniendo que existe la nulidad de elección basados en irregularidades generalizadas, según lo señala el artículo 385 de la Ley Electoral del Estado, en su numeral 2:

(Transcripción)

La violación alegada, debe ser sustancial, pero ello no indica que necesariamente debe de medirse de forma aritmética en relación a los votos, pues la magnitud de la violación, para determinar si es sustancial puede ser cuantitativa o cualitativamente calificada por los Tribunales.

Bajo esta hipótesis una irregularidad en casilla puede ser o no ser determinante, pero eso no la descalifica o califica para que se valore la calidad de la elección en relación a los principios constitucionales que deben concurrir para que se valide.

Ahora bien es correcto que la responsable analice la irregularidad bajo la óptica de determinancia en casilla, pero ahí no debió agotar su tarea, pues una elección se puede anular porque las irregularidades determinantes en casilla se acumulen en un 20% o más, según la hipótesis prevista en el artículo 384 de la Ley Electoral del Estado:

(Transcripción)

La disposición anterior no guarda estricta relación con la nulidad genérica del artículo 385, pues como lo señalé, una irregularidad determinante en casilla se acumula y puede generar la nulidad de la elección, pero una irregularidad

sustancial, se mide de manera diferente a la luz de los principios constitucionales, de legalidad y certeza que deben concurrir en una elección, cuya determinancia puede ser medida cualitativa o cuantitativamente.

No obstante que es claro que la responsable analiza la irregularidad respectiva bajo la óptica de determinancia en casilla y no bajo la perspectiva que se planteó en la causa de pedir, como violaciones graves y sistemáticas que fueron generalizadas, invoca la ratio legis de la formalidad en la entrega del paquete señalando en la foja 103 del fallo:

(Transcripción)

Cito lo anterior porque coincide plenamente con el argumento que se contiene en la Tesis XXXVIII/97, que señala que la entrega del paquete por la autoridad electoral competente, implica la transferencia de la responsabilidad y manejo del proceso electoral de un nivel, que son las mesas directivas de casilla, al siguiente que son los Consejos Municipales, Distritales y Estatales, así como el paso de un momento electoral -la jornada electoral- a otro diferente que es el cómputo municipal, todo lo cual contribuye a los propósitos de certidumbre, legalidad, objetividad, veracidad y oportunidad que son consustanciales a esta etapa.

Se inserta la tesis respectiva como referencia, aunque más adelante precisaremos su implicación en el caso de manera más puntual:

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

En las consideraciones previas al estudio, la responsable culmina a fojas 104 y 105 del fallo, señalando, que la irregularidad en estudio, solo puede ser determinante, si cada paquete muestra alteraciones y sí se acredita su determinancia en el resultado aritmético, lo cual confirma su perspectiva de análisis acotada a la nulidad en casilla.

Ahora bien en los apartados “3.1.1.2 Elementos mínimos para el estudio de la causal”, y “3.1.1.3 Análisis de la causal en relación con las casillas impugnadas” la responsable hace una serie de razonamientos indicando que el planteamiento de la irregularidad fue incorrecto, porque no se señaló en nuestra

demanda la exacta ubicación de la casilla en el marco geopolítico del territorio del Estado y la distancia existente entre la misma y la Asamblea Municipal casilla por casilla, así como más adelante menciona que la hora de llegada a la que aludimos, y que fuera tomada del registro de resultados preliminares que publicó ese dato, no era válida. Estas apreciaciones son incongruentes con lo ya dicho por la autoridad, debido a que había manifestado atender a la dificultad probatoria que enfrenta el actor, en aras de garantizar el pleno acceso a la justicia, pero además es incongruente con la sentencia en sí misma, pues finalmente entra al estudio de la irregularidad planteada, aunque insistimos agota la materia en el estudio individual de casilla, sin hacer una valoración integral del caudal probatorio, como más adelante se precisará.

La siguiente tesis pone de manifiesto que lo señalado por la responsable en extrema acuciosidad que ni siquiera se despliega en la sentencia no es necesaria en todos los casos, sobre todo cuando estamos sosteniendo que la irregularidad es generalizada y aun así, en lo que tuvimos a nuestro alcance individualizamos las casillas, que además en documento consistente en acta circunstanciada de entrega de paquete a la Asamblea Municipal (recibo de paquete) no era de nuestro conocimiento hasta que fue requerido por el Magistrado Instructor y agregado al caudal probatorio:

Tesis XXXIII/2004

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PAQUETES. SU IMPUGNACIÓN GENÉRICA HACE INNECESARIA LA ESPECIFICACIÓN DE LA CASILLA. (Se transcribe).

En relación a los resultados preliminares que se encuentran publicados en la página oficial del Instituto Estatal Electoral es de señalar que esa misma fuente sí tiene valor probatorio, pues además de estar publicada en el sitio oficial del órgano electoral, es utilizada por ejemplo por el artículo 185 numeral 9), de la Ley Electoral del Estado para efecto de un recuento total, cuando del programa de resultados preliminares se arroja una diferencia menor del 1 %, de ahí que aunque es informativo sí tiene efectos indiciarios, sobre todo ante una situación generalizada.

Cabe señalar que conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia, las publicaciones en páginas oficiales de los

SUP-JRC-317/2016

organismos públicos constituyen un hecho público y notorio que debe ser invocado de oficio por la autoridad jurisdiccional:

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. (Se transcribe).

Independientemente de lo anterior, la responsable hace constar lo siguiente, que pone de manifiesto la existencia de diversas documentales públicas, que debió haber valorado con exhaustividad y que omitió hacerlo:

(Transcripción)

De lo anterior la responsable reconoce tener el encarte, constancias de clausura y actas de recepción, sin embargo no hizo la valoración integral de las mismas, bajo los principios de la lógica y la sana crítica, llegando a conclusiones absurdas y arbitrarias, determinando que sólo los paquetes que llegaron 12 horas después de la clausura habían violentado la norma legal, cuando la Ley señala los supuestos respectivos en el artículo 174:

(Transcripción)

En este contexto la responsable sin fundamentación alguna y habiendo declarado que va a entrar al estudio de la irregularidad, señala que no puede determinar si se aplica la hipótesis de entrega inmediata, porque no puede saber si la casilla está ubicada dentro de la cabecera del municipio.

El Código Municipal en su artículo 11 señala cuántos son los municipios del Estado y su cabecera está ubicada en una ciudad, a diferencia de las elecciones distritales, donde varios municipios se concentran en un distrito, la división del órgano electoral local esta precisada en 67 municipios que coinciden con las 67 ciudades y/o zonas urbanas que constituyen su cabecera y es precisamente donde se ubican las Asambleas Municipales, que actuaron como centro de acopio de los paquetes electorales.

(Transcripción)

Por su parte la Ley Electoral del Estado señala:

(Transcripción)

Bajo estas condiciones se puede concluir que la cabecera municipal define si la casilla es urbana o rural, ya que el criterio de clasificación del Instituto Nacional Electoral es que si la casilla se ubica dentro de la ciudad o del pueblo cabecera, se trata de una casilla urbana y por tanto su tiempo de traslado debe ser inmediato, esto es un hecho público y notorio, y si se advierte que por ejemplo en los dos principales centros urbanos del Estado, Chihuahua y Juárez existen un cúmulo de paquetes que tardaron varias horas en llegar a la Asamblea Municipal, se percibe una irregularidad generalizada, pues nuestras ciudades más grandes, no se tarda más de dos horas para cruzarlas de lado en condiciones de tráfico pesado, menos en un domingo por la noche, esto es del conocimiento público y se entiende y da por sabido pro cualquier persona con pensamiento lógico. Si a esto le agregamos que en materia electoral las casillas se ubican casi siempre donde mismo, y su clasificación en urbana y rurales es de todos conocida, mucho más por expertos en la materia, debido a que dicha clasificación tiene su base en los trabajos registrales del Registro Federal de Electores, pero además en el encarte que dice la autoridad jurisdiccional tuvo a su disposición se señala esa calidad de casilla.

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. (Se transcribe).

Si la autoridad hubiera analizado el encarte se habría percatado de que la mayor parte de las casillas son urbanas y por tanto los paquetes electorales de manera generalizada tardaron demasiado en llegar al centro de acopio en el acuerdo IEECE/41/2016 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, visible en la siguiente dirección electrónica http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_13a_Ext_14-03-2016-23-54hrs.pdf, en el punto primero se estableció que los centros de acopio serían las sedes de las Asambleas Municipales que cubren todo el territorio del Estado y donde se encuentran precisamente las casillas urbanas.

De los datos del encarte de ubicación de casillas se desprende claramente lo siguiente:

(Se inserta tabla)

Bajo esta perspectiva y acudiendo al análisis del encarte, donde se ubica cada casilla se puede concluir cuáles debieron

SUP-JRC-317/2016

ser entregadas de manera inmediata y cuáles no, de tal manera que la autoridad jurisdiccional no valoró el encarte al que le había dado valor probatorio pleno, pero tampoco valoró el acta circunstanciada de entrega o recibo de paquete ante Asamblea Municipal, donde debió advertir que además de la llegada extemporánea los paquetes fueron entregados por persona diversa al Presidente de Casilla o a cualquier otro funcionario de la mesa directiva, el Secretario o un Escrutador, sino por quien se identificó como CAE o Capacitador Asistente, que desde luego en la Ley local su función no está prevista expresamente, ni tiene la facultad que le confieren otros ordenamientos para entregar el paquete, paquetes que se señalaran más adelante.

¿Qué hacía el capacitador entregando los paquetes el día de la jornada, bajo la manifestación de que participó en la casilla como CAE?, pues así dice el acta circunstanciada, esto quiere decir que personas ajenas a los funcionarios de la mesa directiva de casilla estuvieron dando seguimiento a la votación.

Recordemos lo que ya habíamos sustentando la responsabilidad de la elección se transfiere a la mesa directiva de casilla, cuando se le entrega el paquete antes de la elección y luego se regresa esa responsabilidad al órgano electoral cuando el presidente de Casilla regresa el paquete después de la votación.

Se gastan millones de pesos en la integración de las mesas directivas de casilla con procesos de insaculación que en base a la aleatoriedad dan certeza a los partidos y electores de que la elección se organiza y la votación se recibe por ciudadanos, que no tiene relación directa con partidos políticos o los gobierno en turno, esto ha dado confianza al electorado en general, transparencia a las elecciones en México durante década ya, pues resulta que ahora, existe una autoridad intermedia, contratada directamente por el Instituto Nacional Electoral y luego transferida mediante una simulación convencional, solo para que realice una función que no le corresponde y que violenta la aleatoriedad que sustentan la certidumbre en los funcionarios de casilla insaculados.

Si partimos de lo dicho por el órgano jurisdiccional y de las funciones de la mesa directiva de casilla y de su Presidente, se inician desde la recepción del paquete antes de la jornada electoral y culminan con la entrega del paquete a la Asamblea Municipal.

Si una persona ajena la Mesa Directiva de casilla entrega el paquete y además lo hace extemporáneamente se conjugan dos causales de nulidad, una que tiene que ver con la temporalidad y otra que tiene que ver con la intervención de

otra persona a la competente para recibir la votación, que termina precisamente cuando se regresa el paquete, de tal suerte que este individuo intervino en la votación sin tener la facultad expresa para ello.

En la siguiente tesis se señala que la entrega del paquete electoral por el presidente de casilla es una actividad sustancial, pero además dice al final que la violación a dicha obligación, equivale a la causal de nulidad prevista en el artículo 323 fracción VI del Código Electoral de Sonora de aquella época que señalaba:

(Transcripción)

...

Tesis XXXVIII/97

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

...

También es interesante el contenido de la siguiente tesis, **pues la anterior** refiere a **que la falta de entrega del paquete por el presidente equivale a la extemporaneidad de entrega del paquete como causa de nulidad**, lo cual reclamamos en la demanda como un asunto generalizado:

Tesis XXXIII/2004

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PAQUETES. SU IMPUGNACIÓN GENÉRICA HACE INNECESARIA LA ESPECIFICACIÓN DE LA CASILLA. (Se transcribe).

En la tesis LXXXII/2001 referida a al, Código Electoral de Zacatecas de 2001, en donde se permite a los asistentes electorales entregar el paquete electoral en lugar del Presidente de Casilla se señala su referencia específica a las legislaciones similares:

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE CASILLA PUEDE REALIZAR PERSONALMENTE LA

SUP-JRC-317/2016

ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS ASISTENTES ELECTORALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES). (Se transcribe).

En ese entonces el Código de Zacatecas decía lo siguiente:

(Transcripción)

En la Ley Electoral de Chihuahua se señala:

(Transcripción)

Nuestra Ley expresamente impone la obligación a los Presidentes de Casilla de entregar el paquete, pues dice “acompañados”, lo que implica que ellos deben ir, no que lo puedan mandar con alguien; texto que no coincide con el de Zacatecas, además en nuestra Ley no se le concede facultad expresa para auxiliar a los presidentes de casilla en la entrega del paquete electoral, en cambio en Zacatecas sí se les daba esa facultad en forma expresa a los asistentes electorales.

Ahora bien en esta otra tesis, también relativa a Zacatecas, se señala que **la ausencia del Presidente de Casilla es una IRREGULARIDAD GRAVE**, pero que no necesariamente se traduce en nulidad, **(Nótese que la misma tesis incluye la entrega del paquete en la actividad integral de la mesa directiva de casilla.)** ya que los otros miembros de la casilla lo pueden sustituir, y es lo que hay que ponderar; en el caso concreto es claro que no existe causa justificada para que un capacitador ajeno a la integración de casilla haya trasladado el paquete a la asamblea municipal:

Tesis XXXVI/2001

PRESIDENTE DE CASILLA. SU AUSENCIA DURANTE LA JORNADA ELECTORAL **ES UNA IRREGULARIDAD GRAVE**, PERO NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA INVALIDEZ DE LA VOTACIÓN RECIBIDA. (Se transcribe).

Con lo anterior quedó determinado que la violación alegada es grave o sustancial, para aplicar las reglas de la determinancia cualitativa y cuantitativa, tendríamos que demostrar que esta irregularidad grave plenamente probada con los recibos de entrega de los paquetes en donde se hizo constar que lo hacía el capacitador o cae, aconteció en múltiples ocasiones y en una gran parte del territorio, como así

fue en más de la mitad de los municipios del Estado y en más de mil casillas.

A todo esto hay que agregar que la mayor parte de los paquetes entregados en Juárez por capacitadores se hizo en la madrugada del día 6 de junio, según se puede corroborar del estudio que hizo la responsable.

Finalmente si retomamos que desde un inicio y antes de la jornada se violentó la cadena de custodia de todas las boletas electorales, al final, y después de la jornada existe probada una violación grave también en el último paso de la cadena de custodia, es incuestionable que la violación alegada es determinante, no por su impacto aritmético en la votación, sino por su magnitud.

Tesis XXXI/2004

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD. (Se transcribe).

Antes de relacionar los cuadros de análisis de horarios de entrega de paquetes electorales que se insertaron en la sentencia, para contrastarlos con los recibos de entrega de paquetes que obran agregados a los autos y que además adjuntamos en copia esta demanda, se puntualiza que la entrega del paquete por una persona no autorizada para recibir la votación actualiza también la nulidad de casilla prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado:

e) La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley;

Precisamente este tipo de nulidad su determinancia no implica la relación aritmética con los votos, sino la falta de certeza al introducir alguien ajeno a la mesa directiva de casilla en la recepción de votación lato sensu, que culmina con la entrega del paquete electoral a la Asamblea Municipal.

En el cuadro visible a fojas 112 a 144 del fallo, de un total de 1364 casillas que relaciona la responsable, se ubican 228 entregadas por persona ajena al Presidente de Casilla, ya que no coinciden los recibos con la persona que presidió según el acta de la jornada electoral, pero además el propio recibo o acta de entrega, señala que la persona que lo entrega participó como CAE o capacitador asistente en la mesa directiva de casilla, además se ubican 3 casillas con las que no contamos recibo o acta y por tanto no pudimos verificar:

SUP-JRC-317/2016

NOTA: La relación de casillas siguiente coincide con la relación de casillas del fallo de las fojas 112 a la 144 y se marcan con la clave “**no funcionario**” las que se entregaron por persona ajena al Presidente o la mesa directiva de casilla.

(Se inserta tabla)

Total de Casillas: 1364

Coincidencias: 231

No Funcionario: 228

Sin Recibo: 3

Del cuadro que aparece en la foja 147 del fallo en primer plano, se hace referencia a casillas recibidas en centro de acopio, y se citan los lineamientos expedidos para tal efecto por el Instituto Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG1012/2015, en el ejercicio de la facultad de atracción prevista en la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, y es precisamente este tema el que habremos de abordar puntualmente cuando se controvertan las apreciaciones hechas por el responsable en el tema de la causal de nulidad genérica, pero un principio se adelanta que la Ley permite al facultad de atracción para un asunto concreto, de tal manera que no se puede ejercer antes de que sea necesario, y es precisamente esto, lo que fue sucediendo a lo largo del proceso electoral, la intervención del Instituto Nacional Electoral en todas las materias que correspondían exclusivamente al órgano local, lo que generó una incertidumbre en el marco normativo, en el curso del proceso mismo, de tal manera que cuando en la sentencia se señala que nuestros representantes no dijeron nada, no verificaron nada, no reclamaron la intervención de estas personas capacitadores, es porque estábamos pensando en la actuación de la autoridad electoral conforme al marco normativo aplicable, nuestra Ley Electoral que confía en Presidente de Casilla esa actividad y por tanto no pudimos prever una capacitación o indicación oportuna para que se vigilara y evitar esta situación que a la postre causa incertidumbre generalizada en esta importante y trascendente etapa de la votación, **por lo que solicitamos se tengan insertos dichos argumentos en este apartado que demuestran la inconstitucionalidad del referido acuerdo.**

Del cuadro que aparece al final de la foja 147 y 148, se localizan 10 casillas que fueron entregadas por persona ajena al Presidente de Casilla o miembro de la mesa directiva.

NOTA: La relación de casillas siguiente coincide con la relación de casillas del fallo de las fojas 147 y 148 y se marcan con la clave “**no funcionario**” las que se entregaron por persona ajena al Presidente o la mesa directiva de casilla.

(Se inserta tabla)

Total de Casillas: 45

Coincidencias: 10

No Funcionario: 10

De la tabla inserta a fojas 150 a la 170 del fallo, la responsable señala que no pudo calcular el tiempo de entrega por falta de documentación, lo cual de suyo ya constituye una irregularidad generalizada, pues pese a que pidió las documentales respectivas al órgano electoral local, no le fueron allegadas, incluso hubo requerimientos incumplidos y amonestaciones, solicitud de prórroga en virtud de que el Instituto Estatal Electoral no localizaba la documentación respectiva, y no estamos hablando de Urique enclavado en la sierra, sino de zonas urbanas en Chihuahua y Juárez, en fin en esas casillas que son un total de 826, se localizan 156 entregadas por persona ajena al Presidente de Casilla y 100 sin recibo que no pudimos verificar:

(Se inserta tabla)

Total de Casillas: 826

Coincidencias: 256

No Funcionario: 156

Sin Recibo: 100

Del cuadro inserto en las fojas 174 a 176, se localizaron 5 casillas entregadas por persona ajena al presidente de Casilla:

(Se inserta tabla)

Total de Casilla: 33

Coincidencias: 5

No Funcionario: 5

Sin Recibo: 0

Ahora bien del análisis de los recibos de entrega de paquetes que tuvimos acceso y que obran el expediente, y que desde luego no fueron valorados y analizados por la responsable, pese a que tiene la obligación de valorar todo el caudal probatorio, tenemos que existen 1061 casillas en las que no se tiene recibo de entrega o las mismas fueron entregadas por una persona ajena la mesa directiva de casilla, violentando las facultades que la Constitución confiere al órgano electoral local, como se abundará en la argumentación del estudio que hizo la responsable de la causal genérica:

(Se inserta tabla)

Total de Casillas:1061

Cabe señalar que en la tabla anterior hace referencia a casillas NO URBANAS, en concluir que probablemente ahí no aplicaría el principio de entrega inmediata, pero de ninguna manera podría dejarse de aplicar la entrega por el Presidente de Casilla, ahora bien en una interpretación laxa, y aun suponiendo que fuera válido relevar a dicha persona la entrega por razón de la distancia, tendría que existir el recibo de dicho funcionario autorizado por la Ley para entregar el paquete, donde le transfiera la responsabilidad aun emisario o como se llame del órgano electoral para hacer el servicio de recolección, de tal manera que si no lo hay la cadena de custodia se rompe de cualquier forma, nótese que la mayor parte son casillas urbanas donde la entrega debió haber sido inmediata y del análisis hecho por la responsable no se evidencia eso, sino transcurren varias horas para la entrega, lo que hace aun más grave la situación.

Las casillas en las que no se cuenta con recibo o acta de entrega de paquete para poder corroborar si fue entregado por el presidente de Casilla son las siguientes, en un total de 166:

(Se inserta tabla)

Las violaciones constitucionales en materia de ejercicio de facultades por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fueron tan graves que para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/20161 de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan una serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de atracción, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre, violando los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 173 y 174 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

(Transcripción)

Lo que sucedió es que al modificar legal y materialmente el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del

INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral.

CUARTO.- Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley.

La sentencia que se combate viola lo previsto en los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 37 de la Constitución Local, 293 y 332 de la Ley Electoral del Estado, pues estando sujeto el Tribunal a los principios de legalidad y certeza, no abordó el estudio correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance y del cual se allegó, para resolver la verdadera controversia que se le estaba planteando, además de aplicar incorrectamente los artículos 150 al 174 de la Ley electoral del Estado dentro del **TÍTULO TERCERO, DE LA JORNADA ELECTORAL**, en relación con el artículo 175 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

En el fallo al entrar al estudio de la irregularidad relativa, la responsable se aparta de la causa de pedir, pues insistimos, en que reconoce que hubo múltiples sustituciones, pero solo en 45 caso decreta la nulidad por haber participado en la casilla personas no inscritas en la lista nominal, lo cual es correcto, pero agota el análisis y luego no valora que hubo demasiadas sustituciones de funcionarios que no se encontraban en el encarte, como se detalló en la demanda, lo cual fue atípico, y conforma otro indicio de la falta de certeza en la función electoral, aunque no ocasione la nulidad en la casilla.

Pero además y sin desvincular esta irregularidad con la señalada en el tema de entrega extemporánea de paquetes, la jornada electoral comprende según los artículos 150 al 174 de la Ley electoral del Estado dentro del **TÍTULO TERCERO, DE LA JORNADA ELECTORAL**, después el artículo 175 ya se ubica en los actos posteriores a la elección, y es donde está la transición que comentamos, el traslado del paquete a la asamblea municipal corresponde al presidente de Casilla hasta su entrega y la recepción del mismo, ya corresponde al funcionario que habilitó el órgano electoral para tal efecto, esa

transferencia se hace por autoridad competente, de ahí que todas etapas correspondientes a la jornada electoral son de competencia de los funcionarios del mesa directiva de casilla y no de un funcionario ajeno a la misma, en esa tesitura, si la entrega del paquete la hace otra persona, se sustituye en las funciones del Presidente y por tanto la casilla debe anularse por haber participado en la recepción de la votación persona distinta a los facultados por la ley, pues todas las etapas, la instalación de la casilla, apertura de la casilla, recepción de la votación, cierre de la votación, escrutinio y cómputo en casilla, Integración de expediente y paquete, entrega de paquete al órgano electoral, forman un todo conocido en sentido amplio como la votación de la jornada electoral.

De ahí que el estudio no hay sido exhaustivo, pues contaba con los recibos de paquete electoral, en donde debió haber advertido la intervención de una persona ajena en la entrega y ello produce la nulidad por entrega extemporánea y además por intervenir en la votación una persona ajena a la facultada por la Ley.

La siguiente tesis, de aplicación analógica revela que la sola intervención en la votación de una persona ajena a la mesa directiva de casilla o no facultada por la Ley como fue el caso, implica la nulidad de casilla, **sin importar el resultado de la votación**, pues esa intervención va en contra la voluntad manifiesta del legislador, que es precisamente lo que se argumenta en la tesis que se inserta y bajo ese evento, en la especie al ser generalizada, resulta además determinante para el estudio de la causal genérica.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES). (Se transcribe).

Los paquetes entregados por persona ajena al presidente de casilla o a la mesa directiva de casilla, que se identificó como CAE o capacitador asistente son los siguientes, que hacen un total de 894:

(Se inserta tabla)

QUINTO.- ERROR ARITMETICO

La sentencia que se combate viola lo previsto en los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 37 de la Constitución Local, 293 y 332 de la Ley Electoral del Estado, pues estando sujeto el Tribunal a los principios de legalidad y certeza, no abordó el estudio correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance y del cual se allegó, para resolver la verdadera controversia que se le estaba planteando.

La responsable agota el estudio del error aritmético en los casos que resultó determinante para anular en casilla, pero olvida que lo que se le está planteando es la causal genérica, basada en el descontrol y vigilancia de la impresión, distribución y entrega de boletas, lo cual persistió hasta la entrega del paquete por personas ajenas al presidente de Casilla, todo ello violando y modificando el marco normativo aplicable incluso durante el proceso electoral en curso, lo cual en conjunto implican violaciones graves y generalizadas desde el punto de vista cualitativo. Si bien es cierto las irregularidades no son acumulables, sí generan evidencia de la magnitud de la violación a los principios rectores del proceso electoral que provocan la nulidad de la elección.

(Transcripción)

(Se insertan tablas)

De la exposición de los 12 cuadros anteriores visibles a fojas 339 a 377 se determina que para la responsable subsiste la inconsistencia de 89,530 boletas derivado del estudio realizado, los cuales se observan en 1,119 casillas, circunstancia que debió de haber sido estudiada y resuelta a la luz de la generalización de las violaciones acontecidas, conforme a la causa de pedir expuesta en el escrito inicial de demanda.

SEXTO.- CAUSAL GENERICA

La sentencia que se combate viola lo previsto en los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 37 de la Constitución Local, 293 y 332 de la Ley Electoral del Estado, pues estando sujeto el Tribunal a los principios de legalidad y certeza, no abordó el estudio

SUP-JRC-317/2016

correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance y del cual se allegó, para resolver la verdadera controversia que se le estaba planteando

En el primer agravio y para no caer en repeticiones se planteó que la responsable apreció incorrectamente la causa de pedir, lo que provocó que agotará el estudio de las irregularidades hechas valer en casilla como si se tratase de sólo eso, la nulidad en casilla, y en consecuencia la determinancia la pretende acotar al resultado de votos en la misma, es decir limita la apreciación cualitativa y cuantitativa que debió hacer de manera general, para determinar si los extremos de la causal genérica se acreditaban, como violaciones, graves y generalizadas, y ya en este apartado desde la foja 377 del fallo en adelante, no valora las inconsistencias aritméticas, la entrega extemporánea de paquetes, ni la intervención de personas ajenas en la casilla, tal y como se ha venido expresando en los agravios, segundo, tercero y cuarto, sino que vuelve a cometer el mismo error de lógica y analiza de manera aislada las demás irregularidades, inclusive omite por completo advertir que la invasión de facultades es mucho más grave y sistemática de lo que se percibía.

Es importante destacar además, que un acto derivado de uno inconstitucional es igualmente inconstitucional, lo que citamos debido a que la responsable aplica diversa normatividad emitida por el Instituto Nacional Electoral para justificar las intervenciones ilegales de dicho organismo electoral nacional, si ponderar si dichos ordenamientos eran aplicables conforme al artículo 41 Constitucional, en especial si la supuesta facultad de tracción se había ejercido correctamente o bien se trataba de modificación de normas jurídicas fundamentales que provocan sin lugar a duda la violación al principio de certeza debido a la modificación del marco normativo electoral sustancial en pleno proceso electoral, violando el artículo 105 Constitucional.

Es necesario destacar que ante la colisión de leyes o normas generales, con normas o leyes locales, el Tribunal Electoral Local puede definir que se aplica la Ley Local sin declarar la inconstitucionalidad, sino aplicando el principio de legalidad, que finalmente lo obliga a que ese fallo se acorde a la Constitución y demás Leyes de ella emanada.

La autoridad responsable hace una serie de declaraciones del marco normativo aplica a la causal genérica a lo largo de las fojas 379 a 338, donde empieza citando el acuerdo

INE/CG950/2015, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para la impresión de documentos y materiales electorales el 11 de noviembre de 2015, antes de que iniciara nuestro proceso electoral, lo cual resalto porque en este preciso caso, el órgano nacional está emitiendo un acuerdo sujeto a la competencia constitucional, que además de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trata de una norma fundamental, sino procedimental y por tanto es correcto, pero esa facultad de expedir lineamientos en esta materia, no puede relevar al órgano electoral local de su obligación de expedir el plan de impresión, resguardo, vigilancia, traslado y distribución de las boletas electorales, situación que en el expediente está comprobado nunca ocurrió y evidencio la de organización y falta de certeza de la que ahora nos seguimos doliendo.

También es de señalarse que la responsable no analiza exhaustivamente nuestro argumento de que las actas circunstanciadas que conforme a la Ley Electoral del Estado se deben levantar en los diferentes tramos de control, durante su producción, al inicio y al final, su embarque y traslado a lugar predispuesto para ello por el Consejo Estatal, su traslado a las 67 Asambleas Municipales, el enfajillado y su empaquetado en dichos organismos municipales para integrar el paquete electoral que debe entregarse al presidente de cada casilla y luego el acta de entrega del paquete por éste a la Asamblea Municipal, y lejos de valorar que no existían las actas o no se circunstanciaron adecuadamente, pretende justificar esas omisiones con valoración arbitraria de documentos posteriores a la elección, que ningún valor probatorio pueden tener.

Además de lo anterior que de suyo es grave, la responsable comete un error garrafal de interpretación del artículo 142 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que evidencia que no estudió la invasión competencial de manera profunda y exhaustiva y por ello viola el artículo 17 Constitucional, tal y como lo hemos sostenido a lo largo de estos conceptos de violación:

(Transcripción)

La responsable concluye que el artículo 142 excluye la aplicación de la Ley Electoral del Estado si NO se dan las hipótesis previstas en su primer parte, es decir SEGÚN SU interpretación para que se aplique el capítulo respectivo tienen que darse estos dos elementos:

1. Que se lleven a cabo elecciones locales no concurrentes con las elecciones federales

SUP-JRC-317/2016

2. Y que la función de la integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación le haya sido delegada al IEE por la autoridad competente.

Y eso no dice el artículo, lo que se debe entender de manera correcta es que ese capítulo se aplica siempre en la elecciones locales no concurrentes, pues en este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, no hay discusión, ahí está la distribución competencial y al órgano electoral local le compete el enfajillado, debido que es un acto de preparación de la jornada.

En 2016 será hasta el momento el único caso de elección local no concurrente, pues con la modificación de los periodos de ayuntamientos, síndicos, diputados y gobernador, en 2018, las elecciones locales serán concurrentes y entonces dicho apartado solo se aplicará si el Instituto Nacional Electorales delegare al órgano local, la facultad de integrar las mesas directivas de casilla.

Esto es lo que señala el artículo 142, tan es así que supuestamente para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/2016, de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan una serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de tracción, que más adelante explicaremos a detalle, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre. Lo que sucedió es que al modificar el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral. Es cierto que al responsable señala de manera general que las actas de

enfajillado sí se levantaron, pero lo que no dice es que esas actas no son tal cosa, son informes rendidos por los Presidentes de las Asambleas Municipales el 13 de julio de año en curso, ante el requerimiento de la responsable de que exhibieran las actas circunstanciadas de enfajillado, y donde dicen ellos en vía de informe posterior a la jornada, que sí cumplieron con todos los requisitos legales del enfajillado y empaquetado, lo cual no puede tener valor probatorio alguno, sino que se prueba del desorden del órgano electoral local y prueba de la variación inconstitucional del marco normativo electoral en pleno proceso electoral. Advertir esto, no es una situación compleja, salta a la vista que esos documentos no son actas, lo cual se traduce en negligencia del Tribunal en su valoración.

Finalmente los lineamientos locales o del INE, exigen el acta circunstanciada del acto de enfajillado, que de una u otra forma se violentó, pero lo importantes es destacar que el mismo funcionario que luego entregara el paquete en violación a una facultad expresa del Presidente de Casilla en la Ley Electoral de Chihuahua, es quien anduvo contando boletas y entregando los paquetes al Presidente de Casilla, tiene acceso a las cintas de seguridad, cajas y demás material y documentación electoral, lo que de suyo causa más incertidumbre.

El sistema electoral mexicano, se forma de un mecanismo que combina órganos federales y locales, leyes generales y locales, dentro del marco federal previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal, de ahí que sea la propia Constitución quien distribuya las competencias entre los distintos órganos electorales para el caso de elecciones federales y elecciones locales, respetando el pacto federal, pues ambas instancias son órganos independientes y autónomos, sin que exista supeditación o mando jerárquico entre ellos.

De entre las condiciones que deben cumplirse inexcusablemente para considerar que una elección es válida, es que sea organizada a través del organismo público y autónomo competente. Esto no puede ser materia de convenio, negociación o renuncia, dicho organismos es el que debe ejercer las funciones que le confieren la Constitución y las Leyes.

Precisamente en el artículo 41 Constitucional se hace la distribución de competencia entre el órgano federal y los órganos locales:

(Transcripción)

SUP-JRC-317/2016

Del precepto anterior se advierte claramente que el Instituto Nacional Electoral tiene facultades delimitadas en los procesos electorales federales y locales a las siguientes materias:

(Transcripción)

Por otra parte los organismos públicos locales tienen delimitada su competencia en los procesos electorales locales en las siguientes materias:

(Transcripción)

En base a la distribución de competencias constitucional, el Instituto Nacional Electoral actúa conjuntamente con los organismos públicos locales en los procesos electorales de los Estados, no hay una jerarquía entre dichos órgano y las leyes que lo rigen y los organismos públicos locales y sus respectivas leyes, es una **DISTRIBUCION DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL**, tal y como lo señala la siguiente tesis de jurisprudencia:

LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. (Se transcribe).

En este contexto de competencia y funciones precisas para cada órgano electoral dentro de un proceso local, insistimos que el Instituto Nacional Electoral no funge como superior jerárquico, aunque así pudiese parecer, debido al nombramiento que hace de los consejeros electorales locales, y esto es uno de los puntos que generaron confusión funcional al Consejo estatal del Instituto estatal Electoral de Chihuahua, pues no puede tener otra explicación el que no hayan asumido la función electoral conforme a la distribución de competencias y hayan permitido la invasión absurdas de facultades ejercidas indebidamente por el Instituto Nacional Electoral, que a la postre reflejaron incertidumbre generalizada en la elección impugnada.

Tan no es el Instituto Nacional Electoral el superior jerárquico del Instituto Estatal Electoral que para intervenir en las decisiones autónomas de éste, o ejercer sus funciones, la Constitución le restringe esa actuación en dos modalidades asumir y atraer:

(Transcripción)

La facultad de asunción es precisamente la que permite al Instituto Nacional Electoral ejercer funciones que originalmente la Constitución otorga al organismo público local. Por su parte, la facultad de tracción no se refiere a una asunción funcional, sino a la necesidad de traer a su concomitamiento algún asunto en concreto que sea competencia del organismo público local, pero desde luego no se refiere a la asunción de funciones electorales. Es la misma Constitución que restringe el ejercicio de estas dos atribuciones a lo previsto en la Ley:

(Transcripción)

De conformidad con el artículo 44, numeral 1, inciso ee) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en la Ley.

Por su parte el artículo 120 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en sus numerales 1 y 2, la definición de las facultades de asunción y de tracción:

(Transcripción)

De la lectura de los numerales 1 y 2 anteriores, se desprende que la asunción se refiere a asumir funciones y la atracción es la de asumir asuntos, claramente no es lo mismo, de ninguna manera puede entenderse como lo ha venido ejerciendo el Instituto Nacional Electoral, que la asunción es asumir todas las funciones y atracción es asumir parcialmente funciones, la atracción se refiere a “asuntos de importancia”, tal y como por ejemplo está establecida en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso se utiliza el mismo concepto de “asunto”, evidentemente no se trata de funciones, de tal manera que atraer un asunto, puede ser conforme al numeral 3, para dos cosas:

1. *cuando su trascendencia así lo determine*
2. *para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución.*

Bien, es posible atraer un asunto determinado a fin de establecer algún lineamiento en cualquiera de las funciones previstas competencialmente por la constitución para el órgano público, pero no es posible asumir funciones parcialmente, que de suyo fue lo que sucedió con la interferencia del Instituto Nacional Electoral en funciones propias del Instituto Estatal

SUP-JRC-317/2016

Electoral, como la habremos de demostrar mediante el análisis y comentarios de los convenios y acuerdos que fueron recibidos por ese Tribunal mediante auto de fecha 10 de julio del año en curso, remitidos previo requerimiento, por Jesús Shermann Leaño y Alejandro Gómez García.

En el convenio general de coordinación y colaboración que celebraron por una parte, el Instituto Nacional Electoral, representado por el Doctor Lorenzo Córdova Vianello y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Presidente del Consejo General y Secretario Ejecutivo, respectivamente, asistidos por el Licenciado Alejandro De Jesús Scherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua; por la otra, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, representado por el Ingeniero Arturo Meráz González y el Licenciado Guillermo Sierra Fuentes, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo, respectivamente; establecieron las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral local 2015-2016.

En el antecedente VII; se señala que el 3 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número INE/CG830/2015, por el que se determinan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales locales 2015-2016, cuyo punto de acuerdo primero establece que el Instituto Nacional electoral continua ejerciendo las atribuciones relativas a la capacitación electoral; geografía electoral; padrón y la lista de electores; ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, y La fiscalización de los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos.

Como se advierte de dicha declaración el órgano electoral nacional sólo confirma la competencia que le confiere la Constitución Federal en las materias de los procesos electorales locales.

En el antecedente IX, se menciona que el 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG917/2015 por el que aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2016, y sus respectivos anexos, del cual se desprende que ese órgano electoral nacional, conserva la función de integración y capacitación de funcionarios de casilla, lo cual coincide con la competencia constitucional originaria para dicho ente.

En el clausulado del convenio de colaboración que se comenta se establece en su cláusula primera:

(Transcripción)

Entrando a los temas específicos, se desarrollan en primer término las bases para integrar la lista nominal de electores, lo cual está alineado a la competencia constitucional.

Como punto 2, se desarrolla el tema de la capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla, de ahí se desprenden otras actividades como son el número y ubicación de casillas, lo cual coincide con la distribución de competencias constitucional, sin embargo en este aparatado, se introducen actividades que implican ejercicio de funciones que le son propias de los órganos electorales locales, traslapando funciones que provocaron desorganización en el proceso, contribuyendo a su incertidumbre generalizada:

(Transcripción)

En el convenio de coordinación indebidamente se estableció que los capacitadores electorales que sólo debían integrar y capacitar a los funcionarios de casilla, actuarían también como asistentes electorales, con lo cual estaría interviniendo en las actividades propias de la mesa directiva de casilla el día de la jornada, cuestión que no les compete, además de estar interviniendo en actos de preparación de la jornada, y en funciones propias de otros órgano electorales, así pues conforme al Programa de Asistencia Electoral al que el convenio se refiere, que además resultaría anacrónico, debido a que se expide antes de la entrada en vigor de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se conceden atribuciones a los capacitadores electorales en las siguientes materia, conforma a los puntos consultables en dicho programa, como sigue:

(Transcripción)

Todas estas tareas definidas en el programa de asistencia electoral, al que remitió el convenio de colaboración en cita, violan la competencia constitucional definida, pero además la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues claramente el TÍTULO SEGUNDO, De los Actos Preparatorios de la Elección Federal, CAPÍTULO I De las Disposiciones Preliminares, señala en el artículo 224: **“1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los procesos electorales federales.”**

Es evidente que con ese programa de asistencia electoral se interviene indebidamente por el órgano electoral nacional en tareas propias del Instituto Estatal Electoral, tanto del Consejo Estatal, como de las Asambleas Municipales e inclusive de las mesas directivas de casilla al introducir actividades fundamentales de PREPARACION DE LA JORNADA ELECTORAL, que son actividades propias del órgano local, además de encontrarse reguladas de manera precisa en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y aplican

SUP-JRC-317/2016

incluso un manual acordado en 2014 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a un marco jurídico futuro, por lo que dichas normas operativas son retroactivas hacia el futuro.

En el artículo 216, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional.

(Transcripción)

La Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3, señala como acciones para proteger la seguridad nacional las siguientes:

(Transcripción)

Si de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 Constitucional, la preparación de la jornada electoral es competencia del órgano local, y si es la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la que incluye en su Título Segundo, De los Actos Preparatorios de la Elección, que el mismo sólo es aplicable a procesos federales, es incuestionable que no debió haber sido materia del convenio, sobre todo lo relativo, a la impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, pues lo que sucedió es que esa actividad tan delicada estuvo fuera del control que su importancia exigía y con la intervención de órganos no facultados para ello.

Las violaciones constitucionales en materia de ejercicio de facultades por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fueron tan graves que para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/2016, de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan una serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de atracción, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre, violando los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 173 y 174 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

(Transcripción)

Lo que sucedió es que al modificar legal y materialmente el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral, pues:

En el convenio de colaboración y siguiendo este traslape de funciones constitucionales en el aparatado 3 del clausulado se estableció lo siguiente:

(Transcripción)

En la parte inserta anteriormente el órgano electoral nacional actúa en actividades de su competencia constitucional, aunque hay que señalar, que el Instituto Electoral no estuvo presente en la sesión de referencia.

(Transcripción)

Es importante destacar que en el apartado arriba inserto y subrayado, el órgano electoral nacional, parte del supuesto de que es Instituto estatal Electoral el que va a proporcionar las boletas, es importante señalarlo, debido a que como lo ha señalado el Consejero presidente del Instituto Estatal Electoral fue en Talleres Gráficos de México dónde se imprimieron las boletas, y como lo hemos venido sosteniendo en nuestra demanda, no existió acuerdo al respecto, y lo cierto es que se dejó que materialmente el órgano nacional produjera las boletas, generándose un conflicto competencial que ahora nadie quiere asumir, pero que se tradujo en la falta de acuerdo de producción, vigilancia, resguardo y distribución de las boletas y demás material electoral, que finalmente como queda acreditado con el convenio exhibido por el Instituto Nacional Electoral, se intervino indebidamente por dicho órgano en actividades de entrega de las boletas electorales a los Presidente de Casilla, cuestión que no es de capacitación, ni de integración de las mesas directivas de casilla, sino que es una función de preparación de la jornada, exclusiva del órgano público local.

En el siguiente inserto del convenio de colaboración se habla de la producción de materiales y documentos electorales, pero no se especifica el tema de las boletas, aunque en términos generales se asume que los costos serán sufragados

SUP-JRC-317/2016

por el órgano local, pero se desprende que el encargado de la producción es el órgano nacional, y aquí es donde empezó todo el problema, pues el Instituto Nacional Electoral solo estaba facultado para expedir lineamientos para el diseño e impresión de los materiales, documentos y boletas, pero realmente las imprimió.

(Transcripción)

Claro que actualmente el órgano local no reconoce que dejó en manos del órgano nacional la impresión de boletas, pero señores Magistrados, no es difícil de entender, ¿por qué el convenio señala: **“Los costos que implique la producción de los documentos electorales estarán a cargo de “EL IEE”.”**? pues precisamente porque quien los iba a imprimir es el Instituto Nacional Electoral y por ende es el que impacta el costo, para no asumirlo, pues si solo lo fuera a diseñar y expedir lineamientos, no tiene por qué aclarar el costo, es simple lógica.

Me dirán ustedes señores Magistrados y ¿qué si el Instituto Nacional Electoral imprimió los documentos electorales?; pues precisamente con ello invadió la competencia del órgano local, pero además provocó que el Instituto Estatal Electoral dejara de cumplir con lo que prevé la Ley Electoral de Chihuahua en materia de boletas electorales, disposiciones que a continuación se insertan y que fueron violentadas, debido a la aplicación de lineamientos del órgano nacional materia de organización electoral y preparación de la jornada como ya hemos apuntado, reflejándose en consecuencia la ausencia de acuerdos del órgano electoral local tal y como se estableció en la demanda y en el incidente de objeción de documentos que el Magistrado Instructor desecho indebidamente:

(Transcripción)

Insistimos que no hubo actas de entrega recepción de las boletas electorales levantadas en los términos anteriores, no hubo acuerdo de impresión de boletas, ni se acordó cómo sería el foliado de las mismas.

Para muestra se inserta el acuerdo del Instituto Estatal Electoral del número de boletas a imprimir en el proceso electoral 2013, que ustedes señores Magistrados no encontrarán por ninguna parte para el presente proceso electoral, ni tampoco los acuerdos que se reseñan en los antecedentes *ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE BOLETAS ELECTORALES A LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013.* “; *“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL*

SE APRUEBAN LOS MODELOS DE BOLETAS Y LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2013.”; “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA QUE LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, SE REALICE EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL ESTADO, Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE.”.

(Transcripción)

¿Por qué no se expidieron esos acuerdos por el órgano electoral local?, pues precisamente porque el Instituto Nacional Electoral **sobreactuó** en sus funciones e invadió competencias funcionales del órgano local, confundiendo a tal grado al Instituto Estatal Electoral que su Presidente declaró que “ ... **y por protocolos de seguridad, fue imposible tener una presencia física en las instalaciones, no obstante puntualizó que los partidos interesados podían acudir a hacer supervisiones, pero además del INE siempre había persona, aseguró.”**; precisamente noten que reconoce que no hubo ningún plan de vigilancia y aunque una nota periodística es indiciaria, el hecho real es que NO HAY ACUERDO ALGUNO AL RESPECTO, NI ACTAS, NI NADA:

(Transcripción)

Continuando con el análisis del convenio de colaboración, el Instituto Nacional Electoral impone el procedimiento de sellado y enfajillado, sin que ello se encuentre dentro de sus funciones y además establece indebidamente que el personal a su cargo intervendrá en dicha tarea, cuando ellos debían estar encargados únicamente de la capacitación electoral, ubicación e integración de mesas directivas de casilla, de ahí que no se aplicó lo previsto en el artículo 145 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Posteriormente el Instituto Nacional Electoral en el convenio de colaboración que exhibe asume indebidamente tareas en materia de preparación de la jornada electoral y sujeta las actividades el sellado y agrupamiento de boletas, así como su distribución final a los lineamientos expedidos, los cuales no se encuentran dentro de sus funciones constitucionales emitir, interfiriendo además con los capacitadores en las actividades propias del órgano electoral local, de ahí que se violaron los artículos 144 y 145 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al realizarse actividades previstas en la Ley local de manera diferente y con la intervención de personal ajeno al Instituto Estatal Electoral quien tuvo contacto directo con las boletas.

SUP-JRC-317/2016

(Transcripción)

En materia de observación electoral el Instituto Nacional Electoral tiene facultades constitucionales únicamente para fijar lineamientos para dicha actividad en los procesos locales, pero siguiendo con la violación constante a la distribución de competencias, asumiendo atribuciones operativas, al registrar las solicitudes de acreditaciones y llevar el registro de observadores electorales, actividad que debió haber correspondido al Instituto Estatal Electoral en el inciso b) del apartado 5, se establece “b) **“EL INE” hará del conocimiento de “EL IEE” las acreditaciones** que realice, ya sea mediante el acceso a los reportes del Sistema de Observadores Electorales o con la entrega de una copia de los informes que al efecto haga del conocimiento del CL.”, evidenciando que quien indebidamente recibía las acreditaciones era el órgano nacional, que luego se las comunica al órgano local, ese proceder interfiere con la autonomía e independencia constitucional, pues ya existe un órgano diferente al constitucionalmente facultado, que está haciendo trámites en la materia, en una actividad que de suyo tiende a dar certeza al proceso y posteriormente se establece en el inciso e), que es el órgano nacional quien aprueba las acreditaciones, lo cual es completamente indebido: “c) **El CL y los CD de “EL INE”, son los órganos que aprobarán las acreditaciones** de los observadores electorales para el proceso local y los extraordinarios que se deriven.”; finalmente quien llevaba el registro de los observadores electorales es el órgano nacional y solo le daba acceso al órgano local para consulta: g) **“EL INE” dará acceso a “EL IEE”, para consulta de los reportes, al Sistema de Observadores Electorales.**

Insistimos en la violación directa a la Constitución pues en el artículo 41 al respecto se señala:

(Transcripción)

El artículo 41 Constitucional es claro, en el apartado B, inciso a), numeral 5, se le otorga al Instituto Nacional Electoral **la función rectora mediante lineamientos** en la actividad de observación electoral, pero dicha función conforme al apartado C, numeral 8 es del órgano local, incluso así se dice **“conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;”**, esta expresión de ninguna manera está indicando que el órgano electoral asuma la función respectiva, solo tiene la posibilidad de emitir lineamientos para su desarrollo por el órgano local.

(Transcripción)

En materia de registro de candidatos y de representantes de casilla, el Instituto Nacional Electoral no tiene ninguna facultad, ni siquiera para fijar lineamientos, reglas o intervenir en la operación y manipulación de los registros, es más en el

convenio de colaboración señalan: *“a) El procedimiento de acreditación de los representantes de los partidos políticos con registro nacional, así como de los partidos políticos con registro local y, en su caso, de candidatos independientes, ante las mesas directivas de casilla y generales, se efectuará conforme a lo dispuesto en “LA LGIPE” y los Acuerdos y disposiciones que emita el Consejo General de “EL INE”.”, y es en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la que excluye esas actividades:*

(Transcripción)

Es contundente que en estas actividades el órgano nacional interviene directamente sin competencia alguna, resultando entonces que sus actos están afectados de nulidad de pleno derecho:

(Transcripción)

En el apartado de debates, de manera por demás irregular, el órgano nacional señala que emitirá en ejercicio de su facultad de atracción los lineamientos de los debates, precisamente con ello se demuestra que el ejercicio de la facultad de atracción completamente acotado y excepcional, aplicable a casos concretos previa motivación del Consejo General con mayoría califica y seguido el procedimiento previsto por la Ley, el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en este convenio habla en futuro, dando por hecho que ejercerá a posterior la facultad de tracción, evidenciando que dicha facultad es la que se usó arbitrariamente fuera del marco legal y que provocó la violación constante, sistemática y grave de las competencias constitucionales previstas en el artículo 41.

(Transcripción)

En esta injerencia inconstitucional del Instituto Nacional Electoral, también abusó al señalar lineamientos a los que se debía ajustarse el órgano local el día de la jornada electoral, cuando es precisamente el artículo 224, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que excluye en su aplicación a la etapa de la jornada electoral, prevista artículo 225, numeral 2, inciso b), pero además insisto que en ninguna parte del artículo 41 Constitucional se señala que el Instituto Nacional Electoral tiene facultad alguna para emitir lineamientos en relación a la etapa de la jornada electoral, ni en relación al escrutinio y cómputo en casilla, y es de destacarse como es constante el señalamiento de que se ejercerán las facultades de atracción, como si fuese una facultad reglamentaria ordinaria.

(Transcripción)

SUP-JRC-317/2016

Mención especial es la intervención que tuvo el Instituto Nacional Electoral a través de sus capacitadores, que indebidamente intervinieron en tareas de ajenas a las que constitucionalmente se les asigna, estuvieron presentes en la casilla a lo largo de la jornada dando indicaciones, incluso interviniendo en el escrutinio e integración del paquete, lo cual es difícil de demostrar, sin embargo existe un indicios importante de esta presencia irregular en todas las casilla, de personal ajeno a quienes la Ley les confiere la facultad de recibir la votación, sobre todo en el municipio de Juárez, al revisar los recibos de los paquetes electorales, que se han individualizado en el

AGRAVIO TERCERO y el cual solicito se tenga por reproducido en obvio de repeticiones, no coincide la firma y/o nombre de la persona que lo entrega a la Asamblea Municipal, con el Presidente de Casilla que fungió en la jornada electoral, esto obedece a que como lo he dicho, los empleados del Instituto Nacional Electoral, fungiendo como "CAE" para usar sus términos, intervinieron en el escrutinio y cómputo indebidamente y esto se refleje en que ellos integraron el paquete electoral y lo llevaron a la Asamblea Municipal, según obra en las constancias agregadas al expediente, violentando lo previsto en el artículo 174 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua que señala dicha facultad como exclusiva del Presidente de casilla, con la fórmula "bajo su responsabilidad", entonces habrá que preguntarse ¿qué andaba haciendo un capacitador el INE con los paquetes electorales en la noche del domingo del 7 de julio?, pues precisamente es porque estuvo presente durante todo el día de la jornada de manera indebida en la casilla,

Se interviene por el Instituto Nacional Electoral ilegalmente en la recolección de paquetes electorales y ello además de ser inconstitucional, generó en muchos de los municipios, pero sobre todo generalizado en el municipio de Juárez una entrega extemporánea generalizada, que viola la inmediatez que aplica para una zona urbana, habría que señalar además, que son los mismos "CAE", quienes entregaron el material y paquetes electorales a los funcionarios de casilla, no tienen problema para tener acceso a cajas y cintas de sellado y demás documentación, de tal suerte que el hecho de que no muestre señales de violencia un paquete en la condiciones de intervención ilegal de estos funcionarios, no es ninguna señal de certeza.

(Transcripción)

El Instituto Nacional Electoral, también abusó al señalar lineamientos a los que se debía ajustarse el órgano local para

practicar los cómputos, cuando hemos dicho constantemente que el artículo 224, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que excluye en su aplicación a la etapa de **Resultados y declaraciones de validez de las elecciones**, prevista artículo 225, numeral 2, inciso e), pero además insisto que en ninguna parte del artículo 41 Constitucional se señala que el Instituto Nacional Electoral tiene facultad alguna para emitir lineamientos en relación a la etapa de la Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y además volvemos a indicar que se establece de antemano, que se ejercerá la facultad de atracción a futuro, generando completa incertidumbre del marco legal aplicable en actividades fundamentales del proceso electoral que están reservadas para los órganos locales en la Constitución Federal, **y señala el convenio de manera absurda:**

“EL INE”, en ejercicio de su facultad de atracción o asunción, “EL INE” dictará las reglas a las que se sujetará este procedimiento.

(Transcripción)

La intervención indebida del Instituto Nacional Electoral en el tema de los cómputos provocó irregularidades graves, que se reflejan en las actas de recuento en todo el Estado, pues se levantaron violando el principio de legalidad y certeza, lo cual ya hablamos de ello al objetar las actas respectivas, siendo evidente que las mismas se confeccionaron con posterioridad al recuento material, al ser suscritas por los Consejeros de las Asambleas Municipales y por los representantes de partido en algunos casos, acreditados ante la Asamblea Municipal, cuando se debieron haber levantado por las personas acreditadas en los grupos de trabajo que estuvieron realizando materialmente el recuento, según consta en las actas de cómputo municipal, y lo cual quedó comprobado desde el inicio de la demanda original la cual se agregaron dos actas notariales donde los presidentes de las Asambleas Municipales de Chihuahua y Juárez reconocen que días después de la sesión de cómputo correspondiente, no se habían entregado esas actas individuales a nuestros representantes porque aún no estaban hechos y/o firmadas, pero además no se asentaron los datos completos, debido a que no fueron contadas las boletas sobrantes, de tal manera que en las casillas que fueron abiertas a discreción por cierto, pues es evidente de nuestra demanda, al señalar todas las inconstancias numéricas en casilla, que era necesario abrir más paquetes electorales en función de los supuestos legales previstos en los artículos 184 y 185 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que era la que se debía aplicar en la materia y no los lineamientos del INE, de tal manera que se abrieron un número muy limitado de paquetes,

SUP-JRC-317/2016

inclusive algunos que no se encontraban en supuesto legal de apertura, pero aun en ese caso, al dejar de contar las boletas sobrantes, la incertidumbre que se generó originalmente con la violación de la cadena de custodia de la producción, impresión distribución de boletas electorales, provoca irremediablemente que no se pueda hacer un contraste real con el número de boletas que estuvieron en las casillas y un estado general de incertidumbre.

En la cláusula tercera del convenio de coordinación se señala:

(Transcripción)

Como se puede apreciar, no obstante que en la anterior clausula se declara el respeto a la distribución de competencias constitucionales, está por demás acreditado la violación sistemática y generalizada a dicho marco constitucional.

También es necesario destacar que el personal que se utilizó corresponde a cada uno de los órganos electorales, de tal manera que conforme a la cláusula décima del convenio que se analiza, no hay duda de que los "CAE", es personal del órgano nacional electoral, que indebidamente actuó con funciones extralegales en materia preparación de la jornada electoral, entregando paquetes electorales, inclusive uno de ellos en Juárez sorprendido con boletas sobrantes en su poder, como se los citamos en diverso escrito a la responsable y que desde luego no se valoró.

Además de lo anterior el convenio de chihuahua se firma el 16 de diciembre de 2015, pero se publica en el periódico del estado, hasta el 30 de marzo de 2016:

http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/Principal/canales/A_djuntos/CN_15922CC_33052/ANEX0%20022-2016%20CONVENIO%20GRAL%20IEE.pdf

El anexo técnico 1, se firma el 29 de febrero de 2016, se inserta en el periódico del 16 de marzo de 2016, pero en esa fecha no aparece publicado y se inserta de nuevo el 30 de marzo de 2016:

http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/Principal/canales/A_djuntos/CN_15922CC_33052/ANEX0%20022-2016%20ANEX0%20TECNIC0%20UN0%20IEE.pdf

No obstante lo anterior la responsable señala que el referido convenio se firma 22 de marzo de 2016, (foja 303 del fallo) por lo que evidentemente existe discrepancia en este aspecto, pero lo cierto es que de acuerdo al Código Civil Federal y al Código Civil del Estado de Chihuahua, toda norma de carácter general solo será obligatoria a partir de su

publicación en el Periódico Oficial, además mediante un convenio no se pueden dejar de aplicar Leyes locales a juicio de un órgano administrativo:

Código Civil del Estado de Chihuahua y correlativo del Código Civil Federal. ...

(Transcripción)

Aunque la tesis hace referencia a un convenio de diversa naturaleza, se desprende la necesidad constitucional de la publicación para entrar en vigor y desde luego que procede su aplicación por analogía y mayoría de razón.

Jurisprudencia 17/2013

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN ELECTORAL Y ANEXOS TÉCNICOS. PARA SU OBLIGATORIEDAD SE DEBEN PUBLICAR ANTES DEL INICIO DE LOS PLAZOS PACTADOS ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL RESPECTIVO INSTITUTO ELECTORAL LOCAL.

(Se transcribe).

Cuando la responsable estudia nuestra argumentación de que el INE materialmente había asumido la impresión de boletas, deja de analizar el hecho bajo los indicios que antes detallado:

¿Por qué si el IEE iba a tener el control de la impresión, el INE en el convenio de colaboración le precisa que asumirá los costos de la impresión?

¿Por qué el IEE se desentiende del seguimiento y vigilancia de la impresión de las boletas y su traslado a la Ciudad de Chihuahua?

¿Por qué las boletas no llegan foliadas como lo había pedido el IEE, del folio 1 al 2,780,561?, sino que llegan foliadas del 1 al n, para cada municipio, y en Chihuahua y Juárez además del 1 al n para cada Distrito Local.

¿Por qué parece de la documentación y del informe circunstanciado, que para el IEE todo empezó a partir de la Bodega de Tabalaopa donde recibió las boletas desde México?

Pues porque materialmente no se encargó de la impresión de las boletas.

En el informe circunstanciado, obra interoficio IEE/P/40/16, DONDE EL Consejero Presidente del IEE, instruye Saúl Rico Galindo, Coordinador de Organización Electoral del

SUP-JRC-317/2016

IEE, para que la foliatura total de las boletas sea del 1 al 2,780,561, obviamente dicho foliatura nunca se dio a conocer en el Consejo Estatal y posteriormente en la sentencia se trata de evidenciar que el IEE estuvo vigilando la impresión a través de dicho individuo.

Pues no lo hizo muy bien, porque de acuerdo a la nota de remisión de Talleres Gráficos número 20161872, de fecha de 25 de mayo de 2016, se señala que las boletas de Gobernador van en 79 cambios de distrito y municipio. Su folio no es progresivo como lo exige el artículo 143, numeral 7, de la Ley Electoral del Estado, que ya establecimos que se debía aplicar, pero que la responsable interpreta incorrectamente el artículo 142 de la Ley Electoral del Estado y la distribución de competencia como se ha explicado ampliamente.

La responsable además en la foja 406 del fallo sostiene lo siguiente, determinando que del análisis de las actas que hizo y demás documentación probatoria los folios de las boletas, van del 00000001 al 02780561:

(Transcripción)

Sin embargo si se analizan las actas de la jornada electoral que obran en el expediente se encontrarán que los folios se repiten, tal y como lo señala el siguiente cuadro:

(Se inserta tabla)

Cómo podemos decir que se tuvo control en la impresión y distribución de las boletas, si ni siquiera los folios son progresivos, pero además se advierte la superficialidad con la que el responsable entro al estudio de nuestra demanda y del material probatorio.

El acuerdo que se cita para justificar el número de boletas a imprimir no señala en cantidad líquida y analítica las boletas a imprimir, todo ello se hizo mediante inter oficios, sin comunicarlo al Consejo Estatal siquiera.

Ahora bien la responsable basa todo el tema de enfajillado y distribución en un acuerdo general del INE, que como ya dijimos se ejerció con facultades de atracción inconstitucionales y señala que se cumplió con el acuerdo INE/CG122/2016, pero incluso ni siquiera con ese acuerdo se cumplió:

(Transcripción)

La responsable arriba a la conclusión de que las boletas fueron distribuidas correctamente sin analizar de forma pormenorizada cada una de las actas de recepción de las boletas por las Asambleas Municipales, para determinar si habían cumplido con la Ley Electoral del Estado, pues si bien

es cierto se aplicaron los lineamientos a los que hace referencia, la confección de las actas es fundamental para dar certeza a todos y cada uno de los actos y las mismas no cumplen con los requisitos mínimos de circunstanciación y formalidades que la Ley Electoral de Chihuahua exige.

Además hay que señalar que los acuerdos INE/CG122/2016 e INE/CG950/2016 adolecen de lo ya señalado en relación a la invasión de competencia en tareas propias de la jornada electoral, además de que el marco normativo del que deriva, es violado pues ejercen facultades de atracción no para un asunto determinado a fin de fijar algún criterio interpretativo, sino para dejar de aplicar el marco normativo local y asumir funciones, tan es así que los recibos de entrega de paquetes electorales a los presidentes de mesa directiva de casilla están en poder de las Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral, tal y como lo señaló el Instituto Nacional Electoral en su Informe inicial, pues fueron quienes entregaron los paquetes a través de los capacitadores, que a la postre son los que sustituyen al Presidente de Casilla en los casos que ya hemos identificado en la entrega del paquete electoral, resultando esta una violación grave y sustancial que se presentó en 894 casillas. Este traslape de funciones lo pretenden justificar con el convenio de colaboración, sin embargo la Ley no puede dejarse de aplicar por convenio entre partes, pues aunque se tengan facultades de asunción total o parcial y de tracción éstas se encuentran acotadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos que explicamos anteriormente y por la distribución competencial del artículo 41 Constitucional, de tal suerte que la Ley Electoral del Estado no puede dejarse de aplicar por alguna convención, acuerdo general, menos si no fueron publicado en el periódico del estado y tienen un origen viciado por violación al artículos 41 y al 105 Constitucional.

Resulta aplicable la siguiente tesis:

Tesis XXIII/99

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). (Se transcribe).

Con lo anterior quedó determinado que la violación alegada es grave o sustancial, para aplicar las reglas de la determinancia cualitativa y cuantitativa que se invocaron en los

SUP-JRC-317/2016

considerandos de la sentencia de centro tabasco, tendríamos que demostrar que esta irregularidad grave plenamente probada con los recibos de entrega de los paquetes en donde se hizo constar que lo hacia el capacitador o cae, aconteció en múltiples ocasiones y en una gran parte del territorio, como así fue en más de la mitad de los municipios del Estado y en 894 casillas hasta ahora confirmadas, agregando 166 que no tienen recibo porque no existe.

A todo esto hay que agregar que la mayor parte de los paquetes entregados en Juárez por capacitadores se hizo en la madrugada del día 6 de junio, alrededor de 300.

Como lo hemos señalado en nuestra demanda, la producción, distribución, entrega y resguardo de boletas es una de las actividades más importantes que se realizan en un proceso electoral, de hecho es tan importante la impresión de las mismas, que constitucionalmente existe distribución de competencias para dicha actividad entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales electorales.

Así pues en el artículo 41 Constitucional, se establece en su fracción V, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, y en la misma fracción en el apartado C, se señala:

(Transcripción)

Bajo esta distribución de competencias, el Instituto Estatal Electoral estaba obligado a producir e imprimir las boletas, electorales, a diseñar el plan de resguardo y distribución y a garantizar la entrega en tiempo y forma de las mismas, pues dichas atribuciones le son propias, a menos que se haya acordado por el Instituto Nacional Electoral asumir directamente al realización de dichas actividades, lo cual en la especie nunca sucedió, o bien, que hayan suscrito convenio debidamente acordado por el Consejo Estatal de Instituto Estatal Electoral para que el Instituto Nacional Electoral asumiera directamente la función electoral en el proceso local, lo cual tampoco sucedió, pues dichas facultades de asunción solo pueden hacerse antes de que inicie el proceso electoral, lo cierto es que con ese instrumento se violentó el marco normativo en pleno proceso electoral, provocando la incertidumbre que se percibe en todas las actuaciones del órgano electoral local, por la invasión en sus atribuciones del órgano nacional.

Conforme a los principios de legalidad y certeza la impresión de boletas electorales deben garantizar el sufragio efectivo del electorado, de tal manera que su cantidad es directamente proporcional al número de electores registrados

en la lista nominal, pero además es necesario garantizar el voto de los representantes de casilla acreditados por los partidos políticos y candidatos independientes, tal y como se señala en el artículo 145 de la Ley Electoral del Estado:

(Transcripción)

Nótese que para poder cumplir con lo anterior, de manera analítica el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, debe imprimir un número de boletas equivalente al número de electores registrado en la lista nominal, y además debe mandar imprimir el número de boletas necesarias para que puedan votar los representantes de casilla.

Lo anterior debe acordarse de manera desglosada y analítica, señalando el número de casillas y su lista nominal determinando cuántas boletas se requieren para cada una de ellas, dependiendo del número de partidos políticos que participan y de candidatos independientes que finalmente queden registrados en las diferentes elecciones. La lista nominal que se va a usar debe ser determinante para el cálculo, conforme al corte definitivo de la misma, lo cual debe darse a conocer en el Consejo Estatal, esto en aras de un principio lógico, de certeza y de máxima transparencia.

En cada municipio y distrito el impacto de dicha disposición es diferente, pues no se sabrá realmente cuántos candidatos independientes existen hasta que hayan concluido las fecha de registro de los mismos, por ello aunque solo hubo un candidato independiente para Gobernador, resulta que por ejemplo en Chihuahua y Juárez, había además candidatos independientes para ayuntamiento y diputados, de tal manera que en esos espacios territoriales había que proveer de mayor número de boletas para los representantes de partido, todo lo cual indica que el número de boletas debe ser acordado de manera analítica, esto es, cantidad necesaria en cada casilla, en función de lo previsto por el artículo 145, numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral del Estado, acuerdo que corresponde emitir al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en base a lo previsto por el artículo 64, numeral 1, inciso e) y g) de la Ley Electoral del Estado y con la cantidad que se señale para cada casilla, hacer una sumatoria por elección, municipio y distrito, que permita a ciencia cierta saber cuántas boletas se van a requerir y en base a ello proceder a su producción, conforme al plan de impresión que también el Consejo estatal debió expedir y aprobar, según se señala en el inciso g) del numeral 1 del artículo 64 de la Ley Electoral del estado:

(Transcripción)

Es claro que debió haber existido un acuerdo que detallara el plan de impresión y distribución, pero no lo hay, es

SUP-JRC-317/2016

más, en el informe circunstanciado, que conforme al artículo 328 y 329 de la Ley Electoral del Estado la responsable está obligada a emitir, ni siquiera emite observación al respecto, pese a que es evidente la causa petendi de la demanda de inconformidad, la falta de certeza en el número de boletas producidas y su final distribución a las mesas directivas de casilla.

Se pretende justificar el envío y recepción de boletas a las Asambleas Municipales con una serie de actas que realmente no cumplen con lo previsto en la Ley, por lo que se objetan en cuanto al contenido y forma de los hechos que se hacen constar en las mismas, basados en la siguiente consideraciones:

La fe pública es la función que le está dotada al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral conforme a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Electoral del estado de Chihuahua que señala:

(Transcripción)

Bajo este precepto, no es posible que una persona que pueda ser personal administrativo del Instituto Estatal Electoral, ya sea adscrito a cualquier Asamblea Municipal o al Consejo General, pueda actuar en funciones de fe pública, sin que le haya sido dotada o delegada por acuerdo del Consejo Estatal, de ahí que cuando se aprueba el plan de distribución de las boletas, se debe decir cómo y quién las va a llevar, para que en todo caso, se le delegue esa función y sus constancias tengan valor probatorio, de lo contrario, los datos asentados solo son su simple dicho, sin ninguna vinculación al partido que represento, pues en las referidas actas y constancias, los funcionarios que en ellas intervinieron hacen constar la presencia de otras personas sin que obren sus firmas, solo con su dicho y también determinan sin circunstanciar el supuesto número de boletas que se movilizaron, sin referir folios, ni cajas, ni el estado es que se encontraban, resultando que lo que se evidencia es el total descuido en su distribución, violando el principio de certeza, pero también el de legalidad.

El artículo 144 de la Ley Electoral del Estado es preciso en señalar qué se debe de hacer, y como se advertirá fue violentado en su totalidad:

(Transcripción)

Cabe señalar que conforme a lo inserto en el Agravio Segundo, se presentó incidente de objeción relativo al documento correspondiente. En relación al numeral anterior, es de señalarse que ninguna de las entregas se hizo con 20 días de anticipación a la jornada, tampoco existe constancia alguna

que acredite que se notificó a los partidos de la diligencia de sellado de boletas, ni de su derecho a firmarlas, como tampoco existe convocatoria a consejeros y representantes de partido, expedida por los Presidente de las Asambleas Municipales y debidamente notificada, para acudir a la recepción de las boletas, pues solo se recibieron como paquetería de “DHL” y no con la formalidad que la ley señala, que no es ociosa, sino que es fundamental para garantizar la certeza de la elección.

10) Para su control se tomarán las medidas siguientes:

(Transcripción)

Cabe señalar que conforme a lo inserto en el Agravio Segundo, se presentó incidente de objeción relativo al documento correspondiente pues no se convocó a los demás integrantes de la Asamblea Municipal.

(Transcripción)

Cabe señalar que conforme a lo inserto en el Agravio Segundo, se presentó incidente de objeción relativo al documento correspondiente pues no se circunstanció correctamente el acta, se asentaba el número de boletas, sin la referencia de folios, o cajas y su contenido y no se firmó el acta por todas las personas que supuestamente se encontraban en la diligencia.

(Transcripción)

Cabe señalar que conforme a lo inserto en el Agravio Segundo, se presentó incidente de objeción relativo al documento correspondiente. Pues no existe acuerdo alguno de las asambleas municipales, que hayan emitido previamente para asegurar las boletas, se advierte en todas las actas una “constancia” de “machote”, que no indica o pone en evidencia el lugar preciso de aseguramiento, es decir, habla de que se depositaron en el local de la asamblea, pero no dicen si era un cuarto con llave, una bodega, un espacio enrejado, absolutamente nada, en las 67 Asambleas Municipales, se levantó exactamente la mismas circunstancias imprecisa, que no cumple con la finalidad que la Ley marca, de dejar con seguridad depositadas las boletas, sin que nadie pueda acceder a las mismas.

(Transcripción)

Cabe señalar que conforme a lo inserto en el Agravio Segundo, se presentó incidente de objeción relativo al documento correspondiente, pues no existe registro de esta diligencia, ni convocatoria a los Consejeros Electorales para la práctica de la misma, debidamente notificada.

(Transcripción)

SUP-JRC-317/2016

Frente a esto ¿Cómo es posible que la responsable señale que existe prueba de que se cumplieron las formalidades en estos actos?, cito su consideración visible en la foja 404:

(Transcripción)

Lo que está señalando es que le da valor probatorio a los informes rendidos por los Presidentes de las Asambleas Municipales, como si se tratasen de las actas circunstanciadas que debieron levantar en el acto, es inconcebible y absurdo, aunado a lo anterior que no existe constancia de la presencia de nuestros representantes en cualquiera de estos actos, pues como hemos mencionado, no basta el dicho de un funcionario para constatar circunstancias supuestamente acontecidas y presenciadas por varias personas.

De las probanzas que obran en los cuadernillos auxiliares 206 y 208 se advierte que el Instituto Estatal Electoral remitió al Tribunal Estatal Electoral documentos intitulados "INFORME PORMENORIZADO QUE RINDE EL CONSEJO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE ... EN RELACION AL PROCEDIMIENTOS DE ENFAJILLADO Y SELLADO DE BOLETAS, MEDIANTE EL CUAL SE HACE CONSTAR CÓMO SE LLEVO A CABO EL ENFAJILLADO Y SELLADO DE LAS BOLETAS ELECTORALES UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCA 2015-2016" lo anterior de los siguientes municipios:

AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, CHINIPAS, COYAME DEL SOTOL, CUAUHTEMOC, CUSIHUIRIACHI, DELICIAS, EL TULE, GALEANA, GOMEZ FARIAS, GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE DB, GUAZAPARES, GUERRERO, GRAN MORELOS, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTITAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMENEZ, JUAREZ, JULIMES, LA CRUZ, LOPEZ, MADERA, MAGUARICHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FCO. DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA ISABEL, SATEVO, SAUCILLO, SANTA BARBARA, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA.

Documentos todos fechados el 13 de Julio de 2016, firmados por los Presidentes correspondientes de cada una de las Asambleas Municipales anteladas, que consignan la vaga descripción de hechos acontecidos en fecha de más de un mes de anterioridad (26, 27, 28, 29, 30 y 02 de junio) respecto al

supuesto proceso de sellado y enfajillado, donde se omite señalar las boletas que fueron selladas y enfajilladas, es decir cuántas se procesaron bajo los parámetros legales necesarios a fin de dar certeza a la cadena de custodia que a través de estos documentos se constata corrompida fue, pues la evidente omisión de los documentos probatorios que demuestren las circunstancias de modo tiempo y lugar a través de los cuales se materializó el proceso de sellado y enfajillado, tratado de subsanar a través de estos supuestos informes pone de manifiesto la falta de certidumbre en el tratamiento de las boletas electorales que como documento público base de la voluntad ciudadana debió de ser tratado como circunstancia de seguridad nacional y no con la ligereza que demuestra la omisión de las Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral, cuyos presidentes a solicitud expresa según se desprende de la propia redacción final de cada informe: “Sin otro particular más que agregar al presente informe, y en espera de cumplir cabalmente con lo solicitado” realizaron con fecha 13 de julio de 2016 los antelados informes con la pretensión de constatar hechos que debieron ser constatados en el momento de su realización, es decir cuando realmente acontecieron **y firmados por las personas que ahí intervinieron, lo cual en la especie no acontece y que el Tribunal valoró como si se tratasen de actas circunstanciadas, cuando definitivamente no lo son.**

Ahora bien conforme a la probanza que obra en el cuadernillo auxiliar 195 específicamente en las Actas de envío de *documentación electoral*, las cuales fueron realizadas con fecha cierta por funcionario del Instituto Estatal Electoral dotado de fe pública por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, se tiene que las boletas para la elección de Gobernador enviadas fueron a los municipios con las siguientes fechas:

(Se inserta tabla)

Luego entonces, si las boletas para la elección de Gobernador Fueron Trasladas por tierra y aire, los tiempos para arribar a los municipios del estado, provenientes de la Ciudad de Chihuahua, hacen imposible que en los siguientes municipios, se realizara el proceso de sellado y enfajillado en las fechas que los presidentes de las Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral señalan en su informe pormenorizado:

(Se inserta tabla)

Circunstancias todas no valoradas por la Autoridad Responsable y que de haberlo hecho le hubieran permitido concluir la verdad de los hechos: Lo cierto es que no existe

SUP-JRC-317/2016

certeza en cuanto a la veracidad de la cadena de custodia de las boletas de la elección impugnada.

Documentales que debieron haberse adminiculado con los distintos medios de prueba que obran en el expediente y que en su conjunto presumen la total incertidumbre sobre la custodia de las boletas de la elección de gobernador.

El fallo adolece de motivación cuando al analizar las distintas actas, no repara en los vicios de las mismas, no contrasta los requisitos legales con la circunstanciación deficiente de las distintas documentales, tal y como le fue precisado en el incidente de objeción que desechó ilegalmente la responsable, para concluir que se trata de errores no sustanciales, por descuido de las autoridades electorales, pero que no causan incertidumbre, afirmación que no tiene explicación alguna, más que el dicho del Tribunal.

La responsable continúa manifestando lo siguiente a fojas 407 del fallo:

(Transcripción)

No obstante que toda la información de Talleres Gráficos de México surge a raíz de un informe que rinde con posterioridad a la jornada electoral dicho ente, la responsable le da trato de acta circunstanciada, por lo que esta valoración es arbitraria, ya que el Consejo Estatal no puede delegar la facultad de vigilancia en la impresión al ente que la va a realizar, es decir, se está vigilando asimismo, de tal surte que no se cumple con esa función y parte de un hecho fáctico solo comprobable por el dicho del mismo impresor, que sólo se imprimieron esas boletas y que esas boletas se embarcaron, todo lo cual ya dijimos es una facultad de supervisión del órgano electoral, conforme a las formalidades que hemos citado repetidamente. Los lineamientos del INE además de inconstitucionales e ilegales por lo ya dicho anteriormente, no pueden superar o relevar de esta función primordial y por tanto la incertidumbre es palmaria, sobre todo cuando ni siquiera los folios progresivos que se solicitaron fueron utilizados en la impresión, lo cual deriva en el descontrol que se tuvo y se constata la falta de análisis del material probatorio por la autoridad jurisdiccional.

Ni el acuerdo IEE/CE113/2016, ni el INE/CG950/2015 pueden motivar un plan de impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, el hecho de que se hayan fijado lineamientos técnicos para la impresión no implica que el Consejo Estatal ya no tenga que vigilar nada y esperar de manera pasiva a que le lleguen las boletas.

El IEE debió haber verificado y constatado las medidas de seguridad, ¿de qué me sirve que digan que hay cámaras de vigilancia?, si no lo estoy vigilando, ¿Acaso estuve viendo las cámaras? ¿Tenía personal propio haciendo eso?, no, alguna vez asistí a los talleres a verificar el inicio y la culminación de la impresión personalmente, no, menos acompañado de los Consejeros y representantes de partido, así se comportó el Presidente del IEE; aun y cuando se aplicaren los lineamientos del INE al respecto, la responsable señala que se estableció en ellos lo siguiente según detalla la sentencia en las fojas 424 y 425:

(Transcripción)

La última parte de los transcrito claramente señala la necesidad de custodiar las boletas electorales, desde la producción de la documentación electoral, hasta la conclusión del proceso electoral, para lo cual se requirió implementar una estrategia, en coordinación con instituciones de seguridad pública en los ámbitos federal, local y/o municipal, con la celebración de convenios en los que se definieran las etapas, periodos de inicio y conclusión, requerimientos, responsables, vías de comunicación, directorios del personal responsable por ambas partes, rutas de distribución de la documentación, las consignas de la custodia y demás elementos que fueran pertinentes.

Precisamente eso no se hizo, no existe un solo convenio que así lo señale, y el Tribunal pareciera que no leyó eso, desde su producción y traslado, es decir no existe acta circunstanciada alguna, de ningún tipo, video o muestra fotográfica que acredite que se estuvo vigilando ese proceso, el hecho de que se haya dispuesto alguna bodega para guardarlas no implica que existió el cumplimiento a ese deber de vigilancia sobre un asunto de tal magnitud.

Ahora bien en la foja 425 la responsable hace una serie de razonamientos basados en informes del órgano electoral y de Talleres Gráficos que rinden con posterioridad a la jornada electoral, no en base de actas circunstanciadas que haya constatado los hechos, a fin de garantizar el principio de certeza, es pueril pretender tener por cumplido el deber de vigilancia con esos elementos, sobre todo que el que informa es Talleres Gráficos de México, es decir el mismo impresor se vigiló y custodió, sin que se hable de convenios celebrado por el IEE con alguna corporación federal para resguardarlas, ni siquiera en el traslado, el embarque dice el impresor que fue sellado, pero volvemos al tema, mediante un informe posterior, por lo que esas manifestaciones carecen de valor probatorio al provenir del sujeto al que estaba destinada la vigilancia que es

SUP-JRC-317/2016

el propio impresor, sobre todo si ni siquiera se cumplió con el foliado progresivo solicitado por la Coordinación de Organización del IEE, lo cual ha quedado comprobado en autos conforme al caudal probatorio que existe en el mismo.

En relación al transporte de las boletas a las Asambleas Municipales nos remitimos a lo ya dicho a lo largo de estos agravios y lo señalado en el incidente de objeción que fuera desechado en obvio de repeticiones, pero sustancialmente, las actas que se reseñan relativas a la recepción de las boletas adolecen de las formalidades que ya hemos precisado, pero sobre todo violaron la Ley Electoral al no citar previamente a los representantes de partidos políticos y consejeros a la recepción de las boletas, prese a diversos requerimientos hechos por la autoridad responsable al Instituto Estatal Electoral, y no acordar previamente el lugar de resguardo de las mismas, desde luego que como lo hemos argumentado anteriormente no están debidamente circunstanciadas y el Tribunal omitió la valoración de ello, confiriéndoles una veracidad que no reflejan.

Aunque la responsable señale que la custodia de las boletas se acreditó con las referidas actas, no existe prueba de convenio de coordinación con las corporaciones policías y aun en el evento de que fuera cierto que el transporte a las Asambleas Municipales sí estuvo custodiado, el transporte de Talleres Gráficos de México a Chihuahua es totalmente incierto, sin que existan más documentos que los informes de los mismos responsable de la violación, por lo que el dicho propio de que sí vigilé y custodié, carece de valor probatorio.

La actuación del órgano electoral es de negligencia en este tema y la valoración y alcances a la documentación que reseña el Tribunal no es acorde a la magnitud de la responsabilidad de custodiar las boletas electorales en todos sus tramos desde la producción hasta el resguardo posterior a la elección. Otorgar valor a los dichos posteriores a la elección de los propios responsables de la violación nos deja en estado de indefensión, pues no tenemos como controvertir su dicho y viola el principio de legalidad al no ajustarse a las formalidades que la ley exige para dar fe de los actos electorales.

La falta de un plan de vigilancia, control de impresión, distribución y resguardo y la omisión absoluta de la vigilancia en la impresión por parte del consejo estatal del IEE, al ser un asunto de seguridad nacional, debe considerarse sustancial y grave, de tal magnitud que viola de manera generalizada el principio de certeza y de legalidad, al no poderse garantizar que no se hayan producido boletas adicionales, que es el espíritu de la norma y es clara la violación a los siguientes preceptos, antes

la actuación irresponsable del órgano electoral en este preciso tema:

(Transcripción)

En relación al numeral 3.2.4.5 referente al apartado de **Recuentos en sede municipal y la ausencia de formalidades legales**, el Tribunal Estatal Electoral hace observaciones a los agravios presentados por este Instituto Político que a manera de sinopsis se reproducen:

- *De los resultados de las actas finales, visibles en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se advertían diferencias aritméticas en un gran número de casillas.*

- *Dadas las inconsistencias advertidas, debieron haberse recontado las casillas en términos de los artículos **184 y 185** de la Ley y no solo realizar un muestreo arbitrario.*

- *A la fecha de presentación del medio de impugnación, el Consejo no tenía registro de cuantos paquetes electorales se recontaron.*

- *No se tienen o no existen las actas individuales de los recuentos, aunado al hecho de que no les fueron facilitadas inmediatamente después del cierre del paquete electoral recontado, sino que hasta varios días después se les entregó un medio magnético con un archivo denominado “resultados por casilla”, el cual no tenía autenticación y no contaba con el rubro de boletas sobrantes.*

Los cuales a consideración del Tribunal son inoperantes. Esto causa agravio a este Instituto Político debido a que no tiene fundamento alguno, ya que si bien es cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez, para el referido Tribunal nuestros agravios se limitan a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, y estas no pueden considerarse un verdadero razonamiento. Lo anterior es totalmente falso y carece de toda fundamentación, ya que al momento de presentar la demanda se hicieron valer estas, debido a que los resultados de las actas finales eran públicos en la página del Programa de Resultados Preliminares, que si bien es cierto no son resultados oficiales, dejaban ver en las actas finales de escrutinio y cómputo una gran cantidad de errores aritméticos, que son un causal para que las Asambleas Municipales realicen un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas que presenten estos errores según lo que establece los artículos 184 y 185 de la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, no solo un muestreo arbitrario, tal y como se llevó a cabo por parte del Consejo. Aunado a esto a la fecha de la impugnación, el Consejo no tenía un registro de

SUP-JRC-317/2016

cuantos y cuales paquetes se recontaron ya que no se tienen o no existen las actas individuales de los recuentos, solo nos fue entregado un medio magnético con un archivo denominado “resultado por casilla”, el cual carecía de identificación y no contaba con el rubro de boletas sobrantes.

Ahora bien el Tribunal hace señalamientos relativos a que en la demanda se debió de aportar elementos que apoyaran los razonamientos vertidos, como el número de casillas en las que no se hubiera accedido al recuento, o la negativa a entregar las actas individuales o, en su caso, prueba fehaciente de su existencia lo cual si fue aportado como pruebas, en primera fueron levantadas dos actas de fe de hechos una ante la fe del Licenciado Héctor Arcelus Pérez, Notario Público número uno del Distrito Judicial Bravos, asentada bajo el número 433 del libro 1 de Registros de Actos Fuera del Protocolo; y otra, Acta de fe de Hechos ante la fe del Licenciado Víctor Manuel González López, Notario Público Número diecinueve del Distrito Judicial Morelos, asentada bajo el número 1711 del volumen 11 del libro de Registros de Actos Fuera del Protocolo que fueron admitidas por el Tribunal Estatal Electoral el día 5 de julio del 2016, en las que quedó asentado que se solicitaron ante el Instituto Estatal Electoral las actas individuales de los recuentos realizados en la Asambleas Municipales de Ciudad Juárez como de Chihuahua respectivamente, precisamente porque dichos documentos como se señala en la demanda fueron confeccionados con posterioridad.

Incluso esto motivó que en el juicio JIN-226/2016, fuese desechado por la responsable bajo el argumento de que había sido presentado extemporáneamente y que la Sala Regional al valorar el acta notarial en relación con las actas de recuento que era de fecha posterior al acta de computo municipal, ordenara al Tribunal admitir, resultando en la especie la misma situación de omisión valorativa de al responsable de los mismos documentos.

Como referencia se cita la sentencia dictada por la Sala regional en el expediente SG-JRC-76/2016, que aunque referida a la elección de ayuntamiento de Juárez, la prueba de que no nos entregaban las actas de recuento son las mismas que se utilizaron en el presente juicio, por lo que es incongruente que con estos antecedentes el tribunal me indique que debí señalar las casillas que fueron recontadas, si de ello no tenía conocimientos, hasta que del material probatorio allegado al proceso lo obtuve físicamente:

(Transcripción)

Además de lo anterior nos remitimos al propio estudio que hace la responsable del error aritmético que se invocó para evidenciar que aun ahora subsisten la inconsistencias aritméticas tal y como lo señalamos en estos agravios, lo que es prueba indiscutible de que las casillas que se ubicaban en las hipótesis de recuento son más que las que realmente se sujetaron a ese procedimiento, lo que equivale a que los cómputos municipales no se hayan ajustado a las normas previstas para ese caso, y hayan violado el principio de legalidad y certeza y por ello aún se mantenga la incertidumbre aritmética.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares, que si bien es cierto no es un medio oficial para proveer resultados definitivos sirve como base para observar que existía una notoria cantidad de errores aritméticos en las actas, ya que es un medio cuyo objetivo es el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, a los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía, tal y como lo establece el artículo 176 numeral segundo.

Ahora, por lo que se refiere al recuento, los artículos 184 y 185 de la Ley disponen, entre otras cosas, que las Asambleas Municipales podrán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando los resultados de las actas no coincidan, se detecten alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes que generen duda fundada sobre el resultado de la votación, o cuando no existiera el acta en el expediente ni obrara en poder del presidente de la asamblea respectiva lo cual es el caso que nos atañe, Así pues, de acuerdo con el sistema de nuevo escrutinio y cómputo en México, los recuentos de votos pueden clasificarse de la manera siguiente:

a) Recuento parcial. Como su nombre lo indica, sólo se realiza respecto de una parte del universo de casillas.

b) Recuento total. Se realiza el recuento de votos de la totalidad de las casillas de un distrito, respecto de la elección cuestionada.

c) Recuento en sede administrativa. Son aquellos supuestos previstos en la norma para que el recuento sea realizado por la autoridad organizadora de los comicios, es decir, por los consejos distritales o locales.

SUP-JRC-317/2016

d) Recuento en sede judicial. Son aquellos supuestos previstos en la norma ordenados y realizados en un órgano judicial.

Además, respecto a la solicitud de recuentos de la votación recibida en las casillas, resulta que el artículo 184, numeral 1, de la Ley, señala como supuestos para la realización de nuevos escrutinios y cómputos, los siguientes:

a) Si el Consejero Presidente de la asamblea municipal, no tiene en su poder el acta, porque ésta no se remitió por separado sino dentro del paquete electoral, éste se abrirá para extraer el acta correspondiente y se comparará con las actas que presenten los representantes acreditados de los partidos y coaliciones, y de coincidir sus resultados, se computarán. En caso de que no coincidan, se abrirán los sobres que contengan las boletas, y se hará de nuevo el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente.

b) Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, se procederá a realizar nuevamente su escrutinio y cómputo, levantándose el acta correspondiente.

c) Si existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse o aclararse por otros medios.

d) Cuando todos los votos válidos hayan sido depositados a favor de una misma candidatura.

e) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre el candidato del partido político o en su caso del candidato independiente solicitante del nuevo escrutinio y cómputo y el primer lugar de la votación.

De lo anterior se deduce que **SI** existía un causa justificada para abrir los paquetes electorales y realizar un nuevo conteo ya que la mayoría de estos presentan errores aritméticos actualizándose las situaciones detalladas en el precepto normativo, lo cual es conducente para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, pues existe riesgo a la vulneración de los principios rectores de la materia. A su vez, el artículo 385, numerales 1 y 2, de la Ley señala que sólo podrá ser declarada nula la elección cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

En otras palabras, tenemos que es el principio de certeza, inmerso en el recuento, el que pretende evitar la

manipulación de los resultados obtenidos de las urnas y garantizar la voluntad popular mediante la emisión del voto.

Por lo tanto, la diligencia de un nuevo escrutinio y cómputo, debe brindar certeza a los resultados electorales, y no una vulneración a los principios rectores de la materia electoral, entre ellos el de legalidad y certeza.

Los datos del escrutinio y cómputo sólo pueden dar certeza, cuando se contrastan con datos relevantes, como son las boletas recibidas y las boletas sobrantes, es decir la suma total de votos, más las boletas sobrantes, debe ser igual a las boletas recibidas, de tal manera que si no se tuvo control sobre dicho dato, es muy fácil cuadrar los resultados, pues el único dato disponible para saber cuántas boletas se recibieron en la casilla, es el acta de escrutinio y cómputo, dato que llenan los funcionarios de casilla, de tal manera que no hay con qué verificarlo, pues basta que hagan la operación aritmética antes reseñada, para que luego dicha suma la equiparen a las boletas recibidas y así no habrá diferencia alguna.

Como muestra del desorden y la falta de certeza originada citamos que obra en autos, que se realiza el recuento de 283 casillas, por 3 grupos de trabajo, en los municipios de Chihuahua, Meoqui y Juárez, sin precisar quienes estarían habilitados en los mismos, pero desde luego son personas distintas a los integrantes de las Asambleas Municipales, pues es imposible que estuviesen todo ellos en el mismo lugar y momento, realizando las tareas de recuento en tres grupos a la vez, todo lo cual acoto, pues quedó demostrado, que las actas de recuento no fueron elaboradas en las mesas de trabajo, sino que fueron realizadas con posterioridad, en contravención a lo previsto en la Ley, lo que de suyo es grave, pero además se evidencia que en las Asambleas Municipales de Chihuahua, Juárez¹ y Meoqui y fue una irregularidad constante y sistemática, levantar actas, constancias y certificaciones, ajenas a lo realmente acontecido, o bien, por intervinientes que no presenciaron los hechos, lo que incluso es delictivo, de conformidad con lo previstos en el artículo 8, fracción XI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que señala:

1 Lo que quedo demostrado desde el inicio del Juicio a través de dos Actas Notariales.

(Transcripción)

Por ello en nuestra demanda insistimos que esta conducta ilícita de quienes deben de garantizar la seguridad y certeza jurídica en un proceso electoral, ha generado una total desconfianza e incertidumbre, en el proceso de producción, elaboración y distribución de boletas electorales, pero además en el cómputo distrital, **NO FUERON LEVANTADAS LAS ACTAS EN EL MOMENTO QUE SEÑALAN.**

SUP-JRC-317/2016

Conforme al artículo 322 de la Ley Electoral del Estado, quien afirma tiene la carga de la prueba, el que niega sólo si su negativa entraña una afirmación, pero sin duda alguna aun en ese caso, quien pretende demostrar un hecho negativo, tiene la dificultad probatoria y le asistirá el derecho de demostrarlo con prueba indirecta:

(Transcripción)

En el informe circunstanciado se adjuntó copia de 304 actas individuales con las siguientes características de omisión en cuanto a las circunstancias de modo tiempo y lugar que las mismas deben de contener a fin de ser certeras en cuanto a la información que contienen:

CHIHUAHUA:

- 106 actas sin datos de boletas entregadas al funcionario de mesa directiva de casilla, sin datos de boletas sobrantes, sin datos de representantes de partidos que votaron no incluidos en lista nominal de electores, sin datos de votos válidos sacados de la bolsa, sin datos votos nulos sacados de la bolsa, sin datos del total de votos sacados de la bolsa, además de que están realizadas en la mayoría de los casos con un minuto de diferencia y en algunos casos a la misma hora, es decir las actas correspondientes a las secciones 407 BASICA, 410 BASICA, 411 CONTIGUA 1, 415 BASICA, 437 BASICA, 438 BASICA, 439 CONTIGUA 1, 470 ESPECIAL 1, 495 BASICA, 509 EXTRAORDINARIA 1, 510 BASICA, 518 BASICA, 521 CONTIGUA 1, 534 CONTIGUA 1, 537 BASICA, 538 BASICA, 539 CONTIGUA 2, 540 CONTIGUA 1, 540 CONTIGUA 2, 541 CONTIGUA 1, 541 EXTRAORDINARIA 1, 542 CONTIGUA 1, 547 BASICA, 557 CONTIGUA 1, 562 BASICA, 565 BASICA, 566 BASICA, 569 BASICA, 573 BASICA, 573 CONTIGUA 1, 578 EXTRAORDINARIA 1, 585 CONTIGUA 1, 594 CONTIGUA 1, 596 EXTRAORDINARIA 1, 598 BASICA, 598 CONTIGUA 1, 603 BASICA, 607 BASICA, 608 BASICA, 608 CONTIGUA 3, 608 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2, 608 ESPECIAL 1, 609 EXTRAORDINARIA 1, 609 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2, 609 EXTRAORDINARIA 3, 610 CONTIGUA 2, 610 EXTRAORDINARIA 4 CONTIGUA 3, 311 CONTIGUA 1, 613 BASICA, 613 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3, 624 BASICA, 626 CONTIGUA 1, 629 BASICA, 6230 BASICA, 633 CONTIGUA 1, 636 BASICA, 645 BASICA, 650 BASICA, 668 CONTIGUA 1, 682 BASICA, 693 BASICA, 695 BASICA, 695 CONTIGUA 7, 717 BASICA, 723 CONTIGUA 1, 734 CONTIGUA 1, 767 BASICA, 788 BASICA, 790 BASICA, 793 BASICA, 848 CONTIGUA 2, 858 BASICA, 864 BASICA, 866 BASICA, 870 CONTIGUA 1, 872 BASICA, 872 CONTIGUA 2,

880 CONTIGUA 1, 881 CONTIGUA 1, 881 CONTIGUA 2, 883 BASICA, 884 CONTIGUA 1, 884 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 895 EXTRAORDINARIA 2, 895 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2, 895 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5, 899 BASICA, 2848 CONTIGUA 2, 2858 BASICA, 2858 CONTIGUA 2, 2859 BASICA, 2863 BASICA, 2865 BASICA, 2871 BASICA, 2871 CONTIGUA 1, 2877 CONTIGUA 1, 2880 CONTIGUA 1, 2893 BASICA, 3217 BASICA, 3221 BASICA, 3247 BASICA, 3251 BASICA, 3255 BASICA, 3256 BASICA, 3259 BASICA.

Nótese que existen 106 actas realizadas al unísono, de las cuales extrañamente ninguna tiene datos y fueron realizadas casi al mismo tiempo, lo cierto es que NO HAY CERTEZA EN CUANTO A LA REALIZACION LAS MISMAS.

MEOQUI:

- 4 sin firma de los integrantes de la asamblea municipal, es decir las actas correspondientes a las secciones 2308 BASICA, 2308 CONTIGUA 1, 2312 EXTRAORDINARIA 1 y 2315 BASICA.

- 3 sin firma de los integrantes de la asamblea municipal y sin firma de representantes de partido correspondientes a las secciones 2302 BASICA, 2307 BASICA Y 2293 BASICA.

- 5 sin hora y sin fecha es decir las actas correspondientes a las secciones 2303 BASICA, 2309 BASICA, 2311 BASICA, 2312 BASICA, Y 2322 BASICA.

Nótese que existen: 12 actas sin firma de ningún representante de asamblea municipal de las cuales extrañamente ocho no están firmadas por ningún representante y de las cuales 5 no cuentan con hora de realización, lo cierto es que NO HAY CERTEZA EN CUANTO A LA REALIZACION LAS MISMAS.

JUAREZ:

- 1 sin hora, sin fecha, sin boletas entregadas, sin domicilio de donde fue realizada y hecha en computadora, es decir el acta correspondiente a la sección: 1757 CONTIGUA 1.

- 3 de 11 :00 horas del 06 de Junio, sin boletas recibidas y 1 sin boletas sobrantes, todas realizadas en computadora, es decir las actas correspondientes a las secciones: 1516 BASICA, 1536 BASICA y 2935 BASICA.

- 11 sin número de boletas recibidas y realizadas en computadora, es decir las actas correspondientes a las secciones: 1424 CONTIGUA 6, 1433 CONTIGUA 1, 1537 BASICA, 1575 CONTIGUA 1, 1814 BASICA, 1821 BASICA,

SUP-JRC-317/2016

1823 BASICA, 1829 BASICA, 2722 BASICA, 2733 BASICA y 2791 BASICA.

- 160 de 11 :00 horas del 09 de Junio, sin número de boletas recibidas y todas realizadas en computadora, es decir las actas correspondientes a las secciones: 1424 CONTIGUA 1, 1424 CONTIGUA 5, 1425 CONTIGUA 4, 1430 CONTIGUA 4, 1432 CONTIGUA 1, 1448 BASICA, 1456 BASICA, 1460 BASICA, 1469 BASICA, 1481 BASICA, 1482 BASICA, 1483 BASICA, 1484 BASICA, 1489 BASICA, 1492 BASICA, 1494 BASICA, 1495 BASICA, 1509 CONTIGUA 1, 1546 CONTIGUA 1, 1552 BASICA, 1560 ESPECIAL, 1561 BASICA, 1562 CONTIGUA 3, 1562 CONTIGUA 5 1566 BASICA, 1567 BASICA, 1584 BASICA, 1588 BASICA, 1597 CONTIGUA 1, 1603 BASICA, 1608 BASICA, 1616 CONTUA 1, 1618 BASICA, 1630 BASICA, 1642 CONTIGUA 2, 1655 CONTIGUA 1, 1669 BASICA, 1677 BASICA, 1687 BASICA, 1712, CONTIGUA 1, 1716 BASICA, 1724 BASICA, 1726 CONTIGUA 1, 1750 CONTIGUA 1, 1753 BASICA, 1753 CONTIGUA 1, 1755 BASICA, 1760 BASICA, 1778 CONTIGUA 1, 1786 BASICA, 1790 BASICA, 1796 CONTIGUA 1, 1806 BASICA, 1826 CONTIGUA 1, 1830 BASICA, 1833 BASICA, 1858 BASICA, 1858 CONTIGUA 2, 1865 BASICA, 1878 CONTIGUA 2, 1878 CONTIGUA 3, 1885 CONTIGUA 1, 1885 CONTIGUA 4, 1885 CONTIGUA 5, 1885 CONTIGUA 7, 1894 BASICA, 1916 CONTIGUA 3, 1924 BASICA, 1930 CONTIGUA 3, 1932 CONTIGUA 1, 1978 CONTIGUA 1, 2008 CONTIGUA 1, 2008 CONTIGUA 2, 2019 BASICA, 2020 BASICA, 2032 BASICA, 2055 CONTIGUA 1, 2065 CONTIGUA 1, 2067 BASICA, 2099 BASICA, 2120 CONTIGUA 1, 2120 CONTIGUA 2, 2120 CONTIGUA 6, 2123 BASICA, 2127 CONTIGUA 1, 2136 BASICA, 2139 BASICA, 2146 BASICA, 2149 CONTIGUA 1, 2155 ESPECIAL 1, 2172 BASICA, 2188 BASICA 2192 CONTIGUA 1, 2197 CONTIGUA 2, 2718 CONTIGUA 1, 2736 BASICA, 2738 CONTIGUA 1, 2739 CONTIGUA 1, 2740 CONTIGUA 1, 2752 CONTIGUA 2, 2756 CONTIGUA 1, 2770 CONTIGUA 1, 2775 CONTIGUA 1, 2777 BASICA, 2777 CONTIGUA 1, 2781 CONTIGUA 1, 2782 CONTIGUA 4, 2782 CONTIGUA 5, 2782 CONTIGUA 7, 2785 BASICA, 2794 BASICA, 2815 BASICA, 2815 CONTIGUA 1, 2815 CONTIGUA 2, 2815 CONTIGUA 3, 2819 BASICA, 2819 CONTIGUA 2, 2820 BASICA, 2821 BASICA, 2821 CONTIGUA 2, 2821 CONTIGUA 3, 2821 CONTIGUA 4, 2821 CONTIGUA 13, 2823 CONTIGUA 8, 2825 CONTIGUA 1, 2832 BASICA, 2832 CONTIGUA 1, 2832 CONTIGUA 2, 2840 BASICA, 2842 CONTIGUA 1, 2843 CONTIGUA 1, 2914 BASICA, 2915 CONTIGUA 1, 2916 BASICA, 2917 BASICA, 2917 CONTIGUA 1, 2918 CONTIGUA 1, 2918 CONTIGUA 2, 2919 BASICA, 2919 CONTIGUA 1, 2922 BASICA, 2928 BASICA, 2930 CONTIGUA 2, 2930 CONTIGUA

4, 2958 BASICA, 2962 BASICA, 2974 CONTIGUA 3, 2975 BASICA, 2997 BASICA, 3012 BASICA, 3019 BASICA, 3059 BASICA, 3076 BASICA, 3079 BASICA1 3090 BASICA, 3099 BASICA, 3100 BASICA, 3109 BASICA, 3115 BASICA y 3139 BASICA.

Nótese que existen: 150 actas realizadas a la misma hora del mismo día, de las cuales extrañamente la gran mayoría no están firmadas por nuestro representante, 1 acta que no sabemos cuándo ni dónde se realizó y 3 actas realizadas antes de la fecha permitida por la ley, lo cierto es que NO HAY CERTEZA EN CUANTO A LA REALIZACION LAS MISMAS.

MORELOS

- 11 de 17:00 horas del 08 de Junio, sin firma de nuestro representante y todas realizadas en computadora, es decir las actas correspondientes a las secciones: 2328 BASICA, 2323 CONTIGUA 1, 2324 BASICA, 2325 BASICA, 2326 BASICA, 2327 BASICA, 2328 BASICA, 2329 BASICA, 2329 CONTIGUA 1, 2329 EXTRAORDINARIA, 2330 BASICA.

Nótese que existen: 11 actas realizadas a la misma hora del mismo día, de las cuales extrañamente ninguna está firmada por nuestro representante, y todas están elaboradas a la misma hora y día que se realizó el acta de computo municipal de la elección de gobernador, lo cierto es que NO HAY CERTEZA EN CUANTO A LA REALIZACION LAS MISMAS.

A simple vista las actas de recuento no cumplen con su cometido, de superar la duda que la de casilla generaba, y si bien es cierto las actas de casilla con datos relevantes en blanco pueden inferirse su contenido, partiendo del hecho de que los ciudadanos no son expertos de la materia, los actos realizados en la Asamblea Municipal son diferentes, pues son personas dedicadas a esa función y basta a simple vista observar las actas para advertir su confección incorrecta.

Como corolario de todos y cada uno de los agravios que deben analizarse en conjunto y no aisladamente como lo hizo la responsable, tenemos que el marco normativo aplicable violentó el artículo 105 Constitucional ya que estuvo variando las normas jurídicas electorales fundamentales en el proceso electoral.

Se destaca que las atribuciones conferidas en las leyes electorales a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, al ser éstos una autoridad electoral son normas jurídicas fundamentales que no pueden tener variación 90 días antes de que inicie el proceso electoral, según lo previene el artículo 105 de la Constitución Federal, tal y como lo señala la siguiente

SUP-JRC-317/2016

tesis de jurisprudencia que dice que no se puede variar por ninguna norma sin importar su jerarquía:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES”, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN 11, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Se transcribe).

Las violaciones constitucionales en materia electoral en ejercicio de facultades por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fueron tan graves que para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/2016, de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan unas serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de atracción, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre, violando los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 173 y 174 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

(Transcripción)

Lo que sucedió es que al modificar legal y materialmente el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral.

Así, derivado de esa invasión de facultades se cometieron una serie de irregularidades graves que violentan los principios constitucionales a que está sujeta una elección para que sea declarada válida.

Reseñando brevemente:

1. Se hizo valer la causal genérica de nulidad, por violaciones graves, generalizadas y sistemáticas. la violación a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, equidad y máxima publicidad.

2. En el fondo del asunto se está combatiendo la violación de la cadena de custodia de las boletas electorales, pues fueron impresas en Talleres Gráficos de México sin ningún tipo de control, ni vigilancia del Instituto Estatal Electoral, a pesar de existir disposición expresa en la Ley. Incluso los folios que se pidieron son del 1 al 2780561 y realmente se enviaron 79 cambios de folio, ya que los numeraron del 1 al n por cada municipio y distrito.

3. No existen actas circunstanciadas en los tramos de control, al inicio y termino de la impresión, embarque de México a Chihuahua, y aunque sí hay actas de distribución a las Asambleas Municipales están deficientes. Tampoco existen actas circunstanciadas del enfajillado.

4. El Instituto Estatal Electoral justificó su actuación con el Convenio de Colaboración celebrado con el INE, sin embargo dicho convenio violó la distribución de competencias prevista en el artículo 41 de la Constitución Federal, pues prácticamente intervino el INE en todas las funciones del IEE, como si hubiera ejercido una asunción total.

5. Se ejercieron facultades de atracción por el INE en temas futuros, con esta fórmula: "se aplicarán los lineamientos que se expedirán en uso de las facultades de atracción", resultando que esas facultades se aplican en un asunto determinado y desde luego no pueden aplicarse a futuro.

6. No hubo certeza de la normatividad aplicable, la cual incluso se estuvo variando en todas las funciones electorales en contravención de la Ley Local y de las competencias reservadas al IEE por la constitución federal.

7. Se modificó la normatividad jurídica fundamental durante el proceso electoral, violando el 105 Constitucional que prohíbe que las normas electorales fundamentales se modifiquen 90 días antes de la elección.

8. El Convenio de Colaboración se firmó el 15 de diciembre de 2015 y se empezó a aplicar sin que se haya

SUP-JRC-317/2016

publicado en el periódico oficial del estado, hecho que sucedió hasta el 30 de marzo de 2016.

9. Existen más de 894 casillas donde el paquete electoral fue entregado por los capacitadores asistentes, según los recibos de paquete, que fueron agregados al expediente en ejercicio de las facultades para mejor proveer, un alto porcentaje corresponde a Juárez.

10. Cabe señalar que en nuestra legislación se establece expresamente esa obligación para el Presidente de Casilla **y no existe disposición que permita deducir que el asistente electoral está facultado para entregar el paquete.**

11. En el anexo técnico del convenio de coordinación con el INE se señala incluso que los asistentes electorales deberán ayudar a los Presidentes de Casilla transportándolos para la entrega del paquete electoral, pero en ninguna parte se desprende que se les haya dado la indicación de hacerlo ellos en sustitución del funcionario de casilla

12. **Los recibos de paquete, confirman la violación grave y sistemática de la cadena de custodia de las boletas electorales.**

13. Si se toma en cuenta que la producción, resguardo y traslado de las boletas es un asunto de seguridad nacional según la LGIPE, en el proceso el IEE incumplió con dicha obligación de manera flagrante **y si luego se constata que el paquete en muchos de los casos y de forma generalizada se entrega por una persona ajena a la casilla, resulta violentado el principio de certeza,** como sucedió en la anulación de la elección CENTRO-TABASCO en 2015 por la Sala Superior.

14. A nuestro juicio aplica la tesis

Tesis XXXVIII/97

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA).

15. Se señala que el recuento se hizo fuera de los casos previstos en la Ley y que las actas no consignan todos los datos y fueron levantadas por personas ajenas a quienes los practicaron.

16. Después del estudio aritmético por casilla, aunque solo se anularon algunas, subsiste una gran diferencial acumulado de votos inconsistentes, 89530 en 1119 casillas que valoró el Tribunal Electoral, que confirman que la incertidumbre trasciende a la votación, confirmando la incertidumbre generalizada.

17. Los paquetes electorales se entregaron fuera de plazo de manera sistemática y generalizada, además por persona no facultada para ello.

18. Se anularon diversas casillas por error aritmético determinante, y por participar funcionarios de lista nominal que provocaron la recomposición del cómputo si a dicho número se le agregan los paquetes que fueron entregados por persona no facultada por la Ley para ello, resultan entonces que se acumulan irregularidades que provocan la nulidad por razón de ser un 20% o más de las casillas instaladas.

Las violaciones constitucionales en materia electoral en ejercicio de facultades por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fueron tan graves que para expedir lineamientos de enfajillado, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE/CG122/2016, de fecha 16 de marzo del año en curso. En dicho acuerdo se reseñan unas serie de consideraciones pretendiendo justificar la facultad de atracción, que no puede contemplar la inaplicación de leyes locales, sino solo fijar criterios interpretativos en un asunto en particular, el acuerdo es incluso general para todos los órganos electorales que estuvieron en elección este año y en su punto 86, señala en el acuerdo:

(Transcripción)

Ante una diversidad de ordenamientos que establecen formalidades específicas el Instituto Nacional Electoral pretende regularlos de diferente forma, a decir por ellos, porque es más eficiente, dejando sin efecto lo dispuesto en todas las leyes locales que según ellos dará más certidumbre, violando los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 173 y 174 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

(Transcripción)

Lo que sucedió es que al modificar legal y materialmente el marco normativo en pleno proceso electoral confundió al órgano local, a tal grado que la intervención del personal del INE a través de sus CAES, que luego son los que enfajillan y son también los que entregan paquete electoral al Presidente de Casilla y luego son los que en los casos que señalamos en el aparatado correspondiente entregan ilegalmente el paquete a

SUP-JRC-317/2016

la Asamblea Municipal, provocó que ni unos, ni otros cuidarán las formalidades y simple y sencillamente no se levantaron actas circunstanciadas de esa actividad tan importante del proceso electoral.

Motivos todos infortunados al establecer un orden normativo distinto al que se tenía iniciado el proceso electoral, para lo cual citamos a continuación la parte conducente de la sentencia tabasco, en la cual se determina la importancia del marco normativo certero a efecto de que se traduzca en una elección legal y cierta.

(Transcripción)

Así, i se hace un análisis integral de todos los agravios, ineludiblemente se llega a la conclusión de que las irregularidades son determinantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo bajo la óptica de la causal genérica de nulidad, dada la violación flagrante al principio de legalidad y certeza y la incertidumbre que se tuvo del marco normativo aplicable, que incluso llega al Tribunal a realizar errores interpretativos graves aplicando disposiciones ajenas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Finalmente un argumento que hicimos valer en vía de hecho notorio al Tribunal era el análisis de los resultado de los cómputos en las cuatro elecciones según la publicación oficial del órgano electoral local, en donde en un comparativo se advierte la variación entre elecciones, y aunque sabemos que no se comunican, sí hay un indicio de que las inconsistencias aritméticas no solo están presentes en las actas analizadas sino que la irregularidad es más generalizada de lo percibido, pues se supone que en las cuatro elecciones debe haber los mismos votos, con diferencias lógicas y no como se presenta a continuación en el escrito que presentamos y que no mereció mayo análisis por parte del tribunal:

(Transcripción)

Ahora bien expuesto lo anterior, se hace necesario observar que del análisis de la cadena de custodia de las boletas de gobernador, se encuentra comprobado lo siguiente:

1. Se imprimen sin control y vigilancia.
2. Se trasladan sin plan de resguardo.
3. Se trata de un asunto de seguridad nacional.
4. Se distribuyen en las Asambleas Municipales con muchos defectos y extemporáneamente.

5. No se siguen los procedimientos de enfajillado previstos en la Ley y se equivocan en el foliado progresivo que exige la Ley.

6. Se distribuyen por los capacitadores del INE a los Presidentes de Casilla. (Sí hay anexo técnico pero existe invasión de facultades).

7. Al finalizar la jornada electoral se entregan paquetes electorales por capacitadores asistentes del INE; en 4695 casillas revisadas, tenemos 894 paquetes con recibo entregado por CAES y 166 paquetes con constancia levantada por el Secretario de la Asamblea señalando que no cuentan con recibo de entrega del paquete.

Lo anterior es así y no como la responsable culmina toda vez que las documentales publicas identificadas como Informes emitidos por Talleres Gráficos de México, Instituto Estatal Electoral y Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral consignan las apreciaciones que la persona que los realiza percibe, es decir la aprehensión de hechos de acuerdo a su psique particular, lo que se traduce en un testigo singular que en ningún momento es suficiente para tener por ciertos los hechos que INFORMA, hechos que inclusive acontecieron después de treinta días de que se realiza cada uno de los Informes. que la Autoridad Responsable pretende otorgar valor probatorio, lo cual conforme las reglas de la lógica, experiencia y la sana critica es IMPOSIBLE materialmente que UNA sola persona alcance a recordar la cantidad de detalles plasmados en cada uno de los informes que emitieron Talleres Gráficos de México, el Instituto Estatal Electoral y cada una de las Asambleas Municipales, signados en su individualidad por un solo funcionario con fechas todas de más de un mes de acontecidos las circunstancias que pretenden se crea se recuerdan en su particularidad.

Es decir, la Responsable aplicó para otorgar valor probatorio pleno a los Informes señalados lo que se conoce como FALACIA DE AUTORIDAD, ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM, ARGUMENTO DE **AUTORIDAD** O MAGISTER DIXIT que consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia, sin que estos documentos sean los IDONEOS para comprobar hechos acontecidos en cierto tiempo y bajo ciertas circunstancias, pues pretenden crear convicción sobre circunstancias de modo tiempo y lugar que fueron percibidas por una sola persona siendo que su apreciación de los hechos no puede tenerse por cierta por ser una persona, un testigo singular, en este caso autoridad, en cada caso en concreto, quien lo emite, sin la participación de diferentes

SUP-JRC-317/2016

personas a las que referencian estuvieron presentes y presenciaron los hechos que INFORMA acontecieron, de tal suerte que el (los) documento (s) IDONEO (S) para aclarar y tener por probado las circunstancias tales como los actos concatenados desde la impresión de las boletas hasta su arribo a las mesas directivas de casillas debieron ser ACTAS en las cuales se asentaran de manera acuciosa los detalles suficientes que comprobasen la cadena de custodia de las boletas electorales para la elección de gobernador, tales como: ACTAS realizadas en Talleres Gráficos de México que describiera el proceso de impresión de las boletas, los tiempos en que se realizaron así como las personas que participaron en el mismo, refiriendo en cada caso la participación de cada una de ellas y consignando precisamente su constatación de los hechos a través de su firma, ACTAS de salida de las boletas de Talleres Gráficos de México hacia la Ciudad de Chihuahua que describiera el proceso de traslado de las boletas, los tiempos en que se realizaron así como las personas que participaron en el mismo, refiriendo en cada caso la participación de cada una de ellas y consignando precisamente su constatación de los hechos a través de su firma, ACTAS de sellado y enfajillado realizada en cada una de las asambleas municipales que describiera el proceso de sellado y enfajillado de boletas, los tiempos en que se realizaron así como las personas que participaron en el mismo, refiriendo en cada caso la participación de cada una de ellas y consignando precisamente su constatación de los hechos a través de su firma, documentos todos que no obran en el expediente por no existir, los cuales fueron ofrecidos como probanza desde el escrito inicial de demanda y requeridos al Instituto Estatal Electoral por la autoridad responsable, sin que a la fecha hayan sido exhibidos.

Entonces, la responsable otorga valor probatorio pleno a los Informes realizados por Talleres Gráficos de México, Instituto Estatal Electoral y Asambleas Municipales a efecto de tener por acreditado que las boletas electorales, las cuales son materia de seguridad nacional, fueron debidamente resguardadas desde su impresión hasta su ingreso a los paquetes electorales, circunstancia que como hemos mencionado no puede tenerse por acreditada pues no existe documental IDÓNEA que así lo demuestre, más bien existen elementos suficientes para crear la presunción de INCERTIDUMBRE en el manejo de las boletas desde su impresión hasta su ingreso a los paquetes electorales, incertidumbre que la responsable no toma en cuenta otorgando erróneo valor probatorio.

En efecto, la responsable otorga pleno valor probatorio, erróneamente, al documento denominado AGRUPAMIENTO

DE BOLETAS visible a fojas 710-762 del cuadernillo auxiliar 195 el cual es un documento en excell que relata el número de boletas que debieron imprimirse y empaquetarse para cada casilla, ahora bien, dicho documento es una copia certificada emitida por el Secretario del Instituto Estatal Electoral, que se desprende fue realizado por el coordinador de organización electoral del Instituto Estatal Electoral a solicitud del Presidente del propio instituto con fecha 03 de mayo de 2016, (conforme al Interoficio IEE/P/40/16), luego remitido al propio presidente del citado órgano el 12 de JULIO de 2016 (conforme al Interoficio/COE 126/2016) a efecto de ser integrado al expediente JIN 230/2016, es decir dicho agrupamiento contiene un proyección de las boletas que se imprimirían y su respectiva corrección respecto a lo que fue empaquetado, pero que bajo ninguna regla de la lógica, la experiencia o la sana crítica alcanza a probar que en efecto lo que ahí se consigna fue lo que realmente sucedió en cada una de las asambleas municipales que en su totalidad son 67, las cuales empaquetaron y enfajillaron en quién sabe que fecha, puesto que como hemos mencionado los informes no pueden ser suficientes para comprobar lo acontecido, es decir la responsable otorga valor probatorio pleno a una proyección y recopilación de datos numéricos que realiza una persona de manera individual y a la cual no es posible le consten los hechos que consigna en dicho documento, pues materialmente es imposible que una sola persona acudiese a 67 asambleas a las sesiones de sellado y enfajillado y constatará los trabajos que en 67 lugares distintos se realizaron, razón por la cual los documentos idóneos a fin de comprobar que en efecto las boletas impresas y recibidas en las asambleas fueron selladas y enfajilladas en su totalidad hubieran sido las ACTAS correspondientes que no existen. Por lo que el documento antelado bajo la apreciación de la lógica la experiencia y la sana crítica constituye prueba del “control” numérico de las boletas, pero en ningún momento de la realidad acontecida en 67 asambleas ni mucho menos en el lugar donde se imprimieron las boletas de la pasada elección.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta la demora en que incurrió el Instituto Estatal Electoral en exhibir dicho “Agrupamiento” pues el mismo fue solicitado por el partido que represento desde el 13 de Junio de 2016, ofrecido como prueba en la demanda inicial presentada ante el propio Instituto Estatal Electoral, omiso el Instituto Estatal electoral en su integración al remitir la demanda junto con su informe circunstanciado, requerido por el Tribunal Estatal Electoral el 5 de julio, requerido de nueva cuenta el 11 de julio y finalmente presentado el 13 de JULIO mediante oficio 495, **lo que demerita en la espontaneidad de la probanza y por lo tanto en su alcance**

probatorio, situación que tampoco fue tomada en cuenta por la responsable.

Ahora bien, si dicho documento intitulado "AGRUPAMIENTO DE BOLETAS" es imposible que compruebe circunstancias acontecidas en 67 lugares (asambleas municipales) relativos al procedimiento de sellado y enfajillado, también hace imposible que acredite que los paquetes fueron entregados a cada uno de los presidentes de las mesas directivas de casillas, es decir hechos que acontecieron en 5,156 lugares con 5,156 personas distintas, por lo que consideramos ilegal la afirmación de la responsable visible a fojas 405 de la sentencia que se impugna:

(Transcripción)

En efecto, la responsable considera que no es importante la presencia de 4,630 *RECIBOS DE ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA*, que afirma obran en los expedientes auxiliares 197 al 205, ni la ausencia de los restantes a concluir el número total de las casillas instaladas (5, 156) al señalar:

(Transcripción)

Otorgando a través de tal afirmación erróneamente el valor probatorio que no puede tener un documento realizado unilateralmente en contra de la experiencia, la lógica y la sana crítica, desvinculando su estudio de la totalidad de recibos de documentación y materiales entregados a los presidentes de mesa directiva de casilla que el Instituto Nacional Electoral debió entregar al Instituto Estatal Electoral y debía obrar en este expediente, dejando en claro, que nuestro partido solicitó esta probanza desde el 6 de junio de 2016, el 9 de junio de 2016, se ofreció como prueba en el escrito inicial de demanda y no fue entregada al Tribunal Estatal Electoral en el informe circunstanciado, sino con fechas muy posteriores a la radicación del asunto de mérito, tal y como consta en el expediente que se actúa, recibos de los cuales no existen los relativos a 974 casillas correspondientes a los municipios de: Aldama, Allende, Aquiles Serdan, Bachiniva, Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Chinipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Dr. Belisario Dominguez, Galeana, Gomez Farías, Gran Morelos, Guazaparez, Guerrero, La cruz, Madera, Maguarichi, Matachi, Morelos, Morís, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, San Francisco del oro, Santa Barbara, Temosachi, Uruachi.

Documentos en los cuales se asentaron los datos tales como la cantidad de boletas y los folios correspondientes de

estas, y que fueron firmados de recibido por el propio presidente de la mesa directiva de casilla, que en caso concreto de los apartados señalados como “BOLETAS” “CANTIDAD” “DEL FOLIO” “AL FOLIO” señala la responsable fueron obtenidos del documento denominado Agrupación, luego entonces al existir 35 recibos donde el folio inicial en todos estos casos es 000001 y si en el “AGRUPAMIENTO DE BOLETAS” como consta en autos la foliatura de las boletas para la elección de gobernador es continua, es dable concluir que el documento de “AGRUPAMIENTO DE BOLETAS” era uno distinto antes de la elección y fue otro al momento que se envió al Tribunal, sin tomar en cuenta los cambios que comprueba el Instituto sufrió específicamente en los municipios de Guerrero y Satevó, por lo que es imposible que se lo otorgue el valor probatorio que pretende la responsable, pues hay otros documentos que lo desvirtúan, precisamente de los datos que se asientan en los recibos mencionados y que la responsable determina fueron obtenidos del “AGRUPAMIENTO DE BOLETAS”, véase a continuación los recibos que contienen folios de boletas de gobernador con 000001 en todos los casos (los cuales obran en el expediente visibles en los tomos auxiliares 197-205, y compárese con el citado “AGRUPAMIENTO DE BOLETAS” a fojas 710-762 del cuadernillo auxiliar 195, que no tiene los mismos datos:

(Se inserta tabla)

Siendo entonces dable concluir que dichas circunstancias no pueden ser acreditadas en su totalidad por las siguientes razones: La omisión de existencia de la totalidad de los recibos en original, y el documento denominado agrupación no puede comprobar lo que se consigna en los mismos, es decir la entrega de la boletas a los presidentes de las casillas, por lo que **NO EXISTE DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO TIEMPO Y LUGAR DE LA ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL LEASE BOLETAS A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE LAS CASILLAS**, circunstancia suficiente para crear la incertidumbre total en cuanto al número de boletas que se recibieron en cada casilla.

La verdad de los hechos es que el único documento que se tiene para comprobar el número de boletas que estuvieron presentes el día de la elección, al inicio de la jornada electoral, en cada una de las casillas, es el ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL que no fue estudiada por la responsable a efecto de acreditar la cadena de custodia de las boletas electorales de la elección de gobernador y de las cuales, se desprende que si hubiera realizado el estudio correspondiera arribaría a la conclusión de que más del 20% de las casillas instaladas el día de la jornada electoral el 5 de junio de 2016, es decir 5,156,

SUP-JRC-317/2016

XXXXX casillas, es IMPOSIBLE DETERMINAR CUANTAS BOLETAS SE RECIBIERON EN LAS MISMAS pues:

1. El tribunal cuenta con **4,4482** actas de la Jornada Electoral.

(Se inserta tabla)

2. De las 5,156 casillas fueron recontadas, según dicho de la autoridad responsable a fojas 325 y 326: 252

3. De esas 4,448, 212³ paquetes fueron recontados en sede administrativa según la autoridad responsable conforme a lo señalado a fojas 325 y 326.

4. De esas 4,448, 194⁴ actas de la Jornada Electoral distintas a las recontadas en sede administrativa, son ilegibles e imposible constatar cuantas boletas ingresaron en las casillas correspondientes.

5. En conclusión, la certeza en cuanto al número de boletas que ingresaron a cada casilla el día de la jornada electoral puede constatarse en solo 4,012 casillas.

Por esta sencilla razón pero contundente, la elección de Gobernador en el estado de Chihuahua debe ser ANULADA, pues imposible que exista certeza en cuanto al número real de boletas para la elección de Gobernador recibidas en más del 20% de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, lo anterior derivado de la invasión de facultades entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, siendo en consecuencia que las normas dejadas de aplicar virtud al convenio de colaboración que tildamos de inconstitucional, trajeron como consecuencia que no se esté en presencia de los documentos necesarios e idóneos para acreditar y dar certeza a la cadena de custodia de las boletas de la elección de gobernador que se nulifica, todo lo anterior como ha quedado plenamente demostrado en autos, dando como resultado que el tribunal haya emitido un fallo tan incierto como la elección que juzgó.

[...]

TERCERO. Cuestión previa. Esta Sala Superior, considera pertinente hacer las siguientes precisiones.

Para la expresión de conceptos de agravio, este órgano jurisdiccional ha admitido que se pueden tener por formulados,

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, debido a que no es requisito *sine qua non* que estén contenidos en el capítulo especial de conceptos de agravio,

Además, se ha admitido la presentación, formulación o construcción lógica de esos razonamientos jurídicos, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, porque únicamente se tiene como requisito indispensable el que se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que lo originaron, es decir las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable.

Ese criterio que ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, el cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia consultable a fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro de la "*Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral*", Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son: "**AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR**" y "**AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL**".

Por otra parte, también se ha considerado que los conceptos de agravio deben estar encaminados a controvertir la

SUP-JRC-317/2016

validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver.

Por ende, al expresar cada razonamiento lógico jurídico, los demandantes deben exponer los argumentos que consideren pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, por lo que los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando:

- No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado;

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación local, partidista o federal anterior, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares que sirven de sustento a la autoridad responsable para declarar infundados o inoperantes los argumentos aducidos en la instancia anterior;

- Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto;

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir, y

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los argumentos no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar la sentencia impugnada.

CUARTO. Método de estudio. Por razón de método los conceptos de agravio expresados por los enjuiciantes serán analizados en orden distinto a lo expuesto en su escrito común de demanda, sin que tal forma de estudio les genere agravio alguno.

El criterio mencionado ha sido sustentado en forma reiterada por esta Sala Superior, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, consultable a foja ciento veinticinco (125), del Volumen 1, intitulado "*Jurisprudencia*", de la "*Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral*", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

SUP-JRC-317/2016

Como se advierte del escrito común de demanda del juicio al rubro indicado, los actores aducen, entre otras cuestiones, vulneración a los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad.

En este sentido la pretensión de los demandantes es que se revoque la sentencia controvertida, a fin de que se dejen sin efecto los resultados, la declaración de validez y la constancia de mayoría y validez de la elección de Gobernador en el Estado de Chihuahua.

Para los enjuiciantes existieron, entre otras cuestiones, violaciones procesales que los dejaron en estado de indefensión, una invasión competencial del Instituto Nacional Electoral respecto de las facultades y atribuciones del Instituto Electoral local y una indebida apreciación por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua de la causa de pedir que expusieron en la demanda del juicio de inconformidad radicado con la clave de expediente JIN-230/2016, toda vez que consideran existieron irregularidades graves antes, durante y después de la jornada electoral que no fueron subsanadas, y que se dieron en el veinte por ciento o más de las casillas instaladas.

En este sentido, de la lectura de la demanda, se advierte que los argumentos hechos valer se vinculan con los temas siguientes:

I. Violaciones procesales que trascendieron al fallo.

II. Violaciones constitucionales por invasión competencial del Instituto Nacional Electoral respecto de las atribuciones y facultades del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

III. Incorrecta apreciación de la causa de pedir, respecto de los siguientes tópicos.

A) Entrega de paquetes electorales de forma extemporánea.

B) Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley.

C) Error aritmético.

IV. Causal genérica de nulidad de elección.

Al efecto se destaca que el tema de violaciones procesales que trascendieron al fallo, aducido por los enjuiciantes, es de estudio preferente por lo cual será analizado en primer lugar, en tanto que de ser fundado sería suficiente para revocar la resolución controvertida y sólo en caso de que este sea infundado se procederá al análisis de los restantes conceptos de agravio.

Precisado lo anterior, los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a controvertir la determinación del órgano jurisdiccional local responsable serán analizados en el orden que ha sido señalado.

QUINTO. Estudio del fondo de la litis.

I. Violaciones procesales que trascendieron al fallo.

Los demandantes aducen que la autoridad responsable vulneró los artículos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 332, 387, 388 y 389, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al desechar el escrito de incidente presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual objetó diversa documentación que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua remitió junto con su informe circunstanciado, entre la que destacan las actas circunstanciadas de entrega de boletas a las Asambleas Municipales de ese Instituto Electoral local.

Consideran los enjuiciantes, que en su escrito incidental señalaron una serie de irregularidades formales de las actas de las Asambleas Municipales del Instituto Electoral local, que ponen en duda la certeza de los datos asentados en ellas, pues carecen de legalidad y certeza en su elaboración, situación que, en su concepto, fue constante en la actuación del mencionado Instituto Electoral; en este sentido, aducen que se les dejó en estado de indefensión, al no tener la oportunidad de ofrecer los elementos de prueba con relación a las objeciones planteadas.

Asimismo, argumentan que del análisis de las actas de jornada electoral que se adjuntaron al informe circunstanciado del Instituto Electoral local, se advierten inconsistencias

numéricas respecto de la cantidad de boletas recibidas en las mesas directivas de casilla.

En este sentido, los enjuiciantes aducen que al desechar las pruebas bajo el argumento de que no son de carácter superveniente, el Tribunal Electoral responsable también los deja en estado de indefensión, porque consideran que se debió admitir el incidente, con la finalidad de respetar su derecho de ofrecer y aportar pruebas, dado que las autoridades administrativas electorales no habían entregado la documentación referente al procedimiento de producción, traslado y distribución de boletas electorales; por tanto, estaba en tiempo para ofrecer las pruebas que en su concepto acreditaba la falta de comunicación de esos actos.

Manifiestan que de la revisión de los resultados electorales consignados en las actas que se adjuntaron al informe circunstanciado, se advierte la incertidumbre provocada con la indebida actuación del Instituto Electoral local.

Exponen que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua trató de demostrar que entregó el número correcto de boletas a cada Asamblea Municipal y que éstas, a su vez, las entregaron a los funcionarios integrantes de cada mesa directiva de casilla, sin embargo, esas autoridades no respetaron los procedimientos electorales, ni los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad. Por tanto, tienen el carácter de supervenientes, ya que exhibe documentos que les debieron haber entregado.

SUP-JRC-317/2016

De igual forma, los actores aducen que, si la Ley permite la objeción de pruebas, es correcto proveer su desahogo para comprobar las objeciones planteadas, de lo contrario se les deja en estado de indefensión.

Consideran que la sola mención genérica de que son correctas las actas de entrega de boletas electorales a la Asamblea Municipal, no es suficiente para motivar el fallo, de tal manera que se demuestra que el desechamiento de la objeción se tradujo en una violación procesal que trascendió al sentido de la sentencia. Por lo cual, señalan que la responsable no valoró sus objeciones, tendentes a evidenciar la falta de valor probatorio, por no estar circunstanciadas. Lo que, en su concepto, resulta ser una violación procesal que trascendió al resultado del fallo.

A juicio de esta Sala Superior resultan **inoperantes** los mencionados conceptos de agravio.

En el caso, los enjuiciantes aducen, que es indebido que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua haya determinado la improcedencia de la vía incidental del escrito por medio del cual realizaron diversas “objeciones” respecto de los documentos exhibidos por el Instituto Estatal Electoral al presentar su informe circunstanciado, así como de las pruebas ofrecidas en ese curso.

Al respecto, esta Sala Superior considera necesario precisar que en el artículo 17, segundo párrafo, de la

Constitución federal, se prevé el derecho fundamental de tutela judicial o de acceso efectivo a la impartición de justicia, al tenor siguiente:

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]

Del artículo trasunto se advierten cuatro derechos fundamentales, a saber:

1. La proscripción de la autotutela ilícita o antijurídica; es decir, que está prohibido constitucionalmente "*hacerse justicia por propia mano*".

2. El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso efectivo a la justicia impartida por el Estado.

3. La abolición de costas judiciales.

4. La independencia judicial.

De tales derechos fundamentales cabe destacar el relativo al monopolio del Estado para impartir justicia, que constituye la finalidad sustancial de la función jurisdiccional del Estado, la cual debe ser conforme a los principios que a continuación se enlistan:

SUP-JRC-317/2016

1. Justicia pronta: Consistente en el deber jurídico de las autoridades jurisdiccionales en principio y, por analogía, de aquellas autoridades que ejerzan facultades que impliquen materialmente la resolución de conflictos de intereses de trascendencia jurídica, de resolver esas controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes respectivas.

2. Justicia completa: Es el principio que tiene como premisa sustancial que la autoridad que conoce de la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos; con ello se garantiza al justiciable la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación del Derecho al caso concreto, se resuelve en forma plena, completa e integral, si le asiste o no la razón sobre los derechos que aduce vulnerados. Consiste en la resolución total de la controversia.

3. Justicia imparcial: Este principio impone al juzgador el deber de emitir una resolución conforme a Derecho, sin desviaciones, a favor o en contra de alguna de las partes por razones subjetivas o personales; implica la inexistencia de filias o fobias de carácter personal, respecto de alguna de las partes, que impidan la impartición auténtica de justicia. La sentencia no debe constituir una arbitrariedad en contra de alguna de ambas partes.

4. Justicia gratuita: La finalidad de este principio estriba en que los órganos del Estado encargados de la impartición de

justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda tal función, no obtengan de las partes en conflicto pago o retribución por la prestación de ese servicio público.

Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, el derecho fundamental bajo análisis tiene el propósito de garantizar que las autoridades encargadas de impartir justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, motivo por el cual, es conforme a Derecho afirmar que las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, material y/o formalmente, tienen el deber jurídico de observar la totalidad de los mencionados principios constitucionales.

Sobre el particular, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversas ejecutorias el derecho a la tutela jurisdiccional o acceso efectivo a la justicia, como *"el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita - esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión"*.

El derecho fundamental de acceso eficaz a la justicia también es regulado en el Derecho Convencional, específicamente en los artículos 8, párrafo 1 y 25, párrafo 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se establecen:

SUP-JRC-317/2016

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[...]

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

[...]

En este orden de ideas, conforme a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

Asimismo en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos c) y l), se establece que de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que en las entidades federativas se

establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad y que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Por otra parte, en el artículo 105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece:

Artículo 105.

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

En congruencia con ello, en el artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, está previsto que *“El Tribunal Estatal Electoral es el órgano especializado de legalidad y plena jurisdicción en la materia electoral, que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, con patrimonio propio”*, asimismo que en el ejercicio de su función debe actuar bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

A su vez, en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el artículo 293 se establece:

SUP-JRC-317/2016

Artículo 293

1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el Tribunal Estatal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

2) El Tribunal Estatal Electoral se regirá, en ejercicio de sus funciones, por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y profesionalismo.

3) Para el desempeño de sus actividades, el Tribunal Estatal Electoral contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral, cuya organización se sujetará a las reglas que adopte el Pleno mediante acuerdos generales.

En este orden de ideas, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia o el derecho fundamental de tutela judicial en materia electoral en el Estado de Chihuahua, ha sido instituido un órgano jurisdiccional especializado en la materia, que en su actuación se debe sujetar a los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza y definitividad.

Asimismo, conforme a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional local especializado debe ejercer sus atribuciones en la resolución de los litigios en materia electoral en esa entidad federativa, de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, motivo por el cual, es conforme a Derecho, afirmar que las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, material y/o formalmente, tienen el deber jurídico de observar la totalidad de los mencionados principios constitucionales, **con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.**

Como se adelantó, a juicio de este órgano jurisdiccional son **inoperantes** los conceptos de agravio, por las razones que a continuación se precisan.

Al caso se debe tener en consideración que, de la lectura del escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, presentada por el partido político y la coalición ahora enjuiciantes, se advierte que aducen que indebidamente se consideró improcedente la vía incidental de su escrito de “objeciones”.

Asimismo argumentan que se les dejó en estado de indefensión porque no se les permitió ofrecer pruebas respecto de las objeciones hechas, bajo el argumento de que no tenían el carácter de supervenientes. Consideran que se debió admitir el incidente, con la finalidad de respetar su derecho de ofrecer y aportar pruebas, dado que las autoridades administrativas electorales no habían entregado la documentación referente al procedimiento de producción, traslado y distribución de boletas electorales; por tanto, estaba en tiempo para ofrecer las pruebas que acreditaban la falta de comunicación de esos actos.

También aducen los demandantes que el desechamiento de la objeción se tradujo en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, toda vez que la responsable no valoró sus objeciones, tendentes a evidenciar la falta de valor probatorio de las aludidas actas, lo que, para los

SUP-JRC-317/2016

enjuiciantes, resulta ser una violación procesal que trascendió al resultado del fallo.

Para esta Sala Superior la situación no genera agravio a los enjuiciantes, toda vez que, contrario a lo que afirman, al dictar la sentencia ahora controvertida, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua tomó en consideración las “objeciones” que formularon los ahora enjuiciantes en el aludido escrito “incidental” que presentaron.

Lo anterior es así, dado que al motivar la sentencia impugnada, emitida en el juicio de inconformidad identificado con la clave de expediente JIN-230/2016, el órgano jurisdiccional electoral local responsable tomó en consideración las actas de entrega de boletas electorales a las Asambleas Municipales y demás elementos de prueba.

Asimismo, se debe destacar que lo manifestado en el aludido escrito de “objeciones”, presentado por los demandantes, fue tomado en consideración por la autoridad responsable, al momento de resolver.

Lo anterior se constata a foja quince (15), de la sentencia controvertida, en el apartado tres punto dos (3.2) del considerando cuarto (IV) denominado “ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA”, parte en la cual se tuvo en consideración lo siguiente:

[...]

3.2 El once de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a los Actores realizando diversas manifestaciones relacionadas con las documentales públicas remitidas por el Consejo en su calidad de autoridad responsable, en las cuales hace referencia a la fecha de envío de las boletas electorales a las *Asambleas*, el número de boletas y el medio de traslado, así como las actas de recepción de boletas de las *Asambleas*.

Dichas **manifestaciones pretenden exhibir inconsistencias en el levantamiento de las actas circunstanciadas que, a su dicho, ventilan la falta de certeza en el ejercicio de la función electoral desplegada por el IEE y en la cuantía en el número de boletas electorales.**

Ante lo anterior y **al formar parte dicha manifestación de la controversia inicial, este Tribunal atenderá y resolverá lo conducente a las manifestaciones vertidas a fin de determinar la existencia de las inconsistencias, y en su caso, la gravedad de las mismas.**

[...]

(Énfasis añadido)

Asimismo, en el diverso apartado tres punto dos (3.2), del considerando quinto (V) de la sentencia controvertida, a foja trescientas ochenta y cuatro (384), se advierte lo siguiente:

[...]

Para ello, **se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes del presente juicio,** así como las documentales públicas que fueron aportadas por el *IEE, las Asambleas y el INE.*"

[...]

(Énfasis añadido)

En este orden de ideas cabe mencionar que en los apartados tres, punto, dos, punto, cuatro, punto, dos (3.2.4.2) y

SUP-JRC-317/2016

tres, punto, dos, punto, cuatro, punto, tres (3.2.4.3), específicamente a fojas cuatrocientas cinco (405) a cuatrocientas veintitrés (423) de la sentencia impugnada, se consideró lo siguiente:

[...]

Sin ser óbice a la anterior determinación y **a fin de cumplir con el principio de exhaustividad** y privilegiar la certeza del Proceso Electoral 2015-2016, así como el principio de autenticidad del voto, **este Tribunal considera oportuno agotar todos los medios a su alcance a efecto de no dejar duda sobre las actuaciones institucionales** y el ejercicio democrático de las elecciones.

Esto es así, pues **existen manifestaciones realizadas por el PRI, en las que señala que existen inconsistencias que pudieran vulnerar el principio de certeza y la validez en las documentales públicas presentadas por la autoridad responsable.** Es decir, **el PRI señala que en las actas circunstanciadas de envío de boletas a las Asambleas, existen datos que permite dilucidar un aumento en el número de boletas, o bien, que advierten una incertidumbre en cuanto al manejo de éstas.**

Así las cosas, para abordar el planteamiento propuesto, es necesario referir inicialmente que, como ya fue estudiado, por medio del acuerdo INE/CG950/2015, se delinearon las especificaciones en razón de la cuantía de las boletas electorales, al establecer el Consejo General del *INE*, que para la impresión de las mismas se debía tomar en cuenta que por cada una de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias se requería de una boleta por cada elector registrado en el listado nominal y setecientos cincuenta boletas en cada casilla especial; además, debía contarse en cada tipo de casilla con dos boletas por cada representante de partido político y dos por cada representante de candidato independiente.”

En ese sentido, obra en la instrumental de actuaciones oficio de clave IEE/P/40/16,⁶² signado por el Consejero Presidente del

IEE, mediante el cual solicita al Coordinador de Organización Electoral de ese órgano que, en atención a los acuerdos IEE/CE113/2016 e INE/CG950/2016, llevara a cabo el desglose del total de boletas necesarias para la elección a celebrarse el cinco de junio.

(⁶² Visible a foja 16 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.)

Del desglose realizado, se desprende que el número total de boletas que se consideraron para imprimir, en atención a los criterios generados por el *INE*, fue de dos millones setecientos ochenta mil quinientas sesenta y un boletas electorales, repartidas entre los sesenta y siete municipios del estado, cuyos folios van del 00000001 al 02780561.

Aunado a lo anterior, obra en copia certificada el desglose por rubro del número de boletas a imprimir⁶³ en relación con lo dispuesto en el acuerdo INE/CG950/2015. En ese entendido, se establecieron las siguientes cantidades:

(⁶³ Visible a foja 20 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.)

En ese orden de ideas, el número de boletas generado por la Coordinación de Organización Electoral del *IEE* concuerda con la cuantía estipulada en el contrato de prestación de servicios celebrado con Talleres Gráficos de México⁶⁴ para la impresión de la documentación electoral, asentándose en el segundo convenio modificatorio a dicho contrato,⁶⁵ en específico, en el anexo técnico GGC/GAST/215/16/V5,⁶⁶ que la cantidad de boletas a imprimir para la elección de Gobernador sería de dos millones setecientos ochenta mil quinientas sesenta y uno.

(⁶⁴ Visible a foja 108 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.)

(⁶⁵ Visible a foja 5841 del Tomo 7 del presente asunto.)

(⁶⁶ Visible a foja 5843 del Tomo 7 del presente asunto.)

Ahora bien, conforme al recibo con número de remisión 20161872, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, emitido por Talleres Gráficos de México,⁶⁷ se puede corroborar que la cantidad de boletas impresas por esta institución corresponde a dos millones setecientos ochenta mil quinientas sesenta y una para la elección de Gobernador.

(⁶⁷ Visible a foja 5835 del Tomo 7 del presente asunto.)

SUP-JRC-317/2016

Al respecto, se encuentra acreditado que en tres momentos diferentes es coincidente el número de boletas que decidieron imprimirse para la elección respectiva.

[Se inserta tabla]

Luego de la entrega recepción de las boletas electorales entre Talleres Gráficos de México y el *IEE*, se tiene acreditado que éstas fueron trasladadas a la bodega que el *IEE* designó para tal efecto.⁶⁸

(⁶⁸ Visible a fojas 159 a la 166 del cuadernillo auxiliar 195 del presente asunto.)

Posterior a ser recibidas, las boletas fueron enviadas a cada una de las Asambleas a fin de que se resguardaran para su posterior conteo, sellado y enfajillado.⁶⁹

(⁶⁹ Visible a fojas 4446 a la 4508 del Tomo 6 del presente asunto.)

En este punto del transcurso de las boletas, se considera necesario realizar un estudio en cuanto al número de boletas recibidas por el *IEE*, las trasladadas a su bodega y luego enviadas a las *Asambleas* para su posterior agrupamiento e inserción en los paquetes electorales.

Las acciones emprendidas se encuentran acreditadas y guardan sustento en las actas circunstanciadas que obran en autos⁷⁰, de las cuales se observa la siguiente numeraria y **en algunos casos, inconsistencias referidas por el PRI, que más adelante se dilucidaran:**

(⁷⁰ Visible a fojas 4307 a la 4444 del Tomo 6 del presente asunto.)

[...]

Aunado a esto, como ya quedó plasmado, existe certeza en cuanto al número de boletas impresas, envidadas a las *Asambleas* y recibidas por ellas, contadas, selladas, agrupadas y obrantes en los paquetes electorales, lo que genera la certeza que los *Actores* pretenden desvirtuar.

[...]

(Énfasis añadido)

En este orden de ideas, a fojas cuatrocientas ocho (408) a la cuatrocientas veintitrés (423) de la sentencia ahora impugnada, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua analizó de manera particularizada y exhaustiva las diversas circunstancias aducidas por los enjuiciantes.

De las partes atinentes de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal Electoral responsable consideró las objeciones hechas por los actores, de igual manera se observa que para motivar el sentido de la sentencia, no se limitó al estudio y valoración de las actas de entrega de boletas electorales a las Asambleas Municipales, sino que tomó en cuenta diversos medios de convicción, mediante los cuales fueron subsanadas las aparentes inconsistencias advertidas en las diversas actas. Por tanto, a juicio de esta Sala Superior, los conceptos de agravio expresados por los actores resultan **inoperantes**.

Asimismo, cabe destacar que los ahora enjuiciantes no controvierten frontalmente las consideraciones y la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, al resolver sobre las presuntas violaciones procesales que aducen los dejaron en estado de indefensión, relacionadas con la improcedencia del escrito de “objeción de pruebas” que presentaron durante la sustanciación del juicio de inconformidad identificado con la clave JIN-230/2016.

Además de lo anterior, esta Sala Superior advierte que en el caso se deben tener en cuenta las circunstancias de hecho y

SUP-JRC-317/2016

de Derecho que a continuación se precisan.

De la lectura integral del escrito de “objeciones”, se advierte que los ahora demandantes adujeron entre otras cuestiones, lo siguiente:

- No tienen certeza de la entrega de boletas electorales en diversos ayuntamientos;

- Debió de existir un acuerdo que detallara el plan de impresión y distribución de la documentación electoral;

- Las actas de recepción de las boletas electorales no cumplen con los requisitos de ley, ya que el personal administrativo de la Asamblea Municipal no tiene fe pública;

- Ninguna de las entregas de boletas electorales a las Asambleas municipales se realizó con veinte días de anticipación a la jornada electoral y tampoco existe constancia que acredite la notificación a los partidos políticos de la diligencia de sellado de las boletas.

- No se circunstanció el acta por la que se asentó el número de boletas, como tampoco se dice el lugar en que se depositaron las boletas electorales.

- No existe acuerdo alguno de las Asambleas Municipales para asegurar las boletas electorales.

- Existe una diferencia entre el número de boletas que se imprimieron, debido a un excedente de boletas que no

corresponden o concuerdan con cada uno de los totales que debe de existir por municipio.

- Hay una diferencia entre el número de boletas enviadas y las impresas, lo que genera incertidumbre.

A partir de ello, los actores concluyen que del contenido de las actas se acredita la vulneración a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y máxima publicidad, los cuales fueron vulnerados de manera grave y sistemática, pues, entre otras circunstancias:

1. Existió un gran número de diferencias aritméticas

2. Al hacerse el recuento de la votación recibida en cada una de las mesas directivas de casilla se debió de levantar un acta individual del recuento.

3. Las irregularidades fueron generalizadas en un veinte por ciento o más de las casillas electorales

De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional especializado advierte que la verdadera intención de los enjuiciantes no consistió en la simple objeción de los documentos aportados por la entonces autoridad responsable, sino en una auténtica ampliación de su demanda.

En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior, esa ampliación de demanda resulta improcedente como se expone a continuación.

SUP-JRC-317/2016

De conformidad con lo previsto en el artículo 307, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, el plazo para promover el juicio local de inconformidad, es de cinco días contados a partir del día siguiente de la conclusión del cómputo respectivo.

Los ahora actores impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, los resultados, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría y validez de la elección de Gobernador, actos de los que tuvieron conocimiento el diez de junio de dos mil dieciséis, tal como se constata de la copia certificada del *“ACTA DE CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR”* que obra a foja cuatro mil quinientos ochenta y siete (4587) del Tomo seis (6) del juicio de inconformidad identificado con la clave JIN-230/2016 del índice del Tribunal Estatal Electoral, por tanto, el plazo de cinco días para la promoción de su impugnación, transcurrió del once al quince del mismo mes y año.

Ahora bien, cabe aclarar que dentro del plazo para la promoción del medio de impugnación, es posible la presentación de diverso recurso a fin de ampliar la demanda.

En el caso que se resuelve, los actores presentaron el seis de julio de dos mil dieciséis, ante la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el escrito por medio del cual intentan ampliar su demanda, al que consideran como un “incidente de objeción de documentos”, cuya improcedencia resulta a partir de considerar que la ampliación de la demanda

se presentó fuera del plazo para la promoción del juicio local de inconformidad.

En este orden de ideas, aún en el supuesto más benéfico para los ahora demandantes, de computarse el plazo para la presentación de la ampliación de la demanda a partir del momento en que ellos aducen que tuvieron conocimiento de los hechos materia de la ampliación y que fueran de naturaleza superveniente los documentos objetados en su “escrito incidental”, de igual manera resulta improcedente, por las siguientes razones.

Tratándose del conocimiento de pruebas supervenientes o hechos desconocidos, relacionados con aquellos en los que el promovente sustentó sus pretensiones, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue controvertido, de ahí que no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de actos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 18/2008, consultable a foja ciento treinta a ciento treinta y uno, de la "*Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral*", tomo "*Jurisprudencia*",

SUP-JRC-317/2016

Volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.—Los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha concluido que los escritos de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción.

Tal criterio está contenido en la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior, identificada con la clave 13/2019, consultable a fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y tres, de la *"Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia*

electoral", tomo "*Jurisprudencia*", Volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "**AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)**".

En este contexto, cabe precisar que los propios actores reconocen en su escrito de "incidente de objeción", por medio del cual pretenden ampliar su demanda, de manera expresa lo siguiente:

[...]

Que con fundamento en el artículo 387, 388 y 389 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la vía incidental vengo a manifestar las consideraciones lógico-jurídicas que atañen al instituto político que represento, respecto de los documentos Aportados por el Instituto Estatal electoral en el informe circunstanciado del día 20 de junio del presente año, señalados con los incisos b), c), d) e) y f), los cuales fueron solicitados con antelación a dicha autoridad como se acreditó en el (sic) autos del expediente principal y lo (sic) cuales bajo protesta de decir verdad se señala no tuvimos conocimiento holístico de ellos con anterioridad...

[...]

Asimismo, manifiestan en su "escrito de incidente" que los documentos que pretendieron objetar fueron presentados por el Instituto Estatal Electoral en su informe circunstanciado de veinte de junio de dos mil dieciséis.

En este sentido, se debe considerar, en primer lugar, que el escrito incidental fue presentado el día seis de julio de dos mil dieciséis, a las veintidós horas cuarenta y un minutos, ante la

SUP-JRC-317/2016

Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, tal como se constata a fojas cinco mil cuatrocientas cincuenta y uno (5451) del Tomo siete (7) del índice del Tribunal Estatal Electoral.

Por otra parte, es de destacar que a fojas obra cuatro mil novecientos noventa y ocho (4998) y cinco mil dos (5002) del Tomo seis (6) del juicio de inconformidad identificado con la clave JIN-230/2016 del índice del Tribunal Estatal Electoral, obra "*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN*" de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, suscrita por el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, mediante el cual recibió el informe circunstanciado rendido por el Presidente del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y su documentación anexa.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, mediante proveído dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, que obra a fojas cinco mil cinco (5005) y cinco mil seis (5006) del Tomo seis (6) del índice del Tribunal Estatal Electoral, tomando en cuenta, entre otra documentación, el informe circunstanciado ordenó se formara y registrara el expediente identificado con la clave JIN-230/2016, en el libro de Gobierno del mencionado Tribunal Electoral, el cual fue notificado por estrados el mismo día veintiocho, como se advierte de la razón de fijación en estrados, que obra al reverso de la citada foja cinco mil seis (5006), del Tomo seis (6) del mencionado juicio de inconformidad.

Por tanto, es dable considerar que, al haber sido presentado el aludido recurso hasta el seis de julio de dos mil dieciséis, transcurrió en exceso el plazo para impugnar previsto en el artículo 307, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, razón por la cual resulta evidente su extemporaneidad.

De ahí que esta Sala Superior concluye que el mencionado escrito de ampliación de demanda, es improcedente, por lo que, desde esta perspectiva, en el fondo resulta conforme a Derecho la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

II. Violaciones constitucionales por invasión competencial del Instituto Nacional Electoral

Los actores aducen la vulneración de lo previsto en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la invasión de atribuciones del Instituto Nacional Electoral al ámbito de competencia que corresponde al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, respecto de la facultad para imprimir y enfajillar las boletas electorales, así como la conformación y entrega de paquetes electorales.

En este sentido, señalan que el Instituto Nacional Electoral no puede sustituir al Instituto Electoral local en la función de aprobar los lineamientos o planes para la impresión, resguardo, vigilancia, traslado y distribución de materiales electorales, ya que no se trata de una norma fundamental sino procedimental.

SUP-JRC-317/2016

Además, los actores consideran que no se justifica la intromisión del Instituto Nacional Electoral en los asuntos del conocimiento de la autoridad administrativa local, como la celebración de contratos o convenios, toda vez que ello es un supuesto no previsto en la ley.

Aducen que la autoridad responsable omitió resolver debidamente sobre la supuesta invasión de competencia del Instituto Nacional Electoral, con respecto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

A juicio de esta Sala Superior son **infundados** los conceptos de agravio, por las siguientes consideraciones.

Al respecto es necesario precisar que en la demanda del juicio de inconformidad promovido en la instancia local por los ahora enjuiciantes, argumentaron lo siguiente:

[Fojas 6 – 7]:

Lo cierto es que fue el Instituto Nacional Electoral quien llevó a cabo la impresión de la boletas, se encargó pues de todo el plan de impresión y distribución, de ahí la poca o nula información que tiene el Instituto Estatal Electoral, lo anterior además de ser una invasión de competencia que viola directamente los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal que a continuación se inserta en su parte conducente:

[...]

Pese a que la impresión de boletas y su distribución es una de las actividades fundamentales del proceso electoral, pues la Ley Electoral del Estado establece las reglas precisas para realizarla, el órgano electoral en desapego de la Ley violentó dichas normas, pues al parecer lo que sucedió es que

delegó arbitrariamente todas esas facultades al Instituto Nacional Electoral.

Es tan importante esta actividad que la competencia entre el órgano electoral federal y el local se define directamente en el artículo 41 de la Constitución Federal, al señalar en el apartado C que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos quien de entre sus funciones tendrá la de impresión de documentos y la producción de materiales electorales, de ahí que no es posible dejar de lado esa competencia so pretexto de seguir lineamientos del Instituto Nacional Electoral.

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua es muy clara, es el Instituto Estatal Electoral solo deberá seguir los lineamientos de impresión del Instituto Nacional Electoral, pero no delegar la facultad de imprimir las boletas, esa facultad está atribuida al Consejo Estatal, no a su presidente, recordemos entonces que el Consejo se integra por los consejeros y partidos políticos, éstos son los que deben acordar todos los pormenores de la impresión y el plan de distribución, conforma a lo previsto en los artículos 64, 144 y, 145 de la Ley Electoral del Estado, son los órganos electorales locales quienes tienen que hacer el resguardo, vigilancia, distribución y entrega de los paquetes electorales y boletas, bajo el programa aprobado por el Consejo Estatal, tal y como se advierte de las siguientes disposiciones:

[...]

En el particular, al resolver sobre la temática que ahora se analiza, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua determinó lo que a continuación se precisa.

En el apartado tres punto dos punto tres (3.2.3) de la sentencia controvertida, al exponer la cuestión relativa al *“Marco competencial”*, el órgano jurisdiccional electoral local consideró que *“Luego de la reforma a la Constitución Federal en materia electoral, el panorama competencial entre los organismos electorales de la federación*

SUP-JRC-317/2016

sufrió modificaciones trascendentales”, las cuales incidieron en la forma en la que se habían desarrollado los procedimientos electorales en la última década.

Argumentó en ese sentido, que *“el Poder Constituyente optó por crear un esquema de colaboración entre los entes electorales del país - federales y estatales - que privilegiara la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas de los poderes Legislativo y Ejecutivo”*, teniendo como sustento los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Para tal efecto, se dispuso en el artículo 41, base V, de la *Constitución Federal*, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del *INE* y de los organismos públicos locales.

Expuso el órgano electoral jurisdiccional de Chihuahua, que en el texto de la Constitución federal se estableció que, en las entidades federativas, las elecciones locales están a cargo de organismos públicos electorales locales los que ejercen, entre otras funciones, las relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos, declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias; y cómputos de la elección del titular del poder Ejecutivo.

Por otro lado, en el apartado B de ese mismo dispositivo, se estableció que el *INE* tendría injerencia dentro de los procesos electorales locales en relación a la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y

determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; y las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Asimismo, tuvo en cuenta que el Instituto Nacional Electoral, en caso de considerarlo pertinente, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de su Consejo General, podría asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los institutos electorales de las entidades federativas o, en su caso, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de esas autoridades administrativas electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Acorde con el marco de esta distribución competencial, en el artículo 116, fracción IV, de la *Constitución Federal*, se estableció que en las constituciones y leyes de los estados, en materia electoral, se debe garantizar que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que en el ejercicio de la función electoral que realicen los entes electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

En esa tesitura, dentro del ordenamiento estatal chihuahuense, el artículo 36 de la *Constitución Local*, determina que la organización, dirección y vigilancia de las elecciones estará a cargo de un organismo público denominado *IEE*, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

SUP-JRC-317/2016

Sobre esa base, consideró el Tribunal Electoral responsable, que el legislador local previó en el artículo 48, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que los fines del Instituto Estatal Electoral, entre otros, son “*contribuir al desarrollo de la vida democrática del estado; preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos nacional y local; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones ordinarias y extraordinarias para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como miembros de los ayuntamientos y síndicos; y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio*”.

[...]

Al respecto, el artículo 52 de la *Ley*, dispone que para el cumplimiento de sus fines, el *Consejo* será el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, reiterando la salvaguarda de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, señalados en el artículo 116 de la *Constitución Federal*.

A su vez, y para conjugar con las disposiciones contenidas en la *Constitución Federal*, en el artículo 64 de la *Ley*, se enumeraron las atribuciones con las que el *Consejo* garantizaría el cumplimiento de su naturaleza, siendo algunas de ellas: el aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el *INE*; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral en los procesos electorales estatales; imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el *INE* y proporcionarlos a los demás organismos electorales conforme al plan de impresión y distribución de documentación electoral; aprobar el proyecto del número de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales a instalar en cada municipio; y efectuar el cómputo estatal de la elección de Gobernador; y

expedir la constancia de mayoría al candidato que haya obtenido la mayoría de votos y declarar la validez de su elección.

[...]

En este orden de ideas consideró, que *“la base normativa en materia electoral contempla una clara distribución competencial entre el órgano local y el nacional, especificando las atribuciones de cada autoridad y la posibilidad de atracción por parte del INE en relación a las cuestiones que para aquel, sea necesario unificar criterios”*.

En ese sentido, el once de noviembre de dos mil quince, el *INE* aprobó el acuerdo *INE/CG950/2015*, en relación con el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la *Constitución Federal*, mediante el cual emitió los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales y para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero.

Asimismo tuvo en cuenta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al emitir el acuerdo identificado con la clave *INE/CG113/2015*, determinó que para garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito, los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales recibirían setecientas cincuenta (750) boletas para elecciones locales, además de las boletas necesarias para que los representantes de los partidos políticos, así como lo candidatos independientes pudieran ejercer su voto.

En esa tesitura, y adheridos al marco competencial, el dos de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo aprobó el diverso *IEE/CE113/2016*, en apego al acuerdo *INE/CG950/2016*, decretando que la producción de la documentación y material electoral que se utilizaría en el proceso electoral en curso se llevaría a cabo por parte de Talleres Gráficos de México.

SUP-JRC-317/2016

Por otro lado, bajo el tema central, es decir, la cuantía, impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, resulta imprescindible atender a lo establecido en el Capítulo Sexto de la *Ley*, titulado *De la Documentación Electoral y el Material Electoral*, específicamente, el artículo 142, el cual señala que dicho capítulo únicamente será aplicable cuando se lleven a cabo elecciones locales no concurrentes con las elecciones federales y, en su caso, la función de la integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación le haya sido delegada al *IEE* por la autoridad competente.

[...]

Asimismo, el órgano jurisdiccional electoral responsable consideró que en consonancia con lo anterior, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave INE/CG122/2016, mediante el cual ejerció su facultad de atracción *“para establecer los criterios para conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos locales al término de la jornada electoral de los procesos electorales locales 2015-2016”*.

A partir de los elementos expuestos, entre éstos los correspondientes al régimen constitucional federal y local, en materia electoral, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua concluyó que no existió delegación o invasión de funciones por parte del Instituto Nacional Electoral con relación a las atribuciones que corresponden al Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa.

Hechas las precisiones anteriores, a juicio de esta Sala Superior es conforme a Derecho la determinación del Tribunal Estatal Electoral responsable, con relación a la presunta invasión de atribuciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que resulta **infundado** el concepto de agravio que hacen valer los ahora enjuiciantes ante esta instancia federal.

Para sustentar la conclusión precedente es necesario hacer referencia a la normativa constitucional y legal, en el orden federal, así como los preceptos aplicables en el ámbito local, que prevén la facultad del Instituto Nacional Electoral para emitir lineamientos y ejercer la facultad de atracción, así como de celebrar convenios con los institutos electorales locales para la organización de las elecciones en las entidades federativas, como aconteció en el Estado de Chihuahua.

Conforme a lo previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los depositarios de los poderes legislativo y ejecutivo de las entidades federativas se lleva a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, como se prevé a continuación:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

SUP-JRC-317/2016

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[...]

Asimismo, en términos de lo establecido en la base V del párrafo segundo del aludido numeral de la Constitución federal, la organización de las elecciones *“es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución”*.

En este contexto, por lo que se refiere al Instituto Nacional Electoral, en el apartado A, de la mencionada base V, se establece:

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado

necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

[...]

Ahora bien, con relación a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral respecto de los procedimientos electorales, tanto locales como federales, en el apartado B de la aludida base V, el Poder Reformador Permanente de la Constitución federal determinó establecer:

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.

[...]

SUP-JRC-317/2016

Respecto de las elecciones en las entidades federativas, para la renovación de los correspondientes depositarios del Poder Público, desde el marco de la Constitución federal se establece, entre otros aspectos, en el apartado C, de la base V del párrafo segundo del artículo 41:

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

Es de destacar, con relación a la materia de análisis y resolución en esta sentencia, que en términos de lo previsto en

el párrafo segundo del aludido apartado C, se establecen diversas atribuciones del Instituto Nacional Electoral con relación a los procedimientos electorales de las entidades federativas:

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Con relación a las citadas atribuciones del Instituto Nacional Electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en el artículo 32, párrafo 2, incisos f) al h), se establece:

[...]

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

[...]

- f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los términos de esta Ley;

SUP-JRC-317/2016

g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento;

h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;

[...]

En este orden de ideas, se precisa en el párrafo 2 del artículo 120 de la mencionada Ley General, que la *asunción* es “*la atribución del Instituto de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Locales, en términos del inciso a) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución*”.

Asimismo, en el párrafo 2, con relación a la *atracción* se prevé que es “*la atribución del Instituto de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución*”.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, respecto de la organización del poder público en los Estados de la República, que:

[...]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

[...]

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

[...]

Con relación a las aludidas atribuciones del Instituto Nacional Electoral respecto de los institutos electorales de las entidades federativas, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen:

Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;

[...]

Artículo 124.

1. En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Instituto o la mayoría del Consejo General del Organismo Público Local. El Consejo General ejercerá la facultad de atracción siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos.

2. La petición deberá contener los elementos señalados en el párrafo 4 del artículo 121 y podrá presentarse en cualquier momento.

SUP-JRC-317/2016

3. Se considera que una cuestión es trascendente cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del proceso electoral o de los principios de la función electoral local.

4. Para la atracción de un asunto a fin de sentar un criterio de interpretación, el Instituto deberá valorar su carácter excepcional o novedoso, así como el alcance que la resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, como para la función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos.

5. Las resoluciones correspondientes a esta función las emitirá el Consejo General con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo General del Organismo Público Local. Estas decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.

Artículo 125.

1. La delegación de funciones del Instituto en los Organismos Públicos Locales que señala el inciso b) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, tendrá carácter excepcional. La Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General los Acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

2. Para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General deberá valorar la evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del Organismo Público Local electoral, para cumplir con eficiencia la función.

3. La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local correspondiente y requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finalizado el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El Instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma mayoría de ocho votos.

4. La delegación de facultades se realizará de forma específica en cada caso para un Organismo Público Local determinado. Los Organismos Públicos Locales deberán

ejercitar las facultades delegadas sujetándose a lo previsto por esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.

[...]

En congruencia con la Constitución federal y la aludida Ley General, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, se establece en el artículo 36, párrafo primero, con relación a los procedimientos electorales en esa entidad federativa que la *“renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos, se realizará mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las bases que establezca la presente Constitución. La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”*.

Asimismo, se prevé en el párrafo séptimo del mencionado artículo que *“la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, estarán a cargo de un organismo público denominado Instituto Estatal Electoral, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios; se compondrá de un órgano de dirección superior denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y municipales”*.

En particular con relación a las facultades de asunción, atracción y delegación del Instituto Nacional Electoral, a que se ha hecho referencia, el constituyente local ha establecido en los párrafos décimo segundo y décimo tercero del mencionado artículo 36 lo siguiente:

El Instituto Estatal Electoral ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución

SUP-JRC-317/2016

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de las modalidades previstas en los incisos a), b) y c) del mismo Apartado, en los términos de la Ley General en la materia.

A solicitud del Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

En congruencia con lo anterior en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el artículo 64, prevé que entre las atribuciones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, están las que a continuación se precisan:

Artículo 64

1) El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

a. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional Electoral;

[...]

g. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral y proporcionarlos a los demás organismos electorales conforme al plan de impresión y distribución de documentación electoral;

h. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones estatales, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

i. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;

j. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional electoral;

k. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral;

[...]

n. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado dicho organismo nacional y respecto de los topes de campaña determinados para cada proceso local, conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones que emita el Consejo Estatal del Instituto Nacional electoral.

o. Expedir su reglamento interior, así como dictar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer efectivas las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás acuerdos generales, sin contravenir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni los reglamentos, criterios generales o lineamientos expedidos por el Instituto Nacional electoral que le sean aplicables;

p. Desahogar las consultas que sobre la aplicación e interpretación de esta Ley, sus reglamentos y demás acuerdos generales que se presenten, debiendo en todo caso dar vista al Instituto Nacional Electoral, para los efectos de lo previsto en el artículo 32, numeral 2, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[...]

ee. Aprobar el proyecto del número de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales a instalar en cada municipio, que conforme a esta Ley elabore el Consejero Presidente, cuando esa facultad haya sido delegada por el Instituto Nacional electoral, conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en lo referente a capacitación de integrantes de mesas directivas

SUP-JRC-317/2016

de casilla, siempre que estas facultades se encuentren delegadas:

I. Supervisar el programa de materiales y capacitación que para tal efecto elabore el personal del Instituto Estatal Electoral, y

II. Supervisar el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, y su mecanismo de depuración.

[...]

mm. Ejercer las facultades en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, candidatos y agrupaciones políticas, cuando dichas facultades le hayan sido delegadas por el Instituto Nacional Electoral al organismo local; y

nn. Las demás funciones que le otorgue esta Ley, las leyes generales y demás disposiciones aplicables.

De la normativa trasunta se advierte lo siguiente:

- La organización de las elecciones se lleva a cabo por el Instituto Nacional Electoral y por los Institutos Electorales de las entidades federativas, en los términos que determina la Ley fundamental.

- La Ley determinará las reglas respecto a la relación del Instituto Nacional Electoral con las autoridades mencionados Institutos Electorales locales.

- En este sentido, en los procedimientos comiciales federales y locales, corresponden al citado Instituto Nacional, entre otras atribuciones, la capacitación electoral, así como determinar las reglas, **lineamientos**, criterios y formatos en materia de resultados preliminares.

- De esta forma, el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de emitir criterios generales, a fin de garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana.

- Por su parte, el Consejo General de la mencionada autoridad administrativa nacional tiene la atribución, en los supuestos que establezca la ley, de ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procedimientos electorales locales.

- Por ello, el citado Consejo General tiene la facultad de asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Institutos Electorales de las entidades federativas.

- También se advierte, que el mencionado Consejo cuenta con la **facultad de atraer para su conocimiento y resolución cualquier asunto de la competencia de los Institutos Electorales locales, cuando la trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.**

- Es considerada una cuestión trascendente cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo en la posible afectación o alteración del desarrollo del procedimiento electoral o de los principios de la función electoral local.

- Cuando se trate de sentar un criterio de interpretación, el Instituto Nacional Electoral deberá valorar el carácter excepcional o novedoso del asunto, así como el alcance que la

SUP-JRC-317/2016

resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, como para la función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos.

- En este orden de ideas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tiene la facultad de emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones legales.

- Los Institutos Electorales de las entidades federativas pueden convenir con el Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo de la organización de los procedimientos electorales locales.

- Corresponde a los mencionados Institutos Electorales locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- A solicitud del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio, la organización de procedimientos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

- El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tiene la facultad de dictar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer efectivo lo dispuesto por la Ley Electoral de esa entidad, sus reglamentos y demás acuerdos, sin contravenir la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electoral, ni los reglamentos, criterios generales o lineamientos expedidos por el Instituto Nacional Electoral que le sean aplicables.

Precisado lo anterior, se consideran **infundados** los conceptos de agravio en los cuales los actores aducen que la autoridad responsable omitió resolver de manera debida sobre la supuesta invasión de competencia del Instituto Nacional Electoral, con respecto a las atribuciones previstas para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Se arriba a la anotada conclusión, en razón de que el Tribunal Estatal Electoral responsable expuso las razones jurídicas por las cuales consideró que la normativa de la Constitución federal, así como de la Constitución y Ley de la entidad federativa en materia electoral establecen una clara distribución competencial entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y como se constató en líneas anteriores es conforme a Derecho su determinación, entre otros aspectos, con relación a que el Instituto Nacional Electoral está constitucionalmente facultado para emitir lineamientos y ejercer la facultad de atracción, así como la de suscribir convenios con los institutos electorales de las entidades federativas, conforme a lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, es de destacar que de la revisión integral del escrito de demanda del juicio al rubro identificado, esta Sala Superior constata que los enjuiciantes no controvierten

SUP-JRC-317/2016

frontalmente las consideraciones que sustentan la determinación del Tribunal Estatal Electoral responsable.

En este orden de ideas, contrariamente a lo aducido por los actores, fue en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tiene previstas, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió, entre otros:

1) El acuerdo identificado con la clave **INE/CG950/2015**, mediante el cual aprobó “...*LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES Y PARA EL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO*”.

2) El acuerdo identificado con la clave **INE/CG1012/2015**, “...*POR EL QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES AL TÉRMINO DE LAS JORNADA ELECTORAL, PARA LOS PROCESO ELECTORALES LOCALES 2015-2016...*”.

3) Así como el diverso acuerdo identificado con la clave **INE/CG122/2016** “...*POR EL QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES; DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES A PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LA SEDE DE LOS CONSEJOS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016...*”.

Asimismo, en ejercicio de las aludidas atribuciones constitucional y legalmente establecidas para los Institutos Electorales, tanto Nacional como de las entidades federativas, que fue suscrito el *“CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO “EL INE”, REPRESENTADO POR EL DOCTOR LORENZO CÓRDOVA VIANELLO Y EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO ALEJANDRO DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA; POR LA OTRA, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EN LO SUCESIVO “EL IEE”, REPRESENTADO POR EL INGENIERO ARTURO MERÁZ GONZÁLEZ Y EL LICENCIADO GUILLERMO SIERRA FUENTES, CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016, DONDE SE ELEGIRÁ GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS”.*

Es por las razones expuestas, a juicio de esta Sala Superior son **infundados** los conceptos de agravio que se analizan.

Por otra parte, los enjuiciantes aducen, de manera genérica, que con la emisión de los citados acuerdos por el

SUP-JRC-317/2016

Instituto Nacional Electoral y la suscripción del precitado convenio de colaboración entre ese Instituto Nacional y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, *“modificaron normas jurídicas fundamentales que provocan sin duda la violación al principio de certeza debido a la modificación del marco normativo electoral sustancial en pleno proceso electoral, violando el artículo 105 Constitucional”*.

No obstante lo novedoso del planteamiento, dado que no lo adujeron ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, toda vez que se trata de un argumento vinculado a una cuestión de constitucionalidad, esta Sala Superior procede a su resolución.

A juicio de este órgano jurisdiccional es **infundado** el concepto de agravio como se expone a continuación.

Cabe precisar que este órgano jurisdiccional especializado considera que los conceptos de agravio hechos valer por los actores se controvierte la posible vulneración al principio de certeza electoral, en tanto que el Instituto Nacional Electoral emitió criterios y lineamientos para los procedimientos electorales locales ordinarios que se desarrollaron en dos mil dieciséis, lo que en su concepto fue indebido.

Al respecto, esta Sala Superior considera que la emisión de los aludidos acuerdos identificados con las claves INE/CG950/2015, INE/CG1012/2015 e INE/CG122/2016, por parte del Instituto Nacional Electoral, así como la suscripción del citado *“CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN”* por ambos Institutos Electorales, no resulta

violatoria del principio de certeza, atento a las siguientes consideraciones de Derecho.

En el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las leyes electorales federal y locales se deben promulgar y publicar por lo menos noventa días antes de que inicie el procedimiento electoral en que se vayan a aplicar, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Es preciso destacar que la mencionada prohibición establecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal sólo es aplicable a las normas generales, entendidas éstas como leyes ordinarias, federales o locales, expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales, respecto de las cuales, resulta procedente la acción de inconstitucionalidad, cuya resolución compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, del contenido de la disposición constitucional antes mencionada, se advierte un fin común consistente en evitar que se emitan o modifiquen normas jurídicas, una vez iniciado el procedimiento electoral de que se trate y que pudiera poner en riesgo su adecuado desarrollo.

Ahora bien, para determinar si con la emisión de los aludidos acuerdos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la suscripción del convenio general de coordinación

SUP-JRC-317/2016

y colaboración se vulnera el principio de certeza, se debe tener en consideración lo establecido en la iniciativa de reformas a la Constitución federal de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, respecto al artículo 105, fracción II, que señala:

...Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que impone su propia naturaleza, las modificaciones al artículo 105 de la Constitución que contiene esta propuesta, contemplan otros tres aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales; que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que las leyes electorales no sean susceptibles de **modificaciones sustanciales** una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los noventa días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser impugnados por inconstitucionales, resueltas las impugnaciones por la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.

De la parte trasunta, se advierte que la intención del Poder Revisor Permanente de la Constitución federal, al establecer la prohibición contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Carta Magna, consiste en impedir que promulguen o publiquen leyes electorales una vez iniciado el procedimiento de que se trate..

Asimismo se debe destacar, que la negativa en análisis, se refiere a la expedición de leyes que se aplicaran en un determinado procedimiento electoral, es decir, únicamente opera si las leyes electorales que se emitan afectan el procedimiento electoral que iniciará o bien durante su desarrollo.

Así, para establecer si los mencionados actos jurídicos contravienen el principio de certeza, se debe examinar previamente la naturaleza jurídica de las disposiciones que los conforman a efecto de determinar si constituyen o no una modificación fundamental y, por lo tanto, si se vulnera la citada prohibición constitucional.

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, Madrid, 2001, página 747, define al concepto *Fundamental* de la siguiente manera: “Que sirve de fundamento o es lo principal en algo”; asimismo, la palabra *fundamento* como: “Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. (...) 3. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa. (...)”.

El citado diccionario en su página 871, define al vocablo *instrumental* como: “Perteneiente o relativo al instrumento. *Elemento de orden instrumental. Medios instrumentales...* 5. m. Conjunto de instrumentos destinados a determinado fin. Instrumental científico... 8. *Gram.* En ciertas lenguas, caso con el que se denota principalmente la relación de medio o instrumento. También, *instrumento* significa: “m. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. ... 3. Aquello de que nos servimos para hacer algo. 4. Instrumento musical. 5. Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin...”.

De esta forma, se puede precisar, por una parte, al término *fundamental* como lo básico o esencial, lo más importante de una cosa, y por la otra, al vocablo *instrumental*

SUP-JRC-317/2016

como el conjunto de instrumentos destinados a un fin determinado.

Por otro lado, en nuestro sistema jurídico federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye nuestra ley fundamental, y la legislación que de ella se deriva tiende a sujetarse a los lineamientos generales y esenciales que aquélla le enmarca; de tal forma que existen instituciones y principios fundamentales que la Carta Magna establece y tutela a través de sus diversas disposiciones, y la demás legislación, tomándolas como puntos de referencia, regulan y reglamentan dentro de su ámbito legal de competencia.

En estas circunstancias, la legislación secundaria se tendrá que regir por tales disposiciones fundamentales, asumiéndolas de tal manera que constituyan su parte medular y punto de partida para todo su contexto normativo.

Por eso, se puede considerar que dentro de cualquier cuerpo de normas jurídicas, es posible encontrar disposiciones que se puedan calificar como fundamentales, en la medida que prevén los principios rectores en la materia que rigen o porque son esenciales en cuanto a que no se puedan abstener de ellas por el principio o institución que regulen, y otras que, teniendo como premisa tales principios o instituciones, tan sólo acogen a cuestiones secundarias, no esenciales o instrumentales.

La renovación periódica de los integrantes de los órganos representativos de gobierno constituye la finalidad principal de todo régimen electoral, pero para que tal objetivo se alcance, se requiere que la Constitución, la ley o ambas, establezcan las bases electorales, verbigracia, los agentes que intervienen en las contiendas electorales (partidos políticos, ciudadanos, órganos encargados de la organización de las elecciones, etcétera); la manera en que participarán tales agentes en las contiendas electorales y los derechos o atribuciones, obligaciones y fines de cada uno. Por tanto, las bases fundamentales del régimen electoral serán aquellas que sirvan de cimiento al mismo.

En México, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, 115, fracciones y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el objetivo primordial del régimen electoral es la renovación de los depositarios del Poder Legislativo y Ejecutivo, tanto a nivel federal como local, así como a los integrantes de los ayuntamientos, lo cual se logra a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Para alcanzar el citado objetivo, en los preceptos constitucionales se establecen las bases del régimen electoral mexicano, ya que sobre éstas debe sujetarse toda la legislación electoral, por lo cual, se puede sostener que esas bases resultan fundamentales para la materia electoral, pues sin ellas, el régimen carecería de los elementos necesarios para funcionamiento.

SUP-JRC-317/2016

Los elementos que son de suma importancia al régimen electoral mexicano son los siguientes:

A) La renovación periódica de los despositarios de los Poderes Legislativos y Ejecutivo, así como de los integrantes de los ayuntamientos, pues respecto a esta actividad recae el objeto del régimen electoral.

B) Los partidos políticos, porque a través de esas entidades de interés público, entre otros fines, se promueve la participación del pueblo en la vida democrática del país, y se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

C) Los elementos necesarios para que los partidos lleven a cabo sus actividades, entre los que se está, el financiamiento público, ya que a través de él, se busca la independencia de los institutos políticos respecto a presiones corporativas o ilegales que podrían proceder de centros o grupos de poder económico, social e institucional, para lo cual el Estado dota a estas entidades de interés público de recursos financieros, por vías transparentes y fórmulas predeterminadas, de manera tal que no se obstaculicen la labor que tienen encomendada.

D) La candidatura independiente, reconocido como un derecho fundamental de todos ciudadanos mexicanos para poder ser votado para todos los cargos de elección popular, cumpliendo las calidades que establezca ley, sin necesidad de ser postulados por un partido político.

Por tanto, cualquier modificación legal que se efectúe con relación a tales aspectos, se debe catalogar como fundamental, en virtud de con ella se alterarían las bases que sirven de sustento al Sistema Electoral Mexicano.

Es decir, la prohibición establecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal está relacionada con normas que pudieran ser trascendentales para el desarrollo del procedimiento electoral.

Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J. 98/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXIV, agosto de 2006, página mil quinientas catorce (1514), Novena Época, de rubro y texto siguiente:

CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. El principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador General de la República, tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que por disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos, a sus candidatos o a los mismos electores. Sin embargo, el mencionado principio tiene como excepciones: a) que las citadas modificaciones legislativas no sean de naturaleza trascendental para el proceso electoral, pues si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, la falta de cumplimiento del requisito formal de su promulgación y

SUP-JRC-317/2016

publicación sin mediar el plazo de 90 días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos, su reparación bien podría ordenarse sin dañar alguno de los actos esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado; y b) si la modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal caso la creación de nuevas normas tiene como sustento posteriores circunstancias fácticas que demandan la generación de disposiciones jurídicas complementarias, o la reforma de las existentes, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico que por la exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando los propios acontecimientos exigen su intervención, siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la materia electoral.

En este orden de ideas, lo infundado del concepto de agravio que hacen valer los enjuiciantes, radica en que como se ha precisado en párrafos precedentes, además de no tener la naturaleza de leyes, los aludidos actos jurídicos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tampoco son normas que establezcan modificaciones fundamentales, sino que su naturaleza jurídica consiste en instrumentos normativos cuya emisión tiene como sustento lo previsto en 41, párrafo segundo, base V, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo se tiene en consideración que los mencionados acuerdos han tenido como objeto el establecimiento de lineamientos con relación a *“LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES”*, *“PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE LA*

DOCUMENTACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES AL TÉRMINO DE LAS JORNADA ELECTORAL, PARA LOS PROCESO ELECTORALES LOCALES 2015-2016”, así como, criterios “PARA CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES; DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES A PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LA SEDE DE LOS CONSEJOS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016”.

Ahora bien por lo que se refiere al mencionado convenio general de coordinación y colaboración, su objeto es instrumentar acciones encaminadas a *“HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016, DONDE SE ELEGIRÁ GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA”*, por lo que en ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente previstas acordaron establecer reglas para llevar a cabo una actuación de coordinación para el adecuado, eficaz y eficiente desarrollo del procedimiento electoral local ordinario en esa entidad federativa en los temas que a continuación se enuncian:

- En materia de capacitación y asistencia electoral se consideraron los rubros concernientes al reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

SUP-JRC-317/2016

- Respecto a las casillas electorales convinieron el número y tipo, así como su ubicación y recorridos, la conformación de las casillas extraordinarias y especiales, la aprobación de la lista de ubicación de casillas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, así como la integración y distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

- En lo concerniente a la jornada electoral definieron algunas especificaciones para el seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo de casilla, la integración de paquetes electorales y orientación a ciudadanos.

- Por otro lado, los mencionados Institutos convinieron el procedimiento para la recolección de paquetes electorales

- Asimismo, establecieron reglas para los resultados electorales y cómputos de las elecciones.

- Además, los aludidos Institutos fijaron el compromiso de suscribir anexos técnicos al convenio, para el cumplimiento de los convenios asumidos.

De lo expuesto se constata que el contenido de los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral y el citado convenio no versan sobre aspectos fundamentales de la renovación periódica de los poderes Ejecutivo y Legislativo o de los integrantes de los diversos ayuntamientos en el Estado de Chihuahua; tampoco modifican los requisitos y procedimientos de constitución de partidos políticos; ni mucho menos alteran

los elementos necesarios que utilizan los institutos políticos para que puedan desarrollar su correcta actuación, ni incide en el modo en que deban participar los candidatos independientes.

En este orden de ideas es que, a juicio de esta Sala Superior, la emisión de los citados acuerdos y suscripción del Convenio no alteran las bases que sirven de sustento al régimen electoral mexicano, sino, por el contrario, se trata de normas instrumentales respecto del ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente tienen previstas tanto para el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua respecto del procedimiento electoral. De ahí lo infundado de los conceptos de agravio.

III. INCORRECTA APRECIACIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR

Por método de estudio, los restantes conceptos de agravio expresados por los actores, consistentes en la incorrecta apreciación de la acusación de pedir respecto de los razonamientos lógico-jurídicos que se vinculan con la entrega extemporánea del paquete electoral, recibir la votación personas distintas a las autorizadas en la ley, error aritmético en el cómputo de la votación y el referente a la causal genérica de nulidad, se estudiarán de manera conjunta por la íntima relación que guardan entre sí.

Los enjuiciantes consideran que el Tribunal Electoral responsable plasmó la síntesis de los conceptos de agravio de manera limitada, por lo que abordó incorrectamente los

SUP-JRC-317/2016

conceptos de agravio y, por tanto, fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance para resolver la controversia, sin tener presente que su causa de pedir la sustentaron en violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores del procedimiento electoral.

En este orden ideas, los actores consideran que diversas circunstancias debieron ser tomadas en cuenta, como la invasión competencial del Instituto Nacional Electoral respecto a la facultad que tiene el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en cuanto a la impresión y enfajillado de boletas electorales, así como la conformación y entrega de paquetes electorales.

Asimismo, consideran que con la falta de constancias del seguimiento, por parte del Instituto Electoral local, al procedimiento de impresión y entrega de las mencionadas boletas, se trasgrede el principio de máxima publicidad.

Reiteran que no se justifica la intromisión del Instituto Nacional Electoral en los asuntos del conocimiento de la autoridad administrativa local, como la celebración de contratos o convenios, toda vez que ello está fuera de los casos previstos por la ley.

Aducen que el cúmulo de inconsistencias aritméticas en los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, aunado a la sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla y la extemporaneidad en la entrega de los paquetes electorales, provocó un “desorden electoral” que incide en la falta de certeza en la elección.

Con relación a lo anterior, consideran que la sustitución de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, aun tratándose de personas cuyo domicilio coincide con la sección de la casilla, constituye una irregularidad porque no fueron debidamente capacitados.

Al respecto, aducen que el deber de entregar los paquetes electorales a las asambleas municipales corresponde a los presidentes de las mesas directivas de casilla, quienes no pueden ser sustituidos, por lo cual, la entrega de los aludidos paquetes por personas distintas al presidente de la mesa directiva se debe de considerar como una inconsistencia grave.

La modificación legal y material del marco normativo, durante el procedimiento electoral, provocó confusión en el Instituto Electoral local, toda vez que los Capacitadores Electorales del Instituto Nacional Electoral, enfajillaron los paquetes electorales y entregaron tanto a los presidentes de las mesas directivas de casilla y a las Asambleas Municipales, los mencionados paquetes.

Los actores señalan que el Tribunal Electoral responsable no debió acotar su estudio a la nulidad de votación recibida en mesa directiva de casilla, pues la nulidad de la elección se puede decretar por irregularidades determinantes que se actualicen en el veinte por ciento o más de las casillas instaladas para la elección de que se trate, por lo que no hizo un estudio respecto de las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas que ocurrieron.

SUP-JRC-317/2016

Argumentan que la autoridad responsable determinó que la entrega extemporánea de los paquetes electorales sólo se puede estudiar si el paquete muestra alteraciones y existe una determinancia por error aritmético.

Respecto de las casillas en comunidades urbanas, aducen que la tardanza en el envío de los mencionados paquetes a los centros de acopio, fue de manera generalizada, tomando en cuenta que las casillas siempre se ubican en el mismo lugar.

Además, manifiestan que la entrega por persona diversa al Presidente de la mesa directiva de casilla es una irregularidad y por tanto, una causal de nulidad de votación.

Agregan que, aún en el supuesto de que la entrega por persona distinta al presidente de la mesa directiva de casilla fuera válida, tendría que existir documentación que acredite la entrega del paquete electoral por parte del presidente, a la persona que efectúe la entrega del paquete.

Aducen que la autoridad responsable reconoció que hubo múltiples sustituciones, no obstante, únicamente decretó la nulidad de la votación recibida en cuarenta y cinco casillas, por haberse integrado con personas no inscritas en la lista nominal.

Por tanto, consideran que la sola intervención por persona distinta a los facultados por la ley, sin importar los resultados de la votación, implica la nulidad de la votación de la casilla.

De esta forma, aducen que la autoridad responsable indebidamente realizó un estudio de causales de nulidad de la votación recibida en la mesa directiva de casilla, cuando se trata de violaciones graves y generalizadas que ponen en riesgo el resultado de la votación.

Señalan que a la fecha de la impugnación ante el Tribunal local, el Consejo Electoral local no tenía un registro de la cantidad de paquetes electorales que se recontaron.

Además, consideran que el recuento se hizo, sin que se actualizaran los supuestos previstos en la ley, que en las actas no se contemplan todos los datos, y que se realizaron por personas distintas a quienes las practicaron.

Y aunque del análisis del error aritmético existieron irregularidades en mil ciento diecinueve (1,119) casillas que representan un total de ochenta y nueve mil, quinientos treinta votos (89,530) votos, solamente se anularon algunas casillas, lo cual provoca incertidumbre en el resultado de la votación.

De ahí que, en su concepto, si a la votación recibida en las mesas directivas de casillas anuladas por error aritmético y por participar en la integración de las mesas personas distintas a la previstas en la ley, se le agrega la votación de las casillas de los paquetes electorales entregados por personas distintas al presidente de la mesa directiva de casilla, da un total de veinte por ciento (20) o más de las casillas instaladas por lo que sostienen que procede la nulidad de la elección.

SUP-JRC-317/2016

Con relación a lo anterior, los actores aducen, que de manera errónea la autoridad responsable otorgó valor probatorio pleno al “agrupamiento de boletas”, el cual solo es un documento en formato Excel que contiene el número de boletas que debían imprimirse y empaquetarse en cada casilla, pero no acredita lo que realmente sucedió en cada Asamblea Municipal.

A juicio de esta Sala Superior los conceptos de agravio son **infundados** e **inoperantes** como se expone a continuación.

Para efecto de resolver, los argumentos planteados por los actores, es pertinente realizar un breve estudio del sistema de nulidades electorales en el Estado de Chihuahua.

Sistema de nulidades del Estado de Chihuahua

Al respecto, se debe tener en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

Artículo 39.- La **soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo**. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40.- Es **voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República** representativa, democrática, laica, federal, **compuesta de Estados libres y soberanos** en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[...]

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, **se establecerá un sistema de medios de impugnación** en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema **dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales** y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

[...]

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

- a) Se **exceda el gasto de campaña** en un cinco por ciento del monto total autorizado;
- b) Se **compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión**, fuera de los supuestos previstos en la ley;
- c) Se **reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos** en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

SUP-JRC-317/2016

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[...]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

[...]

m) Se **fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos**, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

(Énfasis añadido)

Conforme a los preceptos transcritos, cabe mencionar que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales de las entidades federativas, en los términos que establece la Constitución federal, esto es, con carácter autónomo, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función estatal se debe regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En términos del artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, con la finalidad de “*garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley*”; asimismo, en términos del párrafo tercero y cuarto de la aludida base VI, en la Ley se debe

regular el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, las cuales deben ser acreditadas de manera objetiva y material.

Asimismo, según se ordena en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso m), conforme a las bases establecidas en la Constitución federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, deben garantizar que *“Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales”*.

En este contexto, en la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua*, en el artículo 36, párrafo tercero, está prevista similar disposición que en la Constitución federal en el sentido de que a fin de *“garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley”*.

Se establece además que ese sistema *“dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, fijando los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas. Además, garantizará la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de votar, ser votado y de*

SUP-JRC-317/2016

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del Estado”.

En el párrafo cuarto del citado numeral, se establece que en la Ley se deben prever los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, así como las **causales de nulidad de las elecciones de Gobernador**, diputados y ayuntamientos, sin perjuicio de las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, en la *Ley Electoral del Estado de Chihuahua*, los artículos 382 a 385 son al tenor siguiente:

TÍTULO CUARTO DE LAS NULIDADES ELECTORALES CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 382

1) Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada de que se trate.

2) Los efectos de la nulidad decretados por el Tribunal Estatal Electoral, respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección de diputado, ayuntamiento o Gobernador se contrae exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad.

3) Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE VOTACIÓN

Artículo 383

1) La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite alguna de las causales siguientes:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Estatal o las asambleas municipales;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales a la asamblea municipal, fuera de los plazos que esta Ley señala;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Estatal o la asamblea respectiva;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos, fórmula de candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir sufragar sin credencial para votar a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo en los casos de excepción señalados en esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

h) Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

j) Cuando el número total de votos emitidos, sea superior al número total de electores que contenga la lista nominal correspondiente, salvo que la diferencia obedezca a los casos de excepción que dispone la Ley;

k) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

l) Cuando se cierre la casilla antes de la hora indicada, sin haber acudido a votar la totalidad de los ciudadanos inscritos en la lista nominal correspondiente, y

m) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE UNA ELECCIÓN

Artículo 384

1) Son causas de nulidad de una elección de síndicos, ayuntamiento, diputados de mayoría relativa o Gobernador, las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según corresponda;

b) Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones del municipio, distrito o Estado, según corresponda y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, y

c) Cuando los candidatos sean inelegibles.

Artículo 385

1) Sólo podrá ser declarada nula la elección de un síndico, de un ayuntamiento, de un diputado de mayoría relativa o de Gobernador, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

2) El Tribunal Estatal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables al promovente.

3) El Tribunal Estatal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

4) Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

5) En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

De lo anterior se advierte, que conforme a las reglas del Sistema Electoral Mexicano, el legislador del Estado de Chihuahua ha determinado crear un sistema de nulidades electorales teniendo en consideración, en la parte relacionada con la materia de la controversia, por una parte, *causales de nulidad de votación*, como conjunto de votos emitidos y depositados en una urna, respecto de una elección determinada, en una específica mesa directiva de casilla y, por otra, *causales de nulidad de elección*, en su unidad o integridad, ya sea en un distrito electoral, para el caso de los diputados locales; en un municipio, respecto de la elección de síndicos o Ayuntamiento, o bien, en toda la entidad federativa, con relación a la elección de Gobernador del Estado.

Nulidad de votación recibida en mesa directiva de casilla

Con relación a la nulidad de la votación recibida por la mesa directiva de casilla, conforme al orden y método bipartita, se clasifica en causales *específicas* y *genérica*.

SUP-JRC-317/2016

En este orden de ideas, en términos de la *Ley Electoral del Estado de Chihuahua*, las causales específicas de votación recibida en casilla, están previstas en el artículo 383, párrafo 1, en los incisos del a) al l).

- a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Estatal o las asambleas municipales;
- b) Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral a la asamblea municipal, fuera de los plazos previstos en la ley;
- c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Estatal o la asamblea respectiva;
- d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;
- e) Recibir la votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley;
- f) Mediar dolo o error en el cómputo de los votos que beneficie a un candidato o fórmula;
- g) Permitir votar sin credencial elector a personas cuyo nombre no aparece en la lista nominal de electores, salvo en los casos de excepción señalados de la Ley;
- h) Impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada;
- i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores;

- j) Cuando el número total de votos emitidos, sea superior al número total de electores que contenga la lista nominal correspondiente, salvo que la diferencia obedezca a los casos de excepción que dispone la Ley;
- k) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, y
- l) Cerrar la casilla antes de la hora indicada, sin haber acudido a votar la totalidad de los ciudadanos inscritos en la lista nominal correspondiente.

Por lo que se refiere a la *causal genérica de votación recibida ante mesa directiva de casilla*, el legislador local, determinó su regulación en el inciso m), del párrafo 1, del artículo 383, de la mencionada ley electoral, al establecer que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite la existencia de “...irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma”.

La característica distintiva de este supuesto de nulidad es clara, en tanto que en las restantes hipótesis se hace alusión a una específica conducta, verbigracia, instalar, entregar, recibir, permitir, impedir, presionar, etcétera, en la *causal genérica de nulidad de votación recibida en mesa directiva de casilla* no hay esa tipificación concreta, específica, particular, individualizada,

SUP-JRC-317/2016

antes bien la referencia es a una generalidad “*existir irregularidades graves*”.

En este orden de ideas, el análisis de las causales de nulidad es dual, uno formal y otro real. El formal consiste en el estudio y conocimiento integral del sistema jurídico electoral, con especial atención en las disposiciones jurídicas que tiene por objeto el desarrollo de la jornada electoral, en cada uno de sus específicos hechos y actos jurídicos; desde la instalación de la mesa directiva de casilla hasta su clausura, así como la remisión, traslado y recepción del paquete electoral que contenga los respectivos expedientes electorales.

El real o fáctico corresponde al análisis minucioso de todo lo acontecido en una determinada mesa directiva de casilla, el día de la jornada electoral; igualmente desde la instalación de la casilla hasta su clausura, así como lo ocurrido durante la remisión, el traslado y la entrega de los paquetes electorales; desde el lugar donde estuvo instalada la casilla, hasta su recepción en el respectivo consejo municipal, en términos de lo previsto en los artículos 93, 94 y del 149 al 174, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Al efectuar este doble análisis se debe tener en consideración que el fin primordial del Derecho Electoral, en un Estado de democracia representativa, es la eficacia del voto de los ciudadanos.

Por tanto, el supuesto previsto en el inciso m), del párrafo 1, del artículo 383, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua sólo se puede actualizar si se satisfacen los siguientes requisitos: 1) Existan conductas ilícitas por infringir una norma jurídica; 2) Que los ilícitos sean suficientemente graves, de tal suerte que exista la convicción de que se han vulnerado los principios de libertad, secrecía, certeza, objetividad e imparcialidad, que deben caracterizar, invariablemente, la emisión-recepción del voto, así como el escrutinio y cómputo; 3) Las conductas ilícitas deben estar debidamente comprobadas; 4) Las irregularidades han de ser irreparables, en el transcurso de la jornada electoral o durante el escrutinio y cómputo; 5) Se ha de generar, como consecuencia, la afectación seria de diversos principios fundamentales e insalvables, de legalidad y constitucionalidad y, 6) Las irregularidades deben ser trascendentes para el resultado de la votación, de tal suerte que la declaración de nulidad de la votación recibida es una específica mesa directiva de casilla sea incuestionable, indispensable y justa.

En este orden de ideas, la Sala Superior ha sustentado el criterio que ha dado origen a la tesis relevante identificada con la clave XXXII/2014, consultable a fojas mil quinientas setenta y seis (1576) a mil quinientas setenta y siete (1577), de la *"Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral"*, volumen 2. Tomo II, intitulado "Tesis", cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Conforme con el artículo 298, fracción XIII, del Código Electoral del Estado de México, es admisible la declaración de nulidad de la votación recibida en casilla, cuando concurren los siguientes elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves; c) La irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral; d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación y e) El carácter determinante de las irregularidades para el resultado de la votación. El primer elemento sobre la gravedad de la irregularidad ocurre, cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México o cualquier norma jurídica de orden público y observancia general, incluidos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre que su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral. El segundo elemento, consistente en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de prueba. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la irregularidad durante la jornada electoral, se da cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento en que se llevan a cabo los comicios, en términos de lo previsto en el artículo 142 del Código Electoral del Estado de México. El cuarto elemento debe ser de tal magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o

certidumbre sobre la misma. El último elemento normativo que debe poseer la irregularidad es su carácter de determinante para el resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto es, la irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las irregularidades que se registren en una casilla deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o características, que también pueda racionalmente establecerse una relación causal con las posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas.

Las aludidas conductas antijurídicas deben ser distintas a las previstas en las hipótesis específicas de nulidad de la votación emitida-recibida en una mesa directiva de casilla; en caso diverso o contrario, no se estará realmente ante la concreción de la causal genérica de nulidad, sino, quizá, ante un acto o hecho jurídico tipificado como causal específica o incluso ante un hecho jurídico atípico.

Ese criterio ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, lo cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 40/2002, consultable a fojas cuatrocientas setenta y cuatro (474) a cuatrocientas setenta y cinco (475), de la "*Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral*", volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", con rubro y texto que a continuación se transcriben:

**NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.
DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA**

SUP-JRC-317/2016

GENÉRICA. Las causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y que concurren los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causa genérica.

Esos hechos ilícitos o las irregularidades graves deben ser determinantes para el resultado de la votación emitida-recibida en una mesa directiva de casilla o para el legal desarrollo de la jornada electoral o bien para ambos, además de ser irreparables en el transcurso de la jornada electoral o en el acto de escrutinio y cómputo de la votación.

Nulidad de elección

De la normativa que ha sido transcrita se advierte que el legislador del Estado de Chihuahua estableció diversas hipótesis de nulidad de cada uno de los tipos de elección en el

sistema electoral de esa entidad federativa. Estas causales de nulidad de elección pueden también ser clasificadas como *causales específicas y causal genérica*.

Entre las *causales específicas de nulidad de elección*, en el artículo 384, párrafo 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se prevé que son causas de nulidad de una elección de síndicos, ayuntamiento, diputados de mayoría relativa o Gobernador: **1)** La concreción fáctica o realización, fehacientemente demostrada, de una o más de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla, previstas en el artículo 383 de esa Ley, en un mínimo del 20% (veinte por ciento) de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según corresponda al tipo de elección; **2)** La omisión total de la instalación de las mesas directivas de casilla, en un mínimo equivalente al 20% (veinte por ciento) de las secciones electorales en que se divida el municipio, el distrito o el Estado, según corresponda y consecuentemente, la no recepción de los votos de los ciudadanos y, **3)** la inelegibilidad de los candidatos correspondientes.

Asimismo, previstas desde el texto de la Constitución federal, el legislador local ha regulado, en el artículo 385, párrafos 3 y 4, como causales de nulidad de elección, que el Tribunal Estatal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos siguientes: **1)** Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; **2)** Se compre o

SUP-JRC-317/2016

adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y **3)** Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En esos casos, las aludidas violaciones se deben acreditar de manera objetiva y material. En ese sentido, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Ahora bien, como *causal genérica de nulidad de elección*, el legislador del Estado de Chihuahua estableció, en el artículo 385, párrafo 2), del Código electoral local, la realización generalizada de violaciones sustanciales durante el desarrollo de la jornada electoral, en un específico distrito electoral, en el ámbito municipal o en ámbito geográfico de la entidad federativa, fehacientemente acreditadas, siempre que sean determinantes para el desarrollo de la elección correspondiente.

En términos del texto normativo, para que sea factible jurídicamente la declaración de nulidad de una elección, por la actualización de la causal genérica es necesario que se acrediten los siguientes supuestos: **1)** Las denominadas “violaciones sustanciales” correspondan a conductas que infrinjan, en forma grave, las normas de Derecho constitutivas del sistema electoral mexicano y en particular del Estado de Chihuahua; **2)** Las violaciones graves afecten aspectos

fundamentales del normal y adecuado desarrollo de la jornada; **3)** Sean violaciones de realización generalizada, reiterada, repetida, difundida, de tal forma, que vicie toda la jornada electoral hecha en un específico distrito electoral uninominal, municipal o de toda la entidad federativa, según sea el tipo de elección de que se trate; **4)** Las violaciones estén fehacientemente demostradas y, **5)** Las conductas ilícitas, sino generalizadas, graves y sustanciales, sean determinantes para el desarrollo de la jornada electoral o para el resultado de la elección.

Es de advertir que la expresión “violaciones sustanciales” utilizada por el legislador para tipificar la causal genérica de nulidad, se debe entender en sentido amplio, pero no vago o abstracto, sino plenamente especificado, justificado y demostrado: es decir, que con esta expresión se alude, en general, a conductas antijurídicas que infrinjan los principios de certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, constitucionalidad y legalidad, que deben caracterizar la función estatal electoral o bien que impidan la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas e incluso que afecten la emisión-recepción del voto universal, igual, libre, secreto, directo, intransferible y personalísimo, de los ciudadanos, principios y características todos, previstos en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SUP-JRC-317/2016

Al respecto, este órgano colegiado ha emitido el criterio contenido en la tesis relevante identificada con la clave XLI/97, consultable a fojas mil quinientas setenta y tres (1573) a mil quinientas setenta y cuatro (1574), de la *"Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral"*, volumen 2, tomo II, intitulado "Tesis", cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). De acuerdo con el artículo 181, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, ha lugar a la nulidad de la elección cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la preparación y desarrollo de la elección y se demuestre que las mismas son determinantes para su resultado. Para que se surta este último extremo de la llamada causal genérica de nulidad, basta con que en autos se demuestre fehacientemente que se han vulnerado principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, lo cual se actualiza cuando fueron las propias autoridades encargadas de preparar, desarrollar y vigilar la elección de que se trata quienes originaron y cometieron dichas violaciones sustanciales.

Ahora bien, en el particular los enjuiciantes aducen en esencia que el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua *"no abordó el estudio correcto de los agravios desde la perspectiva planteada y fue omisa en el estudio del caso..."*.

Para estar en aptitud de comprender de mejor forma ese planteamiento es necesario retomar los argumentos que formularon ante el Tribunal responsable, en la demanda de juicio de inconformidad, los cuales se hicieron consistir en lo siguiente:

[Fojas 4 – 16]:

El planteamiento que habremos de desarrollar para dejar establecida la causal abstracta por la que se pide la nulidad de la elección se basa en las siguientes premisas que violaron los principios rectores del proceso electoral ya citados: 1. El Consejo estatal del Instituto Estatal Electoral del estado de Chihuahua, no acordaron el número de boletas a imprimir, ni el plan de impresión distribución y resguardo de las mismas, a grado tal que no saben a ciencia cierta cuántas boletas se entregaron a cada distrito electoral y cuántas se integraron a cada paquete electoral, ni tampoco hicieron constar la formal recepción del número de boletas electorales por cada presidente de casilla. 2. No se supervisó la impresión de las boletas, ni su traslado, ni su registro. 3. Los datos del escrutinio y cómputo sólo pueden dar certeza, cuando se contrastan con datos relevantes, como son las boletas recibidas y las boletas sobrantes, es decir la suma total de votos, más las boletas sobrantes, debe ser igual a las boletas recibidas, de tal manera que si no se tuvo control sobre dicho dato, es muy fácil cuadrar los resultados, pues el único dato disponible para saber cuántas boletas se recibieron en la casilla, es el acta de escrutinio y cómputo, dato que llenan los funcionarios de casilla, de tal manera que no hay con qué verificarlo, puesto que basta que hagan la operación aritmética antes reseñada, para que luego dicha suma la equiparen a las boletas recibidas y así no habrá diferencia alguna. 4. Al correr los datos de resultados preliminares, utilizando los datos que constaban en las actas de escrutinio y cómputo y actas de la jornada, se arrojaron diferencia aritméticas en un gran número de casillas, sin embargo, que conforme a la Ley debieron haberse recontado, sin embargo en las 67 Asambleas Municipales no efectuaron el recuento en términos de lo previsto por los artículos 184 y 185 de la Ley Electoral del Estado, en los supuestos respectivos, sino que sólo hicieron un muestreo arbitrario, sin que a la fecha el Consejo estatal sepa cuántos paquetes se recontaron, ni tenga las actas de escrutinio y cómputo individuales por casilla del referido recuento, que además no nos fueron facilitadas inmediatamente después del cierre del paquete recontado, por lo que tampoco tenemos ese dato. 5. Al hacerse el recuento total de votos, se debe volver a hacer su escrutinio, no solo es contar, se trata de contar y certificar su existencia, ello solo

SUP-JRC-317/2016

puede suceder levantando un acta de escrutinio y cómputo de cada casilla, no estamos hablando de algo imposible, pues con las mesas de trabajo adecuadas y la logística correcta se puede ir certificando el avance del recuento en actas que se realiza en las 67 Asambleas Municipales, independientemente del acta circunstanciada que en su caso se tenga que levantar de la sesión de recuento. En el caso de las 67 Asambleas Municipales NO se levantaron actas de escrutinio y cómputo, de tal manera que no existen, no nos fueron entregadas al final del recuento, sino que varios días después se entregó en medio magnético sólo un archivo de “resultados por casilla”, sin ninguna autenticación y sin contener el dato de boletas sobrantes, pues sencillamente NO fueron contabilizadas, el único medio de contraste con el que contamos es precisamente ese, por ello en el ejercicio aritmético que se adjunta se utiliza el campo de boletas recibidas y boletas sobrantes que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo publicadas en el programa de resultados preliminares del Instituto Estatal Electoral. 6. Precisamente este obrar que evidentemente fue generalizado, pues aconteció en todas las casillas recontadas que superan el 20% del total de las casillas, violó flagrantemente los principios rectores del proceso electoral, fundamentalmente el de legalidad, al no acatar las disposiciones expresas que la Ley Electoral señala, el de máxima publicidad, pues no puede justificar su actuación bajo el principio de que no se lo pidieron los partidos políticos, y el de certeza, pues no existe confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la voluntad popular.

La grave omisión, por parte del órgano electoral de aprobar el número de boletas a imprimir, el plan para su impresión, resguardo, distribución y entrega se traduce en la violación de los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza, e imparcialidad y máxima publicidad establecidos en el artículo 36, párrafo segundo, de la Constitución Local; con relación a los artículos 52, 64, 144 y 145 de la Ley Electoral del Estado.

Dicha omisión, conlleva un perjuicio directo en la esfera político-electoral del Partido Político que represento, toda vez que no existe la plena certeza en cuanto a la legalidad de la emisión de las boletad electorales que fueron utilizadas el día

de la jornada electoral; así como tampoco en cuanto a la cantidad de boletas que fueron entregadas a cada casilla electoral, como ya lo he explicado pues precisamente la actividad que genera las boletas electorales, es una de las cuales se debe realizar con la máxima publicidad, debido a que históricamente tiene que ver con irregularidades graves, que consistían en “embarazo de urnas”, es decir que se llenaban con boletas que tenían disponibles y votadas previamente, configurando fraudes electorales, de ahí que el legislador considera de suma importancia tener un plan de impresión y distribución, acordado y respaldados por los partidos políticos y ciudadanía en general.

Lo cierto es que fue el Instituto Nacional Electoral quien llevó a cabo la impresión de la boletas, se encargó pues de todo el plan de impresión y distribución, de ahí la poca o nula información que tiene el Instituto Estatal Electoral, lo anterior además de ser una invasión de competencia que viola directamente los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal que a continuación se inserta en su parte conducente:

[...]

Pese a que la impresión de boletas y su distribución es una de las actividades fundamentales del proceso electoral, pues la Ley Electoral del Estado establece las reglas precisas para realizarla, el órgano electoral en desapego de la Ley violentó dichas normas, pues al parecer lo que sucedió es que delegó arbitrariamente todas esas facultades al Instituto Nacional Electoral.

Es tan importante esta actividad que la competencia entre el órgano electoral federal y el local se define directamente en el artículo 41 de la Constitución Federal, al señalar en el apartado C que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos quien de entre sus funciones tendrá la de impresión de documentos y la producción de materiales electorales, de ahí que no es posible dejar de lado esa competencia so pretexto de seguir lineamientos del Instituto Nacional Electoral.

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua es muy clara, es el Instituto Estatal Electoral solo deberá seguir los

SUP-JRC-317/2016

lineamientos de impresión del Instituto Nacional Electoral, pero no delegar la facultad de imprimir las boletas, esa facultad está atribuida al Consejo Estatal, no a su presidente, recordemos entonces que el Consejo se integra por los consejeros y partidos políticos, éstos son los que deben acordar todos los pormenores de la impresión y el plan de distribución, conforma a lo previsto en los artículos 64, 144 y, 145 de la Ley Electoral del Estado, son los órganos electorales locales quienes tienen que hacer el resguardo, vigilancia, distribución y entrega de los paquetes electorales y boletas, bajo el programa aprobado por el Consejo Estatal, tal y como se advierte de las siguientes disposiciones:

[...]

En efecto, al no existir un documento o acuerdo que acredite, de manera cierta y precisa, la cantidad de boletas entregadas, ni cualquier otro documento que demuestre que los partidos políticos y candidatos independientes estuvieron enterados del plan de impresión y distribución, y participación en su vigilancia y resguardo, se traduce en una generalizada incertidumbre en cuanto al número de boletas que, verdaderamente, fueron utilizadas por el electorado chihuahuense y además se hace imposible el cotejo de los resultados electorales para su autenticación con las operaciones aritméticas necesarias.

Esta circunstancia fáctica acredita a plenitud, con el simple cotejo de las miles de actas en las que existe una notoria inconsistencia numérica entre el número de boletas no utilizadas con las boletas utilizadas; y en el cual en infinidad de casos sobran o faltan boletas no utilizadas.

Luego entonces, no existe certeza alguna en cuanto a la cantidad de boletas que fueron entregadas a los integrantes de las Mesas Directivas de las miles de casillas electorales que fueron instaladas el día de la jornada electoral; y que, por tal motivo, existen sobrantes y/o faltantes de boletas electorales que generan una grave y generalizada incertidumbre respecto al uso ilícito de las boletas electorales depositadas en las urnas en la elección de Gobernador del Estado.

En el caso que nos ocupa, no existe el acta que exige el artículo 145 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, relativa a relación pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, en la cual se hubiese asentado en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene y los nombre y cargos de los funcionarios presentes.

Así como tampoco, constancia alguna del cómputo de las boletas que fueron recibidas por los integrantes de las Mesas Directivas de las casillas electorales; en la cual se hubiese consignado el número exacto y preciso de los folios, y haber sido agrupadas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde la asamblea municipal.

Además no existe constancia alguna de los datos de dicha distribución, que permita su cotejo.

La nueva Ley electoral, en su artículo 184 el recuento parcial y ordena que en esos casos, se vuelva a hacer el escrutinio y cómputo, lo que indica es que el acta de casilla ya no tendrá valor, sino que será sustituida por la nueva acta que se tendrá que levantar por cada casilla aperturada, en la que desde luego se deben anotar las boletas sobrantes, pues de otra manera quedará la incertidumbre de las boletas recibidas en esa casilla, lo cual además no tiene medio de contraste debido a las omisiones graves del órgano electoral:

[...]

No obstante que la Ley es muy clara al señalar en qué casos se tenían que abrir los paquetes electorales, el órgano electoral no procedió a su apertura, pues sólo abrió a discreción los que le parecieron, dejando la duda o discrepancia tal y como aparecen actualmente, por lo que volvemos a repetir el ejercicio a fin de que se advierta que actualmente con las casillas que pudimos contrastar que son 3321, aparece en las actas de escrutinio y cómputo un total de 1394301 recibidas, y la suma de votos registrados en dichas actas es de 835553 votos y las boletas sobrantes reportadas por los funcionarios de casilla son 730254 boletas, de tal manera que si sumamos los votos, mas

SUP-JRC-317/2016

las boletas sobrantes, nos arroja una cantidad de 1565807, sin embargo se supone que solo se recibieron 1394301 boletas en dichas casillas, de tal manera que sobran votos o boletas en un total de 171506, si partimos además que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 116503 votos, se genera una incertidumbre total, que inclusive se debe tomar en cuenta que estamos solo contrastando 3321 casillas.

Precisamente la duda se mantiene, debido a que no se abrieron todos los paquetes que presentaban inconsistencias y los que se ordenó su apertura, no fueron recontados en términos de Ley, ya que no se levantó acta individual escrutinio y cómputo, ni fueron contadas las boletas sobrantes de dichos paquetes.

Esta actuación es ilegal y viola el artículo 185 de la Ley Electoral, que de manera puntual señala cómo se debe practicar el recuento y en su numeral 1 y 2 señala que es necesario levantar el acta individual de escrutinio y cómputo, incluso se utiliza la expresión: “asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente”, es decir es evidente que se debe levantar el acta individual del paquete que se encuentre en el supuesto del nuevo escrutinio y cómputo, estas actas son independientes, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo, precisamente estas actas individuales no fueron levantadas y tampoco se hizo constar el número de boletas inutilizadas o sobrantes, tal y como lo señala la Ley:

[...]

En efecto, en el caso que nos ocupa, no existe documento oficial alguno donde se haga constar, de manera fidedigna, el resultado del cómputo de la elección, pues como ya se señaló en un recuento, el escrutinio y cómputo se repite, supera al realizado por los funcionarios de la casilla, señalando la ley cómo debe hacerse y se debe levantar el acta respectiva con el recuento de cada casilla, independientemente del acta circunstanciada del cómputo en la Asamblea Municipal, las cuales tampoco fueron puestas a nuestra disposición.

La falta de actas de escrutinio y cómputo levantadas en las 67 Asambleas Municipales, donde debería haberse consignado en número de boletas sobrantes para conformar la

base de la operación aritmética de autenticación, impide que exista certeza en el resultado, contar solo con la sumatoria de votos, no nos permite dar la debida certeza al recuento practicado, ni al cómputo final, dejando la total incertidumbre del resultado electoral consignado en el cómputo final.

El solo hecho de que no se hayan seguido las reglas del recuento, se hayan abierto los paquetes electorales sin que se haya dejado constancia del número total de boletas que contenía cada uno, implica que no se supera la otra omisión del órgano electoral al no saber el número de boletas que se entregó a cada casilla, ni haber supervisado y vigilado todo el proceso de su producción y entrega, produce una total incertidumbre del resultado pero además para muestra en las siguientes 151 casillas subsisten diferencias aritméticas, que no tendrán explicación por la falta de las formalidades del proceso electoral que hemos apuntado, que inclusive pueden generar responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios electorales que intervinieron en dichos actos.

[...]

Para muestra de que la incertidumbre subsiste y que por tanto es determinante, aun con el recuento parcial de votos, no podemos desvanecer las diferencias aritméticas en casi todas las casillas, como se apunta a continuación:

[...]

[Foja 1577]:

Por otra parte las circunstancias de incertidumbre se agravan, debido a que hubo múltiples cambios de funcionarios de casilla, independientemente de los que hemos apuntado en lo que hubo casos en que no se encontraban dentro de su sección electoral, la sustitución indebida fue generalizada como a continuación se consigna:

[Foja 3308]:

SUP-JRC-317/2016

Bajo estas condiciones en 3287 casillas instaladas hubo sustituciones o más funcionarios de casilla, se revela una de las causas de las múltiples inconsistencias que se traducen en la falta de certeza, en el poco cuidado que el órgano electoral puso en las actividades torales del proceso electoral, y desde luego que la incertidumbre reflejada en la diferencia de votos entre los recibidos y los que presuntamente se extrajeron de la urna, incide también los múltiples paquetes electorales que se recibieron fuera del plazo y que además de que se debería anular la casilla, pone en evidencia la falta de certeza en el resultado de la votación, sobre todo al no saber a ciencia cierta cuántas boletas se imprimieron, quien las trajo, como las custodiaron.

Los paquetes que se entregaron fuera del plazo llegaron a la cantidad de 2285 y son los siguientes:

[...]

Como se adelantó, en concepto esta Sala Superior no asiste la razón a los enjuiciantes cuando aducen que el Tribunal Electoral responsable abordó incorrectamente los conceptos de agravio y, por tanto, no hizo el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que estaba a su alcance para resolver la controversia.

Para arribar a esa conclusión se tiene en consideración que, a partir de los argumentos expuestos por los enjuiciantes en su escrito de demanda de juicio de inconformidad local, los cuales han sido transcritos en su parte esencial, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua consideró que la controversia que se le planteaba radicaba en dilucidar si era procedente declarar la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Chihuahua, por acreditarse las causales específicas de nulidad

relacionadas con lo previsto en el artículo 383, párrafo 1, incisos b) [*La entrega, sin causa justificada, de paquetes electorales a las Asambleas, fuera de los plazos señalados por la norma*], e) [*La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley*]; f) [*Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que benefició a uno de los candidatos, siendo determinante para el resultado de la votación*] y, m) [*Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma*].

Por otra parte, relacionado con la causal genérica de nulidad de elección, consideró que los enjuiciantes argumentaron que “el Consejo trasgredió los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, pues fue omiso en: **1)** Acordar el número de boletas a imprimir; **2)** Aprobar el plan de impresión, distribución y resguardo; **3)** Supervisar la impresión de las boletas, su traslado y resguardo y, **4)** Hacer constar la formal recepción del número de boletas electorales por cada presidente de casilla, omitiendo el número exacto y preciso de folios.”

Ahora bien, conforme al método y esquema que planteó el Tribunal local para el análisis y resolución de la controversia planteada, para proceder al estudio de las causales específicas de nulidad de la elección, relacionada con las aludidas causales

SUP-JRC-317/2016

de nulidad de votación recibida por la mesa directiva de casilla, ese órgano jurisdiccional advirtió que los enjuiciantes impugnaron:

- La votación recibida en dos mil doscientas ochenta y cinco (2285) mesas directivas de casilla invocando la causal prevista en el artículo 383, párrafo 1, inciso b), de la *Ley*, al considerar que la entrega del paquete electoral a las *Asambleas* se realizó fuera de los plazos de ley, sin que mediara causa justificada.
- La votación recibida en tres mil doscientas ochenta y nueve (3289) casillas, por la causal prevista en el artículo 383, párrafo 1, inciso e), de la *Ley*, al sustentar que la votación de la casilla fue recibida por personas diversas a las facultadas por la norma.
- La votación que fue recibida en dos mil trescientas dieciocho (2318) mesas directivas de casilla aduciendo la configuración de la causal prevista en el artículo 383, párrafo 1, inciso f), de la *Ley*, al considerar que existió error y dolo en la computación de los votos, el cual benefició a uno de los candidatos.

Precisado lo anterior, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua procedió al análisis de las causales específicas de votación recibida en mesa directiva de casilla.

Conforme a lo expuesto, a juicio de esta Sala Superior el análisis de los hechos o situaciones que adujeron los enjuiciantes como circunstancias que, en su concepto, generaban la nulidad de la elección de Gobernador en el Estado de Chihuahua fueron analizados por el Tribunal Estatal Electoral de esa entidad federativa, conforme al sistema de nulidades electorales que ha sido enunciado, en términos del cual las aducidas causales específicas de votación recibida por la mesa directiva de casilla podrían ser la base para la actualización de una causal de nulidad de elección, siempre y cuando se cumpla lo previsto en el artículo 384, párrafo 1, inciso a), es decir que *“se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas electorales del... Estado”* y por otra parte si del análisis de los argumentos de los enjuiciantes y de elementos de prueba allegados al proceso por las partes o a requerimiento del órgano jurisdiccional, era posible que se actualizara la causal genérica de nulidad de elección de Gobernador.

En este orden de ideas no asiste la razón a los enjuiciantes cuando aducen que, indebidamente, la autoridad responsable realizó un estudio de causales de nulidad de la votación recibida en la mesa directiva de casilla, cuando se hicieron valer violaciones graves y generalizadas que ponen en riesgo el resultado de la votación.

ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PAQUETES ELECTORALES

SUP-JRC-317/2016

En primer lugar, analizó lo relativo a la causal de nulidad de votación consistente en *Entregar a las Asambleas Municipales, sin causa justificada, el paquete electoral que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos de ley*, para lo cual, precisó el *Marco normativo de la entrega del paquete electoral a las Asambleas*, además de lo cual enunció los *Elementos mínimos para el estudio de la causal*, entre los cuales consideró:

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión de los Actores es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: **a)** listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el veintisiete de mayo -comúnmente llamadas encarte-; **b)** actas de la jornada electoral; **c)** *Constancias de clausura*; **d)** actas circunstanciadas de recepción de paquetes electorales por las *Asambleas* o centros de acopios correspondientes; **e)** *Recibos* o centros de acopios correspondientes; **f)** hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis; **g)** acuerdos de las *Asambleas* respectivas en relación a la mecánica para el auxilio en la recolección de los paquetes electorales; y **h)** documento que señala el tipo de casilla y su localidad.

Al respecto también precisó que para estar en aptitud de estudiar la aludida causal de nulidad, resultaba indispensable que en la demanda, los actores precisen los requisitos mínimos consistentes en:

1. Identificar la casilla impugnada, esto es, si se encuentra dentro de la cabecera municipal, fuera de la misma o si es rural;

2. Precisar de forma individual la fecha y hora que se clausuró la casilla y remitió el paquete, y
3. Mencionar la fecha y hora que fue entregado el paquete electoral a las *Asambleas*.

En este orden de ideas, el Tribunal local responsable consideró que de esa forma estaría en posibilidad de tener los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, si se actualiza la causa de nulidad invocada. Asimismo, argumentó que los enjuiciantes debieron señalar el tipo de casilla respecto de la cual, desde su perspectiva, se entregó el correspondiente paquete electoral fuera de los plazos, además de identificar la fecha y hora de clausura de cada una de las casillas.

También consideró el Tribunal responsable que los impugnantes tienen el deber de exponer las razones específicas y concretas, individualizando e identificando la casilla y precisando las circunstancias de tiempo con relación a los hechos que controvierten, dado que son considerados como elementos (lugar y tiempo) necesarios para acreditar el hecho o la causal invocada, lo cual, expuso el órgano jurisdiccional local, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, identificada con la clave 7/2000, cuyo rubro es: *ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA* (Legislación del Estado de Sonora y similares).

SUP-JRC-317/2016

Hecha la anotación precedente, el órgano jurisdiccional electoral responsable procedió al análisis y resolución de los argumentos formulados por los enjuiciantes en esa instancia, relacionados con dos mil doscientos ochenta y cinco (2,285) paquetes electorales, que en concepto de los demandantes fueron entregados fuera del plazo establecido por la ley, sin causa justificada.

Al hacer el análisis de los tres elementos para que se actualice la causal de nulidad de votación recibida en mesa directiva de casilla, el correspondiente a “*entregar el paquete electoral fuera del plazo establecido en la ley*”, el Tribunal local consideró que, si bien los actores argumentaban en su concepto de agravio que los paquetes electorales de las aludidas casillas se entregaron en forma extemporánea, **“son omisos en aportar medio de prueba alguno para acreditar su dicho, pues únicamente se limitan a señalar en forma genérica que los paquetes electorales se entregaron en forma extemporánea, sin especificar circunstancias de tiempo, modo o lugar”**.

Con relación a las circunstancias que en particular tuvo en consideración, el Tribunal local responsable argumenta que, **“atendiendo al principio de la prueba que refiere que lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra, no resulta lógico tener por cierto que en todas y cada una de las casillas impugnadas por esta causal la clausura haya ocurrido a las diecinueve horas con treinta minutos”**.

También tuvo en consideración que los enjuiciantes basaron su impugnación en los resultados preliminares publicados por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en su sitio oficial en internet, con relación a lo cual consideró que **“no resulta jurídicamente viable concluir que a partir de los datos señalados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se pueda obtener la hora de entrega del paquete por parte de los presidentes de mesa directiva de casilla”** a las Asambleas Municipales del Instituto Electoral local y que con ello se actualice la causa de nulidad de la votación recibida ante determinada mesa directiva de casilla.

No obstante, **“pese a lo genérico”** de los conceptos de agravio, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en su apreciación, **“con el fin de garantizar que el ejercicio democrático realizado el cinco de junio del presente año se llevó a cabo conforme a los principios rectores”** en materia electoral, procedió al **“estudio supletorio de la causal de nulidad”**.

En este orden de ideas, a partir de los elementos en los autos del juicio local de inconformidad, el Tribunal Electoral de la mencionada entidad federativa llevó a cabo su análisis en diversos rubros como se expone a continuación.

1.- Paquetes electorales entregados en tiempo

En el apartado tres punto uno punto uno punto cinco (3.1.1.5) de la sentencia controvertida en el juicio al rubro identificado, el Tribunal local consideró que respecto de los paquetes electorales correspondientes a mil trescientas sesenta

SUP-JRC-317/2016

y cinco (1365) casillas, que ahí se precisan, se corroboró la entrega en tiempo, por lo que no se actualizó la causa de nulidad de votación materia de análisis.

2.- Paquetes electorales entregados en centros de acopio

En cuanto al apartado tres punto uno punto uno punto seis (3.1.1.6) de la sentencia en el juicio local de inconformidad, diez (10) de los paquetes fueron remitidos en menos de doce horas a los centros de acopio previamente establecidos en el acuerdo identificado con la clave INE/CG1012/2015 emitido, en ejercicio de la facultad de atracción, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emitieron los Lineamientos para el establecimiento y operación de mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales a término de la jornada electoral, para los procedimientos electorales locales 2015-2016.

3.- Paquetes electorales que exceden del plazo de doce horas pero no muestran alteraciones.

Ahora bien, con relación a los paquetes electorales correspondientes a cuarenta y cinco (45) casillas que se precisan en el apartado tres punto uno punto uno punto siete (3.1.1.7) del acto impugnado, si bien se advierte que entre la hora de clausura y la de entrega transcurrieron más de doce horas, los paquetes no presentan alteración alguna, por lo que se consideró que no se actualizaba la causal de nulidad de votación recibida ante mesa directiva de casilla.

4.- Paquetes electorales sin cálculo de tiempo transcurrido, sin alteraciones

Por otra parte, con relación a los paquetes electorales correspondientes a la votación recibida en ochocientos veintisiete (827) casillas que se precisan en el apartado tres punto uno punto uno punto ocho (3.1.1.8) de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, impugnada en el juicio al rubro identificado, si bien determinó que con la documentación en los autos del juicio “*es imposible para esta autoridad calcular los tiempos de traslado del paquete electoral de la casilla a la Asamblea correspondiente...*”, no existen alteraciones en los paquetes, por lo que determinó que no se acreditaba la causal de nulidad de votación en estudio.

5.- Supuestos específicos

Con relación a los paquetes electorales correspondientes a cinco mesas directivas de casilla, que se precisan en el apartado tres punto uno punto uno punto nueve (3.1.1.9) de la sentencia impugnada, si bien se constata que se encuentran los datos relativos a la fecha y hora de clausura de la casilla, así como de la entrega del paquete a las Asambleas Municipales, sin embargo no es posible determinar el tiempo que transcurre entre un momento y otro.

Al respecto, al considerar que se advierten errores de asentamiento en el llenado de la hora en la *Constancia de clausura* y/o en el *Recibo*, dato cuya autoría corresponde a quienes actuaron como funcionarios de casilla toda vez que no sería materialmente posible que primero se entregara el

SUP-JRC-317/2016

paquete y posteriormente se clausurara la casilla, se advirtió que existe un error de asentamiento en el llenado de las actas.

En este contexto, el Tribunal local consideró que aun cuando existía ese error humano, al no tener los paquetes electorales muestras de alteración, no se acredita el elemento de afectación a la integridad y certeza del paquete, ni mucho menos el carácter determinante para decretar la nulidad de la votación recibida en esas mesas directivas de casilla.

6.- Paquetes con muestras de alteración

Ahora bien, por lo que corresponde a los paquetes electorales de las treinta y cuatro (34) mesas directivas de casilla que se precisan en el apartado tres punto uno punto uno punto diez (3.1.1.10) del acto impugnado, el órgano jurisdiccional electoral local advirtió que mostraban muestras de alteración, consideró que *“no existen elementos que permitan a este Tribunal tener por ciertos los señalamientos por parte del recurrente en cuanto a estas casillas, pues además los Actores no presentan prueba alguna que genere indicio sobre la determinancia ante la falta de certeza de los resultados obtenidos, pues como ya se ha señalado, no basta con que un paquete sea presentado fuera de los plazos, sino que además deberá de acreditarse que el principio de certeza se haya visto violentado”*.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el Tribunal Electoral local responsable consideró que al no existir elementos suficientes que acrediten plenamente que los paquetes electorales correspondientes a las mesas directivas de casilla

que fueron objeto de análisis y resolución se entregaron fuera del plazo de ley, que tal extemporaneidad haya ocurrido sin causa justificada y que los paquetes hayan sido alterados de modo tal que se haya visto afectado el principio de certeza, consideró infundado el concepto de agravio que hicieron valer los entonces demandantes.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior advierte que, en lo particular los enjuiciantes argumentan ante esta instancia federal lo siguiente:

El Tribunal Electoral responsable no realizó una valoración integral del encarte, constancias de clausura y actas de recepción, por lo que llegó a la conclusión absurda y arbitraria de que sólo con la entrega de los paquetes electorales con posterioridad a las doce horas de la clausura de las casillas se había incumplido la norma, aun y cuando el artículo 174 de la Ley Electoral local prevé cuatro plazos de entrega de los mismos.

Señalan que de conformidad con el artículo 11 del código municipal existen 67 municipios que coinciden con las ciudades o zonas urbanas que constituyen su cabecera, donde se ubican las Asambleas Municipales.

En las ciudades de Chihuahua y Juárez, el mayor plazo para atravesar la ciudad es de dos horas, aunado a que las casillas por lo regular siempre se ubican en el mismo lugar y su clasificación como rurales o urbanas es de todos conocidos

SUP-JRC-317/2016

Consideran que del análisis del encarte se puede concluir cuales son los paquetes electorales que debieron ser entregados de manera inmediata, además de que fueron entregado por personas distintas a los presidentes de la mesa directivas de casilla, por lo que resulta indebido que el Tribunal Electoral local, haya considerado todas como urbanas.

Los argumentos antes mencionados se consideran **inoperantes**, dado que son genéricos, vagos e imprecisos, porque los impugnantes tienen la carga de especificar e identificar las casillas cuyos paquetes electorales, en su concepto, debieron ser entregados de inmediato por su ubicación en las cabeceras municipales respectivas, pues de lo contrario sería pretender que esta Sala Superior lleve a cabo, de oficio, una investigación o pesquisa respecto del tema en cuestión, teniendo que analizar esa situación con relación a cada una de las casillas instaladas, aún y cuando es a los propios enjuiciantes, a los que corresponde la carga de proporcionar elementos idóneos, adecuados y suficientes que permitan a este Tribunal Electoral, determinar si les asiste o no la razón.

Llevar a cabo de oficio la aludida investigación o pesquisa, resultaría contrario a Derecho, dado que este órgano colegiado, en principio, únicamente tiene competencia para resolver impugnaciones, relativas a conflictos de intereses en materia electoral, calificados por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, a partir del ejercicio del

derecho de acción de un sujeto de Derecho legitimado para ello; sin que tenga facultad constitucional o legalmente prevista.

En este sentido, esta Sala Superior considera que la autoridad jurisdiccional no está compelida a indagar en todas las casillas instaladas, su ubicación tanto en el encarte así como las constancias referentes a la clausura de casilla y la recepción del paquete electoral por las Asambleas Municipales, por el contrario, como en todo sistema de justicia, la parte actora debe exponer los hechos y conceptos de agravio respecto de su inconformidad, es decir, debió identificar o individualizar las casillas instaladas en las cabeceras municipales que, en su concepto, debieron ser entregadas de inmediato, para que este órgano jurisdiccional especializado estuviera en posibilidad de ponderar tal irregularidad para, en su caso, atendiendo a las reglas de la lógica y sana crítica, determinar lo que en Derecho correspondiera, situación que en la especie no ocurrió.

Por ello, ante lo genérico de los conceptos de agravio es que resultan **inoperantes**.

Por otra parte, también es **inoperante** el argumento relativo a que la autoridad responsable no se percató que la mayor parte de las casillas son urbanas y, por tanto, los paquetes electorales, de manera generalizada, tardaron mucho en su entrega, al ser argumentos genéricos e imprecisos, toda vez que los actores sólo se limitaron a señalar que la autoridad responsable no se percató de tal circunstancia, teniendo los

SUP-JRC-317/2016

enjuiciantes la carga de especificaron en qué casillas se presentaron tales circunstancias con relación al tiempo de entrega, tomando como base el análisis efectuado por el Tribunal Electoral local.

Por otra parte, el partido político y la coalición ahora enjuiciantes aducen lo siguiente:

- La autoridad responsable analizó la irregularidad invocada como una causal de nulidad de la votación recibida en la mesa directiva de casilla, no obstante que el artículo 174, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, exige que el presidente de la mesa directiva de casilla entregue el paquete electoral, sin perjuicio de que alguien lo acompañe, porque no existe disposición alguna que lo releve de ese deber.

- El deber de entregar los paquetes electorales a las asambleas municipales corresponde a los presidentes de las mesas directivas de casilla, quienes no pueden ser sustituidos, por lo cual, la entrega de los aludidos paquetes por personas distintas al presidente de la mesa directiva debe de considerarse como una inconsistencia grave.

- La entrega por persona diversa al Presidente de la mesa directiva de casilla, es una irregularidad y por tanto, una causal de nulidad de votación.

- Aún en el supuesto de que la entrega por persona distinta al presidente de la mesa directiva de casilla fuera válida,

tendría que existir documentación que acredite la entrega del paquete electoral por parte del presidente, a la persona que efectúe la entrega del paquete.

A juicio de esta Sala Superior, esos argumentos resultan **inoperantes**, toda vez que son cuestiones novedosas que los ahora enjuiciantes no hicieron valer ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en el medio de impugnación cuya sentencia es controvertida en el juicio de revisión constitucional electoral al rubro indicado, por lo cual el órgano jurisdiccional electoral responsable no tuvo la oportunidad de conocerlo y hacer pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, también resultan **inoperantes** los conceptos de agravio que aducen el partido político y la coalición ahora demandantes, los que hacen consistir en:

- La sentencia controvertida vulnera los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Tribunal Electoral responsable abordó incorrectamente los conceptos de agravio y, por tanto, fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance para resolver la controversia.

- Existieron múltiples irregularidades antes, durante y después de la jornada electoral, incluyendo la entrega extemporánea de los paquetes electorales, lo que se traduce en

SUP-JRC-317/2016

la vulneración al principio de certeza, máxime si se adminicula con otras irregularidades generalizadas y sistemáticas.

- El tribunal responsable no debió acotar su estudio a la nulidad de votación recibida en mesa directiva de casilla, pues la nulidad de la elección se puede decretar por irregularidades determinantes que se actualicen en el 20% (veinte por ciento) o más de las casillas instaladas para la elección de que se trate, por lo que no hizo un estudio respecto de las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas que ocurrieron.

- Respecto de las casillas en comunidades urbanas la tardanza en el envío de los mencionados paquetes a los centros de acopio, fue de manera generalizada, tomando en cuenta que las casillas siempre se ubican en el mismo lugar.

- Argumentan que la autoridad responsable determinó indebidamente que la entrega extemporánea de los paquetes electorales solo se puede estudiar si el paquete muestra alteraciones y existe una determinancia por error aritmético.

En concepto de este órgano colegiado, la inoperancia deriva de la circunstancia de que constituyen manifestaciones genéricas e imprecisas, que no controvierten frontalmente las consideraciones que sustentan la determinación del Tribunal Estatal Electoral responsable, lo anterior, toda vez que los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tuvo en cuenta al emitir su sentencia.

En este orden de ideas, al expresar cada concepto de agravio, los demandantes en el juicio de revisión constitucional electoral deben exponer los argumentos que consideren pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto controvertido, de modo que los conceptos de agravio que no cumplen esos requisitos deben ser declarados inoperantes como acontece en el particular.

RECEPCIÓN DE VOTACIÓN POR PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS

Ahora bien, con relación a la votación recibida en tres mil doscientas ochenta y nueve casillas (3,289), respecto de lo cual el partido político y la coalición enjuiciantes argumentaron que como funcionarios de mesas directivas de casilla actuaron personas que no se encontraban en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, por lo que se trasgredió lo dispuesto en el artículo 85, párrafo 1, inciso e) de la Ley Electoral local, al no existir certeza de que su actuación se haya apegado a los principios rectores del procedimiento electoral.

Para el análisis y resolución de los correspondientes conceptos de agravio, el Tribunal Estatal Electoral responsable consideró, al analizar el régimen normativo atinente, que con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los integrantes de las mesas directivas de casilla, en la ley se establecen dos procedimientos para la designación de sus integrantes, el primero, que se realiza durante la etapa de preparación de la elección y, el segundo, que se implementa el

SUP-JRC-317/2016

día de la jornada electoral y tiene como propósito suplir las ausencias de los ciudadanos designados.

En este orden de ideas, tuvo en consideración que ante la posibilidad de que los ciudadanos originalmente designados incumplan su deber de acudir y desempeñar la función electoral como integrante de una mesa directiva de casilla, el día de la jornada electoral, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador estableció el procedimiento a seguir para sustituir a esos funcionarios, en cuyo caso, toda sustitución debe recaer en electores que estén presentes en la casilla para emitir su voto e inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a esa sección electoral.

Ahora bien, para proceder al análisis de los argumentos que hacen valer los entonces demandantes con relación a la causal de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza, el Tribunal responsable consideró que era indispensable que en la demanda se precisaran los requisitos mínimos consistentes en: **a)** Identificar la casilla impugnada; **b)** Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y **c)** Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación, a partir de lo cual, estaría en posibilidad de contar con los elementos mínimos necesarios para verificar en las actas, encarte y lista nominal, si se actualizaba la causa de nulidad invocada y así, poder estar en condiciones de dictar la sentencia correspondiente, lo que es congruente con la tesis de jurisprudencia 26/2016, con el rubro: NULIDAD DE VOTACION

RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MINIMOS PARA SU ESTUDIO, aprobada por esta Sala Superior, en sesión de seis de julio de dos mil dieciséis.

1.- Casillas impugnadas con omisiones

En cuanto a las mesas directivas de casillas identificadas en el apartado tres punto uno punto dos punto cuatro (3.1.2.4) de la sentencia controvertida, el Tribunal Electoral responsable consideró que los enjuiciantes no hacen mención de los nombres de los ciudadanos que supuestamente fungieron, de manera indebida, como funcionarios de mesa directiva de casilla, lo que resulta indispensable para llevar a cabo el análisis correspondiente, por lo que en la demanda además de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, se debe precisar el nombre completo de la persona que indebidamente integró la casilla, o bien, algún elemento que permita su identificación, porque sólo de esa forma, consideró el órgano jurisdiccional electoral local, estaría en aptitud de tener los elementos mínimos necesarios para contrastarlos con los datos de las actas y listado nominal correspondiente, y en consecuencia, poderse pronunciar respecto a la actualización de la causal de nulidad invocada.

2.- Casillas impugnadas en las que se constató que los funcionarios señalados por los actores no participaron

SUP-JRC-317/2016

En cuanto a las mesas directivas de casilla que se precisan en el apartado tres punto uno punto dos punto cinco (3.1.2.5) de la sentencia impugnada, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua tuvo en consideración que, contrario a lo argumentado por los enjuiciantes en esa instancia, de las personas que aducen que integraron indebidamente las mesas directivas de casilla correspondientes, cuatrocientas doce no formaron parte de esos órganos ciudadanos de autoridad electoral, por lo que no se acreditó la irregularidad que era materia de análisis y resolución.

3.- Casillas impugnadas en las que se constató que las personas señaladas por los actores integraron la mesa directiva de casilla y se encuentran en el listado nominal de electores

Ahora bien, por lo que se refiere a las mesas directivas de casilla que se precisan en el apartado tres punto uno punto dos punto seis (3.1.2.6) de la sentencia controvertida en el juicio de revisión constitucional electoral al rubro identificado, el órgano jurisdiccional electoral local responsable consideró que, en términos generales, el nombre de los ciudadanos que actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, *“coinciden plenamente con los que aparecen en el listado nominal de la sección correspondiente”*.

4.- Mesas directivas de casilla integradas por ciudadanos que no se encontraron en la lista nominal de electores

Ahora bien, por lo que se refiere a las mesas directivas de casilla que se precisan en el apartado tres punto uno punto dos punto siete (3.1.2.7) de la sentencia controvertida, el Tribunal Electoral local responsable determinó que los ciudadanos que se precisan, actuaron como funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla correspondiente, conforme a los datos arrojados de las actas finales y de las actas de jornada electoral y no coinciden con los que aparecen en el listado nominal de electores de la sección correspondiente, por tanto consideró que las sustituciones de funcionarios no se llevaron a cabo conforme al procedimiento previsto en la Ley, afectando el principio de certeza en la recepción de la votación, por lo que lo procedente era declarar la nulidad de la votación recibida por esas mesas directivas de casilla.

Ahora bien, de la revisión del escrito de demanda del juicio de revisión constitucional electoral al rubro identificado, esta Sala Superior advierte que, en lo particular, respecto de la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua con relación a la causal de nulidad de votación es estudio, los ahora enjuiciantes aducen lo siguiente:

- La sentencia controvertida vulnera los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Tribunal Electoral responsable analizó incorrectamente los conceptos de agravio y, por tanto, fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance para

SUP-JRC-317/2016

resolver la controversia, además de aplicar incorrectamente los artículos 150 al 174 de la Ley Electoral del Estado.

- La autoridad responsable reconoció que hubo múltiples sustituciones, no obstante, únicamente decretó la nulidad de la votación recibida en cuarenta y cinco (45) casillas, por haberse integrado con personas no inscritas en la sección correspondiente.

- De este modo, señalan que el estudio de la causal por parte de la autoridad responsable no fue exhaustivo, porque de los recibos de paquete electoral se advierte la intervención de persona ajena a los integrantes de la mesa directiva de casilla al momento de la entrega, por lo que la casilla se debe anular por haber participado en la recepción de la votación persona distinta a los facultados por la ley.

A juicio de esta Sala Superior, los precitados argumentos son **inoperantes** por constituir manifestaciones genéricas e imprecisas que no controvierten frontalmente las consideraciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua al emitir la resolución controvertida, por lo que deben seguir rigiendo el sentido del acto impugnado ante la ineficacia de los conceptos de agravio.

Asimismo, constituyen conceptos de agravio **inoperantes** los argumentos que formulan los enjuiciantes en los términos siguientes:

- Los actores aducen que la sola intervención por persona distinta a los facultados por la ley, sin importar los resultados de la votación, implica la nulidad de la votación de la casilla.

- Con relación a lo anterior, argumentan que la sustitución de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, aun tratándose de personas cuyo domicilio coincide con la sección de la casilla, constituye una irregularidad porque no fueron debidamente capacitados.

- Asimismo, manifiestan que la responsable no valoró que el número de sustituciones de funcionarios que no se encontraron en el encarte fue elevado, lo cual provoca otro indicio de la falta de certeza en la función electoral, aunque no ocasione la nulidad de casilla.

La determinación de este órgano jurisdiccional especializado sobre lo inoperante de los conceptos de agravio se sustenta en que se trata de argumentos novedosos no planteados ante el Tribunal Estatal Electoral responsable y por tanto al no formar parte de la *Litis* planteada ante ese órgano jurisdiccional, por esa circunstancia no estuvo en posibilidad de emitir pronunciamiento al respecto.

DOLO O ERROR EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Con relación al análisis de esta causal de nulidad de votación recibida por una mesa directiva de casilla, el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua procedió a analizar “*si acorde a lo que afirman los Actores, se actualizó que en el cómputo de los votos de las dos mil trescientas dieciocho casillas impugnadas haya mediado dolo o error en el cómputo, es decir, si en la computación de las actas finales, o en su caso*”

SUP-JRC-317/2016

actas individuales, benefició a uno de los candidatos, siendo determinante para el resultado de la votación”.

En este orden de ideas, el órgano jurisdiccional electoral local destacó que los enjuiciantes ante esa instancia, **“son omisos en aportar medio de prueba alguno para acreditar su dicho, pues únicamente se limitan a basar sus agravios en los resultados preliminares publicados por el IEE en su sitio de internet oficial... así como en resultados arrojados de un archivo electrónico que, según mencionan, fue el único medio al cual tuvieron acceso después de la sesión de cómputo”.**

También precisó el Tribunal responsable que los enjuiciantes **“únicamente describen un supuesto escrutinio de los votos computados de las casillas impugnadas, sin especificar la presunta irregularidad entre los rubros fundamentales,** mismos que son necesarios para actualizar la causal en estudio”.

Asimismo que *“atendiendo al principio de la prueba en el cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra, no resulta lógico tener por cierto que en las casillas impugnadas por esta causal exista una irregularidad evidente por el hecho de que no coincidan los rubros auxiliares obtenidos de documentales que no cuentan con valor probatorio pleno, por ser meramente informativas e indiciarias”.*

No obstante lo anterior, el Tribunal Electoral local responsable determinó analizar la causal de nulidad de votación recibida por mesa directiva de casilla, **“pese a lo genérico”** del concepto de agravio, en su consideración, *“con el fin de garantizar que el ejercicio democrático realizado el cinco de junio pasado se llevó a cabo conforme a los principios rectores que regulan la materia”*.

1.- Casillas cuya votación fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa

Con relación a la votación recibida por las doscientas cincuenta y dos (252) mesas directivas de casilla que se identifican en el apartado tres punto uno punto tres punto tres (3.1.3.3) de la sentencia controvertida, el Tribunal Electoral local consideró que toda vez que fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo por parte de las Asambleas Municipales, resultaba inoperante el concepto de agravio, toda vez que los enjuiciantes impugnaron *“errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en mesas directivas de casilla, los cuales fueron corregidos con motivo del recuento realizado por parte de las Asambleas”*.

2.- Casillas respecto de cuyas actas no se advierte error en el cómputo de votos

Ahora bien, por lo que se refiere a la votación recibida en ochocientas treinta y siete casillas (837) que se precisan en el

SUP-JRC-317/2016

apartado identificado también como “tres punto uno punto tres punto tres” (“3.1.3.3”) de la sentencia controvertida, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua advirtió que respecto de los rubros fundamentales (ciudadanos que votaron, boletas extraídas y resultado de la votación) no existe discrepancia alguna, por lo cual no se actualiza la nulidad de votación recibida por la mesa directiva de casilla, como lo adujeron los enjuiciantes.

3.- Análisis de casillas en las que se detectó error que pudo ser subsanado

En este particular, por lo que se refiere a la votación recibida por las trescientas veinticuatro (324) mesas directivas de casilla que se identifican en la primera tabla que se inserta en el apartado tres punto uno punto tres punto cuatro (3.1.3.4) de la resolución controvertida ante esta instancia federal, el órgano jurisdiccional responsable tuvo en consideración que *“del análisis de las actas finales, es posible desprender que los rubros concurrentes coinciden con la diferencia entre boletas recibidas y boletas sobrantes, de manera que no es posible declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla, por advertir únicamente un error al asentar u omitir el llenado de un dato en el acta respectiva, mismo que fue sustituido por un rubro auxiliar”*.

Ahora bien por lo que se refiere a las votación recibida por la correspondiente mesa directiva en las casillas correspondientes, identificadas como “135 B, 167 C1, 278 C1,

363 B, 440 B, 540 B, 571 B, 611 E1C1, 628 B, 654 B, 686 B, 779 B, 805 C8, 895 E2C6, 927 B, 946 B, 1104 C1, 1542 C1, 1795 B, 1824 B, 1858 C1, 1929 C1 y 2093 B”, en el rubro de *ciudadanos que votaron* no se asentó dato alguno o resulta distinto del correspondiente a las *boletas extraídas de la urna* y el *resultado de la votación*, siendo estos últimos idénticos. Al respecto consideró que “*de las personas que votaron conforme al listado nominal que obra en el expediente, y al coincidir con los otros rubros, no se actualiza la causal de nulidad de las casillas en estudio, por haberse subsanado el error*”.

Por otra parte, en cuanto a la votación recibida por la mesa directiva en las casillas identificadas como “202 C1, 220 B, 275 C1, 343 B, 462 B, 492 C1, 496 B, 508 E2, 649 C1, 880 C2, 1347 B, 1353 E1, 1510 C3, 1523 B, 1649 B, 1727 B, 1936 C2 y 2109 B”, existe una inconsistencia en el *resultado de la votación* en relación con los rubro de *ciudadanos que votaron* y *boletas extraídas de la urna*, los cuales coinciden.

Al respecto, el Tribunal Electoral responsable determinó que no se actualizaba la irregularidad invocada por los demandantes “*en virtud de que se omitió asentar la cantidad de la votación o se llevó a cabo de manera errónea la suma de la cantidad de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes*”, en este orden de ideas, consideró que “*al realizar correctamente la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla, se desprende que coincide con los*

SUP-JRC-317/2016

rubros ciudadanos que votaron y boletas extraídas de la urna, mismos que en un principio concuerdan, por lo que no pone en duda el principio de certeza de los resultados citados”.

4.- Casillas con errores no determinantes

Del análisis relativo a la situación de la votación recibida por la correspondiente mesa directiva de casilla en las cuatrocientas noventa y tres (493) casillas que se precisan en el apartado tres punto uno punto tres punto cinco (3.1.3.5) del acto controvertido, si bien el Tribunal tuvo en cuenta que no se pudo subsanar el error con algún rubro auxiliar, no obstante ello no se actualizaba el supuesto de determinancia, para emitir la declaración de nulidad de la votación recibida por la mesa directiva de casilla.

Por otra parte en cuanto a la votación recibida por las cuarenta y cinco casillas (45) que se precisan a foja trescientas cincuenta y cuatro (354) de la resolución controvertida, en las que se advirtió una omisión en alguno de los rubros fundamentales, consideró el Tribunal local que la diferencia de los datos asentados es menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, por lo que no se actualizaba la determinancia cuantitativa.

Ahora bien, en cuanto a la votación recibida en las casillas identificadas como “22 C1, 161 C1, 322 B, 353 B, 428 B, 541 E1C2, 610 C2, 661 C3, 669 C1, 754 C1, 782 B, 854 B, 862 B,

894 C1, 1090 B, 1339 B, 1511 B, 1556 C1, 1576 B, 1934 C1, 2010 C1 y 2061 B”, en las cuales se observa que existe un error en los *ciudadanos que votaron*, de manera que, al comparar con el listado nominal, se obtiene el número de personas que emitieron el sufragio en la casilla”, por lo que al comparar el rubro subsanado con las boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación, arrojan una diferencia menor a la del primer y segundo lugar, por lo que no se actualiza la causal de nulidad que invocaron los enjuiciantes.

Por otra parte respecto de las cuarenta y tres (43) casillas que se precisan a foja trescientas cincuenta y seis (356) de la sentencia impugnada, en las que existe un error u omisión en el *resultado de la votación*, por lo que al realizar de manera correcta la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, y compararlo con los *ciudadanos que votaron* y las *boletas extraídas de la urna*, arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar. “*De ahí que no se pone en duda el principio de certeza de los resultados citados*”, por lo que el tribunal responsable, consideró que “en lo relativo al espacio en blanco, este *Tribunal* estima que si bien existe la omisión de haberse asentado el rubro de *resultado de la votación* en el *acta final*, únicamente acredita el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación”.

Por cuanto corresponde a la votación recibida en noventa y dos mesas directivas de casilla que se precisan en el apartado que se analiza, a fojas trescientas cincuenta y siete

SUP-JRC-317/2016

(357) a trescientas cincuenta y ocho (358) de la sentencia controvertida en las que “puede advertirse que existe un error al no asentar el total de *ciudadanos que votaron y las boletas extraídas de la urna*. Sin embargo, para subsanar a los ciudadanos que votaron se utilizó el listado nominal, mismo que al confrontar con el *resultado de la votación* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar, por lo que no se acredita la determinancia en la causal de nulidad; de manera tal que no existe duda y por tanto, no vulnera el principio de certeza de la votación”.

Ahora bien, por lo que se refiere a la votación recibida por las mesas directivas correspondiente a las casillas “59 E1C3, 532 C1, 875 B, 1097 B, 1358 C1, 1485 B, 1732 C2, 1772 C7, 1832 C1 y 1902 B, no se asentó en las actas de escrutinio y cómputo los totales de las *boletas extraídas de la urna*, así como el *resultado de la votación*”. No obstante esa situación, a fin subsanar al *resultado de la votación* el Tribunal local responsable realizó de la suma de los votos, mismo que al confrontarla con los *ciudadanos que votaron* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar, por lo que tales discrepancias no trascienden por no ser determinantes y no pueden ser motivo para declarar la nulidad de la votación recibida.

Asimismo, en “las casillas 408 B y 1769 C1, se omitió señalar los *ciudadanos que votaron* y el *resultado de la*

votación; por lo que se procedió a su subsanar al *resultado de la votación* realizando la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo, mismo que al confrontarla con los *ciudadanos que votaron* arroja una diferencia menor a la del primer y segundo lugar. De ahí que no se pone en duda el principio de certeza de los resultados citados”.

Por otra parte, con relación a las casillas identificadas con las claves “553 C1, 554 C1, 740 C1, 863 B, 1021 C1, 1279 C2, 1367 B, 1379 C1, 1461 B, 1754 C2, 1829 C1, 1886 C1 y 2034 B, en las que el actor alude la existencia de errores, se puede apreciar que en alguno de los rubros fundamentales cuenta con una inconsistencia significativa. No obstante, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en vez de asentar la cantidad correcta del rubro, se reflejó la de las boletas recibidas, por lo que no debe estimarse dicho dato que representa a otro rubro auxiliar”.

En este orden de ideas, al comparar los rubros fundamentales restantes el órgano jurisdiccional local responsable obtuvo una diferencia que es menor a la de los votos emitidos por los partidos políticos que ocupan el primer y segundo lugar de la votación en cada caso, de manera que el error no resulta determinante y, en consecuencia, consideró que no se actualizó el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio.

Ahora bien, en las casillas identificadas como 56 C1, 92 B, 297 B, 520 B, 563 E1, 849 E2C1, 932 B, 1457 B, 1508 C1,

SUP-JRC-317/2016

1549 C1, 1582 B, 1830 C1, 1862 B, 1904 B, 1916 C12, 1945 E1C2, 1978 B y 2138 B, la autoridad responsable identificó que no se asentó dato alguno o resultado distinto en los rubros de *“ciudadanos que votaron y resultado de la votación”*, sin embargo, para subsanar ambos datos utilizó, respectivamente, el listado nominal y la *“suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo”*.

En este caso, el Tribunal responsable, después de llevar a cabo un análisis comparativo entre los rubros subsanados, corroboró que la diferencia era *“menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar”*, de ahí que, también consideró que el error no resultaba determinante.

En otro sentido, con relación a las casillas 146 C1, 297 C4, 321 C1, 331 B, 348 B, 368 C2, 369 C2, 369 C3, 399 B, 586 C1, 882 E1C1, 884 C3, 895 E2C3, 944 C2, 1001 B, 1184 B, 1499 B, 1531 B, 1578 C3, 1653 B, 1700 C1, 1722 B, 1817 B, 1879 C2, 1916 C8, 1932 B y 1973 B, en las que no se asentó la cantidad correspondiente a *“los tres rubros fundamentales”*, el Tribunal responsable subsanó, por una parte, el resultado de la votación con *“la suma de los votos que fueron objeto de escrutinio y cómputo”* y, por otra parte, para corregir el número de ciudadanos que votaron, utilizó el listado nominal.

De esta forma, para el Tribunal local resultó evidente que, al comparar los rubros subsanados, la diferencia entre ellos era menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, por tanto,

la omisión sólo acreditó el error en el llenado de la documentación electoral, no así en el cómputo de la votación.

En otro orden de ideas, respecto de las casillas 13B, 25B, 59 E1, 59 E1C5, 91 B, 188 B, 324 B, 342 B, 368 B, 372 C2, 375 B, 500 B, 513 B, 514 B, 539 C3, 604 C1, 852 E1C5, 875 C1, 882 C1, 968 B, 1001 C3, 1020 B, 1532 B, 1534 B, 1560 C1, 1746 S1, 1826 C3, 1945 E1C3, 1948 B, 1986 B, 2082 C1, 2083 B y 2129 B, en las cuales la autoridad responsable advirtió algún error en los rubros de *“ciudadanos que votaron”*, de *“boletas extraídas de la urna”* o del *“resultado de la votación”*, entre otras cosas, debido a que en determinados casos la cifra resultaba significativamente distante con respecto a otros rubros o simplemente se omitió asentar una o más cantidades; y toda vez que en cada una de las citadas casillas se presentaron circunstancias particulares, el Tribunal local procedió a realizar un análisis pormenorizado a fin de subsanar tales inconsistencias.

En diversos casos particulares analizados por el Tribunal local, cuyo estudio, en esencia, se constriñó a lo siguiente:

En la casilla 13 B, el Tribunal local pudo verificar que dos rubros eran coincidentes.

Por lo que se refiere a la casilla 25 B, resultaron idénticos los datos de las boletas extraídas de la urna con el resultado de la votación, además de que la cifra fue semejante a la diferencia entre boletas recibidas y boletas sobrantes.

SUP-JRC-317/2016

En cuanto a la casilla 59 E1, el Tribunal local subsanó la omisión del resultado de la votación con la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla, así, al elaborar un estudio comparativo con el número de ciudadanos que votaron, obtuvo una diferencia que fue menor a la de los votos obtenidos entre el primero y segundo lugar.

Respecto de la casilla 59 E1C5, al realizar la sumatoria de los votos y subsanar la omisión del número de ciudadanos que votaron con la revisión del listado nominal, la autoridad responsable procedió a un análisis comparativo que arrojó una diferencia menor a la de los votos obtenidos por los candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar.

En la casilla 91 B, la autoridad responsable al revisar el listado nominal obtuvo una cantidad cuya diferencia numérica con relación al resultado de la votación arrojó un resultado de cero.

Con relación a la casilla 188 B, el Tribunal local señaló que la cantidad de ciudadanos que votaron y el resultado de la votación coinciden.

En la casilla 324 B, la responsable corrigió el rubro de ciudadanos que votaron con el recuento del listado nominal y, a su vez, subsanó el resultado de la votación con la sumatoria de los votos, por lo cual, la diferencia entre estos datos fue menor

a la de los votos obtenidos por los candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar.

Por lo que se refiere a la casilla 342 B, el mencionado Tribunal corrigió, por una parte, la inconsistencia en el rubro de ciudadanos que votaron con la revisión del listado nominal y, por otra, subsanó el resultado de la votación con la sumatoria de los votos, así la diferencia entre estos rubros fue menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar.

En la casilla 368 B, del resultado de la revisión del listado nominal, adminiculado con los dos rubros restantes, la responsable obtuvo una diferencia menor a la de los votos obtenidos por los candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar.

Respecto de la casilla 373 C2, al comparar el número de ciudadanos que votaron con el resultado de la votación, la responsable precisó que la diferencia entre estos rubros es menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar.

En la casilla 375 B, el Tribunal local corrigió con el listado nominal el número de ciudadanos que votaron y subsanó el resultado de la votación al realizar la sumatoria de los votos que fueron objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de casilla, en este caso los resultados fueron idénticos.

De esta forma, en cada caso, la autoridad responsable concluyó que el error o la omisión en el llenado de la documentación electoral, no resultó determinante para el

SUP-JRC-317/2016

resultado de la votación, razón por la cual no se actualizó la causal de nulidad invocada por los actores.

5.- Casillas con errores determinantes

Por lo que se refiere a la revisión relativa a la votación recibida por las mesas directivas de casilla correspondientes que se identifican en el apartado tres punto uno punto tres punto seis (3.1.3.6) de la sentencia controvertida, el Tribunal Electoral responsable consideró, que a partir de la de la revisión de la documentación electoral que obra en el expediente, se advertían diferencias entre los rubros fundamentales, de lo cual concluyó la existencia de errores en el cómputo de los votos, resultando graves al grado de ser determinantes para el resultado de la votación recibida por la respectiva mesa directiva de casilla.

En este orden de ideas, el órgano jurisdiccional electoral local declaró la nulidad de la votación recibida por las correspondientes mesas directivas en sesenta y cinco (65) casillas, casillas identificadas como “59 C1, 192 C4, 204 B, 241 C1, 355 B, 356 B, 369 B, 383 B, 564 C2, 585 B, 668 B, 871 B, 882 E2, 999 B, 1092 C1, 1105 B, 1197 B, 1281 C1, 1296 C4, 1298 B, 1308 C1, 1346 C1, 1360 B, 1461 C1, 1490 B, 1496 B, 1501 B, 1513 B, 1576 C1, 1587 B, 1635 B, 1675 C1, 1749 C1, 1749 C2, 1779 B, 1825 C1, 1832 B, 1838 C1, 1860 C1, 1861 B, 1866 B, 1877 B, 1898 B, 1916 C2, 1916 C6, 1916 C10, 1933 C1, 1945 E1C5, 1945 E1C6, 1955 B, 1970 B, 1991 B, 2000 C1,

2030 B, 2040 B, 2054 C2, 2055 C3, 2056 C2, 2057 B, 2060 C1, 2075 B, 2089 C1, 2104 C1, 2135 0C1 y 2137 B”.

Ahora bien, de la revisión de la demanda de juicio revisión constitucional electoral, presentada por los ahora enjuiciantes, en particular respecto de causal de nulidad de votación recibida que se analiza, los ahora demandantes formulan los siguientes argumentos:

- La sentencia controvertida vulnera los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable abordó incorrectamente los conceptos de agravio y, por tanto, fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance para resolver la controversia.

- Aducen que es incongruente que el Tribunal Electoral local haya considerado que debió señalar las casillas que fueron recontadas, si de ello no tenía conocimiento, si la autoridad administrativa responsable tiene un plazo mayor para rendir su informe circunstanciado, en comparación con el que ellos contaron para promover el juicio de inconformidad y no obstante ello, a la autoridad administrativa se le tuvo que requerir en varias ocasiones por innumerables retrasos y faltantes en la entrega de la documentación que se le requirió por el Magistrado Instructor.

SUP-JRC-317/2016

A juicio de esta Sala Superior, los argumentos precedentes de los enjuiciantes son **inoperantes** por constituir manifestaciones genéricas e imprecisas que no controvierten frontalmente las consideraciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua al emitir la resolución controvertida. En este orden de ideas, los enjuiciantes no cumplieron el requisito de formular argumentos a fin de desvirtuar la validez de las consideraciones del órgano jurisdiccional responsable.

CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD DE ELECCIÓN

Ahora bien, al analizar los argumentos expuestos por los ahora enjuiciantes con relación a la causal genérica de nulidad de elección, el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua consideró lo siguiente.

En primer lugar expuso que los demandantes argumentaron como motivos de nulidad que *“El Consejo Estatal Electoral de Chihuahua no acordó el número de boletas a imprimir, ni el plan de impresión, distribución y resguardo de las mismas así como la supervisión de la propia impresión de las boletas, su traslado y resguardo. Asimismo, fue omiso en constar la formal recepción del número de boletas electorales por cada presidente de casilla, consignando el número exacto y preciso de folios”*, omisiones que en concepto de los enjuiciantes se traducían en “violaciones a los principios rectores de la materia electoral, según el actor: legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad”.

En este orden de ideas precisó que los demandantes argumentaron que “no existe plena certeza en cuanto a la legalidad de la emisión de las boletas electorales que fueron utilizadas en la jornada electoral, así como la cantidad de boletas que fueron entregadas a cada casilla, lo que produce una generalizada incertidumbre en cuanto al número de boletas que fueron utilizadas por el electorado, además de que se hace imposible el cotejo con los resultados electorales”.

Además, que argumentaron los demandantes ante esa instancia que “el hecho de que la impresión y distribución de las boletas electorales haya sido realizada por *INE*, vulnera la distribución de competencias decretada por los artículos 41 y 116 de la *Constitución Federal*”.

Precisó además que en concepto de los enjuiciantes en las Asambleas Municipales “no se levantaron actas de escrutinio y cómputo, de tal manera que no existen, o no les fueron entregadas al final del recuento; entregándose varios días después, en medio magnético, solo un archivo de resultados por casilla”.

Tomó en consideración que “la ausencia de las formalidades legales aconteció en todas las casillas recontadas, las cuales superan el veinte por ciento del total de las casillas, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, como la legalidad, al no acatar las disposiciones expresas de la *Ley*; el de máxima publicidad al justificar su actuación bajo el hecho de que los partidos no se lo pidieron; y el de certeza, al no existir

SUP-JRC-317/2016

confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la voluntad popular”.

En este orden de ideas, el órgano jurisdiccional electoral local responsable precisó que para los enjuiciantes las circunstancias expuestas “producen incertidumbre en cuanto al número de boletas impresas, las recibidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los cómputos municipales, los cuales arrojan cifras disidentes entre sí, refiriendo que la numeraria obtenida de las *actas finales* a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares de tres mil trecientas veintiún casillas constatadas”, a partir de lo cual, en concepto de los actores se reflejaban: un millón trescientas noventa y cuatro mil trescientas una (1,394,301) boletas recibidas, ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres (835,553) votos registrados, así como un millón quinientos sesenta y cinco mil ochocientos siete (1,565,897) boletas sobrantes, a partir de lo cual, en concepto de los demandantes “se acredita una diferencia entre recibidas y sobrantes de ciento setenta y un mil quinientas seis boletas”.

Al analizar y resolver los conceptos de agravio expuestos por los demandantes en la instancia local, el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, en primer lugar expuso algunas “Consideraciones previas en cuanto a la causal genérica de nulidad”, como se advierte en el apartado tres punto dos punto dos (3.2.2) de la sentencia controvertida.

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua al resolver los conceptos de agravio hechos valer para acreditar la causal genérica de nulidad emitió, en síntesis, las consideraciones que a continuación se exponen.

Tomando en cuenta el régimen jurídico aplicable a nivel federal y a nivel local, así como los acuerdos emitidos tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, concluyó lo siguiente:

El Instituto Nacional Electoral fue el encargado de aprobar el padrón electoral y el listado nominal de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; emitió los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procedimientos electorales; ejerció su facultad de atracción para establecer los criterios para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en sede del Instituto Electoral local.

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estuvo a cargo de ordenar la impresión de los documentos y producción de los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emitió el mencionado Instituto Nacional; realizar el conteo, sellado y enfajillado de boletas por medio de las Asambleas Municipales; recibir la votación a través de las

SUP-JRC-317/2016

mesas directivas de casilla y llevar a cabo el escrutinio y cómputo de la elección.

Al analizar los conceptos de agravio que hicieron valer los enjuiciantes, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua determinó lo siguiente.

Impresión y distribución de las boletas electorales realizada por el Instituto Nacional Electoral

En el apartado tres punto dos punto cuatro punto uno (3.3.4.1) de la sentencia controvertida ante esta instancia federal, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua resolvió el concepto de agravio de los actores, consistente en la indebida “delegación de facultades” del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua al Instituto Nacional Electoral, lo que provocó que este último llevara a cabo la impresión y distribución de las boletas electorales, lo que conculca la competencia prevista en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los principios rectores en materia electoral.

En este orden de ideas, se debe estar a lo resuelto por esta Sala Superior en el apartado segundo (II) de este considerando.

Al resolver, el órgano jurisdiccional local responsable consideró infundado el concepto de agravio, toda vez que la distribución competencial entre ambos entes se encuentra delineada, pues el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de emitir los criterios para las actividades de impresión,

distribución, conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, en términos del artículo 64, numeral 1, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y los acuerdos del Consejo General del mencionado Instituto identificados con las claves INE/CG950/2015 e INE/CG122/2016, mientras que el Instituto Electoral local fue el ejecutor de las tareas en la etapa de la preparación de la elección, sin que se encuentre acreditada una “delegación” de funciones al ente nacional o en su caso un convenio con los mismos efectos.

En este sentido destacó que el Consejo Estatal del Instituto Electoral local emitió el acuerdo IEE/CE113/2016, en apego a lo previsto en el diverso INE/CG950/2015, mediante el cual se determinó que la producción de la documentación y material electoral se llevaría a cabo por Talleres Gráficos de México.

En ese orden de ideas, lo infundado del agravio, radicó en que la actuación de los institutos electorales Nacional y de la mencionada entidad federativa fue conforme al sistema competencial y los principios rectores de la materia comicial avocándose cada uno a sus atribuciones constitucional y legalmente previstas.

Omisión de aprobar el número de boletas a imprimir y en la corroboración del número de boletas electorales recibidas por cada presidente de mesa directiva de casilla

SUP-JRC-317/2016

Por otra parte, el órgano jurisdiccional electoral del Estado de Chihuahua resolvió, en el apartado 3.2.4.3 (tres punto dos punto cuatro punto tres) de la resolución controvertida, el concepto de agravio consistente en la supuesta omisión de aprobar el número de boletas a imprimir para el procedimiento electoral, así como el relativo a la falta de certeza respecto de la legalidad de la emisión de las boletas electorales y la cantidad entregada al presidente de cada mesa directiva de casilla, toda vez que, desde perspectiva de los enjuiciantes, no hay constancia que acredite la cantidad y folios de las boletas electorales que fueron entregadas a los funcionarios de casilla, además de no existir documento que acredite el agrupamiento en razón del número de electores por casilla. Lo cual vulnera los principios en materia electoral.

El Tribunal Electoral local consideró que los mencionados conceptos de agravio eran infundados debido a que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no tiene del deber de aprobar el número de boletas a imprimir, pues la Ley Electoral del Estado únicamente regula el deber de la institución de conducirse en apego a los lineamientos que se emitan por el Instituto Nacional Electoral.

En este sentido consideró que si bien es cierto no existe un deber expreso para que el Consejo Estatal del mencionado Instituto Electoral local emitiera un acuerdo por el cual se determinara el número de boletas a imprimir para el procedimiento electoral, también lo es que en aras de privilegiar

los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, el Consejo Estatal del mencionado Instituto dictó, el dos de mayo de dos mil dieciséis, el acuerdo identificado con la clave IEE/CE113/2016, por el que aprobó la producción de la documentación y el material electoral que se utilizó, en el cual se previó que la impresión de la documentación electoral la realizaría Talleres Gráficos de México, y se señalaron los datos que debía contener cada una de las boletas por tipo de elección, quedando aprobados los diseños respectivos.

Por otro lado, en cuanto a la falta de constancia que acredite la cantidad y folios de las boletas electorales entregadas a los integrantes de las mesas directivas de casilla, el órgano jurisdiccional electoral responsable consideró que de las constancias correspondientes al agrupamiento realizado por las Asambleas Municipales, se advierte la cantidad de boletas para la elección de Gobernador en razón del número de electores en listado nominal, representantes de partidos políticos y candidatos independientes, los correspondientes a las casillas especiales, los electores que hubieran obtenido sentencia favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o validación en sede administrativa y el foliado correspondiente.

Ahora bien, el Tribunal Electoral local, consideró que la ausencia de recibos de documentación y materiales entregados a los presidentes de mesa directiva de casilla, o el error o falta de asentamiento de datos en su llenado, en ningún caso

SUP-JRC-317/2016

genera una incertidumbre que pudiera generar una violación sustancial, pues tal cuestión puede ser contrastada para efectos de validez con el agrupamiento de las boletas en razón de los electores en casilla.

En ese sentido, determinó que es válido tomar como base para cuantificar el número de boletas entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla para la elección de Gobernador del Estado, el asentado en el agrupamiento de boletas en razón de los electores por casilla, pues, este dato también se asienta en el recibo de documentación a los funcionarios electorales.

El Tribunal Estatal Electoral responsable consideró además para sustentar su determinación que existe constancia de la presencia de los representantes de los partidos políticos en las tareas de la sesión en la que se llevó a cabo el conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales, así como el levantamiento del agrupamiento que se hizo de las mismas en cada una de las Asambleas Municipales. *“Esto es, conforme al informe pormenorizado de la sesión señalada, se tiene que los partidos políticos formaron parte de dichas tareas, hasta el punto de ser en muchos casos ellos quienes sellaran de nueva cuenta las bóvedas electorales en compañía de los funcionarios electorales.”*

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Electoral local consideró infundados los conceptos de agravio planteados por

los demandantes, dado que, en la normativa electoral local, no existe el deber jurídico del Consejo Estatal de aprobar el número de boletas, sino que únicamente se establece el deber de acatar los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

Ahora bien, los actores adujeron que existieron inconsistencias que vulneraron el principio de certeza y la validez de las documentales públicas presentadas por el Consejo Electoral Estatal, relacionadas con las actas circunstanciadas “de envío de boletas a las Asambleas Municipales”, en la que existen datos que permiten advertir un aumento en el número de boletas electorales, o bien la incertidumbre en el manejo de éstas.

En ese sentido, tomando en consideración lo dispuesto en el acuerdo identificado con la clave CG/INE950/2015, así como el desglose realizado por el Coordinador de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral, el órgano jurisdiccional electoral responsable advirtió que el número total de boletas que se imprimieron, en atención a los criterios generados por el Instituto Nacional Electoral, fue de dos millones setecientos ochenta mil quinientas sesenta y un boletas electorales, repartidas entre los sesenta y siete municipios del estado, cuyos folios van del 00000001 al 02780561, cantidad que concuerda con el dato correspondiente al contrato de prestación de servicios celebrado por el mencionado Instituto Electoral local con Talleres Gráficos de México, en específico,

SUP-JRC-317/2016

en el anexo técnico GGC/GAST/215/16/V5, y con el recibo con número de remisión 20161872, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

Por otra parte, se consideró que de constancias de autos también se acreditó que las boletas electorales fueron trasladadas a la bodega que el Instituto Estatal Electoral designó para tal efecto, las cuales posteriormente se enviaron a cada una de las Asambleas Municipales a fin para su resguardo y posterior conteo, sellado y enfajillado.

Por lo que, la autoridad responsable hizo un estudio comparativo respecto del número de boletas recibidas por el Instituto Electoral local, las trasladadas para su resguardo y enviadas a las Asambleas Municipales para su posterior agrupamiento e inserción en los paquetes electorales, lo cual se encuentra acreditado con las actas circunstanciadas que obran en autos del expediente del juicio de inconformidad. En las cuales advirtió en algunos casos las siguientes inconsistencias:

1.- De las actas circunstanciadas de envío a las Asambleas Municipales.

a) La existencia de diversas actas circunstanciadas en las que aparentemente se envían en dos ocasiones las boletas electorales para la elección de Gobernador.

b) La existencia de inconsistencias en la captura del número de boletas a enviar.

c) La falta de certeza en la recepción de las boletas de Gobernador pues únicamente se refiere a número de caja y no se individualiza el número de boletas o los folios correspondientes.

2) De las actas de recepción de boletas de las Asambleas municipales

a) En algunas existen inconsistencias en la recepción del número de boletas de Gobernador, pues las mismas no se individualizan de las recibidas para otra elección.

b) En un caso hubo una diferencia de treinta y nueve (39) boletas, entre el número de boletas ordenadas por el Instituto Electoral local y las recibidas por la Asamblea Municipal. En este caso se subsanó comparando las actas de envío con las de recepción, pues se demostró que a cada municipio se enviaron, tanto boletas para la elección de Gobernador como de Diputados, las cuales fueron recibidas por las Asambleas Municipales como un conjunto. De ahí, que al dividir las boletas recibidas para cada elección se obtuvo el número exacto.

En estos casos, la autoridad responsable comparó el número de boletas electorales que se mandaron a imprimir a Talleres Gráficos de México con el correspondiente a las que se enviaron desde la bodega del Instituto local a las Asambleas Municipales, así como el de las que se recibieron por las Asambleas Municipales, y las correspondientes al agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla, por tanto, al ser coincidentes varios de estos rubros,

SUP-JRC-317/2016

sólo fueron considerados como errores en la captura de la cantidad de boletas, aclarando que en dos casos específicos de los numerales 1, inciso c), y 2, inciso b), existió la cancelación de la planilla de un candidato independiente para el Municipio de Chihuahua, por lo que se inutilizaron algunas boletas designadas para que sus representantes ante mesas directivas votaran, por tanto al sumarse esa cantidad a la asentadas en la sesión de agrupamiento coincidían con los restantes rubros.

En este sentido, al haber subsanado los errores cometidos por las autoridades electorales locales y al encontrar claridad en el número de boletas con que se contó en cada una de las etapas revisadas, sin que exista una diferencia que no guardara sustento, fue posible para el Tribunal responsable advertir que el número de boletas no fue modificado o alterado, lo que genera la certeza de esa actividad.

En atención a todo lo anterior, el Tribunal responsable, consideró infundados los conceptos de agravio.

Omisión en la aprobación del plan de impresión y distribución así como la supervisión de la impresión de las boletas, su traslado y resguardo

Ahora bien, al analizar en el apartado tres punto dos punto cuatro punto cuatro (3.2.4.4) de la sentencia controvertida el concepto de agravio relativo a la supuesta omisión en la aprobación del plan de impresión y distribución así como la supervisión de la impresión de las boletas, su

traslado y resguardo, el Tribunal local determinó que era infundado el concepto de agravio hecho valer por los actores.

Lo anterior, debido a que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, al emitir el acuerdo IEE/CE113/2016, de dos de mayo de dos mil dieciséis, aprobó la impresión de la documentación electoral que se utilizó en el procedimiento electoral local ordinario de esa entidad.

El órgano jurisdiccional electoral local responsable precisó que el mencionado Consejo autorizó la impresión acatando los lineamientos emitidos mediante acuerdo INE/CG950/2015, de once de noviembre de dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ajustándolas al contexto del sistema electoral de Chihuahua

En este sentido, el Tribunal local señaló que los citados lineamientos establecieron los criterios aplicables para la adjudicación y supervisión de la producción de la documentación electoral; así como su almacenamiento, distribución, custodia y destrucción.

A partir de los elementos de autos, el órgano jurisdiccional electoral local responsable constató que una vez impreso el material, éste fue revisado y cargado a un vehículo, contratado por el Instituto electoral local, cuyas puertas fueron cerradas, colocándose sellos de garantía para proveer su inviolabilidad; y que la vigilancia del vehículo fue llevada a cabo por la Policía Federal.

SUP-JRC-317/2016

Asimismo, de la información proporcionada a la responsable, en la sentencia controvertida se apuntó, entre otras cosas, que la seguridad del traslado de las boletas estuvo a cargo de Policía Federal, a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a petición del Consejero Presidente del Instituto electoral local.

En este orden de ideas, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua concluyó que no le asiste razón a los enjuiciantes en el argumento en que adujeron que el Consejo no aprobó un plan de impresión, distribución y resguardo de las boletas electorales, toda vez que mediante acuerdo IEE/CE113/2016, el Consejo Estatal Electoral de Chihuahua determinó la empresa que se encargaría de la impresión de las boletas electorales para los distintos tipos de elección y *“señaló que bajo las directrices del INE, se llevarían a cabo los trabajos correspondientes a las impresión, supervisión y traslado de la documentación electoral”*, lo que en consideración del Tribunal responsable es conforme a la normativa electoral local aplicable. Al respecto determinó:

Ahora bien, resulta oportuno señalar que en dichos lineamientos se establecieron los criterios aplicables para la adjudicación y supervisión de la producción de los documentos electorales; así como, su almacenamiento, custodia y distribución. Los cuales, fueron acatados por el *IEE*, las *Asambleas* y Talleres Gráficos de México, pues del análisis realizado anteriormente, se corrobora que:

1. Talleres Gráficos de México cumplió con las características generales y particulares para realizar los trabajos de impresión del material electoral.

2. En dichos trabajos de producción y supervisión, se practicaron amplias revisiones y medidas de seguridad, a fin de supervisar la debida elaboración de las boletas electorales.
3. El traslado del material electoral, se efectuó conforme a los lineamientos establecidos por el *INE*, pues se identificó y selló correctamente el vehículo que transportó la documentación electoral, el cual fue custodiado por parte de la policía federal en el traslado las boletas electorales, desde las oficinas de Talleres Gráficos de México, hasta las *Asambleas*; y
4. En la recepción y resguardo de las boletas electorales existieron actas de entrega y recepción, en las cuales se señaló la documentación recibida; asimismo, con las especificaciones previstas para ello, se instaló una bodega electoral en las *Asambleas*, la cual estuvo vigilada por personal de la propia autoridad responsable y policía municipal.

En este orden de ideas, para el Tribunal Estatal Electoral responsable, se previó un plan de impresión, supervisión, distribución y custodia de las boletas electorales correspondientes a la elección de Gobernador del Estado de Chihuahua, así como la actuación y supervisión del mismo por parte de las autoridades electorales.

Nuevo escrutinio y cómputo en sede municipal y la ausencia de formalidades legales

En el diverso apartado tres punto dos punto cuatro punto cinco 3.2.4.5 de la sentencia impugnada, el órgano jurisdiccional electoral local responsable procedió al análisis de los conceptos de agravio que los demandantes adujeron en el juicio de inconformidad, los cuales son:

SUP-JRC-317/2016

- De los resultados de las actas finales, visibles en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se advertían diferencias aritméticas en un gran número de casillas.
- Debió un recuento total y no solo realizar un muestreo arbitrario.
- A la fecha de presentación del medio de impugnación, el Consejo Estatal del Instituto electoral local no tenía registro de cuantos paquetes electorales se recontaron.
- No se tienen o no existen las actas individuales del nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo en sede administrativa, aunado al hecho de que no se les entregó copia inmediatamente después de concluida esa diligencia, sino que se les entregó varios días después en un medio magnético con un archivo denominado “resultados por casilla”, el cual no tenía autenticación y no contaba con el rubro de boletas sobrantes.

En este sentido, aducen los actores que esas inconsistencias acontecieron en todas las casillas que fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo, las cuales superan el veinte por ciento del total de las mesas directivas de casillas instaladas, lo cual vulnera flagrantemente los principios rectores del procedimiento electoral, es decir, los de legalidad, certeza y máxima publicidad.

A juicio del Tribunal Electoral local, los citados conceptos de agravio son inoperantes, toda vez que los enjuiciantes no expusieron algún razonamiento capaz de ser analizado, por lo que tal pretensión de invalidez es “inatendible”, pues sus

manifestaciones debieron de estar dirigidas a impugnar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado.

Así, el Tribunal responsable razonó que los demandantes tenían la carga procesal de aportar elementos de convicción que sustentaran sus razonamientos, *“como: a) el número de casillas en las que no se hubiera accedido al recuento; b) la negativa a entregar las actas individuales o, en su caso, prueba fehaciente de su inexistencia; c) los argumentos por lo que a su consideración no se atendió a lo estipulado por la Ley en materia de nuevos escrutinios y cómputos; y d) los pormenores o consideraciones que adviertan la realización del supuesto “muestreo”, para con ello considerar que pudiera actualizarse la causal de nulidad”* y no así, señalar de manera genérica diversas circunstancias.

En ese tenor, el Tribunal consideró que no existía *“la posibilidad de configurar un agravio válido y suficiente para arribar a una conclusión diferente”*.

Diferencia entre boletas recibidas y sobrantes asentadas en actas finales

En el apartado tres punto dos punto cuatro punto seis 3.2.4.6 de la resolución controvertida ante esta instancia federal, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua procedió al análisis de los argumentos en los cuales a consideración de los actores, todos los conceptos de agravio expuestos producen

SUP-JRC-317/2016

incertidumbre en cuanto al número de boletas impresas, las recibidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los cómputos municipales, por lo que la cantidad obtenida de las actas finales a través del programa de resultados preliminares electorales de tres mil trecientas veintiún casillas (3,321) constatadas, reflejaban:

- Un millón trecientas noventa y cuatro mil trecientas un (1.394.301) boletas recibidas.
- Ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres (835,553) votos registrados
- Un millón quinientos sesenta y cinco mil ochocientos siete (1,565,807) boletas sobrantes

A partir de ello los demandantes en el juicio de inconformidad local adujeron que existió una diferencia de ciento setenta y un mil quinientas seis (171,506) boletas entre las recibidas y las sobrantes.

Al respecto, el Tribunal responsable tuvo en consideración que conforme a los argumentos hechos valer por los actores, las actas finales con supuestas inconsistencias se sustentan en un número mayor de casillas que las que se impugnan por la mencionada causal, lo cual imposibilitó a ese órgano jurisdiccional local realizar un estudio al respecto, pues no se aportaron los medios necesarios para cotejar los datos que sustentan las fórmulas utilizadas por los actores para

arribar a un total de ciento setenta y un mil quinientas seis boletas de diferencia.

Por lo anterior, de las manifestaciones vertidas por los actores no fue posible para la responsable obtener razonamientos o elementos de comprobación suficientes para estudiar lo que a su consideración, es una vulneración a los principios rectores de la materia electoral por la supuesta existencia de una diferencia entre el total de votos de casillas no identificadas contra el total de boletas sobrantes de casillas a las cuales no se hace referencia, razones por las cuales declaró inoperantes los conceptos de agravio.

Hechas las precisiones anteriores, esta Sala Superior tiene en consideración que los ahora demandantes aducen en lo particular, respecto la causal de nulidad de elección, que si al número de casillas respecto de las cuales se declaró la nulidad de la respectiva votación recibida, se suma el número de aquéllas en las que en la integración de las mesas directivas participaron personas distintas a las autorizadas por la ley y se agrega el número de casillas cuyos paquetes electorales fueron entregados por personas distintas al presidente de la mesa directiva de casilla, da un total de veinte por ciento o más de las casillas instaladas por lo que, sostienen, que el Tribunal Estatal Electoral responsable debió declarar la nulidad de la elección.

A juicio de esta Sala Superior, el concepto de agravio es **infundado**, porque al argumentar que se debió declarar la nulidad de la elección, los enjuiciantes parten de la premisa

SUP-JRC-317/2016

errónea de considerar que su diverso concepto de agravio en el que aducen que la entrega del paquete electoral al Consejo Municipal correspondiente, por una persona distinta al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, actualiza una causal de nulidad de la votación recibida.

Sin embargo, como ha sido resuelto en apartado precedente, esta Sala Superior declaró inoperante ese concepto de agravio, dado que constituye un argumento novedoso que no fue planteado por los demandantes ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, órgano jurisdiccional que, en esa circunstancia, no estuvo en posibilidad de hacer pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, en concepto de este órgano jurisdiccional es **infundado** el concepto de agravio en el cual los enjuiciantes aducen que el Instituto Nacional Electoral en el convenio de colaboración asumió indebidamente tareas referentes a la preparación de la jornada electoral, las cuales no se encuentran dentro de sus funciones.

Lo infundado del concepto de agravio, radica en que los actores parten de una premisa inexacta al considerar que la intervención, mediante convenio, del Instituto Nacional Electoral en la preparación de la jornada electoral en el Estado de Chihuahua, fue indebida porque no cuenta con esas atribuciones, sin embargo, no toman en cuenta que, conforme al régimen jurídico aplicable, los Institutos electorales locales pueden celebrar convenio con el Instituto Nacional Electoral,

para que éste asuma la organización de procedimientos electorales locales, así como los convenios de colaboración en materia electoral y cuanto acto jurídico sea necesario para que se ejerzan las facultades de asunción y atracción, así como cualquier otro tipo de convenio necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal Electoral.

En este sentido, cabe reiterar que los Institutos, Nacional y local, convinieron establecer las reglas y actividades de coordinación para el procedimiento electoral local ordinario en Chihuahua, por lo cual está plenamente justificado el actuar del Instituto Nacional Electoral.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que, como ha quedado determinado al resolver los conceptos de agravio agrupados en el apartado segundo (II) de este considerando, el Instituto Nacional Electoral está constitucionalmente facultado para emitir lineamientos y ejercer la facultad de atracción, así como la de suscribir convenios con los institutos electorales de las entidades federativas, conforme a lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, como se expuso, contrariamente a lo aducido por los actores, fue en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tiene previstas, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua suscribieron el dieciséis de diciembre de dos mil

SUP-JRC-317/2016

quince, el *“CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN... CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016, DONDE SE ELEGIRÁ GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA...”*.

En el convenio, que obra a fojas doscientas noventa y seis (296) a trescientas veintiocho (328), del cuaderno auxiliar “192 INE” del expediente del juicio de inconformidad identificado con la clave JIN-230/2016, del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, se constata que los citados Institutos, en ejercicio de las aludidas atribuciones, acordaron establecer las reglas y actividades de coordinación para el procedimiento electoral local ordinario en Chihuahua, por lo cual a juicio de esta Sala Superior es conforme a Derecho la actuación de esos Institutos.

De este modo, en el citado convenio se establecieron especificaciones atinentes a reglas y actividades de coordinación, entre las que destacan las siguientes:

- En materia de capacitación y asistencia electoral se consideraron los rubros concernientes al reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

- Respecto a las casillas electorales convinieron el número y tipo, así como su ubicación y recorridos, la conformación de

las casillas extraordinarias y especiales, la aprobación de la lista de ubicación de casillas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, así como la integración y distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

- En lo concerniente a la jornada electoral definieron algunas especificaciones para el seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo de casilla, la integración de paquetes electorales y orientación a ciudadanos.

- Por otro lado, los mencionados Institutos convinieron los mecanismos para la recolección de paquetes electorales

- Asimismo, establecieron reglas para los resultados electorales y cómputos de las elecciones.

- Además, los aludidos Institutos fijaron el compromiso de suscribir anexos técnicos al convenio, para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En este orden de ideas, como ya se había anticipado, resulta infundado el concepto de agravio.

Asimismo, los demandantes aducen como parte de sus conceptos de agravio las manifestaciones siguientes:

SUP-JRC-317/2016

- La sentencia controvertida vulnera los artículos 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Tribunal Electoral local, en contravención a los principios de legalidad y certeza, estudio incorrectamente los conceptos de agravio y, por tanto, fue omiso en el estudio exhaustivo del caso, dejando de valorar el material probatorio que se encontraba a su alcance para resolver la controversia.

- Aunque del análisis del error aritmético existieron irregularidades en 1,119 casillas que representan un total de 89,530 votos, solamente se anularon algunas casillas, lo cual provoca incertidumbre en el resultado de la votación.

- La falta de un principio de vigilancia, control de impresión, distribución y resguardo, así como la omisión absoluta de la vigilancia en la impresión, por parte del Consejo Estatal del Instituto Electoral local, a juicio de los actores, debe considerarse sustancial o grave al no poder garantizar la producción de boletas adicionales.

- El recuento se hizo fuera de los casos previstos en la ley, que en las actas no se contemplan todos los datos, y que se realizaron por personas distintas a quienes las practicaron.

- Consideran que indebidamente el Tribunal responsable otorgó valor probatorio pleno a los informes de Talleres Gráficos de México, del Instituto Estatal Electoral y de las Asambleas

Constitucionales de ese Instituto Electoral, para acreditar que las boletas electorales fueron debidamente resguardadas desde su impresión hasta su ingreso a los paquetes electorales.

- Con relación a lo anterior, los actores aducen, que de manera errónea la autoridad responsable otorgó valor probatorio pleno al “agrupamiento de boletas”, el cual solo es un documento en formato Excel que contiene el número de boletas que debían imprimirse y empaquetarse en cada casilla, pero no acredita lo que realmente sucedió en cada Asamblea Municipal.

- Por tanto, consideran que en más de la mitad de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, es imposible determinar la cantidad de boletas recibidas.

- El Tribunal responsable solo realizó el estudio del error aritmético en los casos en que resultó determinante para anular la votación de la casilla, sin tener en cuenta que su concepto de agravio consistió en una causal genérica, basada en la falta de control y vigilancia en la impresión, distribución y entrega de las boletas electorales, lo que persistió hasta la entrega del paquete electoral por personas distintas al Presidente de las mesas directivas de casilla, circunstancia que implica violaciones graves y generalizadas desde el punto de vista cualitativo; si bien las irregularidades no son acumulables, sí generan evidencia de la magnitud de la violación a los principios rectores del procedimiento electoral lo que provocaría la nulidad de la elección.

SUP-JRC-317/2016

Con relación a los citados argumentos, a juicio de este órgano jurisdiccional especializado son **inoperantes**, ello porque los ahora enjuiciantes incumplen el requisito de formular argumentos pertinentes para demostrar eficazmente que el acto controvertido es contrario a Derecho y, en el particular, sólo formulan alegaciones genéricas e imprecisas que no tienen como efecto desvirtuar la validez de todas y cada una de las consideraciones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver el juicio de inconformidad cuya sentencia se controvierte ante esta instancia federal.

Por otra parte, los enjuiciantes también pretender controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral responsable, al aducir que:

- Existió una violación de la cadena de custodia de las boletas electorales, pues fueron impresas por Talleres Gráficos de México, sin ningún tipo de control ni vigilancia del Instituto Electoral local, que el Instituto Estatal Electoral justificó su actuación en el Convenio celebrado con el Instituto Nacional Electoral, y, con ello se genera falta de certeza en la normatividad aplicable, debido a que se modificó la normativa fundamental, ya iniciado el procedimiento electoral local.

- El convenio de colaboración se aplicó sin que se hubiera publicado en el periódico del Estado.

- En más de 894 (ochocientas noventa y cuatro) casillas el paquete electoral fue entregado por un capacitador electoral y no por el presidente de la mesa directiva de casilla, que no hay

disposiciones legales que determinen que el asistente electoral está capacitado para entregar el paquete electoral.

- La producción, resguardo y traslado de las boletas es un asunto de seguridad nacional, por lo que el Instituto Electoral local incumplió con dicha obligación.

Los citados conceptos de agravio son inoperantes porque los ahora demandantes aducen circunstancias que no hicieron valer en el juicio de inconformidad cuya sentencia ahora es controvertida y por tanto, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua no estuvo en posibilidad de emitir pronunciamiento al respecto. En este orden de ideas, esta Sala Superior, tomando en consideración que la *litis* está determinada por los argumentos expuestos en los conceptos de agravio de la demanda respectiva y su confrontación con el o los actos controvertidos, no está en posibilidad de analizar esos argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva.

En términos de lo expuesto, ante lo **infundado** e **inoperante** de los conceptos de agravio formulados por el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición integrada por ese instituto político y los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, lo procedente conforme a Derecho es confirmar la sentencia controvertida, por la cual, entre otras aspectos, se confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de Gobernador del Estado de

SUP-JRC-317/2016

Chihuahua, emitida a favor de Javier Corral Jurado, candidato postulado por el Partido Acción Nacional.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE: **personalmente** a los actores y al tercero interesado; **por correo electrónico** al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y al Consejo Estatal del Instituto Electoral de esa entidad federativa; **por oficio**, al Congreso del Estado de Chihuahua, y **por estrados** a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29, párrafos 1 y 5, y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionados con los numerales 94, 95, 98 y 101, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

En su oportunidad, devuélvase las constancias que correspondan y, acto seguido, archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **unanimidad de votos**, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del

Magistrado Manuel González Oropeza. La Secretaria General de Acuerdos da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADA

MAGISTRADO

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

**SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR**

**PEDRO ESTEBAN PENAGOS
LÓPEZ**

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LAURA ANGÉLICA RAMÍREZ HERNÁNDEZ